

Maestría en Sociología

**PROTOCIUDADANÍA NOVOHISPANA: PRECEDENTES DE LOS SUJETOS
POLÍTICOS Y JURÍDICOS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL MEXICANO**

Ernesto Abraham Chimal Escamilla

**ASESOR:
Dr. Arturo Grunstein Dickter**

**9 de Diciembre de 2011
11-O**

Índice General

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO 1. MODERNIDAD Y LIBERALISMO EN EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO	18
1.1 La modernidad como proceso de re-formaciones	19
1.2 Determinaciones estructurales de la acción	26
1.3 Precisiones sobre la libertad moderna en las grandes generalizaciones	32
CAPÍTULO 2. ACERCAMIENTO AL <i>PROTOLIBERALISMO</i> Y A LA CIUDADANÍA EN LA NUEVA ESPAÑA	36
2.1 Perspectiva teórica de la liberación y la reacción en la Nueva España	42
2.2 De vecinos a ciudadanos	48
CAPITULO 3. RASGOS MODERNOS EN EL ESTADO NOVOHISPANO A FINALES DEL SIGLO XVIII	57
3.1 Precedentes de la reforma administrativa novohispana	60
3.2 La apertura del monopolio comercial novohispano	66
3.3 La búsqueda de la eficiencia hacendaria y la especialización burocrática en la Nueva España	74
3.4 Transformación de las responsabilidades en los cargos públicos	87
3.5 Conflictos entre competencias	93
3.6 Problemas territoriales de la instauración de Intendencias	100
3.7 El Estado precursor del liberalismo	104
CAPÍTULO 4. PRECEDENTES DE LA CIUDADANÍA MODERNA EN LA NUEVA ESPAÑA	107
4.1 Características de los nuevos ciudadanos en Nueva España	108
4.1.1 <i>El ciudadano dispuesto por la Ordenanza de Intendentes</i>	111
4.1.2 <i>Valoración de los súbditos útiles hacia fines del siglo XVIII</i>	124

4.1.2.1 Los funcionarios eficientes y responsables	128
4.1.2.2 La imparcialidad y el principio de elección	133
4.2 La <i>protociudadanía</i> frente al espíritu ilustrado	137
4.2.1 <i>Nuevas disposiciones para los estamentos excluidos</i>	141
4.2.2 <i>Políticas de intervención del Estado en la institución eclesiástica</i>	147
4.2.3 <i>Limitaciones jurídicas al poder omnímodo</i>	153
4.2.4 <i>Las obligaciones militares</i>	160
4.2.5 <i>El orden y la uniformidad como herramientas de una modernidad excluyente</i>	167
 CONCLUSIONES	 183
 EPÍLOGO	 193
 ANEXO	 200
 BIBLIOGRAFÍA	 204

Introducción

La noción de *ciudadanía* supone una condición igualitarista y liberal. Ésta se define en relación a la igualdad jurídica de todos los individuos pertenecientes a un Estado. Asimismo, la condición de igualdad ante la legislación (lo cual es la máxima del pensamiento liberal –tanto clásico como contemporáneo) es el elemento básico para referir que la ciudadanía moderna estuvo condicionada por la aparición del liberalismo. Razones por las que es común entender que la figura del ciudadano moderno, y las prácticas liberales que la sostienen, aparecieron como un rompimiento tajante con las instituciones del *Antiguo Régimen*. Sin embargo, la evidencia histórica no sostiene totalmente esta afirmación. Así, preciso ampliar nuestra visión sobre los procesos que han implicado a la ciudadanía en la modernidad.

El presente trabajo atiende inquietudes sobre el cambio y la permanencia social de las estructuras que definen a la ciudadanía moderna en la larga duración. En este sentido, se presta especial atención a las preocupaciones de muchos sociólogos que, en distintas épocas, han considerado la revisión histórica como fundamental para atender adecuadamente sus trabajos. Al respecto, presento un párrafo escrito por Wright Mills en 1959, durante el periodo relacionado al *eclipse parcial de la historia en la sociología*¹, para exponer las razones básicas por las que el estudio histórico debe ser una actividad recurrente en las agendas de los sociólogos:

Los estudios ahistóricos tienden por lo general a ser estudios estáticos, o a muy corto plazo, de ambientes limitados. No puede esperarse otra cosa, porque conocemos más fácilmente las grandes estructuras cuando cambian, y probablemente llegamos a conocer esos cambios únicamente cuando ensanchamos nuestra visión hasta abarcar un periodo histórico suficiente. La posibilidad de que entendamos cómo obran entre sí pequeños ambientes y grandes estructuras, y la posibilidad de que comprendamos las

¹ Para mayor referencia sobre este periodo véase Juliá, Santos. *Historia Social: Sociología histórica*, Siglo XXI, Madrid, 1989.

grandes causas que operan en esos ambientes limitados, exige que tratemos materiales históricos. El conocimiento de la estructura, en todos los sentidos de esta palabra fundamental, así como el adecuado enunciado de las inquietudes y problemas de los ambientes limitados, exigen que reconozcamos las ciencias sociales como disciplinas históricas y que las practiquemos como tal.²

Atendiendo las advertencias de Mills, esta investigación se ha planteado la necesidad de entender históricamente los fuertes desfases que existen entre las convicciones ideales de la ciudadanía moderna, y la condición real de los supuestos ciudadanos en el Estado mexicano. Nos hemos percatado que el proceso del liberalismo en México ha favorecido frecuentemente a un tipo específico de ciudadanía, provocando una exclusión masiva en el ejercicio de las prácticas ciudadanas modernas. Por lo que el título de *ciudadana-ciudadano* se ha utilizado de manera nominal, en detrimento de su carácter práctico, es decir, del ejercicio (activo) de la ciudadanía. A esto, Ralf Dahrendorf nos dice que el

concepto de auto-determinación nacional, que emergió con la gran división de los imperios después de la Primera Guerra Mundial, confirmó los conflictos que supone la homogeneidad, lo cual ha sido una característica de las sociedades humanas. Además debilitó la fuerza de la ciudadanía al desviar la atención de la demanda de sus derechos a favor de la simple pertenencia al Estado³

Lo que indica un proceso que no es exclusivo de Europa, sino que la misma noción de ciudadanía concebida en torno a la simple pertenencia y a la exaltación los valores que definen a alguien como nacional, a pesar de que esto carezca de un sentido unificador, son alusiones forzosas en las que insisten los Estados nacionales para legitimarse. Una labor que fue llevada a cabo, durante muchos años, de manera sobresaliente en México.

² Mills, Wright. *La imaginación sociológica*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 162.

³ Dahrendorf, Ralf. *The Modern Social Conflict. An essay on the politics of Liberty*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1990, p. 32.

La llamada *historia patria* o *historia nacional* de México ha sido muchas veces explicada a través de una génesis ubicada en la guerra civil de independencia. Por supuesto esta idea corresponde a una historia heroica relatada por los diseñadores de la educación pública mexicana, pertenecientes a la *Revolución Institucionalizada*, durante el siglo XX. Por lo que ninguna investigación seria ha considerado que a partir del movimiento armado se haya presentado un nuevo horizonte explicativo del mundo –sin precedentes históricos. Sin embargo, nos brinda elementos para reflexionar sobre la noción de *génesis* que se presentó en los liberales del siglo XIX. Los actores sociales mexicanos en 1824 estaban seguros de estar rompiendo con un pasado penoso. Creían que el triunfo de una nueva constitución diseñada para cada región del país era la llave que les permitiría entrar a la modernidad, con lo cual se pensaban capaces para definir su propio futuro.

Lo que aquí resalta es que la identidad definida como *mexicana* ha negado su pasado colonial en diferentes momentos, provocando que algunas de nuestras perspectivas históricas se vieran en ocasiones limitadas. No obstante, el trascender las fechas más afamadas nos ha permitido observar la gran complejidad que subyace a los procesos del liberalismo en nuestro país.

Por esto, busco dar cuenta de un proceso liberal que está contenido desde los fundamentos de las reformas que los Borbones intentaron implementar hacia finales del siglo XVIII, sosteniendo que existen diversos elementos que indican, no solo su permanencia, sino su fortalecimiento en los posteriores postulados liberales mexicanos –los cuales he revisado en un trabajo anterior⁴. Sin embargo, esto no significa que haya existido una continuidad plena entre los contenidos políticos de ambas épocas, sino que a través de los mismos cambios en las instituciones se pueden observar cuáles fueron los contenidos que permanecieron en el discurso político de la República Mexicana.

La noción de *liberalismo* en México surgió durante la primera mitad del siglo XIX, y podemos verla consolidada en los debates sostenidos por quienes

⁴ Chimal, E. Abraham. *El concepto de ciudadano definido por el liberalismo mexicano de 1812 a 1872*, Tesis de Licenciatura, UNAM, México, 2009.

buscaron una independencia total entre Iglesia y Estado, y quienes creían que el Estado difícilmente podría articularse sin la ayuda del catolicismo. Sin embargo, ambos grupos fueron liberales en tanto la independencia de México fue su convicción principal. Esto nos muestra que el liberalismo se constituyó por un sentimiento liberal común entre los letrados mexicanos con respecto al *Antiguo Régimen*, mas no por una doctrina que unificara los criterios de los hombres de gobierno en el Estado mexicano. Por lo que, tal vez no sobre decir que alguien considerado liberal en una época puede resultar conservador posteriormente. Asimismo, si un ser humano se asume como liberal no significa necesariamente que busque la libertad política de todos los habitantes de su sociedad. Es común que aquello que resulta liberal en una época puede no serlo para otra, o también, como es el caso al que quiero referirme, un proceso liberal puede comenzar a mostrar ciertas características que se transforman con el paso del tiempo y se involucran con otros ámbitos de la vida social, los cuales no fueron contemplados cuando surgieron los primeros indicios de liberalización.

Se han generado diversos debates sobre cuál fue el primer liberalismo mexicano. Antonio Annino ha señalado que existen dos momentos que comúnmente se relacionan con el liberalismo en México: 1812 ó 1857; y afirma que "la mayoría de los estudios privilegia la segunda opción, identificando el liberalismo con el triunfo del partido liberal en 1857–1867"⁵. En contraste, en la primera opción entraría el experimento constitucional de Cádiz que planteó una suspensión temporal de la monarquía, y es ésta la opción por la que Annino se inclina.

A pesar de que es posible ubicar el liberalismo mexicano, vinculado al grupo político que lo asumió, a través de los momentos históricos que señala Annino; al situarlo en relación al surgimiento de prácticas sociales liberales, esas fechas resultan imprecisas. Por tanto, quisiera referirme al liberalismo mexicano como un proceso que comienza todavía antes de la revolución de independencia. Sin embargo, aún precisando esto, su proceso se nos presenta difuso; establecer una

⁵ Antonio Annino. "Nuevas Perspectivas para una vieja pregunta" en Josefina Zoraida Vázquez y Antonio Annino. *El primer liberalismo mexicano*, Museo Nacional de Historia - Editorial Porrúa, México, 1995, p. 49.

fecha precisa en la que se pueda ubicar su inicio supondría una decisión totalmente arbitraria. Mi interés más bien versa sobre el análisis de ciertas nociones liberales que tomaron auge en la segunda mitad del siglo XVIII y que, a la postre, fundamentarían la política del nuevo Estado Mexicano en el siglo XIX. Posibilitando, con ello, el surgimiento específico de la ciudadanía moderna mexicana.

Además, el proceso del liberalismo puede ser englobado dentro de una historia occidental general, no obstante, nada se nos aclara si no entendemos las particularidades propias de la Nueva España. El liberalismo es una idea compleja que surge, como corriente, de la filosofía política ilustrada. Su proceso es tan diverso que se torna complicado articular un único eje conductor general cuando damos cuenta de él. Es indispensable referirnos siempre a los hechos concretos que están relacionados con los intereses liberales –evidentemente contextualizados en su tiempo.

Por su parte, la reflexión sobre los antecedentes políticos, económicos y sociales que dieron origen a la ciudadanía mexicana está suscrito a uno de los temas recurrentes que Theda Skocpol ha distinguido para la sociología histórica: la formación de los Estados modernos⁶. Porque si consideramos que el Estado mexicano se consolidó tempranamente como un gobierno pretendidamente republicano, los ciudadanos se constituyeron formalmente como los actores que decidirían la manera en que se administraría dicho gobierno. Y si bien esto se presenta evidente por antonomasia, la definición de la ciudadanía mexicana se mantuvo sobre un terreno muy poco firme, ya que atravesó por diversos cambios a lo largo del siglo XIX.

En efecto, los ciudadanos fueron quienes decidieron las políticas estatales de la época, sin embargo, la incógnita recae en saber quiénes eran los ciudadanos. Cuestión que apunta al problema de la autoridad y la legitimación.

⁶ Cfr. Skocpol, Theda. "Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical Sociology" en Theda Skocpol (ed.). *Vision and Method in Historical Sociology*, Cambridge University Press, New York, 1984, pp. 356-360.

Los ciudadanos cumplen una doble condición como sujetos políticos y sujetos jurídicos, obtienen prerrogativas y cumplen obligaciones en ambos casos, las cuales toman forma en función de lo se valora *primordial* para la convivencia de la comunidad estatal. Y son ellos quienes, en correspondencia con sus facultades políticas, modifican el aparato gubernamental para asegurar ese objetivo. Por lo tanto, los *ciudadanos* (o la *ciudadanía*) en un gobierno republicano son también sujetos que cuentan, idealmente, con autoridad sobre las instituciones de gobierno. Asimismo estas condiciones son ampliamente aceptadas por quienes admiten un régimen constitucional, por lo que existe un grado efectivo de legitimidad en estas condiciones.

No obstante, el perfil de los ciudadanos que redactaron y promulgaron los documentos constitucionales en México, desde 1824 y hasta 1857, ni siquiera era representativo de la mayoría de la sociedad nacional, pero esto no les impidió dar forma a documentos legislativos que favorecieron a un tipo de ciudadano que ellos consideraron idóneo. Observamos que en la fe constitucionalista decimonónica los protagonistas en las tareas legislativas dieron origen a un ciudadano creado a su imagen y semejanza. Lo cual no resulta extraño si consideramos lo dicho por Reinhard Bendix acerca de que los "intelectuales han tendido a atribuir sus propios ideales sociales a trabajadores y campesinos"⁷.

Revisando los documentos constitucionales de aquél entonces nos percatamos que existían requisitos mínimos para obtener la condición de ciudadano. Y aunque éstos se mantuvieron cambiantes, a grandes rasgos se dispuso que el ciudadano debía ser varón, mayor de edad (lo cual varió entre 18 y 21 años), saber leer y escribir, que contara con propiedad comprobable e incluso que se realizaran trámites de requisición en cierto momento. Así, dando cuenta de la contraparte, se puede leer el residuo que nos arroja estas condiciones. Es decir, quienes no eran ciudadanos fueron, aquellos que hoy conocemos como adolescentes, aunque en diversas comunidades durante esa edad se inicia la participación activa en las juntas de los pueblos; así como los niños (quienes, a partir de algunos estudios recientes, se enfatiza su condición como uno de los grupos más vulnerables), las

⁷ Bendix, Reinhard. *Force, Fate and Freedom*, University of California Press, Berkeley, 1984, p. 92.

mujeres, los analfabetas, los pobres, y aquellos que no estaban en condiciones de demostrar el pago de impuestos. Lo que nos indica que contrario a la concepción democrática, incluso en su faceta más simple, el Estado mexicano se cimentó en la visión de una pequeñísima minoría. Sin embargo, ésta contó con la autoridad y la legitimidad de los grupos que tuvieron en cada momento la balanza militar a su favor. Y baste recordar al "indispensable Santa Anna", quien colaboró tanto con gobiernos liberales como conservadores. Como sea, aún con la suma de los profesionales de la política estatal de ambos bandos este grupo representaba una pequeñísima minoría.

En este sentido, y a grandes rasgos, las consideraciones en torno a la dinámica de las autoridades, y la manera en que algunas lograron legitimarse por encima de otras, abrieron la puerta a una investigación que ahora busca atender las condiciones que llevaron a la concepción de la ciudadanía en los términos ya mencionados. Por lo que después de revisar (en mi anterior investigación) los cambios en torno a los debates sobre la ciudadanía ideal en algunos escenarios de la política mexicana durante el siglo XIX, el siguiente paso apuntaba a estudiar las condiciones previas a la definición de la figura del ciudadano. Con lo cual se podrá aspirar a entender las relaciones de autoridad en las convicciones de los funcionarios hispanos y novohispanos, además de algunas de las élites locales, para comprender la legitimidad de ese particular perfil moderno de ciudadanos.

El presente trabajo parte de la convicción de que los Estados constitucionalistas y el perfil de los ciudadanos que los componen nunca surgen de una planificación que rompa totalmente con las prácticas sociales que los anteceden. Por el contrario, a pesar de la posible negación de parte de los *pueblos* a alguna etapa de su historia, es seguro que dentro de esos periodos renegados se reprodujeron acciones sociales inmersas en estructuras de larga duración, en donde, asimismo, se presentaron tanto cambios como permanencias en lo social. La conservación y la transformación de las estructuras sociales contribuyen a sentar precedentes, los cuales son factibles de ubicar históricamente y en correspondencia con el presente de cada sociedad.

Encontramos entonces que la conformación de los Estados modernos debe su particularidad a la dinámica previa de sus sociedades. Al respecto, Charles Tilly, ha indicado que la "estructura de las clases de la población contribuyó, pues, a definir la organización del Estado: su aparato represivo, su administración fiscal, sus servicios, sus formas de representación"⁸. De acuerdo a esta precisión, en este trabajo (especialmente por el periodo en que se ubica) se asume una herencia de las tradiciones de la sociedad estamental novohispana al posterior reconocimiento de clases sociales en el Estado constitucional. Así también, la delimitación de las características de la ciudadanía ideal del siglo XIX en México, corresponde a un proceso en el que se consolidaron diversos valores liberales que preceden al nacimiento de la nación mexicana.

Por otro lado, entendemos la aparición de un "Estado racional" moderno de acuerdo a lo enunciado por Weber, es decir, el "único terreno sobre el cual puede prosperar el capitalismo moderno", en donde se busca una lógica única para la legislación y la jurisdicción, basadas en una burocracia profesional y en un sistema de regulación y recaudación económica pretendidamente racionales ⁹. Y observamos que el deseo de los "Estados racionales" por controlar la dirección que debiera tomar una sociedad está centrado en una noción de universalidad que es modelada por las cuestiones de mayor estima de parte de quienes dan forma a (o pactan) las instituciones de la administración de lo público. Considerando esto no resulta raro que en la construcción de los Estados se imponga a todos los ciudadanos por igual los deseos de quienes diseñan las políticas estatales. En relación a esto, Tilly observa que:

los Estados generalmente actuaron para homogeneizar a sus poblaciones y quebrar su segmentación mediante la imposición de idiomas, religiones, monedas y sistemas legales uniformes, así como fomentando la construcción de sistemas interconectados de intercambio comercial, transporte y comunicaciones.¹⁰

⁸ Tilly, Charles. *Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990*, Alianza Universidad, Madrid, 1990, pp. 154-155.

⁹ Cfr. Weber, Max. *Historia Económica General*, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, pp.285-295.

¹⁰ Tilly, *op. cit.*, p. 155.

Estas características distinguen el proceso de construcción de los Estados nacionales, al menos en un primer momento, de las sociedades feudales e imperiales. Como veremos, en el siglo XVIII novohispano existieron cambios en este sentido, por lo que valoraremos su presencia como parte del proceso de construcción de dicho Estado racional moderno. Asimismo, observaremos que ese tipo de esfuerzos homogeneizadores tuvieron como consecuencia múltiples resistencias. Situación ya advertida por Tilly para la formación de los Estados europeos, para los que afirma que "cuando aquellos esfuerzos unificadores amenazaban la identidad misma en que la población fundamentaba sus relaciones sociales cotidianas, suscitaban con frecuencia una masiva resistencia"¹¹. Misma cuestión que aplica, como lo revisaremos, para el caso del sistema de intendencias en la Nueva España. Entendiendo esto también a partir de que la necesidad de uniformar al gobierno virreinal se desprendió de los ideales administrativos del siglo XVIII europeo. No obstante, con consecuencias diferentes en América, en tanto la vida social de su población se constituía de manera distinta.

Dentro de este marco del Estado racional es que se ubica la ciudadanía. Por una parte, existe un deseo unificador que la define de manera rígida en los documentos constitucionales, aspirando por este medio a hacerla extensiva para todos por igual. Pero por otro lado, fue definida por las necesidades de una clase social que impuso su ideal al resto de la población, deviniendo en claros esquemas de exclusión. Es por tanto, la relación de estas dos facetas de la ciudadanía moderna las que atenderemos.

El trabajo está organizado en cuatro capítulos, los cuales están pensados para exponer los dos temas centrales que hemos esbozado brevemente y que se vinculan fuertemente entre sí. En primer lugar se abordan cuestiones generales sobre la formación del Estado novohispano de tipo *moderno*, que bien puede corresponder a la tipificación de Max Weber sobre el "Estado racional", como lo veremos a lo largo de la presente investigación. Por otra parte, y como tema específico de este trabajo, nos encargaremos de la emergencia del perfil moderno

¹¹ *Ídem*.

de ciudadanía en la Nueva España hacia finales del siglo XVIII. Así, el capitulado está dividido de tal manera que ambos temas puedan relacionarse adecuadamente.

En el primer capítulo se pone en tela de juicio la idea de una modernidad única o de un tipo de Estado moderno que sirva como modelo para los realmente existentes. Por tanto, se cuestionarán algunas ideas progresistas y evolucionistas planteadas de manera lineal, las cuales pretenden distinguir el mayor o menor grado de desarrollo o atraso de acuerdo a parámetros que se presumen como racionalistas. Esto nos llevará a distinguir las necesarias diferencias entre los Estados modernos a partir de que éstos han basado la conformación de sus instituciones racionales con base en estructuras sociales que, de antemano, eran distintas en cada uno de ellos en el pasado. Por tanto, entendida la falsa noción del desarrollo lineal unívoco estaremos en condiciones de plantear, para nuestro tema, cuáles elementos deben referirse al proceso histórico europeo y qué otros deben buscarse en las particularidades de la experiencia novohispana.

Debemos aclarar que sólo a través de un marco teórico que nos permita dimensionar el surgimiento de prácticas liberales, que resultaron propias para la formación de este Estado novohispano con perfil moderno, estaremos en condiciones de argumentar cuáles fueron las prácticas que posteriormente se vincularían a la ciudadanía en los años del Estado constitucional. Por esta razón, en el segundo capítulo adelantaremos sobre el caso específico de la Nueva España. Primero valoraremos el alcance del término *protoliberalismo*, propuesto por Horst Pietschmann, para apuntar que los procesos del liberalismo mexicano no inician con el grupo que se autoproclamó como tal, ya que muchos de los valores que ellos asumieron estuvieron presentes en distintos ámbitos de la vida colonial. Esto nos permite, a su vez, referir que a este mismo proceso liberal subyacen prácticas y convicciones políticas que se encontraron fuertemente relacionadas al ideal de ciudadanía moderna. Lo que nos obliga a distinguir la transición de un tipo de ciudadanía de *Antiguo Régimen*, contenida en el concepto de *vecindad*, hacia las nociones que prevalecieron en el mundo occidental después del siglo XVIII. Así, nos basamos en esta transición para observar que el

cambio de concepto, de *vecinos* a *ciudadanos*, implicó también la emergencia de nuevas prácticas que se identificaron con la ciudadanía moderna; lo cual nos muestra el preámbulo de su concepción en el Estado constitucional.

No obstante, aunque en el último tercio del siglo XVIII existieron muestras de esta tendencia, hemos optado por denominar como *protociudadanía* a aquél sector de la población novohispana que tuvo las facultades de ejercer las prácticas (en cuanto a detentación de derechos y cumplimiento de obligaciones) que después serían asumidas para los sujetos políticos y jurídicos de los Estados regidos por una constitución política. La decisión de utilizar el término de *protociudadanía* se basa en que la palabra de "Ciudadanos" que se utilizó en esta época no refería de manera fiel a la posterior concepción liberal. Aunque el término estuvo presente, su uso no agota, como lo veremos, todas las características que asumimos para la ciudadanía moderna.

Considerando estas precisiones, el segundo capítulo ubica los pormenores de las prácticas *protoliberales*, las cuales, a su vez, posibilitaron la aparición de la denominada *protociudadanía*.

Para el tercer capítulo se presenta una revisión histórica general del proceso administrativo novohispano. Si bien presentamos una referencia forzosa a algunas tendencias políticas y económicas del siglo XVII (para ubicar antecedentes), la mayor parte del capítulo está centrado en el siglo XVIII. Básicamente los temas destacados versan sobre la liberalización económica y la búsqueda de la monarquía por establecer una administración más eficiente con base en la unificación de criterios políticos y en la homogeneización de sus instituciones de gobierno. Sin embargo, en el trabajo se presentan diversas ejemplificaciones que pretenden evitar una simplificación o sobre-esquematización del tema. Razón por la que resultó indispensable abundar en algunos detalles históricos que nos permiten posicionarnos en una perspectiva matizada de la administración del Estado Borbón.

Asimismo, en este capítulo se hace hincapié en detalles que a los historiadores expertos pueden parecerles redundantes, empero, es preciso atenderlos para ofrecer a los sociólogos los datos necesarios para adentrarse en un panorama

(más o menos suficiente) que les permita visualizar las características de corte liberal que se presentaron entonces. Por supuesto, no puedo asegurar que los elementos que aquí ubico dentro del proceso del liberalismo sean los únicos que pueden hallarse, es decir, es imposible que la evidencia, en este sentido, se encuentre agotada.

Una vez atendidas estas aclaraciones, sólo resta decir que este capítulo busca reflejar el proceso del liberalismo novohispano y las características que a mi entender pueden vincularse al tipo de Estado racional weberiano.

Por último, abordaré el tema de la protociudadanía novohispana en términos más concretos. No quisiera que se entendiera que he aguardado hasta el final para abundar en el tema principal. En efecto, el cuarto capítulo es el más extenso e insiste más directamente sobre los cambios y permanencias sociales que dieron forma a la concepción de la ciudadanía moderna en México. Sin embargo, no habría sido posible atender adecuadamente este tema, el cual demandó la sistematización previa de conceptos y fuentes históricas, de no realizarse el trato pertinente en torno a la modernidad y el liberalismo. Así, después de precisar sus implicaciones, nos encontramos frente a un capítulo final que ubica las características puntuales de quienes, idealmente, ejercían prácticas ciudadanas. Esto nos aproxima a una noción de *competente vecindario* que apareció como precursora de la ciudadanía ideal del constitucionalismo. Todo aquello que definió a los vecinos hispanos con capacidades y méritos hacia finales del siglo XVIII puede ser trazado en prácticas concretas que después fueron requeridas para el ciudadano con plenitud de derechos (*civitas optimo iure*).

Para dar cuenta de la *protociudadanía* novohispana el cuarto capítulo está dividido en dos partes. La primera se concentra en discernir las características virtuosas que se esperaban de un súbdito útil. Las cuáles se rastrean a partir de dos escritos de la época. El primero es la *Real ordenanza para el establecimiento e instruccion de intendentes de ejército y provincia en el reino de la nueva España* promulgada por Carlos III en 1786. Este documento fue seleccionado debido a que refleja claramente las pretensiones de la monarquía, no sólo por haber sido dictado por el rey, sino porque condensa las convicciones de su corte y, por tanto,

de aquella etapa que nombramos como *despotismo ilustrado*. El otro escrito corresponde a la *Instrucción Reservada* que dejó el Segundo Conde de Revillagigedo a su sucesor en 1794. Este documento tiene especial relevancia debido a que es una de las instrucciones virreinales más completas, además que podemos considerar a su autor como un celoso defensor de lo *civilizado* y lo *racional* de acuerdo a los ideales de la época. Por tanto, encontramos en sus apreciaciones un campo fértil para distinguir las convicciones ilustradas de aquellos años. Por estas razones ambos documentos han resultado de gran ayuda para los intereses de este trabajo. Debo aclarar, sin embargo, que éstos han sido revisados un sinnúmero de ocasiones por otros investigadores. A pesar de ello, el trabajo que presento se enfoca en los temas que advierten sobre la aparición de la ciudadanía moderna en los años en que fueron escritos.

Por otra parte, en la segunda sección de este último capítulo se abordan las prácticas sociales concretas que se presentaron en la Nueva España hacia finales del siglo XVIII, y que sugieren el ejercicio del tipo de ciudadanía moderna al que me he referido. Aquí se destacan tanto obligaciones como prerrogativas que existieron, de facto, en torno a las dimensiones políticas y jurídicas para los habitantes novohispanos. Asimismo se distingue, mediante una lógica de inclusión y exclusión, cuál fue el sector de la población favorecido por las modificaciones administrativas novohispanas. Lo que nos muestra el perfil de aquellos vecinos de la Nueva España que potencialmente serían reconocidos dentro del ideal de ciudadanía en los años siguientes, de acuerdo a las características que en la recta final del siglo XVIII comenzaban a definirse.

Capítulo 1. Modernidad y liberalismo en el estudio sociológico

Dentro de la amplia bibliografía que existe sobre el siglo XVIII mexicano encontramos frecuentemente una insistente alusión a los cambios ocurridos a lo largo de él. Es un periodo que debido a los múltiples cambios que se quisieron llevar a cabo por la Corona hispana se ha observado como una época de fuertes tensiones. Sin embargo, éstas no fueron exclusivas de los territorios americanos hispanos, sino que la incorporación del pensamiento moderno, de acuerdo al trato común que se le ha dado a este periodo, trajo profundos replanteamientos políticos y económicos.

El hecho de que ese siglo haya sido tratado como *Siglo de las Luces* ha provocado que se le llegue a considerar como un periodo en donde surge el pensamiento ilustrado de la modernidad. Esto tal vez en honor a los filósofos políticos franceses y al pensamiento economicista en Francia e Inglaterra. Pero con este encuadre se deja de lado la percepción de que tanto la ilustración como la modernidad misma son procesos mucho más generales y duraderos, por tanto abstractos y difícilmente delimitables.

Estos aspectos son fundamentales para este trabajo debido a que al estar centrado en definir los antecedentes sociales que dieron pauta a la creación de la ciudadanía moderna en México; que si bien ésta se remonta, formalmente, para el Estado autónomo, a la primera constitución independiente de 1824, el perfil con el que fue definida obedeció a una realidad social específica que puede ser rastreada en su pasado colonial. La distinción de la ciudadanía en el México independiente está estrechamente vinculada con una convicción liberal, en un primer momento, y con la necesidad de un programa político justificado a través del liberalismo, posteriormente. Y ya que el liberalismo, como corriente de pensamiento, se debe a un proceso intelectual fuertemente vinculado a la ilustración y a la modernidad, es forzoso ubicarlo desde una perspectiva teórica que nos permita relacionarlo con la realidad social de entonces.

Asimismo, nuestro tema debe entenderse en relación al proceso de la modernidad. No sólo con respecto a elementos que nos permiten referir lo

moderno, sino en cuanto a la convicción de los pensadores ilustrados que también se asumieron como modernos. Y al ser la sociología una disciplina que ha definido su papel a través del estudio de las sociedades modernas, resulta obligatorio situar en qué sentido el periodo que aquí abordo es clave para el entendimiento de cambios y continuidades del largo proceso que nombramos como *modernidad*. Por tanto, asumo que en él se abandonaron estructuras tradicionales, pero también en él se afianzaron muchas otras que le precedían.

Es por esto que en el presente capítulo ubicaré, en principio, un enfoque sociológico para abordar adecuadamente el problema de la modernidad. Esto me permitirá distinguir su estrecha relación con el pensamiento ilustrado. No obstante, esta exposición está encaminada a tratar las bases teóricas que me permitan introducir las particularidades del liberalismo —en diferentes acepciones. Lo que me interesa es ubicar en qué sentido se puede hablar de un sentimiento liberal novohispano (pero también panhispánico) que, a su vez, preparó el terreno de la definición de la ciudadanía mexicana en los primeros decenios del México independiente.

Abordar el problema de la ciudadanía moderna me obliga también a delimitar teóricamente, para los fines de este trabajo, la capacidad de acción de los actores sociales, lo que me posibilitará, de antemano, tratar sociológicamente de qué manera ellos dirigieron sus prácticas sociales en correspondencia con instituciones que buscaban, o al menos aspiraban, a motivar el éxito personal a través del mérito propio y la presunción de capacidades.

Sólo a partir de la distinción de estos conceptos estaremos en condiciones de realizar un trabajo analítico sobre el nuevo perfil de ciudadanos modernos que ya se vislumbraba hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el mismo que se consolidaría durante los primeros años del México independiente.

1.1 La modernidad como proceso de re-formaciones

La noción de modernidad, en el sentido más inmediato, supone una época en donde se valora como una virtud la posibilidad de que las sociedades cambien. No

sólo como la capacidad que tienen los grupos humanos para asumir el cambio, ni como una predisposición de sus formas institucionales para modificarse; sino que el cambio social es visto también como un proyecto con una dirección y un sentido que son decididos racionalmente. Sin embargo, para la ciencia social, y por supuesto para una sociología que pretende ser consciente de la dimensión histórica de sus objetos de estudio, las ideas deterministas de lo que es la modernidad deben ser erradicadas de sus perspectivas teóricas.

En este sentido, quiero evidenciar algunas nociones que resultan indeseables para el método y el enfoque de la sociología histórica. Por lo que, en la medida de lo posible, busco explicar brevemente los postulados teóricos sobre la modernidad que deben ser estudiados con sumo cuidado. Principalmente porque muchos de ellos ya no son parte de nuestro aparato teórico, sino que a la luz del análisis sociológico muchos de esos contenidos del pensamiento social moderno deben ser estudiados de acuerdo a cómo han afectado a las realidades sociales del pasado que estudiamos.

No obstante, las ideas plasmadas en diversos tratados filosófico-políticos de hace dos o tres siglos –los cuales vinculamos con la Ilustración– han afectado a las sociedades contemporáneas de manera diferenciada. Con esto me refiero a que cada sociedad interpretó estas ideas en relación a sus tradiciones de pensamiento, sus instituciones y sus valores, de acuerdo al orden moral propio. Es por esto que Charles Taylor afirma que “las transiciones de lo que podemos reconocer como modernidad, la cual se presenta en civilizaciones diferentes, también produce resultados diferentes”¹². Por tanto, la modernidad vista como un proyecto unificado de la humanidad no se ajusta a nuestra visión. Por esto, Taylor propone que “en lugar de hablar de ‘modernidad’ en singular, debemos hablar de ‘modernidades múltiples’”¹³. Esta conclusión es el resultado de un enfoque sociológico basado en un análisis causal, ya que el entender la consecución de los hechos sociales a partir de estructuras sociales particulares prevalecientes en cada sociedad, nos permite comprender por qué la idea del proyecto universal de

¹² Taylor, Charles y Lee, Benjamin. Multiple Modernities Project. Modernity and Diference. <http://www.sas.upenn.edu/transcult/promad.html>

¹³ *Ídem*.

la modernidad no corresponde a lo que observamos a lo largo de las diversas sociedades que han sido selectivas al incorporar algunos elementos del pensamiento occidental moderno.

La definición de lo que hoy denominamos modernidad ha sido una tarea perseguida por diversos sociólogos desde el surgimiento de su disciplina. Es posible ubicar perfectamente la persecución de este interés en el ambiente cientificista que sacudió al mundo occidental desde el siglo XIX, y concretamente en las obras progresistas y evolucionistas hacia mediados del mismo siglo.

En estas corrientes de pensamiento tenemos ejemplos de cómo la comprensión de *la modernidad* ha sido muchas veces forzada a entrar en esquemas nomotéticos extremistas que tratan de caracterizar esta época con un exceso de rigidez. Continuando con esos planteamientos, vemos que generalmente, en esa etapa inicial, los teóricos sociales (dígase Spencer, Comte, L. H. Morgan, y en alguna etapa Marx) buscaron justificar un enfoque prescriptivo para el mundo social. En este tipo de explicaciones, a partir de las cuales los autores buscaban comprender a sus propias sociedades, podemos encontrar la madurez de un pensamiento moderno basado en una narrativa deontológica.

Para aclarar esto es útil referir la explicación de Charles Taylor sobre la transición a la modernidad, la cual supone un abandono del pensamiento que él denomina "óntico", y que, a grandes rasgos, explica el mundo (o el universo) en relación a un equilibrio general de las cosas. En donde en el curso del tiempo, los hechos se ordenarían de acuerdo a una esencia última –que es vinculada a la divinidad o divinidades en las sociedades premodernas¹⁴. En contraste, el pensamiento moderno occidental comienza a plantear que lo acontecido en el mundo no es sólo producto de un primer motor o de una esencia única, así a "diferencia del ideal cristiano medieval, la idea moderna de orden moral remite desde el principio al aquí y el ahora [*hic et nunc*]. Pero sigue muy claramente un camino que va de lo hermenéutico a lo prescriptivo"¹⁵, lo que indica la posibilidad de que el ser humano influya en cómo debe ser el mundo. Con esto nos podemos

¹⁴ Cfr. Taylor, Charles. *Imaginarios sociales modernos*, Paidós, Barcelona, 2006, pp. 16-28

¹⁵ *Ibid.*, pp. 19-20. Las cursivas son mías; *hic et nunc* es un término popular en latín que hace referencia a una postura existencialista.

percata de que el tipo de pensamiento social a mediados del siglo XIX es una consecución del viro ilustrado del siglo XVII, el cual es descrito más ampliamente por Taylor¹⁶.

Sin embargo, este afán teleológico del pensamiento social se vio desdibujado posteriormente en los teóricos de la sociología¹⁷. Aunque estas posturas no desaparecieron totalmente (ya que podemos percibir cierta permanencia prescriptiva en algunos planteamientos desde Durkheim, pasando por Parsons, y hasta Elias y Habermas), la disciplina poco a poco fue más escéptica sobre la posibilidad de articular un esquema deseable para la humanidad en su conjunto, y todavía más para predecir su futuro. Razón por la cual es imposible imputar de manera simple qué elementos precisos son los que componen a un imaginario moderno en abstracto. Por lo que observar las características propias de la modernidad es una tarea compleja, debido a que supone el esfuerzo de inferir cuáles han sido las tendencias del pensamiento social, el cual se conforma en relación a la observación de prácticas sociales concretas.

En este sentido, debemos tomar en cuenta que esas prácticas pueden ser tanto causas como efectos de las transformaciones de cómo los seres humanos explican su propio mundo. Así, podemos argumentar que buena parte los planteamientos teóricos dependen de las circunstancias en que se encontraron quienes los articularon¹⁸. Asimismo, las ideas intelectuales que han sido consideradas valiosas, han tenido un inminente impacto en la vida social de quienes las adoptan.

Sin embargo, en este punto, habría que atender la distinción de Taylor entre las teorías sociales y los imaginarios sociales. Nos dice que con

el término imaginario 1) ... [refiere] concretamente a la forma en que las personas corrientes imaginan su entorno social, algo que la mayoría de las veces no se expresa en términos teóricos, sino que se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas. Por otro lado, 2) a menudo la teoría es el coto privado de una pequeña

¹⁶ Cfr. *Ibid.*, pp. 13- 35 y 47-66.

¹⁷ Cfr. Nisbet, Robert. *La formación del pensamiento sociológico*, Tomo II, Amorrortu, Buenos Aires, 2003, pp. 183-188.

¹⁸ Cfr. Bendix, Reinhard. *Force, Fate and Freedom*, University of California Press, Berkeley, 1984, pp. 28-29.

minoría, mientras que lo interesante del imaginario social es que lo comparten amplios grupos de personas¹⁹

Siguiendo esto, es claro que la reflexividad de la sociología²⁰, que la llevó a emanciparse parcialmente de una perspectiva de la metáfora²¹ del progreso y de la evolución, no es compartida por el común de las personas. Por el contrario, el relato de la modernidad como un proyecto racionalista que promueve el deseo de controlar la dirección específica que adoptará la sociedad, y que toma forma de acuerdo a una idea universal de prosperidad, es bastante común en las figuraciones de un amplio sector de las sociedades modernas. Así también es común la contraparte, es decir, los relatos de corte pesimista que sostienen una paulatina decadencia de la humanidad. Aquí nos podemos percatar de un discurso de la modernidad que se ha ido consolidando en distintos imaginarios sociales a lo largo del mundo.

En correspondencia con esta convicción de un racionalismo sin límites, Reinhard Bendix señala que el tipo de investigaciones que idealizan a la sociedad industrial como un modelo general suponen "una abstracción que comienza asumiendo que todos los países en transición eventualmente se insertarán completamente en la sociedad industrial"²². A simple vista, desde una posición escéptica a los esquemas progresistas, podríamos apresurarnos a afirmar que esto no sucedería en muchas de las sociedades que, sin contar con suficiente evidencia empírica, juzgamos que no tienen el más mínimo interés en adoptar prácticas industriales. No obstante, así como tampoco afirmamos ingenuamente que todas adopten sin resistencia un interés mercantil, no es posible hacer una

¹⁹ Taylor, *Imaginarios...*, p. 37.

²⁰ En este punto puedo referir a la idea de una sociología reflexiva de Bourdieu, la cual es capaz de redefinir el enfoque de la disciplina por medio de una constante vigilancia epistemológica. Cfr. Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude; y Passeron, Jean-Claude. *El oficio de sociólogo*, Siglo XXI, México, 2002, pp. 20-24.

²¹ Utilizo el término *metáfora* en relación a la noción que expone Robert Nisbet. El término, según este autor, adjudica una direccionalidad particular al desarrollo de la sociedad en su conjunto, ya sea para dirigirse a la prosperidad o a la decadencia. Es una metáfora debido a que existe una comparación del cuerpo social con los ciclos de la naturaleza, en donde se observa un nacimiento, un crecimiento, un envejecimiento y una muerte. Cfr. Nisbet, Robert. *Cambio social e historia*, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1976.

²² Bendix, *op. cit.*, p. 13.

afirmación tan extensa de manera inmediata. Por ello es indispensable referir evidencia concreta para sociedades particulares, en donde también habría que identificar múltiples distinciones al interior de éstas.

Existe un peligro latente en hacer grandes afirmaciones sobre el perfil general de una sociedad para ser considerada como moderna. Por esta misma razón debemos aproximarnos con cuidado a los calificativos que utilizamos para determinar si una sociedad es más moderna que otra, es decir, habría que justificar si ciertas prácticas son, en efecto, consecuencias que se desprenden de una transformación de las prácticas materiales y del esquema de pensamiento de la sociedad moderna.

En este sentido podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es más moderno, un imaginario social que desea el progreso, una teoría social que desconoce la metáfora o un régimen estatal que ignora las sugerencias internacionales sobre la instauración de la laicidad en su propio Estado? De antemano es una pregunta que no tiene una respuesta precisa. Pero para poder aventurarse a dar una, primero sería necesario incorporar una dimensión valorativa que determine qué elementos de la modernidad estarían por encima de los demás. Retomando el último ejemplo de la pregunta que enuncié formulo esta nueva: ¿qué se podría considerar más moderno, la laicidad del Estado o el respeto a la soberanía constitucional del mismo? Y si se optara por lo primero ¿sería más moderno un gobierno que contara con mayor número de dirigentes que no profesasen alguna religión? Evidentemente estaríamos frente a una cuestión de valoración práctica, lo cual nos aleja enormemente de una formulación de tipo sociológico.

Por esto, los conceptos que utilizamos para describir los elementos de modernidad dentro de una sociedad deben ser matizados de acuerdo a los hechos observables de cada caso. Es necesario precisar que el término modernidad es difícilmente asible como una herramienta de medición. Y, en consonancia con mi argumento, es totalmente indeseable. Esto porque, además, en palabras de Bendix, los "conceptos pierden su capacidad para decirnos mucho sobre algo si su enfoque es demasiado amplio"²³. La modernidad vista como una característica (o

²³ *Ibíd.*, p. 17.

grupo de características) *per se*, y no como un proceso histórico de larga duración, resultaría obsoleta para los intereses de la ciencia social. Por lo que hemos de enfatizar que si la sociología, y en particular la sociología histórica, busca describir y comprender a la modernidad (hecho que es el propósito fundamental de sus expositores²⁴) debe ser entendida como un proceso multicausal que supone constantes reformas en su propio esquema.

Para precisar esto podemos señalar, de acuerdo a Stuart Hall, que la modernidad es un proceso y no prácticas en sí mismas. Aunque de hecho "los procesos se constituyen de prácticas de los agentes individuales y colectivos, y éstas operan a través de escalas de tiempo extensas"²⁵. Las tendencias del proceso de la modernidad, en el sentido de la larga duración, logran establecer el propio sentido de sus cambios y sus permanencias, lo cual es posible observar en las prácticas, pero cada una de éstas por sí sola no describe la complejidad del proceso.

Sin embargo, un análisis de las prácticas concretas nos permite dar cuenta de las estructuras sociales que subyacen a ellas. Esto, por supuesto, no es posible a partir de la simple observación de las prácticas aisladas. Para lograr dar cuenta de las estructuras de lo social es necesario tomar en cuenta los juicios que de ellas se hacen y, de ser posible, (en el sentido de una sociología comprensiva) acercarse a descubrir el sentido y la motivación de los propios actores sociales. Esto nos permite tener referentes empíricos para ubicarlas dentro de un espacio social que les da sentido, sea cual sea éste. Lo que nos lleva a preguntarnos forzosamente acerca de cómo podemos analizar la relación entre el actor y la estructura.

Para aclarar este punto propongo una revisión de la conformación de la acción social en tanto es necesario enfrentar este concepto sociológico a la noción de acción individual interpretada de manera simple. Esto porque mi investigación se

²⁴ Arpad Szakolczai afirma en el primer capítulo de su libro *Reflexive Historical Sociology* que: "los sociólogos históricos son pensadores sociales que estuvieron comprometidos con estudios empíricos detallados e históricos de largo término desde su propia búsqueda auto-reflexiva con el propósito de entender la modernidad". Szakolczai, Arpad. *Reflexive Historical Sociology*, Routledge, New York, 2009, p. 3.

²⁵ Hall, Stuart. "Introduction" a Hall Stuart and Brian Geben, *Formations of modernity*, Polity Press/Open University, Cambridge, 1992, p. 7.

concentra en cómo surgieron nociones liberales en el virreinato novohispano, adoptadas de la ilustración política europea, que concebían la capacidad individual de los ciudadanos para dirigir sus esfuerzos a concretar labores útiles a la nación. Por tanto, adelantándome a la falsa noción del *individuo que se hace a sí mismo*, incorporo una base teórica que me permite exponer que toda acción con sentido mentado "está referid[a] a la conducta de *otros*"²⁶.

1.2 Determinaciones estructurales de la acción

La tentación de explicar la realidad social desde una postura materialista es realmente sugerente. En una explicación causal de este tipo se nos dice que las instituciones que avalan la legalidad son consecuencia de prácticas económicas concretas que se desprenden de la búsqueda de los bienes necesarios para la vida. A su vez, esas mismas instituciones son causa de la manera en que los sujetos conciben la lógica de una dinámica normativa particular. En donde, en relación a Taylor, son "inducidos a adoptar estas nuevas formas legales (incluso aunque al principio no fueran conscientes de lo que estaban haciendo)"²⁷. No obstante, también podemos dar cuenta de procesos inversos, en donde un cambio en las ideas que, por ejemplo, sustentan un tipo de mercado y de política generan transformaciones profundas en cómo se organizan los recursos. Así tenemos que las ideas y las instituciones se afectan mutuamente. Cuando se asimilan unas a las otras generalmente la tendencia es a un mantenimiento del *statu quo*, pero en el caso en donde existe un distanciamiento entre las formulaciones ideales y las instituciones se generan tensiones sociales que pueden llevar al cambio social o, al menos, a alguna solución institucional en donde se pueda lidiar con el conflicto.

Las ideas y las instituciones se encuentran en un entramado complejo que compone la estructura social. La manera en cómo se organizan las sociedades se basa en múltiples acuerdos, explícitos o implícitos, que dan forma a las instituciones con las que convivimos día con día. A su vez, esas instituciones se

²⁶ Cfr. Weber, Max. *Economía y Sociedad*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 5.

²⁷ Taylor, *Imaginario...*, p. 48.

han basado en convicciones sobre la necesidad de su existencia. Esto, por supuesto, no como un acto consciente de todos los que participan del acuerdo, sino que a éste subyace una dinámica social con la que los participantes están familiarizados, por lo que les parece un acuerdo coherente y, por tanto, legítimo.

Asimismo esta aceptación es parte de figuraciones que los actores sociales se hacen de las instituciones, las cuales pueden modificarse. En este sentido el cambio en las ideas puede afectar también las instituciones con las que convivimos. Y viceversa, el cambio en las instituciones supone su asimilación, de acuerdo a Taylor, mediante las ideas que tenemos "de cómo deben funcionar y del tipo de desviaciones que invalidarían la práctica"²⁸. Sin embargo, he de precisar los integrantes de la sociedad no están en condiciones de influir por sí solos las estructuras de lo social.

En el curso de la vida cotidiana existe una infinidad de prácticas sociales que dependen de estructuras concretas que no aparecen como conscientes al ser humano y que, aún así, las lleva a cabo²⁹. Los actores sociales suelen creer que todas sus acciones son intencionales, y que ellos mismos determinan de manera autónoma sus propios fines. Es evidente que esta burda noción ha sido adoptada como una máxima dentro de algunos imaginarios sociales en occidente, lo cual ha sido una herencia de algunas definiciones simplistas de *la libertad* que no han planteado su carácter de categoría relacional, sino que le han dado el trato de una reafirmación pragmática. En este sentido Taylor advierte que la libertad, en tanto capacidad humana en sí misma y que es independiente a una obligación con un orden moral, es totalmente ficticia. Nos dice que:

[el] ultraliberalismo sólo puede mostrarse desvinculado de toda afirmación de valor y, por tanto, de toda obligación de autorrealización cuando la gente acepta la psicología moral completamente simplista del empirismo tradicional, según la cual los agentes humanos poseen una plena capacidad de elección como un elemento dado y no como un potencial que es preciso desarrollar³⁰

²⁸ *Ibíd.*, p. 38.

²⁹ Cfr. Durkheim, Émile. *Las reglas del método sociológico*, Ed. Altaya, Barcelona, 1995, pp. 56-68.

³⁰ Taylor, Charles. "El atomismo" en *La libertad de los modernos*, Amorrortu, Buenos Aires, 2005, p. 238.

Desde el momento en que se pregona el ser libre *a partir de y con la finalidad de*, se hace alusión a nociones que están inmersas en un orden moral particular. Por tanto, la libertad en sí misma supone una previa socialización de la persona sobre valores socialmente aceptados o rechazados. Cuando se enuncia que se es libre para una *autorrealización*, sabemos que ésta se enmarca dentro de estructuras sociales que dan sentido y significado a la noción de *éxito* que el sujeto ha asimilado.

Es necesario precisar que el ideal moderno en las posturas de la ilustración asumió que el individualismo y el beneficio mutuo (postrado en el igualitarismo y en el liberalismo) eran "ideas residuales obvias que quedan una vez que nos hemos desembarazado de las viejas religiones y metafísicas"³¹. Los postulados modernos nos hablan de una organización de la sociedad que abandonaría las disposiciones jerárquicas avaladas por la sociedad estamental, con lo que se lograría una relación más horizontal entre ciudadanos en los Estados modernos. El argumento recae en que las formas de gobierno pretendidamente igualitarias son la base de una sociedad que parte "de los individuos y concibe la sociedad como algo creado en beneficio de éstos"³². Esta misma situación nos lleva a dar cuenta por qué, a partir de estas formulaciones, podemos hallar corrientes de pensamiento, desde el siglo XVII, que describen al individuo como un ente capaz de determinar su propio destino con independencia de las determinaciones estructurales que lo preceden y lo rebasan. Por esto mismo, Taylor señala que "los proponentes de la teoría ya se veían a sí mismos como agentes capaces de reformar tanto sus propias vidas como el orden social en su conjunto, a través de una acción disciplinada y libre de trabas"³³. Y si bien estas nociones sólo se mantienen al nivel de nuestro objeto de estudio, es necesario saber cómo afectaron estructuralmente a la transformación de las acciones sociales de la época.

³¹ Taylor. *Imaginario...*, p. 31.

³² *Ibíd.*, p. 32.

³³ *Ibíd.*, p. 34.

Tenemos que este tipo de pensamiento liberal de la acción (en tanto se defendía la capacidad individual de afectar la realidad social) surgió como una propuesta que abría la posibilidad a ciertos actores a participar en los asuntos de gobierno en el régimen monárquico. Sin embargo, habría que distinguir los escenarios específicos en los que operaron estas ideas.

Por dar un ejemplo un tanto burdo, tenemos que la situación en Inglaterra a finales del siglo XVII, en donde terminó instaurándose una monarquía constitucional y parlamentaria, es distinta a los despotismos ilustrados en España y Francia. En el caso inglés podríamos apresurarnos a señalar que quienes participaron de las ideas de un gobierno que limita los poderes del monarca pudieron influir, a través del precedente revolucionario, en los cambios políticos y económicos necesarios para garantizar *la libertad* de los ciudadanos con base en una nueva legislación que enfatizó la prioridad de la propiedad privada. Aquí es evidente que ese cambio por el que propugnaban los participantes no habría sido posible de no ser por una acción colectiva –y nunca individual. Por lo que es evidente que la capacidad del individuo para influir en la estructura sólo existió como una dimensión ideológica.

En el caso del despotismo ilustrado tenemos que el rey, como depositario de la soberanía del pueblo, también convivió con las ideas ilustradas que proponían la capacidad del individuo por transformar la realidad social. En esta situación particular tenemos que el monarca estaría en una posición mucho más ventajosa que los parlamentaristas ingleses si consideramos que durante la época del despotismo ilustrado las decisiones de gobierno fueron mucho más autoritarias y verticales. No obstante, el hecho de que existan actores con capacidad para influir más sobre ciertas estructuras no significa que estos mismos no estén inmersos en estructuras. Los mecanismos que los actores utilizan para tomar una decisión de gobierno, las valoraciones que toman en cuenta para definir esas decisiones y, por supuesto, la lógica que las motiva, son parte de estructuras sociales. Por esto, por ejemplo, podemos comprender que los déspotas ilustrados (en especial los monarcas hispanos) hayan llevado a cabo reformas que estuvieron justificadas en un discurso ilustrado durante el siglo XVIII. De esta manera observamos que los

actores tienen una mayor o menor capacidad de influir en la realidad social, pero todos ellos, sea cual sea el caso, están sujetos a condiciones sociales que les preceden. Además ninguno de ellos influye por sí mismo, sino que el ejercicio de ese poder se debe a una posición ventajosa en la jerarquía organizacional de la sociedad. Por lo que, por más capacidad de decisión que tenga un individuo no actúa sólo. Podemos pensar en el ejemplo de los monarcas hispanos, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, ya que sus decisiones siempre estuvieron sujetas a las apreciaciones de sus colaboradores ilustrados (llámense Feijoo, Aranda, Floridablanca, Campomanes o Jovellanos) por lo que también se encontraban inmersos dentro de un imaginario social específico.

Aquí es necesario recuperar la explicación centrada en la dualidad de la estructura como estructurante y estructurable, planteada por Anthony Giddens. En el caso de una teoría que prioriza la acción, se presupone que "los seres humanos son agentes intencionales, conscientes de sí, que pueden aducir razones para lo que hacen"³⁴. En caso de priorizar la estructura, los "agentes se presentan inertes e ineptos: juguete de fuerzas que los superan"³⁵.

Por tanto, cuando planteamos que la estructura es estructurable, tenemos que existen pautas en la realidad social que modelan las acciones de los individuos, los cuáles, a su vez, las reproducen en su vida cotidiana, ya sea de manera consciente o inconsciente. Pero estas estructuras (que constantemente reclama la sociedad) pueden ser evidenciadas por los sociólogos a través de los análisis causales que permiten observar cuál es la función social que ellas cumplen. Giddens nos dice que "deconstruir la sociedad significa reconocer la importancia básica de la diversidad, el contexto y la historia"³⁶. Y prosigue señalando que los procesos "de reproducción social empírica hacen intersección entre sí de muy diversas maneras con respecto a su alcance espacio-temporal, a la generación y distribución de poder y a la reflexividad institucional".

La "reflexividad institucional" nos muestra la capacidad de la estructura, por medio de los actores que participan en ella, para ser transformada. Nos indica que

³⁴ Giddens, Anthony. *Las nuevas reglas del método sociológico*, Amorrortu, Buenos Aires, 2001, p. 14.

³⁵ *Ídem*.

³⁶ *Ibíd.*, p. 18.

"los descubrimientos de la ciencia social no permanecen ajenos al 'asunto' al que se refieren, sino que consistentemente reingresan en este y lo replasman"³⁷. Por lo que esta retroalimentación del conocimiento de los seres humanos sobre la realidad social lleva a que las estructuras puedan ser estructurables por los actores.

A partir de este planteamiento quisiera señalar que esto debe ser atendido con cuidado. Infiero que el reconocimiento extremista de que los actores sociales determinan a las estructuras podría llevarnos a suponer un esquema de cambio social en donde todos los elementos de una sociedad están en constante transformación. Esto mediante una lógica de cambio que se genera desde dentro de las mismas sociedades, es decir, como lo enunciara Bendix "presuponer que el cambio social consiste en un proceso que es interno a la sociedad que cambia"³⁸. No obstante, esto puede llevar a reconocer en el actor ciertas atribuciones que lo colocan en una situación en donde puede decidir el curso del orden social. Por lo que sería atribuirle a las decisiones individuales un valor explicativo que difícilmente tienen, y que se remite a aquellas formas narrativas simples del atomismo y del liberalismo.

El justo tratamiento de la relación entre actor y estructura sólo puede lograrse si hacemos énfasis en que las acciones son eminentemente sociales, es decir, quien actúa no lo hace de manera autónoma, sino que en sus motivos e intenciones está contenida su sociedad. Así, su imaginario social, no sólo como un conjunto de ideas, sino como aquello "que hace posibles las prácticas de una sociedad, al darles sentido" no es dominio *del individuo*. Éste no limita ni determina arbitrariamente su mundo, ya que, "el imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un sentido ampliamente compartido de legitimidad"³⁹. Así, debemos tener presente que las acciones sociales para la sociología son materia prima para describir y comprender las estructuras que subyacen en la sociedad.

³⁷ *Ibíd.*, pp.18-19.

³⁸ Bendix, Reinhard. *La razón fortificada*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 301.

³⁹ Taylor, *Imaginario...*, p. 37

A su vez, también es preciso observar la estructura social conformada por instituciones e ideas. Sin embargo, se podría pensar que las dos son factibles de pensarse en términos idealistas. Por tanto, las instituciones también deben pensarse como la instancia que traduce a prácticas sociales concretas la forma en que las sociedades asumen su materialidad.

Es necesario que el enfoque de la sociología histórica tome en consideración a las ideas y a las instituciones de manera paralela⁴⁰. En efecto, en ciertos casos existen motivos para pensar que una dimensión determina a la otra, sin embargo, si priorizamos un tipo de explicación sobre otra corremos el riesgo de acrecentar el punto ciego de nuestro análisis. Es así, que la explicación multicausal requiere de considerar los dos niveles, tanto la posibilidad de que las instituciones (y la organización de lo material) influya sobre las ideas, como lo inverso.

Finalmente, esto puede ser transportado al trato que se da a la perspectiva de modernidades múltiples. Las ideas de la modernidad, como un proyecto de orden social que supone ventajas en la organización institucional buscando imitar algunas experiencias que se perciben como *exitosas*, afectan de manera distinta a las realidades sociales en donde se adopta. Por esto Taylor ha propuesto que “una visión de múltiples modernidades debe ser capaz de relatar ambas dimensiones, la que empuja a la igualación así como las fuerzas que hacen la diferencia”⁴¹. De esta manera podremos atender de forma precisa cómo se han aplicado las ideas modernas en sociedades específicas. Pero además qué consecuencias han tenido en relación a las características particulares de la organización previa de las sociedades y cómo éstas determinan las convicciones y las prácticas de los actores sociales a su interior.

1.3 Precisiones sobre la libertad moderna en las grandes generalizaciones

La determinación del momento en que comienzan las ideas que dan forma al liberalismo del mundo occidental es una tarea imposible debido a que no es

⁴⁰ *Ibíd.*, pp. 96-97.

⁴¹ Taylor y Lee, *op. cit.*

factible localizar un evento único que las contenga. Algo similar como ocurre con la delimitación de lo que nombramos como *modernidad*. Por ello de antemano habría que establecer que al liberalismo le antecede el extenso proceso de la modernidad, tanto históricamente como en la disposición para concebir cambios en las estructuras sociales.

Si bien los defensores del liberalismo han detectado que éste no se presenta de manera homogénea en quienes se reconocen como liberales, es posible identificar, en principio, que es una corriente que valora el abandono de las viejas ideas e instituciones para crear otras nuevas, basadas en la aplicación de una legislación igualitaria, avalando la capacidad de acción de los individuos⁴² –como ya hemos ejemplificado antes. Al respecto, Robert Nisbet indica que el "sello del liberalismo es su devoción por el individuo, y en especial por sus derechos políticos, civiles y –cada vez más– sociales. La autonomía individual es para el liberal lo que la tradición significa para el conservador"⁴³. En este sentido, podemos entenderlo como un movimiento que buscó la transformación de un esquema de pensamiento que estaba atado a las estructuras estamentales del *Antiguo Régimen*, anteponiendo el supuesto pensamiento racional. Sin embargo hay que tener sumo cuidado en esta afirmación, debido a que su surgimiento no se presentó a partir de un rompimiento tajante con el programa político de los despotismos ilustrados, lo cual debemos tener presente especialmente para el tema que nos ocupa.

Es por esto que debemos insistir en la necesidad de la ciencia social, y en especial de la sociología, de mantener dentro de su perspectiva la noción de la *permanencia social* cuando se realicen análisis de las *grandes transformaciones* del mundo moderno. Y, al ser una tarea primaria de la sociología el estudio de las sociedades modernas, debo insistir en este punto para evitar obtener evidencias parciales de los cambios sociales que investigamos. Los cuales, por el gran interés que despiertan comúnmente en los sociólogos, muchas veces nos ciegan del hecho de que las estructuras sociales tienen importantes continuidades. Por

⁴² Cfr. Holmes, Stephen. *Passions & Constraints*. On the theory of liberal democracy, The University of Chicago Press, Chicago, 1995, pp. 1-12.

⁴³ Nisbet, Robert. *La formación del pensamiento sociológico I*, Amorrortu, Buenos Aires, 2001, p. 23.

tanto, uno de los enfoques de este trabajo es que podemos encontrar múltiples rasgos de diversas tradiciones en el mundo moderno, así como diversos antecedentes sociales que dieron pauta a la conformación de la tradición liberal.

Por esta razón, para entender las diferencias entre las grandes generalizaciones que comúnmente utilizamos para denominar corrientes de pensamiento, como lo es el liberalismo, éstas deben de ser sometidas a dos niveles distintos de análisis. Por un lado tenemos que cualquier corriente (ilustración, liberalismo, igualitarismo, anarquismo, etc.) se ha conformado por un espíritu primero que actúa en consecuencia de valores máximos, justificándolos de acuerdo a un ideal que se extiende a sus sociedades –sea cual sea el alcance de éstas. Y, por otro lado, tenemos los efectos reales que se desprendieron de esas empresas. Hemos de entender que las corrientes de pensamiento se materializan en movimientos sociales realmente existentes. Pero todavía más, muchos de esos movimientos llevan a los líderes o caudillos a abanderarse con la causa. Lo cual los lleva a proponer objetivos que llegan a contradecir aquel espíritu primero (y los valores) de la corriente de pensamiento a la cual se adscriben. Por esto podemos lidiar con gobernadores y pensadores que se autodenominan *liberales* y que, dentro de sus propuestas, buscan mantener la exclusión de diversos actores de los asuntos de gobierno o, al menos, de la posibilidad de equilibrar las condiciones que permitan acceder a un sector más amplio a un nivel equiparado de sus condiciones materiales y educativas –como antesala de aquello.

Tomando en cuenta, en este mismo sentido, al liberalismo realmente existente, probablemente quienes aportan ideas para perpetuar la exclusión (y el mantenimiento de la condición de clase) no contrasten con los movimientos liberales triunfantes, ya que éstos se diseñaron en beneficio de un sector específico. Con lo que caemos en cuenta que las revoluciones liberales fueron reclamadas por los grupos burgueses en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, al ser sometidos esos personajes al análisis de los valores fundamentales de un liberalismo que aspira a incorporar a la totalidad de sus habitantes por medio de una legislación, y su administración, que resulte conveniente para sus actores colectivos e individuales, probablemente existan pocas cosas en común. Además,

para quienes han adoptado una posición rígida sobre el liberalismo – paradójicamente la conservación de sus preceptos ortodoxos– no existe cabida para las personalidades jurídicas colectivas por ser considerados antagónicos a la igualdad individual ante la ley.

Ahora bien, es preciso adelantar en nuestro tema particular, por lo que debemos transportar lo dicho hasta aquí al proceso histórico de la época virreinal tardía –a la segunda mitad del siglo XVIII en la Nueva España para ser más específicos– en donde buscaremos ubicar las tendencias precursoras del liberalismo y, por tanto, de la concepción de los sujetos individuales de derecho, es decir, los ciudadanos modernos mexicanos.

Capítulo 2. Acercamiento al *Protoliberalismo* y a la *Ciudadanía* en la Nueva España

La disciplina histórica ha tenido especial cuidado en el uso del lenguaje que utiliza para referir aspectos particulares de la vida social de acuerdo a la situación de los seres humanos en una época y una región específica. Frecuentemente para un historiador no es admisible utilizar una expresión que no corresponde a la época. Así, por ejemplo, existen diferencias para nombrar a los "antiguos mexicanos" del valle, a los posteriores mexicanos de la Ciudad, de la provincia o de la intendencia y, ahora, a quienes están en condición de ser nacionales del Estado mexicano moderno.

En este mismo sentido, Enrique Semo advierte que aquellos pensadores del siglo XVII en Inglaterra, a los que usualmente nos referimos como liberales, "nunca se llamaron a sí mismos liberales"⁴⁴. Por lo que es factible generar un debate filosófico, histórico y sociológico de cuál sería la pertinencia de nombrarlos liberales en relación al contenido de sus obras en comparación con una minuciosa definición de los valores relacionados al liberalismo. No abundaré en esta tarea, en principio porque mis conocimientos filosóficos e históricos al respecto se verían muy rebasados, por lo que no lograría dar un trato favorable al tema. Además que el potencial del mismo requeriría un trabajo muy extenso que se desviaría de raíz del interés principal que aquí persigo: *ubicar un prematuro liberalismo novohispano que sentó las bases de la definición de la ciudadanía en el México independiente*.

Debemos señalar que el *liberalismo*, en cuanto corriente, no aparece en el lenguaje político ni intelectual de la época. Por supuesto no habría sido posible afirmar que se buscaba quebrantar la organización social virreinal. No obstante, existieron manifestaciones de las características que ahora identificamos como liberales. Como veremos a lo largo del trabajo, en diversos documentos de la época aparece la palabra *libertad* sin que esto haga referencia a la negación de la autoridad de la Corona. Si consideramos esto encontramos muy acertado que

⁴⁴ Semo, Enrique. "México: de la ilustración al liberalismo" en *La responsabilidad del historiador. Homenaje a Moisés González Navarro*, Universidad Iberoamericana, México, 1992, p. 223.

Horst Pietschmann haya preferido llamar "protoliberalismo" a esas condiciones que mostraban las primeras pinceladas del rompimiento político con el *Antiguo Régimen* en la Nueva España⁴⁵. Por tanto, el hecho de traer a colación el término *liberal* para efectos de este trabajo se debe a que nos permite establecer las características de un proceso histórico en donde cada vez más se hace referencia a los méritos y talentos personales, a la igualdad de los hombres ante la ley⁴⁶ y a la defensa a ultranza de la propiedad individual como condicionante de la libre acción; que en términos más específicos refieren a los elementos distinguidos por los liberales para lograr una mayor flexibilidad de la acción individual – precondiciones de la aparición de la ciudadanía moderna.

En este sentido, Semo afirma que "la actitud liberal (apertura al cambio y tolerancia) se había abierto paso entre las élites mexicanas desde mediados del siglo XVIII [y a] partir de 1794, aparecen los síntomas precursores del liberalismo como movimiento" ⁴⁷. Por lo que la aparición de las tendencias liberales manifestadas en las valoraciones de las élites hispanas muestra un puente de continuidad entre el proceso de racionalización del gobierno borbónico y el programa político mexicano.

La *política racional*, por ejemplo, fue la finalidad de ambos momentos. Y no para ahí, ya que cualquier gobierno puede jactarse de ello desde entonces para mostrarse como un gobierno capaz de llevar a buen término sus labores. Por lo que frecuentemente la transición a la modernidad está avalada por valores muy generales que transitan desde la lealtad hacia la eficiencia.

Esto resalta en una breve comparación entre los escritos de los primeros pobladores hispanos de América, hasta los discursos que promueven el mérito y la utilidad en el siglo XVIII. Por ejemplo, en la larga obra escrita por Bernal Díaz del Castillo, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, observamos recurrentemente el adjetivo de "esforzado" a aquél personaje que mostraba lealtad a la causa de la Corona. En los pasajes de ese libro se justifica cualquier acción

⁴⁵ Pietschmann, Horst. "Consideraciones en torno al protoliberalismo, Reformas Borbónicas y Revolución. La Nueva España en el último tercio del siglo XVIII" en *Revista Historia Mexicana*, El Colegio de México, México, Vol.41, No. 2, octubre-diciembre 1991.

⁴⁶ Cfr. *Ibid.*, p. 171.

⁴⁷ Semo, *op. cit.*, p. 240.

llevada a cabo por los conquistadores, incluso si ésta traía alguna desavenencia entre quienes llegaron al territorio continental y quienes permanecieron situados en las islas antillanas, siempre y cuando se hayan encaminado a generar beneficios para la Corona, manteniendo además la supremacía de las formas religiosas de esa época.

Por otro lado, en el siglo XVIII, la evidencia escrita (la cual se irá trabajando a lo largo de esta investigación) sugiere una valoración a la eficiencia política y económica. Esto también con referencia a la nación hispana, en donde resalta la utilidad de los vasallos para llevar al bienestar común. En este sentido, hacia la segunda mitad de ese siglo:

se empieza a sustituir el discurso "colonialista" por el concepto de formar un "cuerpo unido de nación" que debe aunar a España y a Hispanoamérica y que está basado en una colectividad de individuos liberados de los frenos del corporativismo tradicional... La meta de la política era claramente la formación de una nueva elite, fuera criolla o peninsular, que ascendiera por sus esfuerzos, propios e individuales⁴⁸

Aunque en ese tiempo se mantendrá de manera efectiva la lealtad al rey, el giro dado por el discurso eficientista muestra que esto ya no será suficiente. Por lo que los cambios en la legislación hispana estarán encaminados a una profesionalización del aparato burocrático y a un incremento de las actividades productivas en los territorios de la monarquía hispana.

La introducción de ambos elementos, el cuerpo unido de nación y el buen desempeño de los vasallos, aparecieron como ejes principales en la obra de Benito Jerónimo Feijoo –cuyos escritos fueron avalados oficialmente por Fernando VI en 1750.

Siguiendo el trabajo realizado por José Enrique Covarrubias, observamos que Feijoo ya concebía la necesidad de fortalecer la idea de una nación unificada –principalmente en lo legislativo. Nos dice que "debajo de un cuerpo civil, estamos unidos con la coyuntura de unas mismas leyes". Aunado a esto se encuentra la

⁴⁸ Pietschmann, Horst. "Discursos y reformas dieciochescas en el mundo ibérico" en *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006, p. 34.

necesidad de contar con individuos que realicen sus actividades de manera adecuada, por lo que "en concreto significa estar dispuesto a ejecutar lo mejor posible el propio oficio"⁴⁹.

En estas dos vertientes sobre las que insistió Feijoo, cuya obra comenzó a escribir la segunda década del siglo XVIII, observamos los temas que formaron parte de las reformas políticas que llevó a cabo el gobierno de la Corona a lo largo de aquella centuria. En las nuevas legislaciones observaremos la necesidad de administrar eficientemente al virreinato, lo que apunta a una mayor intervención (o control) de los territorios que antes no habían sido regulados por la metrópoli, por haber encargado a las autoridades locales garantizar su buen gobierno. Asimismo, considerando el elemento del desempeño individual, tenemos que dentro de la redacción de la legislación aparecen referencias recurrentes a la necesidad de que los encargados de la administración sean "*hombres*" con la capacidad de desempeñar los cargos a los que han sido asignados.

Estos dos elementos trazan los ejes fundamentales que permiten sentar las bases de un primer acercamiento liberal. Por un lado tenemos la pretendida unificación legislativa, en donde, si bien esto puede aparecer como una amenaza a las tradiciones locales, todos los programas liberales de los siglos XVIII y XIX, tendrán como máxima el respeto y la igualdad ante la ley. No obstante, hemos de tener presente que la legislación hispana continuó con una organización estamental. Lo que resalta aquí (y el trato a este tema intentará mostrarlo) es la insistencia de los funcionarios metropolitanos para garantizar la aplicación efectiva de los documentos legislativos. Evidentemente esto no es una condición que permita asegurar su cumplimiento, pero, al parecer, la falta de aplicación no había generado tanta inconformidad hasta entonces. Baste mencionar la famosa frase "acátese pero no se cumpla".

Por otro lado, el elemento que he optado por denominar meritocrático, es claramente un antecedente primordial para la aparición del liberalismo político. La referencia a un individuo que puede ejercer cualquier cargo por las capacidades y

⁴⁹ Covarrubias, José Enrique. En busca del hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo neomercantilista en México y Europa, 1748-1833, UNAM, México, 2005, p 23.

la trayectoria que lo avalan es un precedente claramente liberal. Siguiendo lo dicho por Tom Wicker, podemos definir, de acuerdo a las convicciones liberales que hasta ahora nos ocupan, que un liberal, de manera general es "el que cree en la libertad individual, en la igualdad y en el capitalismo, y que considera el mundo mercantil humano –donde una persona tiene éxito o fracasa debido a sus propios esfuerzos y a su propia capacidad– como el adecuado campo para lograrlo"⁵⁰. Por lo que insistir en que el *éxito* es proporcional al esfuerzo y a la capacidad nos presenta un esquema liberal moderno con el que estamos muy familiarizados.

Sin embargo, el discurso del mérito y las capacidades en los documentos hispanos del siglo XVIII también hizo su aparición dentro de la limitante de la organización estamental. Pero que, en el mismo caso de la igualdad ante la ley, nos sugiere un argumento que paulatinamente se fue popularizando o, en nuestros términos, socializando cada vez más dentro de grupos más amplios. Así, por ejemplo, en ese siglo "a fines de los años sesenta... el Conde de Aranda... Aboga... en favor de la idea de que, para toda clase de empleos en América, hay que nombrar personas idóneas sin tomar en cuenta para nada ni su origen racial ni su extracción social"⁵¹. Con esto observamos un juicio que, sin ser su objetivo primordial, propone un mecanismo de selección que desdibujaría los límites entre estamentos. Cosa que nos aproxima a la más clara ruptura con la que se relaciona el pensamiento liberal: la posibilidad de los ciudadanos a dedicarse a lo que ellos decidan sin hacer daño al resto y sin que la legislación se los prohíba.

En el debate sobre el liberalismo se pondría en tela de juicio si es que sería lícita una actividad que no dañe a los demás pero que esté fuera del marco de la ley. Sin embargo, el mismo espíritu liberal defiende que al no conllevar algún perjuicio al bien común, la legislación debería reformarse para aceptar esa actividad. Por tanto, el debate se centraría en los límites de ese *bien común*. Determinarlo, por supuesto, escapa a nuestras pretensiones. Por lo que nuestra labor se centra en esclarecer a qué estructuras sociales obedecen las definiciones

⁵⁰ Wicker, Tom. Introducción a Hartz, Louis, *La tradición liberal en los Estados Unidos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 9.

⁵¹ Pietschman, "Consideraciones...", p. 171.

que de él se han hecho en distintas épocas. O, en caso de que no se haya explicitado, determinar cuáles son los valores con los que se le relaciona.

Un tercer elemento, que es fundamental para ubicar el surgimiento del *protoliberalismo* es la independencia económica de los individuos. Tenemos que el derecho a la propiedad privada de los individuos está fuertemente vinculada a los valores liberales. Por lo que también observamos que en los escritos filosóficos de los liberales mexicanos del siglo XIX existe una insistente referencia a que los ciudadanos confiables serían aquellos que reconocen en el Estado la defensa de sus intereses, principalmente debido a que éste es el garante de su propiedad⁵².

Una vez más podríamos aducir a que la garantía de la propiedad no fue, por supuesto, puesta en duda antes del período que trataré. De hecho, la falta de garantía de ella es difícilmente cuestionable en cualquier Estado capitalista o mercantilista. Sin embargo, lo que encontramos es un discurso político que exalta la necesidad de incrementar la cantidad de individuos económicamente activos que estén motivados por realizar labores productivas. Por lo que se buscaba aumentar la estima de las actividades manufactureras y comerciales de los ciudadanos españoles. Y, como he indicado antes, es común encontrarse con la idea de que el enriquecimiento individual es una condición que conlleva la posibilidad de ejercer *la libertad*. Esto porque se asume de manera simple que la riqueza, en sí misma, desemboca forzosamente en la capacidad de la libre elección.

Éstos son algunos de los temas centrales que nos permiten establecer algunos precedentes bajo los cuales las ideas liberales pudieron afianzarse. Es preciso aclarar que estos ideales y las instituciones que los avalaron no surgieron abruptamente en el periodo en el que se centra este trabajo. A lo que apunto es más bien a que paulatinamente fue aumentando la inquietud por incorporar todos estos temas en los debates políticos de la época. Lo cual también llevó a innumerables controversias y desavenencias en la política novohispana. Ya que las políticas de finales del siglo XVIII generarían también fuertes resistencias.

⁵² Cfr. Chimal, *op. cit.*, pp. 102-104.

2.1 Perspectiva teórica de la liberación y la reacción en la Nueva España

Las reformas políticas de la segunda mitad del siglo XVIII en América Latina se han referido frecuentemente como parte de una *Ilustración católica*, término que sugiere una apertura de parte de la institución eclesiástica a los contenidos de la filosofía política y de la ciencia. Esto puede parecer un tanto contradictorio, pero no lo es si consideramos que muchos de los estudiosos de la Nueva España, que durante aquel tiempo consagraron su vida a la ciencia y a la filosofía, fueron religiosos. No obstante, en el siguiente siglo se arraigó la convicción de que la Iglesia era obstáculo para la conformación del Estado racional (como lo nombraría Max Weber⁵³) llevando a los defensores del liberalismo en México a insistir sobre la necesidad de la separación entre el gobierno y la institución eclesiástica, lo cual puede ser rastreado en los primeros escritos de José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala.

Sin embargo, el trato que los liberales dieron a la idea de la monarquía constitucional fue distinta. Si bien el liberalismo mexicano entendió la presencia de la Iglesia como una situación desfavorable para el gobierno constitucional, esta corriente no condenó la existencia de los gobiernos monárquicos. Lo cual nos habla de que el liberalismo mexicano no propuso siempre una postura democrática radical. De hecho, el mismo Mora pensaba que un gobierno monárquico no era forzosamente una forma de gobierno indeseable. Por esto, también expresó su admiración a la limitación de poderes en los gobiernos de la monarquía parlamentaria inglesa. Por tanto, debemos precisar que las propuestas del liberalismo mexicano no estuvieron totalmente basadas en un pronunciamiento contra todas las instituciones monárquicas.

Comúnmente nos apresuramos a afirmar que el liberalismo rompió tajantemente con las estructuras del *Antiguo Régimen*, sin embargo, dentro de sus propuestas se encontraban importantes tópicos que buscaban dar continuidad a la solución de problemas que también preocuparon a las monarquías católicas durante la época del despotismo ilustrado. Por lo que no tenemos que perder de

⁵³ Cfr. Weber, Max. *op. cit.*, pp.285-295.

vista que el intento de la Corona por reformar a las sociedades hispanas americanas correspondió a la percepción de las dificultades que enfrentaba un gobierno con tintes modernos y la necesidad de resolverlos por medio de una planificación racional. La cual, como veremos, estaba basada en la efectiva labor del fiscal y judicial. Y en tanto podemos vincular estos elementos con un perfil liberal, tenemos que el proceso del liberalismo (o *protoliberalismo*) es, con base en las características que sugieren su aparición durante el siglo XVIII y principios del XIX, un tanto difícil de captar de manera uniforme. A lo que deberíamos agregar que estas dificultades se incrementan todavía más con el problema que se desprende de la diferencia entre el liberalismo como corriente de pensamiento y como programa político; que si bien localizar esto históricamente escapa a nuestros objetivos fundamentales, es suficiente nombrarlo para dimensionar su amplitud.

Las contradicciones que ahora llaman nuestra atención son parte de un proceso histórico en donde se enfrentaron las formas sociales tradicionales y la búsqueda por implementar un conocimiento práctico que, en materia de gobierno, frecuentemente encontraron fuertes oposiciones. Por esto João Hansen señala, haciendo alusión al caso luso-brasileño, que

los usos de la expresión 'Ilustración católica' apuntan a la coexistencia de prácticas y principios excluyentes y contradictorios, como innovación y tradición, ateísmo y religión, empirismo y escolástica, libertad democrática y subordinación absolutista, sugiriendo la imposibilidad de definir unitariamente la cultura... o de estudiarla como una totalidad previa y positivamente dada⁵⁴

Hasen propone que es "mejor pensar en una simultaneidad contradictoria de los diferentes procesos políticos y culturales y en la particularidad de las respuestas contemporáneas de las cuestiones específicas de los mismos"⁵⁵. Por lo que no encontraremos en las reformas políticas americanas del siglo XVIII un

⁵⁴ Hansen, João. "Ilustração católica, pastoral árcade & civilização" en *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006, p. 488. La traducción es mía.

⁵⁵ *Ídem*.

representante que ejemplifique de manera pura la postura liberal. Y todavía menos un movimiento intelectual que se ajuste completamente a lo que concebimos abstractamente como liberal.

Por esto, en las deliberaciones sobre las reformas de gobierno en la época de los Borbones y en su intento de implementar el sistema de intendencias (parte sustancial de este trabajo) se presentaron posiciones contradictorias entre los distintos funcionarios de la Corona. A través de las manifestaciones de estos actores podemos observar diversas convicciones sobre la importancia de llevar a cabo modificaciones en la administración del gobierno, pero también opiniones sobre la importancia de mantener el orden social defendiendo las instituciones tradicionales.

Al respecto, Peer Schmidt ha destacado las características conservadoras de la sociedad novohispana. Este autor señala que los miembros de la Iglesia de las élites criollas fueron quienes se opusieron con mayor vigor a las reformas buscadas por la Corona⁵⁶. Señala que la élite de españoles americanos y el clero compartían una convicción conservadora debido a que ellos serían los más afectados por la política monárquica reformista⁵⁷. Por ejemplo, como veremos a lo largo de este trabajo, a los primeros se les limitaron algunos medios de enriquecimiento, como lo fue la abolición del sistema de repartimientos, y se intervino en corporaciones que tenían dominadas, como lo fueron los cabildos de las ciudades. Y, por otro lado, en el caso de la iglesia, encontraremos una serie de disposiciones gubernamentales que atacaron sus intereses. Razón por la que muchas de las políticas eran condenadas por el clero, denunciándolas como amenazas de la secularización.

⁵⁶ En esta cuestión Pietschmann ha manifestado reservas, ya que asegura que no es posible concluir tácitamente que los opositores hayan sido sólo los americanos, así como tampoco los peninsulares hayan estado siempre a favor de la transformación administrativa emprendida por los gobiernos borbónicos. Cfr. Pietschmann, Horst. "Justicia, discurso político y reformismo borbónico en la Nueva España" en Bellingeri, Marco. *Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX*, Otto editore, Turín, 2000, 17-28.

⁵⁷ Cfr. Schmidt Peer. "Contra la 'falsa filosofía': La Contra-Ilustración y la crítica al reformismo borbónico en la Nueva España" en *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006, pp. 231-247.

Estas manifestaciones conservadoras exigen que el periodo que abordamos no sea tratado como una época en donde el espíritu liberal haya arribado súbitamente para actuar sobre todas las prácticas de los actores sociales. De hecho, como observaremos, existieron regiones que por la distancia que las separaba de los centros urbanos difícilmente fueron afectadas por la empresa reformista. Por tanto, no podemos aducir que el impacto de las nuevas ideas ilustradas haya sido general ni uniforme. Es de hecho un periodo que, como es *normal*⁵⁸ en todas las sociedades, existieron múltiples reservas, con respecto al cambio, que se evidenciaron por el fuerte espíritu conservador de la población novohispana.

A esto debo agregar que la distinción puntual entre las facetas del conservadurismo no se encuentra en el ensayo de Schmidt, por lo que cabe aclararlas ahora. Este autor considera que el origen del pensamiento conservador no data de la década de los treinta del siglo XIX, retando lo que ha asegurado Alfonso Noriega⁵⁹ –y agregaría, con respecto al mismo tema, el trabajo de William Fowler y Humberto Morales⁶⁰. Schmidt nos ha mostrado que el conservadurismo en México se manifestó de manera clara y enfática durante la segunda mitad del siglo XVIII haciendo frente al espíritu reformista ilustrado de la época. No obstante, es indispensable matizar el trato que Noriega, Fowler y Morales, dan al tema. En efecto, las evidencias del pensamiento que buscaba preservar los parámetros sociales se presentaron insistentemente en los años que refiere Schmidt, sin embargo, podemos encontrar que las fuerzas de la conservación han aparecido en cualquier tiempo. Su presencia en esa época no es propiamente una evidencia de que el conservadurismo, como grupo o programa político, haya tenido su origen en el siglo XVIII. De hecho, siguiendo a Robert Nisbet, lo *normal* en las sociedades es la búsqueda de la permanencia de las maneras en que se organizan. Por tanto, es

⁵⁸ Con *normal* me refiero a aquello que aparece en todas las sociedades Cfr. Durkheim, Émile. *Las reglas del método sociológico*, Editorial Altaya, Barcelona, 1994, pp. 127-131. La cuestión sobre la preeminencia de la permanencia social la podemos encontrar en la obra de Robert Nisbet, quien consideró que a pesar de la estima del cambio social que presumen las sociedades modernas, siempre existen mejores condiciones para favorecer la conservación. Cfr. Nisbet, Robert. *Cambio social e historia*, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1976.

⁵⁹ Noriega, Alfonso. *El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano*, UNAM, México, 1993.

⁶⁰ Fowler, William y Humberto Morales. *El conservadurismo mexicano en el siglo XIX*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 1999.

muy probable que podamos encontrar evidencia de distintos tipos de conservadurismo (en tanto espíritu conservador) durante todo el periodo colonial novohispano –por no decir que en cualquier otra sociedad. Además, el hecho de encontrar dicha evidencia tampoco significaría que la más antigua haya sido la que dio origen al conservadurismo en México.

Es necesario, para evitar interpretaciones difusas, aclarar que esos historiadores ubicaron el conservadurismo mexicano en la década de 1830, debido a que en ella se definió un grupo político que comenzaba a nombrarse como *conservador* (aunque fue identificado, por sus mismos integrantes, como *hombres de bien* o *serviles*) que buscó justificar su postura a través de la defensa de ciertas instituciones tradicionales durante los primeros años del México independiente. Y todavía más importante es aclarar que el término *conservador* no se utilizaría sino hasta dicha década, así como Noriega, Fowler y Morales señalan.

Aquí observamos para el caso del conservadurismo, de manera similar a como he señalado para el liberalismo, dos facetas distintas. En primer lugar un espíritu conservador que argumenta a favor de la preservación⁶¹ y, en otro nivel, la conformación de un grupo político, el cual se desprendió, de hecho, del grupo liberal en los primeros años independientes, el cual manifestó sus intereses a través de un programa de gobierno. Por esto, debemos tener presente las diferentes dimensiones del liberalismo y el conservadurismo al realizar nuestro análisis sociológico–histórico.

Además, es importante rescatar el apunte que Schmidt refiere en su crítica a los historiadores del conservadurismo mexicano, porque evidencia que la inquietud conservadora aparece de manera exaltada en la segunda mitad del siglo XVIII. En ese mismo sentido, para el caso del liberalismo, observamos un

⁶¹ El trato que podemos darle al conservadurismo como corriente de pensamiento difiere un tanto del liberalismo. Esto porque no existe una tipificación de autores que se puedan definir de manera genérica con el conservadurismo, como de hecho sí lo hacemos con el liberalismo. Y si bien muchos exponentes de la ilustración, en mayor o menor medida, incluyeron en sus propuestas la preservación de cierto tipo de organización social –como es el caso de Hobbes– difícilmente el término conservadurismo se ajusta a una corriente de pensamiento particular. Lo más aproximado, quizás, sería el llamando neoconservadurismo que explica su enfoque teórico a través de la permanencia social. Sin embargo, esta corriente no define como su objetivo principal realizar una defensa ético-filosófica de la conservación, como sí ocurre en muchos casos con la liberalización en los teóricos clásicos del liberalismo. Cfr. Nisbet, Robert. *Conservadurismo*, Alianza, Madrid, 1995.

pensamiento social que sentó las bases para la formación de las convicciones liberales en un primer momento, y de un programa político liberal después de definida la facción política a la que relacionamos con el llamado *liberalismo mexicano*.

Una reflexión que ponga en tela de juicio las tendencias liberales y las manifestaciones conservadoras nos mostrará que éstas son dos caras de la misma moneda. La aparición de una postura reaccionaria a las reformas del siglo XVIII evidencian que los cambios impulsados por la monarquía fueron percibidos como una amenaza real para ciertos grupos de la sociedad novohispana, por lo que esto nos habla de la seriedad que se le dio a las acciones reformistas de los Borbones y a la posibilidad, al menos en el papel, de incidir sobre la realidad social del virreinato. Como veremos, hasta antes del despotismo ilustrado, ante la inaplicabilidad de una ley, se mandaría su acato, y se reservaría el cumplimiento. Pero ante la puesta en marcha de una planificación tan ambiciosa no se hicieron esperar las muestras de inconformidad ante ella.

Tenemos entonces que la magnitud de la reacción estuvo en correspondencia con la prefiguración del impacto de las nuevas ideas ilustradas. La vehemente defensa de la tradición expone, al mismo tiempo, el temor a los nuevos parámetros del *racionalismo*; el cual preparó el terreno para el surgimiento de la justificación de la corriente política liberal. De manera tal que durante este período se socializaron muchas de las ideas de la ilustración. Cada vez más letrados estuvieron familiarizados con los discursos que exponían las ventajas de la llamada *razón*. Y aunque hemos de atender las reservas de Schmidt ⁶², observamos que en muchos escritos de la época las ideas básicas de lo que a la postre sería conocido como el pensamiento liberal lograron filtrar. Así, encontramos que

se ha juzgado el "reformismo borbónico"... como una etapa imprescindible y formativa del futuro liberalismo, dado que los políticos de ese momento habían insistido en el

⁶² Schmidt, *op. cit.*, pp. 232-234.

talento del individuo, la propiedad privada, la utilidad pública y en la idea –si bien todavía con conceptos premodernos– de cierto tipo de ciudadanía⁶³

Por tanto entendamos que esta etapa es fundamental para analizar el rumbo preciso que tomó el proceso del liberalismo, principalmente en la definición de sus sujetos políticos y jurídicos que son los ciudadanos.

2.2 De vecinos a ciudadanos

Hasta este punto hemos insistido en que la distinción de las características que nos muestran el perfil de un *protoliberalismo* novohispano nos permiten concebir las particularidades de lo que ahora podemos vincular al proceso del liberalismo. Ahora bien, de éstas también se desprende la prefiguración de la *ciudadanía* debido a que, al igual que el liberalismo, tiene al individuo como la figura central en la conformación de las sociedades modernas o, para ser más precisos, de los Estados constitucionalistas modernos.

En el mismo sentido del liberalismo observaremos que existieron prácticas vinculadas a la ciudadanía moderna desde antes que el concepto de *ciudadano* apareciera en las primeras constituciones. Hacia el siglo XVIII, el lenguaje se torna más individualizante "se habla de los nacionales y se refiere constantemente a los individuos que componen las entidades, los servicios que se les presta, etc."⁶⁴. Al respecto, Fernando Escalante Gonzálbo nos dice que en la idea de *ciudadanía* se presupone la convivencia de individuos dentro de un modelo cívico, el cual tiene por objeto integrar un conjunto de normas que garanticen la convivencia pacífica de todos los que integran el Estado. Además, señala que el origen de este individualismo es liberal. "El individuo como valor, como idea, es el producto de una configuración histórica muy peculiar, que depende del desarrollo del mercado y de las soberanías"⁶⁵. En este sentido, si bien la definición de la ciudadanía aparece claramente en el Estado constitucional independiente, podemos adelantar

⁶³ *Ibíd.*, p. 232.

⁶⁴ Cfr. Pietschmann, *Justicia, discurso político y reformismo borbónico...*, p. 33.

⁶⁵ Escalante Gonzálbo, Fernando. *Ciudadanos Imaginarios*, El Colegio de México, México, 2001, p. 37.

que la idea de soberanía, o más adecuadamente, el "cuerpo unido de nación" y compuesto por individuos (como lo maneja Pietschmann), son nociones que no están forzosamente determinadas por la aparición de Estados nacionales independientes. Para este caso, sabemos que existieron discursos políticos que dieron forma, y por tanto precedieron, a la consolidación de los Estados constitucionalistas americanos. Es por esta razón que debemos atender de dónde se origina el reconocimiento de sujetos políticos y jurídicos, lo que nos lleva a revisar brevemente la noción de *vecino*, como precedente directo de la concepción de la ciudadanía moderna.

El término vecino, siguiendo lo expuesto por Tamar Herzog, designaba a la "gente que portaba ciertos derechos así como el cumplimiento de ciertas obligaciones. Lo cual fue aplicado en todo el reino de Castilla"⁶⁶. Esta definición de quienes fueron aceptados como vecinos se extendió a todos los reinos hispanos hacia los siglos XVII y XVIII, y servía para distinguir a la comunidad española, "incluidos los naturales de todos los reinos, primero en América y, posteriormente, en España misma"⁶⁷. Con base en esta definición observamos que comúnmente se ha tratado el tema de la vecindad como la expresión de una ciudadanía que precede a los Estados constitucionalistas. Bajo los mismos términos podríamos argumentar que el ciudadano definido en las constituciones modernas también fue dotado de derechos y forzado a cumplir con deberes dispuestos la legislación.

Sin embargo, la emergencia del concepto de *ciudadano* no se remite a un capricho lingüístico de la época. El uso de un nuevo vocablo apunta a cambios concretos en las prácticas que éste enunciaba. Por esto me parece indispensable precisar la dimensión que se pierde cuando a la noción de *vecindad* se le da el trato de ciudadanía. Una de las principales confusiones podría presentarse con la traducción de los conceptos desde la lengua inglesa, por lo que hemos de ser cuidadosos con esto. Herzog, quien ha realizado uno de los trabajos más relevantes sobre los precedentes de las prácticas ciudadanas modernas en el mundo hispano, denomina a la vecindad como *early modern citizenship*, o

⁶⁶ Herzog, Tamar. *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, New Haven & London, 2003, p. 1. La traducción es mía.

⁶⁷ *Ídem*.

ciudadanía de la modernidad temprana, la cual se gestó dentro de las dinámicas del *Antiguo Régimen*. No obstante, la noción de *ciudadanía* en el mundo hispánico, si bien tuvo como condición previa inmediata a las prácticas de la vecindad, involucró un cambio social en sus contenidos con respecto a ésta. La imprecisión se genera con la traducción de los términos. Por supuesto no se podría hacer uso de un término como el de *neighborhood* para vincular la vecindad, ya que, en efecto, ésta última implicó, para los hispanos, el ejercicio de la dupla *prerrogativas–deber* dentro del cuerpo social. Mientras que la palabra anglosajona generalmente se interpretaría como una referencia a un espacio o zona. Pero principalmente, su uso no contribuiría algo sustancial o adicional al tema. Por lo que el término *early modern citizenship* se ajusta suficientemente a la noción de vecindad, debido a que da cuenta de la existencia de sus implicaciones. Empero, resulta indispensable precisar esta cuestión.

Por otro lado, para distinguir el cambio social que supuso el abandono de la palabra *vecino* en favor de la de *ciudadano* resulta inútil definir de manera simple cada uno de estos términos, ya que estas definiciones serían bastante aproximadas y no darían cuenta de la transformación que aquí interesa. Razón por la cual es necesario enunciar aquellas características generales que pueden iluminar la cuestión.

Ambos términos subyace una lógica de inclusión/exclusión, la cual denota quién forma parte de una comunidad política definida. No obstante, siguiendo a Herzog, la ubicación puntual de qué personajes fueron considerados ciudadanos legalmente poco o nada aporta al entendimiento de la ciudadanía si no contamos con otros datos sobre ellos. En contraste, es preciso centrarse en el ejercicio y el respeto de los derechos y en la posibilidad de hacer cumplir obligaciones requeridas por la comunidad de la que forman parte los sujetos. Sin embargo, si bien el vecino y el ciudadano fueron integrantes de dos grandes y extensas comunidades (los Reinos de la Monarquía hispana, por un lado, o el Estado Constitucional, por otro) la manera en que se determinaron sus derechos y obligaciones fue distinta.

Para el caso de la *vecindad* tenemos que durante los siglos diecisiete y dieciocho los pertenecientes a alguna localidad hispana eran admitidos como parte de ella en función del compromiso asumido con la misma. En este sentido, observamos que “la mayoría de la gente pudo actuar como vecinos⁶⁸ o como naturales (de los reinos hispanos) y se les permitió hacerlo sin que su estatus fuese cuestionado o afirmado”, es decir, la pertenencia a la comunidad política no tenía carácter nominal, sino que la determinaba una participación activa en ella. No obstante, esta situación no se presentó de manera homogénea en todos los dominios hispanos. A diferencia del proceso de asimilación que había persistido en la península, en donde el vecino debía primero incorporarse a la vida de la localidad obedeciendo sus mandatos, para entonces ser reconocido como vecino, la volatilidad y contingencia de las recién sancionadas localidades americanas provocaron que bastara con la promesa del cumplimiento de deberes y el pago de las obligaciones fiscales para ser considerado oficialmente como parte de la comunidad. No obstante esta diferencia, el compromiso adquirido con la localidad estuvo presente en la idea de *vecindad*. La figuración de ésta “como un lazo entre la gente que formaba parte de la misma comunidad, persistió”⁶⁹. Esto nos muestra que el reconocimiento de los vecinos pasaba por el filtro de las localidades. Además la aceptación, en el caso americano, fue un procedimiento bastante laxo, ya que el arribo de extranjeros provenientes de los reinos católicos orilló a facilitar su incorporación en las ciudades.

Esta manera de entender la *vecindad* muestra un esquema bastante práctico, ya que supone, para el caso de un extranjero, un proceso de integración en donde se asimilaban necesidades y valores fundamentales, y para el caso de los nacidos al interior, la socialización temprana de los mismos. Lo cual nos da a entender que, a pesar de las limitaciones nominales sobre la *vecindad* para indios y castizos en la Nueva España, cada uno de los súbditos de la Corona pertenecía, de hecho, a una comunidad política y estaban regidos por un código normativo local

⁶⁸ Herzog escribe aquí “citizens”.

⁶⁹ Herzog, Tamar. “Early Modern Spanish Citizenship: Inclusion and Exclusion in the Old and the New World,” in John Smolenski and Thomas J. Humphrey eds., *New World Orders. Violence, Sanction, and Authority in the Colonial Americas*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2005, p. 214. La traducción es mía.

particular, a la vez también de la legislación general de Indias (que en 1680 se recopiló en una sola colección), en donde se encontraban derechos y obligaciones precisos. Por ejemplo, para el caso de los indios, éstos tenían el privilegio de no ser imputables por la inquisición, pero también debían pagar tributos –por citar sólo dos aspectos. Además, a pesar de ser considerados menores de edad, eran participantes activos en sus propios pueblos o Repúblicas de Indios, y a su vez súbditos de la Corona. Cumpliendo, en ambas facetas, con deberes, pero siendo también receptores de prerrogativas. Así, aunque en el caso de los indios tampoco existió un reconocimiento nominal, se presentaron prácticas concretas que indicaban el ejercicio que exige la pertenencia a la comunidad política. Ésta fue la razón por la que el uso de la palabra *vecino*, que en un principio se empleaba para designar exclusivamente a los pertenecientes al estamento de españoles, se extendió gradualmente a los indios⁷⁰.

El reconocimiento de los avecindados implicaba de antemano la dependencia a la figura de un ente colectivo, en este caso la República de Indios, la cual formaba parte de los pueblos vasallos del monarca y, por esto, su inclusión dentro de la comunidad de la monarquía compuesta. Por lo que esta condición, tanto en el caso de los indios como en el de españoles, estaba dada por la pertenencia a una localidad en primera instancia. Lo cual corresponde al “antiguo uso corporativo de la palabra nación”⁷¹, que antepone la existencia del cuerpo social y de sus designios a la identificación de sus miembros. Es por esto que el reconocimiento de la vecindad impuso un proceso de asimilación a los externos, para así garantizar que la comunidad sea persistente y se mantenga como rectora de sus vecinos.

Ahora bien, la diferencia entre la vecindad y la ciudadanía debe ser claramente enunciada, ya que apunta a una transformación del esquema que he referido. Sin embargo, antes de dar paso a las consideraciones sobre la ciudadanía debemos incorporar otra precisión. Si bien hemos distinguido y relacionado la vecindad del

⁷⁰ Cfr. Herzog. *Defining Nations...*, p. 8.

⁷¹ Cfr. Pietschmann, Horst. “Nación e individuo en los debates políticos de la época preindependiente en el imperio español” en Dobado González, Rafael; Álvarez Cuartero, Izaskun; Sánchez Gómez, Julio (coord.). *Visiones y revisiones de la independencia americana*, III Coloquio Internacional de Historia de América “La Independencia de América”, Salamanca, noviembre 2001, Salamanca 2003, p. 66.

Antiguo Régimen y la ciudadanía de los *Estados Constitucionalistas*, es momento de enfatizar que el cambio de régimen de gobierno no provocó de manera automática la mudanza de uno a otro término. Observamos, pues, que hacia la segunda mitad del siglo XVIII, como lo revisaremos posteriormente, el vocablo *ciudadano* apareció cada vez más dentro del lenguaje político. Éste se encontró ya en las obras de Benito Jerónimo Feijoo y de Pedro Rodríguez de Campomanes, y de hecho, es posible localizarlo en diversos párrafos de las palabras pronunciadas por Carlos III en la Ordenanza de Intendentes de 1786 –para remitirnos sólo al caso hispano. La intención de la palabra incluía, por supuesto, la previa condición de *vecino*, pero además aludía a aquellos varones habitantes de las ciudades, quienes estaban familiarizados con una vida *civilizada*⁷², gozando de una buena reputación.

La ciudadanía así referida es un buen punto de partida, pero no encarna todos los aspectos que ya en esa época comienzan a perfilarse hacia la posterior definición del ciudadano. Por lo que es necesario regresar a nuestra primera distinción. Para aclarar las implicaciones de la ciudadanía, en contraste con las ya descritas de vecindad, encontramos que ella supone la existencia de individuos que se asocian para crear un cuerpo político. A diferencia de la asimilación de normas en el proceso del reconocimiento de vecindad, el ciudadano es un individuo que elige su incorporación, además de ser facultado para intervenir activamente dentro de la conformación y transformación de la administración del gobierno y su legislación.

Entonces, el reconocimiento de la ciudadanía no se remite a la socialización dentro de un vecindario que a su vez forma parte de los reinos de la Corona – como es el caso de los avecindados, sino que el individuo es reconocido como ciudadano en tanto cuenta con capacidades que garantizan el buen desempeño del gobierno gracias a las aportaciones *valiosas* de quienes ejercen eficazmente su labor. De forma tal que la identidad del individuo como *ciudadano* está dada por su relación directa con el Estado, sin que intervenga en ello una comunidad menor

⁷² No trataré aquí la relación entre ciudadanía y civilización, cosa que he realizado en mi anterior investigación. Cfr. Chimal, E. Abraham, *op. cit.*, pp. 47-54.

que pueda ser concretamente delimitada e identificada. Situación que tiene sentido sólo a través de su abstracción.

Regresando al momento en que comenzó a popularizarse el término, observamos que este perfil de los nuevos valores de la ciudadanía surgió claramente hacia la década de los sesenta del siglo dieciocho, dentro de la política promovida por Campomanes para impulsar la *educación popular* por medio de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Al respecto Pietschmann indica que en este tiempo

se ve ya de forma indirecta, al estudiar el programa político, su orientación popular-individualista, sus afanes de movilización económica de amplias capas de la población, de convertir las élites en educadoras de las clases populares al animarlas a organizarse en las sociedades mencionadas y de suprimir monopolios y frenos corporativos⁷³. Detrás de esta política se esconde realmente un nuevo concepto de sociedad basado en la utilidad del individuo, considerado ya como ciudadano, que suprime la justificación tradicional de la sociedad estamental⁷⁴

Esta descripción nos presenta una guía temática para comprender los cimientos de la idea moderna de ciudadanía.

Primero, el ciudadano se proyecta como un individuo responsable, no sólo de su vida, sino de su Estado. Por lo que también estaba obligado a educar a aquellos que desconocen las formas de la vida virtuosa. Por tanto, el ciudadano es una figura de autoridad, ya que está instruido en todo aquello que resulta benéfico para sí y para su nación. Así, la ciudadanía conllevó la idea del súbdito ideal, que guardaba distancia con el común de vecinos.

Otra cuestión es que quien se ostenta como ciudadano es un individuo considerado útil al Estado porque le genera riqueza e instruye a las clases populares para hacer lo mismo. Por lo que su condición implica forzosamente las actividades que fueron consideradas indispensables para la vida productiva de la economía de mercado, razón por la cual no resulta extraño que los trazos

⁷³ Lo cual es uno de los temas abordados en el siguiente capítulo.

⁷⁴ Pietschmann. "Nación e individuo...", p. 68.

generales de la noción de *ciudadanía* se ajusten bastante bien a la definición que Max Weber concibió para describir a la clase burguesa, al señalar que:

Bajo la denominación de burguesía, en el sentido de la historia social, se comprenden tres acepciones fundamentales, distintas una de otra... de una parte, determinadas categorías de clases sociales, caracterizadas por unos ciertos intereses económicos... En sentido *político*, la “burguesía” abarca todos los ciudadanos del Estado, como titulares de determinados derechos políticos. Por último, comprendemos bajo la denominación de burguesía, en sentido *estamental*, aquellas capas sociales a las que... los que están fuera de ella, consideran como “gentes (*sic*) de posición y cultura”... [es decir] todas las personalidades que poseen una determinada formación académica y, a la vez, un nivel de vida más elevado y un prestigio social.⁷⁵

Por último tenemos que es ese mismo prestigio social el que faculta a los ciudadanos para tomar parte en los asuntos de política, lo que se considera tanto un privilegio (un derecho) como una obligación. Esto lo posiciona claramente como una figura de autoridad, debido a que es capaz de trazar el camino a seguirse en la administración de los gobiernos. Y de aquí partirá la justificación para que sólo los ciudadanos cuenten con plenitud de derechos políticos y jurídicos⁷⁶.

Sin embargo, como observaremos con más detalle más adelante, durante el último tercio del siglo XVIII, en la Ciudad de México existió una tensión que precede a lo dicho por Weber. La disputa entre los ciudadanos que poseían los medios de producción y la llamada “gente pública” se concentró en la determinación de quiénes debían ocupar cargos dentro del gobierno. Aquí podemos anticiparnos a mencionar que en los primeros años independientes en México la balanza se inclinaría definitivamente en favor de los primeros, no de manera tajante, pero sí en relación a la concepción del ciudadano ideal. Mas esta tendencia no puede ser entendida sin contextualizar en su justa dimensión las prácticas precursoras de la ciudadanía del México constitucionalista. Razón por la cual resulta imperativo atender el proceso histórico en el que éstas se gestaron

⁷⁵ Weber, Max. *Historia Económica General*, p. 267.

⁷⁶ Cfr. Chimal, *op. cit.*, pp. 184-186.

durante la época virreinal, ya que no es posible entender la emergencia del concepto moderno de *ciudadano*, al menos no en cuanto a lo aquí descrito, con independencia de los cambios impulsados por el gobierno hispánico Borbón, en correspondencia, por supuesto, con las ideas que en aquel entonces dominaban en el mundo occidental.

Capítulo 3. Rasgos modernos en el Estado novohispano a finales del siglo XVIII

Los precedentes de la concepción de la ciudadanía ideal consolidada durante el siglo XIX deben ser analizados en relación a las prácticas sociales vinculadas a los habitantes de los Estados modernos. Para el caso mexicano, que coincide también con muchos de los países occidentales, el ciudadano con plenas facultades políticas y jurídicas debía, básicamente, demostrar propiedad, ser letrado, ser varón⁷⁷ mayor de edad y tener un modo honesto de vivir. Sin embargo, para aspirar a entender por qué fueron estas características las que se consideraron valiosas en nuestro país durante la primera etapa independiente se deben revisar los procesos sociales que se presentaron previamente en la Nueva España. Ésta es la única manera de visualizar el sentido de las disposiciones políticas del México decimonónico, en donde la justa representación jurídica y la participación política de los habitantes nacionales fueron reservadas para un sector específico de la población.⁷⁸

No obstante, *lo político* trasciende la mera participación en la administración del Estado. Se presenta en un escenario común de los participantes, dentro del cual se ponen en juego un conjunto de intereses y motivaciones que son guiados por valores concretos de la sociedad a la que pertenecen los actores sociales. A su vez, estos valores están definidos en la misma dinámica con la que se organizan las sociedades. No sólo a partir del plano legal formal, ya que éste no abarca ni agota las relaciones de sus sujetos de derecho, sino también por la multiplicidad de instituciones (en tanto acuerdos) que persisten y se transforman. Por lo que, para comprender los parámetros con los que se definió la figura del ciudadano en

⁷⁷ El proyecto de la ciudadanía moderna excluyó al género femenino. Si bien durante el siglo XIX en México encontramos el nombre de mujeres que lograron incidir directamente en la vida pública, éstas fueron contadas excepciones. No obstante, el trabajo que presento ahora no está enfocado en encontrar antecedentes de esta exclusión dentro de los discursos políticos que, en efecto, fueron redactados por varones y para varones. Lo que de antemano podemos señalar es que la exclusión por género no presentó un debate concreto durante la época en que me enfoco o, al menos, no existió un grupo claramente definido como el que de hecho existió en Francia encabezado por Claire Lacombe y Pauline Leon. Cfr. Chimal, *op. cit.*, pp. 41-43.

⁷⁸ Cfr. *Ibíd.*, pp. 161-194.

México durante el siglo XIX, es necesario atender el contexto en el que la élite novohispana valoró la participación de sus integrantes en la vida social.

Esto me lleva a atender el proceso histórico del gobierno virreinal en el siglo XVIII. Por tanto, el presente capítulo tiene dos objetivos fundamentales. El primero es describir un panorama histórico general que permita situar el momento en que se encontraba la élite de la Nueva España de acuerdo a los intereses reformistas del gobierno de los borbones. Esto nos fuerza a dilucidar un lugar común entre los múltiples choques de intereses que se presentaron en aquél siglo. Mas no pretendo hacer una minuciosa revisión de este periodo, ya que el presente trabajo no es una nueva aportación de hallazgos en materia histórica. La intención es incorporar la información necesaria que permita una interpretación sociológica de lo sucedido en esta época.

En segundo lugar, este capítulo está pensado para establecer una serie de características, que emergieron en unos casos y que persistieron en otros, dentro del régimen monárquico español y en el contexto novohispano en particular, que se pueden vincular al proceso de formación del Estado moderno. Porque son éstas las que nos dan pauta para distinguir ese *protoliberalismo* que Pietschmann ha explicado. Sin embargo, con esto no refiero a que todos los Estados modernos hayan seguido los mismos parámetros de los preceptos liberales. Evidentemente muchos de ellos no se construyeron a partir de modelos democráticos de ciudadanía. En esta distinción, debo aclarar de antemano que en el caso particular de México este fue el ideal que posteriormente persistió, aunque haya sido como base de la justificación del proyecto nacional a favor de una clase social en concreto⁷⁹.

Ahora bien, esta particular búsqueda de modernidad debe ser revisada a la luz de los intereses concretos de la Corona hispana. De cuáles fueron los propósitos de sus reformas, y la manera en que éstas fueron recibidas en la Nueva España. Tomo como punto de partida la idea de David Brading acerca de que "modernizarse, en el contexto colonial, quería decir mayores impuestos y militarización, e implicaba lo que solo podemos definir como una revolución en el

⁷⁹ Cfr. *Ibíd.*, pp. 184-186.

gobierno"⁸⁰. Si bien es indispensable atender las palabras de este autor, podemos afirmar que, atendiendo a una abundante evidencia, estos hechos no fueron los únicos relacionados con la formación de un Estado con perfil moderno. Observamos diversos rasgos que son muestra de esta transición, como lo fueron la socialización de valores económicos específicos, el crecimiento de un aparato burocrático pretendidamente eficiente, la homogeneización administrativa, la imaginación de una división territorial uniforme y, lo que resulta prioritario para este trabajo, el comienzo de la apertura de una mayor participación civil en el gobierno estatal⁸¹ –lo cual será tratado más ampliamente en el siguiente capítulo.

Por otro lado, es preciso entender que las reformas que tuvieron lugar en la América española fueron aplicadas desde arriba y con una lógica externa a ella. Es decir, que los cambios en la administración del virreinato generalmente correspondieron a las necesidades de la metrópoli para mantenerse, y no precisamente a la búsqueda del bienestar de los americanos, aún cuando repetidamente se argumentaba esto en el discurso de la Corona. Por lo que para ésta su "éxito dependía de la transformación económica y de una reordenación profunda de las capas de la sociedad colonial"⁸².

En este sentido, la primera parte de este capítulo consiste en una breve revisión del proceso económico de la metrópoli y de la Nueva España, en donde busco describir la diferencia sustancial en la dinámica de las economías de ambos territorios. Abordaré, por un lado, los aspectos que preocupaban a la administración peninsular y, por otro, los intereses concretos de la élite mercantilista novohispana. Sólo después de conocer a grandes rasgos este proceso podemos figurarnos lo que implicaba la reforma del gobierno hispano. Posteriormente, a partir de los antecedentes, estaremos en condiciones para revisar la incompatibilidad de algunas de las ideas que planteó el proyecto político

⁸⁰ Brading, David. *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 48.

⁸¹ Esta apertura no es condición *sine qua non* de la modernidad, ya que en el planteamiento de *Múltiples Modernidades* de Taylor se observa el reconocimiento de sociedades modernas que no tuvieron que seguir estos pasos específicos. Pero ciertamente es una característica moderna que se presentó, al menos en el papel, en los países *occidentalizados*.

⁸² Brading, *Ídem*.

de los borbones en la segunda mitad del siglo XVIII en relación a la realidad social novohispana⁸³.

3.1 Precedentes de la reforma administrativa novohispana

Los escritos ilustrados en España tuvieron como principal preocupación los problemas económicos que enfrentaba la Corona. Y si bien esta inquietud se encontraba bastante difundida y generalizada para el siglo XVIII, este tema central sobre la necesidad de realizar reformas económicas para hacer frente a las malas finanzas, abordado por letrados hispanos, se remonta al siglo XVII.

En los años de 1600 se presentaron las inevitables consecuencias de la excesiva riqueza en metálico de la metrópoli. A partir de la lógica económica de ese siglo podemos entender las diferencias financieras abismales existentes entre la península y la Nueva España. En Castilla se presentó una decreciente vida económica debido a que la percepción de plata permitió a sus habitantes comprar las mercancías producidas en otros lugares, lo que llevó a esa provincia a convertirse en un reino meramente importador. En contraste, la Nueva España, en tanto explotadora de las minas de los minerales, tuvo un crecimiento importante en sus actividades económicas durante el siglo XVII. Desde el Decreto Real que ordenó el cese de intercambios comerciales de plata entre la Nueva España y el virreinato del Perú, se incrementaron las expediciones novohispanas que buscaban localizar minas de metales (principalmente de plata) para denunciarlas ante las autoridades monárquicas. Por esto, la exploración de yacimientos durante el siglo XVII se incrementó súbitamente por la necesidad interna de satisfacer la demanda de metales, toda vez que había sido negada la entrada del proveniente de las minas del Potosí, supeditadas al virreinato del Perú.

⁸³ El hablar de una *realidad social novohispana* resulta frecuentemente impreciso, debido a que los territorios que estuvieron bajo jurisdicción del virreinato se organizaban bajo una multiplicidad de formas y tradiciones. A través de los diversos trabajos de estudios regionales podemos percatarnos de la incongruencia que presentan este tipo de generalizaciones. Sin embargo, con esto hago alusión a que el nuevo modelo económico que se quería instaurar desde el gobierno monárquico era incompatible con muchas de las tradiciones productivas de los pueblos que habitaban en el territorio virreinal. Situación que, como observaremos, resultó discrepante aún en relación a las prácticas en los grandes centros urbanos.

Estos hechos llevaron a un incremento descomunal en las actividades productivas del virreinato novohispano hacia la segunda mitad de aquél siglo. Principalmente porque las múltiples exploraciones revelaron que existían mucho más yacimientos minerales de lo que se había pensado. Además, quienes explotaron los complejos mineros de plata se percataron que éstos eran mucho más ricos de lo que sus trabajadores creían (como en los casos de Taxco, Real del Monte–Pachuca y Zacatecas, en especial la mina de Sombrerete).

Sin embargo, el incremento de la actividad económica no se debió a la plata en sí misma, sino a la diversidad de actividades periféricas a la explotación minera y al auge comercial desprendido de las labores del abasto. Así, el crecimiento de la explotación minera conllevó también una elevación de la producción de materiales y herramientas⁸⁴ necesarias para esta industria. Y por otro lado, se debieron proveer bienes para los habitantes de los complejos mineros, los cuales, de acuerdo al aumento de trabajadores y su consecuente división del trabajo, oscilaron desde aquellos de primera necesidad hasta artículos suntuosos de diversa índole⁸⁵. De esta manera en aquél periodo se puso en marcha una amplia dinámica productiva y comercial (tomando en cuenta que esto llevó también a la apertura de nuevas rutas de arrieros) que robusteció las bases de la vida económica en la Nueva España⁸⁶.

A partir de esto podemos dar cuenta de la diferencia sustancial entre la flácida actividad económica en la península (donde sólo existía una insistencia en mantener los sembradíos tradicionales, como el olivo, las alcaparras y la vid, y que además no podían ser cultivados en los reinos americanos) y el apogeo de la economía novohispana con la multiplicidad de actividades emergentes en el siglo XVII. De este contexto se desprende el surgimiento de manifestaciones de

⁸⁴ Cabe mencionar que las herramientas de hierro y acero generalmente eran importadas de la península, ya que los hispanos tenían una gran tradición en el manejo de estos materiales.

⁸⁵ Cfr. García González, Francisco. "Vida cotidiana y cultura material en Zacatecas Colonial" en Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Historia de la vida cotidiana en México III. El siglo XVIII: entre tradición y cambio, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México, 2005, pp. 53-57.

⁸⁶ Cfr. Huerta, María Teresa. "Redes mercantiles en torno a la plata en el norte minero novohispano. Segunda mitad del siglo XVII" en Ibarra, Antonio y Guillermina del Valle Pavón (coord.) Redes sociales e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a XIX, Facultad de Economía UNAM, Instituto Mora, México, 2007, pp. 85-116.

preocupación ante los problemas financieros que enfrentaba la península. Cosa que, por las diferencias entre la situación de las economías, no se presentó un panorama tan crítico en la América hispana durante aquel siglo⁸⁷.

La reducción de la producción en España provocó que autores como el contador Luis Ortíz, a principios del siglo XVII, exhibiera que "los españoles desdeñaban el trabajo manual"⁸⁸. Para dar solución a esta situación, Ortíz sugirió la eliminación de aquellas leyes que desestimaban los trabajos manuales, recomendando además que "el Estado obligara a todos los jóvenes del sexo masculino (también a los nobles) mediante la amenaza del castigo de pérdida de la nacionalidad"⁸⁹. La conciencia económica hispana, por tanto, puede apreciarse desde este tipo de escritos ilustrados del siglo XVII; motivada por la depresión en la producción peninsular. Lo cual fue consecuencia del excesivo uso de metálico en las transacciones mercantilistas españolas. Apoyado en este argumento, Pietschmann ha asegurado que la preocupación de los letrados por las finanzas de la metrópoli en el siglo XVIII estuvo presente desde el siglo anterior. Ya que

sus reflexiones en cuestiones fundamentales... apenas se diferenciaban... [La] situación inicial de los pensadores de ambos siglos fue la misma, concretamente, el reconocimiento de la decadencia económica y política de España y la conclusión, derivada de esto, que esta decadencia sólo se podría contener por medio de reformas fundamentales internas, cuyo objetivo debía ser la revitalización de la economía del país⁹⁰

Es imprescindible advertir que la preocupación por las finanzas públicas de la monarquía hispana se manifestó en ambos siglos. Así, es posible evidenciar la persistencia de los problemas económicos castellanos, por un lado, y la continuidad de las ideas reformistas que buscaban el fomento de las actividades

⁸⁷ Cfr. Florescano, Enrique e Isabel Gil. "La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808" en Historia General de México, El Colegio de México, México, 1976, pp. 473-483. Estos autores hacen una rápida descripción de los trabajos de los historiadores Earl Hamilton, Pierre y Huguette Chaunu, Borah, Lynch y Bakewell, y ponen en tela de juicio algunas interpretaciones que se habían realizado hasta entonces sobre el siglo XVII, las cuales se oponen al panorama descrito por Brading un lustro atrás.

⁸⁸ Pietschmann. *Las reformas borbónicas...*, p. 19.

⁸⁹ *Ídem*.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 27.

de manufactura, por el otro. Asimismo, siguiendo a Pietschmann, esto es muestra de que las ideas económicas ilustradas no fueron una simple importación de España en el siglo XVIII; ya que en las obras de los letrados hispanos del siglo XVII (como Francisco de Vitoria, Juan de Medina, Tomás Mercado, Luis Molina, Diego Covarrubias, y el mencionado Luis Ortiz) está presente un análisis sistemático (si bien no exhaustivo, porque no existían las herramientas de medición apropiadas) sobre la dinámica del dinero y las mercancías. Estudios que preceden un siglo a los esfuerzos de los fisiócratas. No obstante, aun considerando esto, debemos tener en cuenta que existieron también influencias de las ideas francesas sobre la administración de los reinos hispanos hacia la sucesión de la Casa Real al trono español. Sin embargo, las reformas realizadas por el primer monarca español Borbón, Felipe V, fueron echadas atrás en los años veinte y treinta del siglo XVIII⁹¹ –durante su propio reinado.

A finales del XVII, sin embargo, se observan cambios en las políticas económicas. Si bien Carlos II concibió la necesidad de fortalecer el control estatal para lograr incidir en el conjunto de los reinos (como lo muestra la Ordenanza Real que buscaba una reforma financiera promulgada en 1691), esta medida fue parte de un proceso que, eventualmente, conllevaba la idea de una mayor especialización de la administración y, con esto, una jerarquización más eficiente del aparato político. Así, debemos entender que la continuidad de los ideales de una reforma *desde arriba*, no surgió como una necesidad de la situación material exclusiva del siglo XVIII, sino que estuvieron presentes en la inconformidad de diversos funcionarios hispanos previamente.

Estos intereses los vemos contenidos en aquella reforma financiera, en donde los superintendentes, quienes fueron los nuevos funcionarios públicos que emergieron con esta ordenanza, tuvieron como responsabilidad principal garantizar el cobro de impuestos que, hasta entonces, estaba delegado a recaudadores privados –como lo veremos también para el caso novohispano.

⁹¹ Al ascenso de Felipe V se crearon nuevas secretarías, con el fin de centralizar el gobierno, sustituyendo a los antiguos consejos, pero desaparecieron posteriormente. Pietschmann indica que las "reformas realizadas por Felipe V en la administración central sólo tuvieron un significado transitorio y fueron anuladas en su mayor parte hacia 1720" *Ibid.*, p. 36.

Además, entre las funciones de estos nuevos cargos estaba el informar sobre la situación económica en todas las regiones que tuviesen asignadas. Pero su labor no era únicamente de recaudación y supervisión, sino que también se les designó para que promoviesen la *prosperidad económica* en su jurisdicción mediante el aumento de las actividades productivas de los súbditos⁹².

El sondeo de la situación de las provincias no sólo se limitó al aspecto económico, ya que los superintendentes también debieron supervisar la organización de gobierno, con lo cual se transferían funciones que anteriormente eran desempeñadas por los corregidores, quienes, previamente, a diferencia de los superintendentes, no tuvieron la obligación puntual de rendir cuentas minuciosas sobre sus labores; además de que su relativo distanciamiento no los obligaba a promover la economía en los términos dispuestos desde Castilla. Por esta razón, encontramos que las reformas en la jerarquización del gobierno demostraban que, durante el gobierno de Carlos II, se había afirmado la necesidad de que sólo con medidas estatales controladas se podría contener la depresión económica en los territorios hispanos. Esto nos muestra, según Pietschmann, que

la Corona estaba conciente de que el saneamiento de las finanzas estatales no se podría lograr únicamente por medio de una mejora y centralización de la administración de los impuestos, sino que también se debían adoptar medidas para aumentar la capacidad de pago de impuestos por parte del pueblo; por tanto, crear a la vez medidas de promoción de la economía⁹³

Y si bien la reforma financiera presentó muchas dificultades en su aplicación, como fue el descontento general mostrado en Cataluña, no cesaron los intentos por incorporar una administración más vigilada por medio del control manifiesto de la metrópoli. Así, posteriormente, un nuevo ensayo de la asignación de superintendentes apareció en 1711 bajo el mandato de Felipe V, pero ahora limitado a la *Causa de Guerra*. En esa designación, las responsabilidades de los

⁹² Cfr. *Ibíd.*, p. 43. El autor utiliza la palabra *individuos* para referir a los vasallos. Sin embargo es indispensable mantener reserva con respecto a ese término en la época que referimos aquí debido a que un siglo más tarde tendrá otra connotación.

⁹³ *Ibíd.*, p. 44.

superintendentes no equivalían a la amplitud de funciones que se habían impuesto a sus homónimos en los mandatos de 1691. Su labor era supervisar a las tropas que se encontraran en la provincia que les correspondía⁹⁴. Además sería durante la aplicación de aquella ordenanza que el término de *superintendente* se recortaría al de *intendente* en el uso común, por razones aparentemente desconocidas.

Fue hasta la ordenanza del 4 de julio de 1718 cuando se asignó al cargo de intendente la vigilancia de las cuatro causas de gobierno (de Justicia, Policía Hacienda y Guerra) en las que se dividía la administración de la monarquía hispana. La relevancia de este nuevo documento consistió en que las instrucciones emitidas a los intendentes fueron mucho más precisas, ya que éstas se enfocaron en coordinar institucionalmente a los funcionarios públicos con las administraciones provinciales que ya operaban en los dominios peninsulares.

Aquí resalta una diferencia sustancial entre la designación de intendentes de 1691, aún bajo el mandato de los Habsburgo, y la de 1718. En la primera se hizo especial énfasis en la causa de hacienda, mientras que en la segunda, si bien la incluyó, se pensó para tener un alcance mayor. Habría que considerar que la sucesión de Casa Real en el territorio hispano había dejado nefastas consecuencias materiales que, a su vez, afectaron fuertemente la organización de los gobiernos de las provincias, por lo que la nueva ordenanza buscó restablecer el orden político por medio de una presencia fuerte de la Corona a través de los intendentes como representantes sus directos⁹⁵. Lo que nos habla de la necesidad que tuvo el gobierno de Felipe V por asegurar el control de todos sus territorios. Esto trajo, por consecuencia, un énfasis para concentrar esfuerzos que garantizaran la profesionalización burocrática, lo cual tenía como objetivo hacer cumplir cabalmente los designios reales.

Estos elementos nos permiten entender que el factor de transformación que puede localizarse en esta conciencia reformista no es tan evidente en sus

⁹⁴ Esto es muestra de la lógica misma de lo que refería originalmente el término *superintendencia*. La denominación de *superintendencia* en el lenguaje del siglo XVII no supone un sustantivo, sino una referencia a la función inherente de las cosas de gobierno. En la tradición española esa expresión manifestaba la manera adecuada de desempeñar cualquier puesto.

⁹⁵ Es preciso señalar que a la sucesión al trono de un rey Borbón se opusieron enérgicamente los reinos de Valencia, Cataluña y Aragón, los cuales fueron sometidos por los ejércitos de la Casa Real francesa.

contenidos, ya que las inquietudes económicas y posibles soluciones continuaron obedeciendo a la misma lógica desde principios del siglo XVII. No obstante, éstas fueron percibidas para un ámbito y un territorio restringido en la península. Aquello que en efecto resultó novedoso fue la extensión de estas ideas. Es decir, la socialización, en un sector más amplio, de la necesidad de incrementar la producción de bienes y de la paralela especialización burocrática para recaudar los impuestos que se incrementarían con ella.

3.2 La apertura del monopolio comercial novohispano

La dinámica económica de la Nueva España debe ser revisada a la luz de un cuerpo regulador de las actividades comerciales que se formó con el nombre de *Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México*, que también fue conocido como los "*comerciantes almaceneros de la ciudad de México*"⁹⁶. Este fue el grupo que permaneció como un monopolio regulador de acuerdo a las disposiciones de la metrópoli desde el año de 1592. Su participación fue primordial en el mecanismo del cobro de las alcabalas, ya que éste se basó en una triangulación entre la Corona y quienes tenían los recursos humanos para recaudar los impuestos entre los comerciantes de las flotas. La Corona ponía en subasta el derecho legal al cobro hacendario, y los particulares que tenían la posibilidad de cubrir el territorio propuesto ofertaban para quedarse con ese privilegio.

A su vez, la capacidad de controlar los intercambios comerciales entre la península y la Nueva España se debió al decreto de los puertos únicos. Para el caso de la península se determinó que el grupo de Sevilla fuera quien se hiciera cargo de las exportaciones europeas. En la Nueva España fue Veracruz el único puerto comercial avalado para el comercio con la metrópoli, en el territorio continental del norte de América (ya que Portobello era el encargado de recibir las mercancías en el sur).

⁹⁶ Yuste, Carmen. *Introducción a Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII*, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, 1991, p. 10.

La consolidación de los comerciantes del Consulado fue posible gracias a un peculiar procedimiento de este grupo durante el siglo XVII. La expansión de las líneas de comercio hacia el norte novohispano dificultó enormemente la posibilidad de que este solo cuerpo saciara las largas rutas a principios de aquel siglo –tanto las antiguas como las de nueva creación. La falta de recursos humanos fue cubierta con una intensiva labor de reclutamiento. La gran mayoría de los encargados de las actividades comerciales fueron andaluces que ofrecieron trabajo a sus compatriotas. Les enviaban plata para que ellos mismos comprasen mercancías y se embarcaran en el sistema de flotas hacia el territorio americano. Una vez llegados a la Nueva España entregaban la carga y se incorporaban a las tareas que llevaban a cabo los comerciantes del Consulado. De esta manera muchos españoles andaluces echaron raíces en el virreinato e hicieron sus fortunas en él. En este procedimiento observamos que los favores de la Corona, al brindar exclusividad a este grupo, fue bien resuelto por ellos mismos, ya que el gobierno metropolitano no debió preocuparse por la carencia de recursos en el comercio novohispano. De haberse suscitado un reclamo generalizado en este sentido se habría abierto la posibilidad de que otro grupo se incorporara también a las actividades de comercio, o incluso se hubiera quitado la concesión a favor de otro. De haberse dado el primer caso, se habría llegado a una apertura comercial mucho antes de la época en que ésta ocurrió.

Además el hecho de que este grupo se haya conformado como una red gigantesca y sólida se debió a que el reclutamiento favoreció la migración de familiares y amigos de los originales andaluces. Es entendible que para la segunda y tercera década del siglo XVIII, cuando comenzaron a llevarse a cabo las primeras modificaciones al esquema de comercio, el Consulado continuara siendo una red exclusiva para un cierto número de familias, y que la promoción de los grandes negocios se reducía a los acuerdos que entre ellas mismas tenían.

Así, durante el siglo XVII el cuerpo de comerciantes logró establecer, de acuerdo a sus intereses, la manera en cómo se llevaría la práctica comercial, a lo que Carmen Yuste denomina "reproducir en el interior de la Nueva España el

sistema de monopolios, esto es, la imposición de las formas de adquisición y de los medios de pago en las operaciones de intercambio"⁹⁷.

Pero la gran influencia de este grupo no se limitó al territorio novohispano. Al ser éste el que determinaba la dinámica del intercambio, también era capaz de decidir cómo, cuándo y dónde se comerciaban los productos provenientes del exterior. También el Consulado determinaba cuándo se inauguraba la *feria del comercio* de la Ciudad de México, de acuerdo al cálculo que hacían sobre el momento en que convenía celebrarla. Por esta razón el Consulado podía mandar a que las mercancías permanecieran almacenadas, cosa que en ocasiones sucedía en los mismos galeones.

Si tomamos en cuenta que el Consulado pagaba una cuota anual fija a la Corona por la concesión⁹⁸ (la cual no variaba mucho de un año a otro) ubicamos que el margen de sus utilidades dependía de la minuciosidad del trabajo aduanero en la medida en que la revisión de mercancías, tanto las entrantes como las salientes, debían pagar alcabalas (impuesto al comercio); por lo que mientras mayor fuera la cantidad de bienes registrados, mayor sería la cantidad de impuestos recolectados.

Ahora bien, el eje marítimo comercial de la Nueva España conectó a los puertos de Veracruz y Acapulco con la Ciudad de México. Esto permitía mantener comunicada a la metrópoli con los dominios del Asia oriental. Los productos que llegaban desde Manila a Acapulco comenzaron a ser incluso más valorados que las mercancías que provenían de Europa. Los galeones que cruzaban el Pacífico norte salían de la bahía novohispana cargados con plata acuñada en México y llegaban a la bahía filipina a comprar una gran variedad de mercancías dentro de las que se cuentan porcelanas, muebles finamente retocados, y una gran diversidad de especias, que después serían llevadas a Acapulco para comerciarse en la gran feria que ahí se instalaba. Y, por supuesto, el Consulado tenía también la exclusividad en la regulación de las actividades económicas de este intercambio (aunque la prolijidad del trabajo aduanero era ligeramente menor que en el Golfo).

⁹⁷ *Ibíd.*, p. 11.

⁹⁸ Cfr. Brading, *Mineros...*, p. 80.

Con estas conexiones se tenía un circuito comercial basado en el eje Veracruz–México–Acapulco, que recibía el producto máspreciado de la Nueva España, la plata, de los diversos yacimientos del virreinato americano. Con esta capacidad de comercio se generó la ruta más larga en la historia mundial hasta entonces. Y en medio de ella se consolidó un organismo que concentró el poder regulatorio y, por tanto, la abundante riqueza que esta gran empresa de comercio significó.

Pese a que el Consulado mantuvo su gran influencia por más de un siglo llegó el momento en que ésta decayó. El primer ataque frontal a la autonomía del comercio novohispano fue la creación de la Feria Comercial de Jalapa en 1720. En esta se permitió introducir las importaciones hasta esa ciudad para llevar a cabo un encuentro mercantil, lo cual minó la capacidad de especulación del Consulado de México debido a que ya no podría almacenar los productos para después ofrecerlos en la capital a precios excesivos. Esto porque los consumidores privados y los pequeños comerciantes podían adquirirlos directamente en Jalapa.

Más tarde, el Consulado se vio amenazado por el *Ordenamiento* para celebrar la Feria de Flotas de Orizaba –lo que colocaba los productos ofrecidos en un punto geográfico mucho más accesible a las grandes ciudades centrales (llámese Puebla, Oaxaca y México) en relación al trazo del eje Veracruz–México–Acapulco. La decisión de mover la feria a Orizaba se tomó a partir de la prematura creación de un nuevo consulado de comerciantes, el de Veracruz, el cual se integró de nuevos habitantes de origen peninsular que se establecieron en la Nueva España después de comenzarse a celebrar la Feria de Jalapa, y que buscaba realizar sus operaciones mercantiles con autonomía del de México.

Por supuesto el antiguo gremio comercial reaccionó inmediatamente a esta decisión. De hecho en la protesta que hizo la Representación del Consulado de México se describió cuál fue la manera de operar de los comerciantes recién llegados al virreinato novohispano. En esta carta la Representación denuncia que los comerciantes de las flotas debieron haberse mantenido en Europa, ya que si

hubieran continuado en hacerlo... ni ellos sintieran perjuicio ni se lo acarrearán al comercio de España ni al de este reino (Nueva España): pero alternando el estilo de vender y de volverse a sus casas en las mismas flotas en que hacían sus viajes, dieron en irse quedando avecindados en esta ciudad de unas flotas para otras, con el pretexto de no poder dar salida a sus efectos con aquella reputación que ellos querían y que no permitía la positura de este comercio, y no fue menester más para ellos y el se hayan puesto en tal irregularidad que a más andar caminan a su ruina si V.M. no la preocupa con el más pronto y providente remedio⁹⁹

En este documento encontramos una petición para dar marcha atrás a la tendencia de la apertura del comercio. Es evidente que los intereses monopólicos (aunque en realidad era una red oligopólica) del Consulado se estaban viendo afectados por el nuevo grupo veracruzano. Pero además el grupo de México se había esforzado por incomodar, dentro de sus posibilidades, las actividades de aquellos. Por que ciertamente la magnitud de los negocios de los nuevos comerciantes era mucho más reducida que los de la gran red precedente. Así, aquella carta permite entrever también una amenaza velada que se basó en la capacidad de decisión que hasta entonces ostentaba el grupo de México. Sin embargo, también se percibe el temor que les generaba la apertura de sus zonas comerciales a nuevos actores económicos. Porque la competencia hacía menos redituables sus negocios. En la misma carta la Representación escribió que

A los comerciantes de esta ciudad y reino les resulta el inconveniente de no poder vender sus mercancías, porque la forastería que es la que por mayor parte la compra, tiene hecho el concepto de que los mercaderes del reino han de venderle a precios más subidos que los flotistas quedados, porque éstos venden de primera venta y aquellos de segunda... de suerte que no entra dinero a sus casas, porque todo se va a los flotistas¹⁰⁰

⁹⁹ *Representación del Consulado de México al Rey en respuesta al ordenamiento de celebrar las ferias de las flotas en Orizaba, solicitando que a los flotistas no se les permita la salida del recinto de la feria y que se restituyan a España en la misma flota que llegaron. 15 de Mayo de 1725.* Documento en Yuste, Carmen. *Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII*, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, 1991, p. 51.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 52.

En estas peticiones observamos las diferentes facetas que el Consulado de México mantuvo ante el virreinato, pero que en el siglo XVIII debió hacer sentir a la Corona al peligrar sus intereses. Carmen Yuste ha descrito al consulado como "Aliado, competidor y enemigo"¹⁰¹ de acuerdo al momento de las negociaciones con el gobierno virreinal. No obstante, existía un principio conforme al cual se tomaban esas decisiones, que era "la buena marcha de sus negocios e intereses y el respeto a la autonomía absoluta y plena de su institucionalidad"¹⁰². Por lo que, confiados en su posición (por lo menos en sus propias consideraciones), fueron capaces de vislumbrar el fracaso de los nuevos comerciantes. En un momento en donde todavía podían dar muestras de su soberbia.

A partir de la entrada de nuevos comerciantes en aquella época se iniciaría una apertura comercial gradual en el virreinato. Transcurrida la primera mitad del siglo XVIII –y con el precedente de que los comerciantes de ultramar habían podido ofrecer sus productos en la feria de Jalapa en 1720 sin la intervención del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México– las actividades de hacienda fueron absorbidas paulatinamente por funcionarios de la Corona. De hecho, a partir de 1747 se le atribuyó al virrey la dirección superior de la administración financiera, lo que lo facultaba para realizar cambios en la manera en que se cobraban los impuestos con la finalidad de incrementar la recaudación con un mayor control del aparato fiscal. Es decir, la Corona buscó hacerse del margen de ganancia que los particulares obtenían anteriormente.

La exclusividad de este organismo terminó en 1754, cuando "la Corona dio por terminado su acuerdo con el consulado"¹⁰³. Así, para los años sesenta y setenta de aquel siglo ya se habría menguado la omnipresencia mercantil de la que una vez fuera la red comercial más poderosa de la Nueva España. Asimismo la dinámica tradicional del comercio volvería a sufrir un ataque después de las reformas administrativas de los borbones a finales de ese siglo.

Sin embargo, el Consulado dejó claramente su huella en la conformación económica de la sociedad novohispana. Éste se había confirmado, en tanto

¹⁰¹ Yuste, *op. cit.*

¹⁰² *Ídem.*

¹⁰³ Brading. *Mineros...*, p. 81.

institución, como protagonista en la vida social hasta entonces. Y fue este tipo de recaudación oligopólica una de las causas que generó la gran desigualdad de condiciones materiales en el virreinato. Situación que persistió aún después de la presencia de otros grupos mercantiles. Ya que de hecho heredó su lógica comercial y la práctica de los negocios de avío a las nuevas asociaciones mercantes, las cuales persistieron todavía hasta el decreto de comercio libre que se hizo en 1789. Tres años después de la puesta en vigor de la Ordenanza de Intendencias para la Nueva España.

La gran concentración de la riqueza permaneció a raíz del enriquecimiento de grupos bien localizados de españoles americanos. Incluso ya en 1803, Alexander von Humboldt, en su *Ensayo político*, describió que las grandes fortunas de la Nueva España no pertenecían solamente a los dueños de minas. Anotaba que:

Muchos mineros han empleado felicísimamente sus riquezas, comprando tierras y dedicándose con el mayor esmero a la agricultura; pero hay también muchas familias poderosas que nunca tuvieron minas muy lucrativas que beneficiar... las inmensas riquezas que hay en las manos de algunos particulares de la Nueva España... pudieran competir con las que presentan la Gran Bretaña y las posesiones europeas de Indostán¹⁰⁴

Sabemos que el modo de enriquecimiento de los habitantes novohispanos dependió de las relaciones que tuvieron. El ascenso económico y social fue muy limitado. Generalmente se mantenía la misma condición con la que se nacía. Y fueron los recién llegados las excepciones de este determinismo (a los que se suma el ejemplo de Pedro Romero de Terreros, conde de Regla)¹⁰⁵.

Humboldt observó que el comercio en la Nueva España se complicaba por las condiciones de su terreno, cosa que favoreció siempre a las redes mercantiles ya consolidadas. Señalaba que:

¹⁰⁴ Humboldt, Alejandro de. *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España* (1803), Editorial Porrúa, México, 1973, 84.

¹⁰⁵ Cfr. Sugawara, Masae. "Reformas Borbónicas y luchas sociales (1763-1810)" en Semo, Enrique (coord.) *México, Un pueblo en la historia 2. Campesinos y hacendados, generales y letrados (1770-1875)*, Alianza Editorial, México, 2003, pp. 79-95. Con esto cabe aclarar que algunos habitantes estuvieron en condiciones de cambiar su estamento de origen. Cuestión que se conocía como cruce de la "barrera de color".

en aquellas regiones modernamente civilizadas... la naturaleza de los caminos de montaña hace sumamente difícil su transporte, y que en un país donde el comercio es poco activo, es muy indiferente el tener parados algunos centenares de pesos fuertes, o algún capital en muebles de plata. Por lo demás, no obstante la enorme diferencia de riquezas que presentan el Perú y México, cuando se consideran separadas las fortunas de algunos particulares, me inclinaría a creer que ha habido un bienestar más verdadero en Lima que en México, porque allí es mucho menor la desigualdad¹⁰⁶

Este testimonio nos permite ver que tanto los medios de producción como la infraestructura de las rutas de comercio estaban controlados, aún en la primera década del XIX, por un grupo reducido de acaudalados.

Esto también nos muestra que las reformas llevadas a cabo en el comercio, si bien apuntaban a lograr una apertura moderna, no trajeron cambios de raíz. Aunque entraron nuevos actores en el escenario mercantil, la desigualdad entre, por un lado, quienes poseían los medios de producción y los medios para la trasportación de las mercancías –en su mayoría españoles americanos y españoles recién llegados con financiamientos– y, por otro, la población que difícilmente tenía acceso a ellos, continuaba siendo abismal. De hecho en este sentido no existieron grandes transformaciones en la radiografía social como de hecho sí los hubo al nivel de la organización gubernamental en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que los cambios en las disposiciones comerciales se realizaron a la par de una nueva planificación financiera que, a su vez, provocó el ensanchamiento de las filas de la burocracia hacendaria y, con esto, la necesidad de una mayor regulación jerárquica de este tipo de actividades. Así, las audiencias debieron verter mayores esfuerzos administrativos para regular un rubro que, hasta entonces, no les había correspondido dirigir.

Estas reformas en la organización económica tuvieron como finalidad incorporar un aparato fiscal del Estado para que éste estuviera en posibilidades de

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 86. En este punto habría que aclarar que si bien en la Nueva España eran más evidentes las diferencias entre la población, en esta región existía una mayor mezcla de los estamentos en las ciudades. En el virreinato del Perú, por el contrario, la población española había permanecido en las ciudades portuarias junto con los negros que les servían, y los pueblos de indios se mantuvieron en las montañas.

hacerse cargo de las tareas fiscales (Causa de Hacienda). Una de las consecuencias del ataque al Consulado de la Ciudad de México (lo cual fue una condición necesaria para obtener este control) fue abrir la posibilidad para que los otros grupos mercantiles se incorporaran al mercado novohispano. Y si bien en el ideal utilitario hispano aparece (como hemos visto) el apoyo a las labores productivas (lo cual observamos en la promoción de las actividades manufactureras y los oficios), no podemos asegurar que la Corona haya impulsado ciegamente el libre comercio. Incluso el decreto de libre comercio de 1789, aun siendo el principio de un primer liberalismo económico, no contemplaba la participación de quienes no eran bien recibidos en los territorios hispanos ni, en los hechos, de diversos integrantes del estamento de castizos. Por esta razón, si debemos considerar una tendencia moderna clara en este proceso de la economía, es más bien la aparición del tipo de control hacendario al comercio, por medio de una burocracia pretendidamente profesional, la que resulta una condición previa a la formación del Estado moderno.

3.3 La búsqueda de la eficiencia hacendaria y la especialización burocrática en la Nueva España

La reforma en los gobiernos de los virreinos hispanos surgió con la percepción de que la metrópoli no obtenía suficientes beneficios de sus colonias. Si bien la preocupación por las finanzas públicas se mantuvo, como hemos revisado, desde el siglo XVII, para el XVIII este tema se convirtió en una necesidad prioritaria para los mandatarios borbones. Es sabido que la política de los Habsburgo no se limitó a lograr sólo la mayor eficiencia en los ingresos de la Corona, sino que existía un concepto del buen gobierno que, en tanto régimen imperial, debía asegurar el respeto de los habitantes a la pertenencia jurídica a la metrópoli. Pero también brindando un margen a los pueblos para organizarse de acuerdo a sus costumbres.

Esto, por supuesto, no fue garantía de que el régimen de los austrias no haya tenido malos cálculos sobre las necesidades de su población. Solamente basta

recordar el motín popular más grande de los primeros dos siglos de presencia hispana en América, ocurrido en la Ciudad de México en 1692 y relatado ampliamente por Carlos de Sigüenza y Góngora¹⁰⁷.

Sin embargo, durante el mandato de la Casa Real de Borbón se evidenció la necesidad de los altos funcionarios hispanos por incrementar los ingresos de la Corona. Lo que también se reflejó en esfuerzos por promover el trabajo de producción de manufacturas y el incremento en el consumo mismo de los súbditos del reino. Y si bien observamos que estos temas tuvieron cada vez más eco en la península durante el siglo XVII (cuando se intentaba promover el trabajo manual) en América los debates al respecto se intensificaron después de 1743 cuando José del Campillo y Cossío dio a conocer su obra *Nuevo sistema de gobierno económico para la América*. En donde expuso cuáles eran las causas de la reducida captación de recursos para la Corona provenientes de sus reinos americanos.

En este libro, Campillo comparaba la abismal diferencia de recaudación entre España, por un lado, y Francia e Inglaterra, por el otro. Argumentó que las ganancias obtenidas por estos últimos eran mucho mayores a las hispanas. Por tanto, propuso que se reformara de raíz el sistema financiero de los dominios americanos. Esta recomendación no sólo contemplaba cambios en el sistema hacendario, sino que de hecho se debía establecer un gobierno económico, lo que suponía entender que todas las funciones de gobierno se planificaran de acuerdo a los resultados financieros que se buscaban. Por lo que Campillo, contrario a la política usualmente practicada durante el siglo anterior por Viena, comenzó a considerar que la Real Hacienda no debía ser un órgano más en la estructura de administrativa de la Corona, sino que debía ser la instancia que diera la pauta al gobierno mismo.

Dentro de las recomendaciones concretas, Campillo señalaba que los monopolios comerciales afectaban negativamente a la vida económica. En primer lugar, el pago de las concesiones representaba una pequeñísima parte de la

¹⁰⁷ Cfr. Sigüenza y Góngora, Carlos de. "Alboroto y motín de los indios de México" en *Teatro de virtudes políticas*, UNAM, Editorial Porrúa, México, 1986, pp. 149-217.

recaudación real de las alcabalas. Y además, los monopolios estaban en condiciones de especular con el mercado. Tenían la capacidad de almacenar las mercancías e irlas incorporando al comercio de acuerdo a sus propios intereses, y no por el interés de la Corona. Por tanto, indicaba que los consulados comerciantes, tanto el de México como el de Cádiz (junto con el de Veracruz), deberían desaparecer.

Además Campillo consideró que el comercio de las mercancías de la península no tenían suficiente promoción en América. Cosa que también se había generado por los caprichos monopólicos –según este autor¹⁰⁸. Sin embargo, es necesario señalar que la gama de productos peninsulares tenían su mercado más cautivo dentro de los españoles de origen europeo. Que si bien éstos demandaban enérgicamente la oferta de estos productos, representaban una proporción minoritaria en la Nueva España. Así, este punto sólo muestra los deseos exacerbados por promover la introducción de los bienes peninsulares en otras latitudes, lo cual se desprendió de la conciencia de que Castilla se había convertido en una comunidad eminentemente importadora.

A su vez esta fue la razón primordial por la que se recomendaba que la economía se tenía que liberar de las trabas al comercio. Y para lograrlo Campillo proponía que se debía aumentar la cantidad de consumidores de los productos comerciales, explicando que esto sería posible en América "si la gran masa de sus habitantes, es decir, los indígenas, eran incorporados a la sociedad"¹⁰⁹. Con esto se quería decir que los indios debían estar familiarizados con las prácticas sociales que el estamento español apreciaba. No obstante, habría que ser cuidadosos para valorar esto, ya que el incorporarlos a la sociedad no significaba que los demás estamentos debían convivir en actividades comunes y en igualdad de circunstancias con el estamento español. El familiarizarse con las prácticas de los españoles más bien apuntaba a adoptar sus necesidades. Si los españoles eran asiduos a los productos importados, muchos de ellos suntuosos, entendemos

¹⁰⁸ Enrique Florescano e Isabel Gil han explicado que desde el siglo XVII se había presentado un modelo de sustitución de importaciones en la Nueva España en diversos artículos que la península proveía anteriormente. Cfr. Florescano y Gil, *op. cit.*, pp. 479-483.

¹⁰⁹ Brading. *Mineros...*, p. 42.

que la recomendación era generar el mismo sentimiento de necesidad por adquirir estas mercancías en los indios. Y, de acuerdo a los problemas de exportación de los peninsulares, preferentemente se debían promocionar sus productos sobre los provenientes de Asia.

El objetivo propuesto por Campillo fue claro, pero la manera en que se realizaría necesitaba una evaluación previa. Fue por esto que en su libro indicó la necesidad de realizar visitas a los reinos americanos para determinar qué transformaciones en el gobierno deberían realizarse. Solamente después de una "inspección general... seguiría el establecimiento de intendencias permanentes"¹¹⁰. Tarea para la cual Carlos III nombró a José de Gálvez.

Después del establecimiento del sistema de intendencias en la península ibérica, el gobierno de la Corona consideró que en sus dominios americanos, y especialmente en la Nueva España, existía un vacío administrativo que debía resolverse para garantizar el control de los reinos hispanos.

El plan reformista español en América tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando José de Gálvez fue nombrado visitador general de la Nueva España¹¹¹, cargo que ocupó de 1765 a 1771, y que ejerció en consonancia con las preocupaciones de Campillo, concentrando "sus enormes energías a la gran tarea de recaudar más impuestos"¹¹². Después de haberse desempeñado como abogado ministerial en Madrid fue consejero del Secretario marqués de Grimaldi, y posteriormente alcalde de casa y corte hasta que fue designado visitador general de indias "en febrero de 1765"¹¹³. Al tomar el cargo emprendió un exhaustivo viaje para conocer la situación en que se encontraban los reinos hispanos. Este personaje pronto se convertiría en la figura más influyente en la política indiana, ya que además su estrecha relación con el virrey marqués de Croix fue la clave

¹¹⁰ *Ídem*.

¹¹¹ El visitador general de Indias tenía por obligación vigilar el buen funcionamiento de los virreinos, para lo cual se le atribuyó plenitud de decisión judicial y capacidad para exigir rendición de cuentas a cualquier funcionario de la Corona.

¹¹² *Ibid.*, p. 48.

¹¹³ Rees Jones, Ricardo. *El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España*, UNAM, México, 1979, p. 81.

principal para lograr establecer una mancuerna política que permitiría concebir cambios de largo alcance en el gobierno virreinal.

Gálvez fue considerado para este puesto después de haber mostrado gran tenacidad en los cargos que antes había ocupado, pero además porque su parecer coincidía plenamente con los nuevos objetivos financieros de la Corona. Lo que lo convertía en un buen exponente de los deseos del despotismo ilustrado de su época para la función pública.

De acuerdo a las disposiciones de la Corona, el visitador de Indias tendría la autoridad para supervisar el buen cumplimiento de los mandatos reales. Y aunque el cargo mismo le concedía un buen margen de acción, sus capacidades fueron aumentadas al designarle otros dos títulos en paralelo, como "miembro honorario del Consejo de Indias e intendente de ejército"¹¹⁴.

Fue este último nombramiento el que le permitió hacer uso del ejército para someter a los pueblos sublevados del Bajío en 1767. La protesta de las poblaciones purépechas contra la expulsión de los jesuitas lo obligó a movilizar a las tropas del recién creado ejército interno para apagar los levantamientos de Pátzcuaro y Apatzingán¹¹⁵. Así, el visitador "apoyado por las tropas regulares de Villalba y por atemorizados mineros y terratenientes criollos, suprimió estas revueltas con severidad sin precedente. Mandó colgar a 85 personas, azotar a 73, desterrar a 117 y otras 674 fueron sentenciadas a periodos variables de prisión"¹¹⁶. Con estas acciones quedó de manifiesto que Gálvez estaba totalmente determinado a cumplir todo aquello que se le había indicado en la metrópoli. Por lo que la Corona, al recibir los reportes de lo ocurrido, cayó en cuenta que tenía en el visitador a un leal aliado¹¹⁷.

El año en que había sido nombrado visitador, el secretario Arriaga le pidió que de acuerdo a su "juicio y prudencia" determinara "si sería útil y conveniente el que en Nueva España se establezcan una o más intendencias en la misma forma en

¹¹⁴ *Ídem*.

¹¹⁵ Cfr. Sugawara, *op. cit.*, pp. 49-67.

¹¹⁶ Brading. *Mineros...*, p. 49.

¹¹⁷ Cfr. Brading, *Una Iglesia asediada...*, p. 18.

que están creadas en España con alguna limitación o ampliación"¹¹⁸. De acuerdo a las intenciones y carácter que Gálvez había mostrado, con las amplias facultades que se le habían concedido, la respuesta al establecimiento de intendencias, que era el sucinto deseo de la Corona, el visitador difícilmente daría una negativa.

Así, en 1768 preparó el *Ynforme y Plan de Yntendencias que conviene establecer en las provincias de este reino* en donde opinaba que los intendentes debían sustituir a la burocracia que hasta entonces existía, ya que "han llegado a un punto de decadencia que amenaza con su total y próxima ruina"¹¹⁹. Asimismo, la reforma del aparato burocrático, de acuerdo a la opinión de Gálvez, acabaría con los vicios arrastrados por el sistema de repartimientos. Por tanto, aquí se muestran dos preocupaciones del discurso político. En primer lugar la especialización del aparato de gobierno, ya que el visitador consideró que mediante la ayuda de los intendentes, el virrey ya no debería "ocuparse de muchos detalles operativos del gobierno, y se unirían a sus empleos los de corregidores en las capitales y provincias donde se establecieran"¹²⁰. No obstante, como abundaremos más adelante, estos "detalles" normalmente fueron atendidos por autoridades locales. En realidad la especialización que justificaba el informe de Gálvez apuntaba al control generalizado, hasta entonces inexistente, del territorio del virreinato de la Nueva España. Por otro lado, se creía que la activación del comercio (antes señalada) necesitaba romper con algunas dinámicas productivas semi-esclavistas como lo fue el sistema de repartimientos. Esto con la finalidad de hacer que los indios y los castizos tuvieran posibilidad de ampliar la gama de productos a los que tenían acceso y evitando que fueran explotados por las prácticas comerciales de la élite mercantil. Por tanto, bajo la promesa de acabar con los abusos del repartimiento se buscaba la liberalización del comercio a partir de la libertad de los vasallos a contratarse y al consumo. Al menos en el papel, esto sugiere un esquema jurídico-económico que favorecería la transición del mercantilismo al capitalismo.

¹¹⁸ Rees Jones, *op. cit.*, p. 81.

¹¹⁹ José de Gálvez, citado en *Ibíd.*, p. 82.

¹²⁰ *Ídem.*

La primera etapa de esta empresa reformista fue muy sólida. Tanto las visitas como el informe fueron ampliamente apoyados por el virrey marqués de Croix que había entrado en funciones al año siguiente del nombramiento de Gálvez, en 1766. El visitador y el virrey se apoyaron mutuamente de manera incondicional, y no dudaron en recomendar el establecimiento del sistema de intendencias para la Nueva España. Así, el 10 de agosto de 1769, el rey envió la orden al virrey Croix para establecer las once intendencias señaladas por Gálvez, y le autorizó el nombramiento de los funcionarios que ocuparían los cargos de forma interina, recomendándole que se eligieran de acuerdo a sus capacidades¹²¹.

Sin embargo, estas intendencias nunca entraron en vigor. En 1772 el visitador regresó a la metrópoli para integrarse al Consejo de Indias. Y en los años siguientes se presentó un panorama que dificultó la instauración de intendentes en la Nueva España. En principio la manera autoritaria con que había actuado el visitador en América fue criticada enérgicamente por muchos avecindados en el virreinato. La élite novohispana se expresaba inconforme con la expulsión de los jesuitas, porque quienes hasta entonces habían estado al frente del gobierno del virreinato asistieron a los colegios de la orden. Así también sus descendencias "habían sido educados en el Colegio jesuita de San Ildefonso en la ciudad de México"¹²².

La reforma en el gobierno tuvo un ferviente opositor en el virrey entrante, Antonio Bucareli y Ursúa, quien venía de la isla de Cuba en donde había sido capitán general. Contrario a las opiniones que habían vertido Gálvez y Croix, Bucareli consideró que la Nueva España no estaba lista para un gobierno de intendencias, argumentando que

no está la población de este reino en estado que permita la variación de sistemas en su gobierno... lejos de mejorarlo atraería la confusión, ocasionaría gastos al erario, minoraría por muchos años en su entrada y faltaría la seguridad en las cobranzas que hay de la mancomunidad en la responsabilidad de las fianzas¹²³

¹²¹ *Ibíd.*, p. 83.

¹²² Brading, *Mineros...*, p. 59.

¹²³ Bucareli y Ursúa, citado en Rees Jones, *op. cit.*, p. 85.

Aquí resalta que las razones expuestas por Bucareli se concentran en las desavenencias que tendría el sistema hacendario. En efecto su posición ante las reformas fue reservada y conservadora, pero compartía con sus contemporáneos la convicción de que el reino debía reportar los mayores beneficios económicos a la Corona. Además, otra razón por la que Bucareli se oponía a los intendentes fue porque él mismo había tenido una mala experiencia con el intendente cubano, razón por la cual le pareció que existía una incompatibilidad entre autoridades en el sistema de intendencias¹²⁴.

El escepticismo que el virrey manifestó fue suficiente para que el entonces secretario de hacienda, Miguel de Múzquiz, rechazara toda la labor reformista en ese momento –con todo y la decisión que unos años antes había dispuesto el monarca en correspondencia con los informes de Gálvez.

Una de las razones por las que se vio influenciada la opinión del virrey fue que después de haber salido el visitador de América se intensificó el desprecio a su persona. La élite de México lo consideró un personaje antipático e intransigente. El odio que Gálvez provocó se debió a la clara preferencia que tenía por los funcionarios nacidos en la península ibérica. Lo que se vio confirmado en 1776, cuando fue nombrado ministro de Indias. A partir de ese año se crearon diversos puestos para la administración del ámbito financiero en América, para los cuales Gálvez sólo consideró a los españoles peninsulares¹²⁵.

Sin embargo, la decisión de enviar a funcionarios intermedios a América mostró que la Corona quería garantizar su presencia en esos reinos, justificando el intercambio de sus súbditos españoles entre ambos mundos. Desde 1768 se había convocado un consejo, en donde los fiscales Pedro Rodríguez de Campomanes y José Moñino (quien a la postre sería conocido como el conde de Floridablanca) habían recomendado que la mejor manera para reconciliar y estrechar lazos entre la metrópoli y los reinos americanos sería la designación de funcionarios americanos para desempeñar cargos en Europa, y viceversa. Con

¹²⁴ Cfr. Brading, *Mineros...*, p. 75.

¹²⁵ *Ibíd.*, p. 62.

base en esto se decretó en 1776 que los criollos debían ser invitados a "aspirar a puestos clericales y judiciales en la península; de allí en adelante, sólo una tercera parte de los cargos en las audiencias de América y en los cabildos catedralicios se reservarían a los criollos; el resto serían asignados a candidatos procedentes de Europa"¹²⁶. Por tanto, cuando Gálvez comenzó a considerar únicamente a los peninsulares para los cargos de reciente creación, tuvo como alegato esta decisión del consejo. No obstante, éste fue sólo un pretexto para que Gálvez diera "rienda suelta a sus inclinaciones"¹²⁷.

Esto pronto se verificaría por el manifiesto nepotismo con el que se le identificó. En este sentido, David Brading ha rescatado el testimonio del deán de Córdoba en el virreinato de la Plata, en donde expone que

A todo eclesiástico americano le fue cerrada la puerta no sólo de las mitras, pero aún de los ascensos a las dignidades de sus coros... los demás empleos civiles y militares jamás se vieron distribuidos con una predilección más parcial a favor de los españoles europeos... al paso que todo español, principalmente si era andaluz malagueño, tenía en éste sólo *acreditado el mérito y la capacidad*¹²⁸

El funcionario de la audiencia hace especial énfasis en ser "andaluz malagueño" debido a que justamente esa era la procedencia de José de Gálvez, dejando claro que el entonces ministro tenía un explícito favoritismo por sus compatriotas, que frecuentemente fueron sus familiares (con lo que podemos señalar la promoción que hizo a su hermano y a su sobrino, Matías y Bernardo de Gálvez).

Por otro lado hago un breve paréntesis para resaltar que en el testimonio del deán también se muestra la referencia al "mérito y la capacidad", con lo que podemos observar que estos valores eran, de acuerdo al sentir letrado (ilustrado) de la época, los que debían ser tomados en cuenta ante todo.

Sin embargo Gálvez también sostenía que la profesionalización del gobierno debía llevarse a cabo por medio de hombres capaces para servir a la Corona, ya

¹²⁶ *Ídem.*

¹²⁷ *Ídem.*

¹²⁸ Gregorio Funes, citado en *Ibíd.*, p. 63.

que sólo ellos podrían ser útiles a su causa. La cuestión es que dicha utilidad estaba referida al buen desempeño de los nuevos funcionarios en las actividades financieras. Es decir, el mérito se asimiló en las actividades productivas y en el servicio de recaudación. Asimismo el visitador consideró que los hombres valiosos a la metrópoli lo serían en tanto compartieran la misma perspectiva eficientista de la burocracia hacendaria. O, lo que resultó similar, aquellos funcionarios dispuestos a acatar la voluntad de José de Gálvez.

No obstante, con todo y el repudio criollo a las reformas, la resolución del decreto de 1776, en donde se mandó el intercambio de funcionarios, logró su cometido de la mano del ministro hacia finales de los años setenta. Todavía hasta la visita de Gálvez la Audiencia de México había permanecido como un baluarte criollo, ya que existía una proporción de 8 americanos por 3 peninsulares; pero hacia 1779, ésta se había invertido, ya que entonces estaba integrada por 12 peninsulares y sólo 4 criollos¹²⁹. De aquí que se haya desprendido un malestar generalizado de la élite americana. Y en especial de aquellos jueces de la ciudad de México que hasta entonces habían integrado el cuerpo administrativo de la capital virreinal. Los jueces recibirían un nuevo golpe cuando los militares y los oficiales fiscales fueron nombrados autoridades principales en jurisdicciones particulares en detrimento de las facultades de los jueces oidores de la Audiencia. Esto en correspondencia con el plan de instaurar intendencias en América, a pesar de la anterior negación. Por lo que es evidente que los intereses por establecer este sistema nunca fueron abandonados. Lo que sugiere que Gálvez tenía planeado poner en marcha gradualmente los cambios que estaban en consonancia con la manera en que operaban ya los intendentes en la península.

Paradójicamente, una de las razones por la que se retrasó la puesta en marcha de las intendencias fue el crecimiento económico novohispano en la década de los setenta¹³⁰. La necesidad de reportar mayores ingresos a la metrópoli era una justificación primordial para la reforma en el gobierno. Después

¹²⁹ Cfr. *Ibíd.*, p. 68.

¹³⁰ Brading ha señalado que esta década "fue clave" para la transformación sustancial del aparato fiscal, ya que durante ella se presentó, de manera dramática, un mayor crecimiento económico, "porque durante el resto del siglo, y en realidad hasta 1810, el aumento fue relativamente pequeño" *Ibíd.*, p. 80.

de que el plan de Gálvez fuese echado atrás, se presentó este crecimiento bajo el gobierno del virrey Bucareli, lo que provocó una mayor confianza de la Corona a su administración. Cosa que además resultó temporalmente perjudicial para las intenciones del ministro de Indias.

En cuanto al gobierno de Bucareli podemos señalar que sus acciones fueron generalmente conservadoras, por lo que su persona fue bien juzgada por la élite americana. No por el simple hecho de negar los cambios a la legislación, sino por defender, a pesar del decreto del 76, la permanencia de diversas instituciones que favorecían a los criollos. Y es por esta razón que la figura de Bucareli fue una de las mejor libradas en los juicios morales de la historia nacionalista del México independiente.

Si bien la reforma de las intendencias apuntaba a presentar problemas para realizar los múltiples cambios que tenía contemplados, el conservadurismo de Bucareli llegó al extremo de argumentar que el sistema de repartimientos convenía a los pueblos de indios. Esto muestra claramente que este virrey defendía a ultranza "el *statu quo* en el gobierno local"¹³¹.

Por tanto, pasados los años bajo el gobierno de Bucareli, el argumento más poderoso en contra del sistema de intendencias fue el preguntarse acerca de su pertinencia debido a que su principal finalidad, de acuerdo a lo expresado por Gálvez una década antes, ya había sido bien lograda. Entonces ¿cuál sería la necesidad de llevar a cabo un reordenamiento que consistía en reformar el aparato fiscal para lograr una mayor recaudación si ésta ya se había incrementado drásticamente durante la década en que gobernó Bucareli y Ursúa? Hacia 1765 la Nueva España reportaba un ingreso total a la metrópoli de poco más de seis millones de pesos, cifra que contrasta con los diecinueve y medio millones que se recaudaban después del mandato del virrey opositor a las reformas.

Sin embargo podemos percatarnos que la disputa obedeció también a un choque entre autoridades y a una equilibrada relación de poderes. Porque la muerte de Bucareli evidenció su papel protagónico como retractor del sistema de intendentes, debido al contrapeso que había logrado imponer a Gálvez.

¹³¹ *Ibid.*, p. 75.

Después de su inesperado fallecimiento en 1779, el presidente de la Audiencia de Guatemala, Martín de Mayorga Ferrer, ocupó el cargo de virrey de la Nueva España, mas no por mucho tiempo. Con este hecho Gálvez se enfiló a establecer su tan ansiado proyecto, para lo cual necesitaba llevar a sus aliados en el gobierno a ocupar el cargo de virrey.

El papel de Mayorga se entendió siempre, por parte del ministro, como un interinato. Por tanto, Gálvez se ocuparía de hacer sentir al nuevo virrey carente de todas las facultades que se le atribuían entonces a sus predecesores.

De acuerdo a este plan, Pedro Antonio de Cossío ocupó el puesto de secretario del virrey como intendente de asuntos fiscales. Cossío había ganado la total confianza de Gálvez cuando le prestó sus servicios para crear el monopolio de tabaco; desempeñándose después como director de la aduana de Veracruz. Éste fue un personaje que Gálvez incorporó a la administración novohispana para incomodar a Mayorga y para incidir políticamente de acuerdo a sus intenciones. Empero, Mayorga no tenía la intención de hacer frente a las políticas reformistas.

Más adelante, en el periodo de 1779 a 1782, Cossío intentó centralizar diversas funciones de gobierno. Esto con la finalidad de concentrar la capacidad de decisión que facilitaría la reforma burocrática. No obstante, las instituciones afectadas darían cuenta de los perjuicios provocados por esta política a ellos y a la metrópoli. Por ejemplo, no se permitió la creación de un Secretariado Central de Asuntos Fiscales (que resultaba el antecedente de la superintendencia general de México), por lo que la labor transitoria seguía encontrando trabas en la Nueva España¹³². A su vez, la Corona seguía dudando sobre la conveniencia de estas reformas.

Sin embargo, en 1782 se sentó un precedente excepcional para la empresa intendentista. El 28 de enero de ese año, Carlos III dictó la *Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el virreinato del Río de la Plata*, teniendo como base aquellas ordenanzas que habían entrado en vigor en la península. Así, el rey señalaba a sus servidores en el Río de la Plata que

¹³² Cfr. *Ibíd.*, p. 95-96.

cuiden de su policía y recauden los intereses legítimos de mi real erario con la integridad, celo y vigilancia que prefinen las sabias leyes de Indias y las dos reales ordenanzas que mi augusto padre don Felipe quinto y mi amado hermano don Fernando sexto, publicaron en 4 de julio de 1718 y 13 de octubre de 1749; cuyas prudentes y justas reglas quiero se observen exactamente por los intendentes del expresado virreinato¹³³

Las palabras de Carlos III nos indican que debería existir una correcta evaluación entre las leyes que antes operaban en el cono sur y la nueva ordenanza que consistió en doscientos setenta y seis artículos de nueva creación. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos cuáles eran las condiciones percibidas por la Corona que diferían entre la Nueva España y el Río de la Plata para negar la instauración en una y permitirla en la otra. Sabemos a grandes rasgos que en Mesoamérica la oposición de las antiguas instituciones significaba una contra mayor, la cual no se presentaba de manera tan importante en el territorio del sur, que además tenía una significativa densidad poblacional menor¹³⁴.

Por otro lado, aunque Matías y Bernardo de Gálvez pujaron para establecer las intendencias, en franco apoyo a su promotor y familiar José, el primer resultado sólo consiguió establecerlas en la Nueva Vizcaya (actual Durango) y en Puebla hacia 1785. Aunque esto significó una ganancia de terreno frente a su definitiva aprobación. Con esto se contaban tres intendencias novohispanas, debido a que la de Arizpe (Sonora) ya había sido establecida en 1771 debido a la necesidad de administrar aquella lejana tierra y la dificultad que significaba esto para el gobierno virreinal.

Finalmente, el 4 de diciembre de 1786 se presentó el tan anhelado triunfo de José de Gálvez cuando se publicó la *Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España*, la cual se dio a conocer en México mediante un bando "del virrey Alonso Núñez de

¹³³ Introducción a la *Ordenanza de Río de la Plata*, citada en Rees Jones, *op. cit.*, pp. 87-88.

¹³⁴ Este tema necesita una extensa revisión, por lo que estoy imposibilitado a darle un trato adecuado aquí.

Haro, fechado el 10 de mayo de 1787"¹³⁵. Y aunque ésta estaba basada en la anterior, superaba a la rioplatense por treinta artículos, con un total de trescientos seis.

Paradójicamente, José de Gálvez no sobrevivió para ver la entrada en vigor del sistema que tanto defendió, ya que el ministro murió el mismo año en que el virrey Núñez de Haro había presentado la ordenanza decretada por Carlos III. Pero lo más significativo fue que su ausencia dejó a esta reforma sin su más entusiasta promotor. Por lo que los ataques a la inaplicabilidad del contenido del documento legislativo de 1786 no tuvieron dificultades para objetarla y anular buena parte de ella.

3.4 Transformación de las responsabilidades en los cargos públicos

La reforma que proponía el sistema de intendencias no fue el único canal por el que se quería incidir para transformar la administración del virreinato. A lo largo del siglo XVIII se presentaron diversas modificaciones a la política que hasta 1700 había llevado a cabo la Casa de los Habsburgo. La manera de concebir los procedimientos en el gobierno del Antiguo Régimen sufrieron importantes transformaciones en la sucesión del trono a favor de los borbones. Esto nos brinda algunas claves para entender el perfil del gobierno al que aspiraba el despotismo ilustrado. Por esto, debemos atender algunos de los cambios ocurridos en las facultades de los funcionarios novohispanos hacia el siglo XVIII. No obstante, por la amplitud de este tópico, este apartado aborda aspectos muy generales al respecto. Esto me lleva a considerar principalmente este asunto en la figura de los virreyes novohispanos.

Los virreyes fueron los representantes de la Corona en el gobierno superior de América. Ellos eran los encargados de la seguridad, tranquilidad y ennoblecimiento del país. Para cumplir con su labor, el virrey tuvo facultades como máxima figura de la administración del gobierno de las provincias. Pero además concentraba amplias funciones del ejecutivo, ya que fue responsable de nombrar a

¹³⁵ *Ibíd.*, p. 97.

quienes ocupaban cargos en su propia administración¹³⁶. Además debía interceder en cualquier conflicto para mantener la paz, resolvía cualquier desavenencia al interior de la estructura de gobierno, y tenía la capacidad de decisión sobre los casos urgentes –aquellos que no podían esperar a las ordenes del gobierno de la metrópoli. Así, tenían cargo como gobernadores, lo que los facultaba como máxima autoridad del gobierno civil de la provincia de la Nueva España. Por tanto, el virrey

tenía la función de gobierno directo y con carácter inmediato en el territorio de la Nueva España, porque entre el virrey y los funcionarios locales no existía ninguna instancia de nivel intermedio, mientras que la autoridad gubernamental en el resto del territorio que estaba directamente bajo la responsabilidad de un presidente, gobernador y capitán general, o un capitán general y gobernador simple, se limitaba a una especie de supervisión de alto nivel¹³⁷

En el territorio de la Nueva España¹³⁸, el virrey tenía los cargos de presidente de audiencia (quien dictaba normas para los gobiernos municipales) de gobernador y de capitán general (responsable de la seguridad de la provincia). Se le concedió la condición de vice-patrono, con lo que se le permitía regular al clero, pero manteniéndose al margen de los asuntos eclesiásticos. Sin embargo, los virreyes nunca tuvieron facultades jurídicas. Su trabajo se limitaba a la organización de los tribunales, indicando la manera en que éstos debían trabajar. Y aunque se les

¹³⁶ Esto a manera de interinato, ya que la Corona se reservó la designación definitiva de los cargos.

¹³⁷ Pietschmann, *Las reformas...*, p. 69.

¹³⁸ Es indispensable aclarar la diferencia entre el virreinato de la Nueva España, los reinos y las provincias internas que lo integraban. El virreinato de la Nueva España fue la representación del gobierno de la Corona que tenía bajo su jurisdicción (aunque realmente se limitara a labores de supervisión general) a los reinos de México y la Nueva Galicia, además de las capitanías generales de Yucatán, Guatemala, Filipinas, Santo Domingo y, con una supuesta autonomía mayor, Cuba. También tenía jurisdicción sobre los territorios de la frontera norte (Nueva Vizcaya, Nuevo Santander y las Californias en su momento), el situado de San Agustín en la Florida y, por un breve periodo, la Luisiana.

Por otro lado, el reino de México correspondía a los territorios centrales de la actual República Mexicana. Estaba constituido por las provincias internas de México, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Vera Cruz, Valladolid, San Luis Potosí y la gobernación de Tlaxcala. Estas provincias corresponden al territorio de los actuales Estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Ver *Mapa 1* del Anexo.

tenía estrictamente prohibido intervenir en la impartición de justicia, su papel en la interpretación legislativa fue primordial.

Estas prerrogativas que los virreyes habían conservado hasta la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a molestar al gobierno de la metrópoli, ya que no eran compatibles con el extenso control gubernamental que habían procurado para sus dominios europeos desde la mencionada reforma de 1718.

La responsabilidad de los virreyes en la Nueva España durante el siglo XVII y hasta la primera mitad del siguiente fue amplia debido a su doble función como representante del monarca y como gobernador. Sin embargo, hacia mediados del XVIII, las actividades de gobierno fueron desempeñadas por los alcaldes mayores, los corregidores¹³⁹ y los funcionarios de distrito, ya que era imposible que el gobierno central se ocupara de las múltiples tareas administrativas de las localidades.

Bajo este esquema, la planificación del sistema de intendencias buscaba proveer una administración intermedia capaz de articular a los gobiernos locales con la Corona, y que, a su vez, no fuesen regulados por el virrey en la rendición de cuentas a la metrópoli. Por tanto, a través de la instauración de intendentes, la Corona aspiraba a establecer un mayor control sobre la política novohispana. Esto condujo necesariamente a que las facultades del virrey se vieran menguadas por la reforma en el gobierno. No obstante, el incremento en la especialización burocrática que trajo el establecimiento de intendencias condujo a que las tareas administrativas de los virreyes en América se incrementaran. Esto se debió a que el creciente cuerpo de funcionarios públicos reportaban una cantidad mayor de información sobre lo acontecido en las provincias virreinales, por lo que los representantes de la Corona se enfrentaron a un espectro mucho más complejo en ese siglo que el de sus predecesores del XVI y el XVII (quienes tuvieron un mayor margen de acción y no se vieron limitados por el aparato burocrático); además, por la presencia de los nuevos funcionarios especializados, se les prohibió intervenir directamente en la resolución de problemas locales. Esto

¹³⁹ En la figura de los corregidores se encontraban funciones de superintendencia, es decir, responsabilidad de la administración territorial en relación a la supervisión de la burocracia de los municipios a su cargo.

apareció sólo como una limitante nominal ya que, por la gran extensión del territorio, sus antecesores generalmente tampoco tenían la posibilidad de intervenir en los asuntos externos a la meseta central, más que para situaciones relevantes que precisaban de la intervención directa del gobierno virreinal.

Y si bien no hubo diferencia sustancial en la resolución de los problemas locales, que continuarían siendo atendidos por sus propias alcaldías, la Corona también buscó limitar las capacidades de los virreyes mediante la incorporación de procedimientos que debían llevarse a cabo en conjunción con otras instancias de gobierno para cualquier acción ejecutiva. Ejemplo de esto es que, en la segunda mitad del siglo XVIII, el fiscal de lo civil debía ser consultado forzosamente para dar solución a cualquier cuestión de su competencia. Por tanto, el virrey estaba a expensas de la aprobación de estos funcionarios.

Esta *complejización* del aparato burocrático requirió una mayor capacidad administrativa de parte del virrey, por lo que se puede observar la necesidad de nombrar a funcionarios con experiencia previa en cargos administrativos para poder acceder a este cargo. Razón por la cual a lo largo del siglo XVIII los virreyes fueron designados según su trayectoria política. De aquí se desprende que quienes desempeñaron este puesto hacia la segunda mitad de ese siglo no tenían que pertenecer necesariamente a la alta nobleza, sino que se consideró el desempeño de los funcionarios en otros puestos. Por tanto, fue común que los virreyes designados durante el reinado de la Casa de Borbón provinieran de la nobleza baja y media¹⁴⁰.

Durante esta época también preocupó la venta de títulos y cargos. Que si bien fue una práctica perfectamente legal, comenzaba a generar inconformidades al respecto. Los cargos que generalmente podían comprarse fueron los de "escribanos, funcionarios ejecutores de los distintos tribunales judiciales (especialmente alguaciles) y empleados subalternos en organizaciones burocráticas de mayor dimensión"¹⁴¹. Éstos eran subastados y se obtenían de modo vitalicio —y en algunos casos podían heredarse. Además los compradores, a

¹⁴⁰ Cfr. Pietschmann, *Las Reformas...*, p. 77.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 114.

su vez, podían venderlo o arrendarlo. Con base en esta preocupación fue que para el sistema de intendencias, y por sugerencia de José de Gálvez, la Corona prefiriera nombrar a sus nuevos funcionarios en la península.

La búsqueda de transformar las prácticas comunes de los funcionarios públicos hasta entonces llevó también a planificar un nuevo esquema de organización política en donde se evitara concentrar la capacidad de decisión en un sólo cargo o en un sólo cuerpo de funcionarios.

En la nueva planificación de las finanzas públicas encontramos muestras claras de las preocupaciones de la metrópoli por establecer un sistema que le permitiera controlar el aparato burocrático sin otorgar amplias facultades a sus representantes.

Uno de los principales objetivos de las reformas hispanas de la segunda mitad del siglo XVIII fue establecer un sistema financiero que redituara mayores ingresos de lo que hasta entonces se recaudaba en América para la Corona. Por lo que se creó un organismo destinado a regular las actividades económicas llamado Junta Superior de Hacienda.

La creación de la Junta también estuvo encaminada a separar las responsabilidades económicas del gobierno del virrey. Asimismo, quien presidiría la Junta también sería encargado de la intendencia de México, lo que le incluiría las mismas responsabilidades de gobierno que hasta entonces le correspondían al virrey. Así, este organismo tal vez fue el que representó de manera más clara la limitación de los poderes políticos del virrey y de la Real Audiencia, ya que la superintendencia quedó directamente subordinada al rey, y dependería de las ordenes del Ministerio de Indias.

La junta fue la responsable de las causas de Hacienda y Guerra, pero en los casos límite entre lo fiscal y lo jurídico también se encargó de aspectos de la causa de Justicia, como lo fue la administración de propios, arbitrios y bienes de comunidad. Esto porque la junta fue designada como autoridad superior en todo lo relacionado con las finanzas públicas. Por lo que la Real Audiencia también vio modificadas sus facultades, ya que la impartición de justicia en asuntos fiscales era una actividad que correspondía anteriormente a la Audiencia.

Por otro lado, la manera en que se regulaba la Junta al interior distaba de ser una institución tradicional. El superintendente, y presidente de la Junta, no tenía las amplias facultades que antaño habían gozado los responsables directos del gobierno de la Corona en la Nueva España. Este personaje solamente se debía enfocar a la dirección burocrática de las finanzas y a la organización militar, por tanto, la planificación global del gobierno en estas áreas sería una tarea conjunta de toda la Junta Superior de Hacienda.

La Junta estaba integrada, además del presidente, por el Regente de la Audiencia, el fiscal de la Real Hacienda, un contador mayor del Tribunal de Cuentas (el de mayor antigüedad), y un funcionario, que debía ser un contador o un tesorero, residente de la ciudad de México y con la mayor experiencia en las Cajas Reales. Este grupo burocrático, de acuerdo a los deseos de la metrópoli, tendría que funcionar como un cuerpo colegiado para evitar abusos de poder de su presidente. Evitando así que las decisiones importantes recayeran sólo en él de la misma manera en que alguna vez habían recaído en la figura del virrey.

Los problemas de los nuevos cargos, ya entrados en funciones, no tardaron en aparecer. Las actividades del superintendente se vieron incrementadas regionalmente. Como era costumbre en la Nueva España, él también tenía obligaciones agregadas a las de su título principal. Quien fuese superintendente debía además cumplir como intendente de la provincia de México y como corregidor de la capital, por lo que tuvo mayor injerencia en esta zona del virreinato. No obstante, aún con las facultades que extendía el hecho de ser intendente, todas estas atribuciones en la administración de lo financiero y de lo militar, debían ser fuertemente reguladas por la Corona. Y si a esto le aunamos que no tenía posibilidad de tomar decisiones para solucionar alguna situación emergente, tenemos a un funcionario que debía apegarse a lo dispuesto en la reglamentación de la Ordenanza de Intendentes de 1786, con pocas posibilidades de responder a los problemas reales y con una excesiva carga de trabajo burocrático.

La estrategia de las reformas para concentrar el control político en la metrópoli fue limitando las capacidades de los funcionarios públicos, creando nuevas instancias de decisión, y forzándolos a depender de sus homólogos.

Por otro lado, la designación de funcionarios de las provincias internas trajo consecuencias con el sistema de intendencias. Previamente los alcaldes mayores dependieron del "Juicio de Residencia" que valoraba la Audiencia. Pero la sustitución de estos funcionarios por subdelegados reasignó la responsabilidad del nombramiento a los intendentes de provincia. Se perdió la oportunidad de los oidores de la Audiencia para desempeñarse como asesores y, con esto, se generó una disminución en sus ingresos debido a que no podían seguir cobrando por este servicio extra al ser absorbido por los intendentes.

La Audiencia, sin embargo, mantuvo sus responsabilidades como "Tribunal de Apelaciones para juicios civiles y penales"¹⁴², dejando los casos administrativos a competencia del virrey, los intendentes o la Junta Superior –según fuera el caso.

A partir de estos ejemplos podemos observar la transformación del aparato burocrático, en donde se quería integrar un principio de vigilancia mutua. Las autoridades novohispanas que fueron designadas en el sistema de intendencias tenían que ejercer sus funciones bajo un esquema de colegialidad que sirvió para justificar la especialización y profesionalización del aparato burocrático.

No obstante, este nuevo esquema administrativo conduciría a una multiplicidad de conflictos entre aquellos cargos que frecuentemente disputaban su autoridad para ocuparse de la administración de acuerdo a las facultades que la Corona les había concedido. Por esto muchas veces los representantes de la Corona que conformaron la nueva burocracia profesional se vieron involucrados en debates sobre la pertinencia de ciertos problemas para sus cargos.

3.5 Conflictos entre competencias

Los conflictos que surgieron en la nueva designación de cargos con las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII, y especialmente con la aplicación de la

¹⁴² *Ibíd.*, p. 149.

Ordenanza de intendentes de 1786, se presentaron en diferentes escalafones de la jerarquía monárquica. No podemos dar cuenta de ellos sin señalar antes que los conflictos entre competencias no surgieron especialmente después de la aplicación de la Ordenanza, ya que a lo largo del periodo virreinal se presentaron incidentes imprevistos que exhibieron la falta de claridad en la asignación de funciones a los funcionarios de la Corona. Sin embargo, con la aplicación del sistema de intendencias aumentaron los roces de este tipo. Una explicación de ello puede ser que con la especialización burocrática se redactó un mayor número de documentos que reportaban todos los asuntos de gobierno. Pero aún así, esto no explicaría por qué las sentencias finales no se dictaron en la metrópoli. Y en este sentido, sabemos que la facultad ejecutiva con la que contaron los virreyes fue un filtro importante para evitar que eso sucediera.

Además, los asuntos difícilmente llegaban al virrey, ya que la lentitud de las comunicaciones (cosa que continuaré recordando) favoreció a las tradiciones locales para resolver sus propios conflictos; a menos de que los implicados o perjudicados no pertenecieran a la misma jurisdicción provincial, en cuyo caso su resolución debía ser designada a una instancia mayor.

Empero, con el sistema de intendencias surgió un constante enfrentamiento entre funcionarios. Incluso para procedimientos simples, ya que los burócratas procuraron ser tan minuciosos, como de hecho se les había insistido, que muchas veces terminaron poniendo trabas a acciones a las que podían dar solución inmediata. Aunque la cuestión era que los profesionales frecuentemente estaban aferrados a hacer valer sus facultades de acuerdo a las órdenes dictadas. Lo que nos indica que la división del trabajo administrativo no podía ser funcional con tantos huecos en la asignación de facultades.

Los grandes problemas ejecutivos se evidenciaron con las limitaciones hechas al virrey. Por ejemplo, en 1788, el virrey interino en turno, Núñez de Haro, ordenó a dos de sus oficiales reportarse con las tropas acantonadas en el norte. Para ello era necesario que se le adelantara a éstos su salario, con el fin de contar con recursos para desplazarse. Por lo que el virrey tuvo que solicitar tal pago al superintendente quien consultó con la Junta Superior de Hacienda la provisión del

monto extraordinario. Y si bien el pago se autorizó, la Junta señaló que, de acuerdo al reglamento administrativo, esos asuntos competían directamente al superintendente en su calidad de presidente. Al enterarse de esto el asesor general del virrey desaprobó la decisión, argumentando que el virrey, en tanto capitán general del ejército, tenía dentro de su jurisdicción el derecho de pedir los recursos. Este asunto, por supuesto, no tenía una solución clara de acuerdo a lo plasmado en el nuevo documento legislativo.

Poco a poco los conflictos entre competencias se hicieron más notorios. Incluso apenas un año después de ser sancionada la Ordenanza, se presentaron de manera inmediata problemas entre el virrey Manuel Antonio Flórez y el superintendente general Fernando José Mangino. La Corona resolvió evitar las controversias entre los cargos de virrey y superintendente general. Para lo cual anunció al virrey que Mangino sería reasignado como miembro del Consejo de Indias, debiendo presentarse inmediatamente en la metrópoli. A su ausencia, las responsabilidades del superintendente debían ser absorbidas por el virrey. Así, el 4 de febrero de 1788, el superintendente debió entregar al virrey la dirección de todos los asuntos oficiales que le competían ¡a menos de un año de haber entrado en vigor la Ordenanza!

En ese mismo año comenzó una controversia en donde se cuestionaba si las disposiciones del nuevo sistema de intendencias debían de ser obedecidas cabalmente y de manera inmediata, o si sería conveniente que su aplicación se realizara paulatinamente. El fiscal de Real Hacienda, Ramón de Posada y Soto, asentó el 12 de Mayo de 1788 que "todo lo que la ordenanza de intendentes determina debería ser puesto en vigor inmediatamente después de su publicación, sin consideración a otras leyes, instrucciones o costumbres, tal como está específicamente explicado en el artículo final". Este personaje llevaba ya varios años siendo fiscal. Así como él, diversos funcionarios estaban conscientes de la necesidad que existía para lograr una mayor recaudación fiscal debido a la crisis monetaria. Pero además se exponía la obligación de apegarse a los decretos reales. Si bien la legislación difícilmente se había aplicado en todo el territorio hasta entonces, y todavía menos se respetaban los nuevos bandos reales, en el

espíritu de la reforma de intendentes yacía un énfasis para establecer un verdadero respeto a lo dictado por el monarca; en donde se quería hacer valer la ley para mantener un verdadero control sobre los reinos hispanos, de acuerdo a los parámetros que ambicionaba el despotismo ilustrado.

Sin embargo, esa fue sólo una posición, ya que muchos otros eran más escépticos sobre la aplicación de las reformas, ya que pensaban que no podrían llevarse a cabo en los términos que disponía la Ordenanza. Si bien, en un principio la mayoría de los funcionarios, y principalmente aquellos que provenían de Europa, estuvieron fuertemente comprometidos con el proyecto reformista, con el paso del tiempo su entusiasmo fue apagado por la realidad a la que se enfrentaron. El mismo virrey Flórez, quien ya contaba con una gran experiencia en gobierno al haber estado al frente del virreinato de la Nueva Granada, escribió al monarca el 28 de octubre de 1788 para expresarle sus dudas acerca de la reforma, a tan sólo cinco meses de la declaración de Posada, y a menos de un año de habersele concedido las facultades de superintendente general (lo que le regresó a la figura del virrey cierta capacidad ejecutiva en materia fiscal). En su carta expresó: "Aconsejo a su Excelencia que, según mi opinión, los puntos de mayor peso acerca del tributo y otros importantes de la Ordenanza no se pongan en vigor al mismo tiempo en todo el reino, sino poco a poco y sin provocar la atención de la intranquilidad de la población".

Aquí observamos la cautela, cuando no reservas, que muchos de los representantes de la Corona tenían sobre la factibilidad de la aplicación del nuevo documento legislativo. Y aunque todos los funcionarios provenientes de la metrópoli estaban convencidos del valor de la profesionalización del gobierno a través de una reforma, muchos de ellos sabían que de aplicarse sin considerar a las viejas instituciones se podría generar un descontento tal que arrojarían fuertes roces en la sociedad novohispana. Porque aun que los españoles nacidos en América eran también partidarios de la empresa reformista que buscaba incrementos en la producción y un mayor control de la vida pública, también existieron inconformidades con la manera en que se les desplazó, en tanto grupo, de los altos cargos en gobierno. Y si bien ya se ha reducido parcialmente la

hipótesis sobre la marginalidad de la élite criolla en el periodo colonial tardío¹⁴³, es totalmente cierto que la gran mayoría de los nuevos funcionarios del sistema de intendencias, tal como fue el deseo de José de Gálvez, fueron seleccionados entre aquellos servidores nacidos en la península con experiencia burocrática. Y en este sentido, algunos reclamos entre competencias surgieron del enfrentamiento entre las viejas y las nuevas instituciones. Las primeras dominadas generalmente por la élite criolla y las segundas a cargo de muchos recién llegados.

Un ejemplo claro de esto nos lo da el trabajo de Ana Irisarri, quien indica que en la provincia de San Luis Potosí en particular no existieron problemas de gravedad durante la instauración de la intendencia. De hecho fue una de las intendencias en donde existió mayor continuidad entre sus mandatarios, con sólo dos interinatos (José Ignacio Vélez [1804–1805] y José Manuel Ruiz de Aguirre [1806–1809]¹⁴⁴) y además fue una de las que más fácil aceptó las modificaciones que consecutivamente se harían para mantener la armonía entre el gobierno virreinal y la intendencia¹⁴⁵. Sin embargo, incluso en esta provincia se suscitaron problemas de competencia entre el cabildo de la ciudad española, dominado, como lo fue en todas las ciudades novohispanas, por la élite criolla, y la autoridad del intendente.

Corriendo el tercer mes de 1790 se presentaron problemas entre los regidores potosinos y el intendente, de lo cual se haría cargo el teniente letrado Vicente Bernabeu (quien fallecería preso esperando sentencia después de haber sido acusado de corrupción) en representación del intendente Bruno Díaz de Salcedo, ausente por haber salido a realizar tareas de visitación (de superintendencia) a algunos pueblos de la provincia. Y sucedió que "el letrado, de carácter más osado que el intendente, se enfrentó directamente con el cabildo al tratar de imponer una serie de normas para el 'orden' y la 'higiene de la ciudad', concretamente

¹⁴³ Cfr. Irisarri Aguirre, Ana. *Reformismo Borbónico en la provincia de San Luis Potosí durante la Intendencia*, Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, p. 70.

¹⁴⁴ Cfr. Rees Jones, *op. cit.*, p. 213. A este dato hemos de agregar que los intendentes interinos fueron los tenientes letrados, tal como estaba establecido en la Ordenanza. Además los dos se mantuvieron por periodos considerables (un año y tres años) lo que indica que no hubo problemas urgentes por que fuesen estas personalidades quienes asumieran el cargo.

¹⁴⁵ Cfr. Irisarri, *op. cit.*, pp. 117-119.

desalojando a los vendedores situados en la Plaza Mayor porque impedían el paso". Por esta razón el Ayuntamiento se había opuesto al teniente letrado, indicándole que todo asunto de policía (cosa que todavía entonces no significaba lo que ahora nos resulta familiar) era un asunto que competía directamente al cabildo. No obstante, si referimos a que de acuerdo a la nueva Ordenanza el intendente era el principal representante del gobierno civil en la capital de las intendencias, además de habersele designado para procurar el *orden y la paz*, parece que a él le correspondería tal labor. Y, por otra parte, el Ayuntamiento era la mayor autoridad en la ciudad por tradición. De hecho la población recurría directamente a él para solucionar cualquier inquietud de competencia pública. Por tanto, los asuntos de policía, cuestiones del bienestar público, no tenían una autoridad definida que estuviera a cargo después de la reforma. Así, la finalidad de la Ordenanza, que era la búsqueda por lograr una mayor eficiencia en el gobierno, no fue lograda e incluso, como lo vemos en este caso, trajo dificultades en algunas acciones conjuntas de gobierno.

Aquí vemos que si bien Irisarri indica que fueron muy pocas las dificultades que hubo entre la intendencia y el gobierno virreinal, al interior no siempre se preservaron las buenas relaciones entre la élite y las nuevas autoridades en los primeros años del nuevo gobierno.

Otro contratiempo que tuvo la aplicación cabal de las reformas fue que a la muerte del entonces ministro de Indias y principal impulsor de ellas, José de Gálvez, los asuntos trascendentes ya no dependerían del ministerio. La responsabilidad entonces se repartió en dos organismos, por un lado la Secretaría de Guerra y Hacienda, y por el otro la Secretaría de Gracia y Justicia. Sin embargo, debido al contenido de la Ordenanza, las controversias surgidas con ella debían ser solucionadas en su mayoría por la primera. Pero de esta designación también se presentaron problemas de competencias, ya que se había creado la Junta Suprema de Estado, a la cual la Corona había confiado los asuntos importantes que afectaran directamente sus intereses en los reinos transoceánicos¹⁴⁶. Esta situación derivó en una confusión de cuál de estas

¹⁴⁶ Cfr. Pietschmann, *Las Reformas...*, p. 265.

instancias tendría prioridad en la resolución de controversias y en qué ámbitos específicamente.

A partir de la ausencia del ministro de Indias se presentaron diversas alteraciones en la autoridad de los intendentes. Otra modificación a lo dispuesto en la Ordenanza se presentó el 7 de octubre de 1788, cuando una Real Orden mandaba que el nombramiento de los subdelegados (quienes eran civiles que, de acuerdo a la Ordenanza, serían los informantes de los intendentes en todas las localidades de las provincias¹⁴⁷) ya no debía ser ratificado por los intendentes, sino que sería el virrey quien los confirmara. Y, posteriormente, la autoridad de los intendentes para el nombramiento de los subdelegados fue menguada nuevamente. En 1792 la Junta Superior de Estado ordenaba que el virrey elegiría a los subdelegados a partir de una terna propuesta por el intendente. El cargo tendría una duración de cinco años y el virrey tendría la autoridad para reemplazarlos si justificaba la razón.

Por otro lado, los años siguientes a 1786 significaron un período de prueba en donde quedó patente la arbitrariedad con la que habían sido redactados los artículos de la Ordenanza de Intendentes. El desconocimiento de las condiciones de la vida social novohispana en la península era abismal. Con todo y que jamás habían cesado las visitas de europeos a América con el objetivo de regresar a la metrópoli a dar cuenta de las condiciones de vida, las reformas mostraron que la información que la Corona tuvo para dar forma a sus transformaciones administrativas fue insuficiente. Asimismo, también actuó la ingenuidad de creer que se podría transformar toda la dinámica social solamente a partir de la modificación legislativa. Esto nos obliga a revisar algunos aspectos en donde la falta de información y la soberbia administrativa llevaron a la reforma a fracasar.

¹⁴⁷ Estos personajes tuvieron atributos que resultan de especial interés para el presente trabajo, por lo que serán estudiados con mayor detalle en el último capítulo.

3.6 Problemas territoriales de la instauración de Intendencias

Los cambios pretendidos con las Ordenanzas de Intendentes buscaban establecer una administración más uniforme en los reinos hispanos. La anterior organización de los poblados en la Nueva España estuvo a cargo de alcaldes mayores y corregidores que, si bien eran puestos existentes a lo largo de todo el territorio, sus funciones resultaban bastante heterogéneas debido a que obedecían a realidades sociales muy distintas a lo largo de las diversas zonas del virreinato.

En el plano legal fue evidente la multiplicidad de interpretaciones sobre la legislación hispana. Aunque desde el siglo XVI existieron extensos documentos sobre la manera en cómo debían establecerse los marcos legales (Colecciones de leyes de Indias) en relación a los grupos estamentales, éstos no clarifican las funciones precisas de los servidores públicos, así como tampoco lo hacen para el desarrollo tipificado de la normatividad que debían mantener. Por tanto,

La inexistencia de una forma escrita fija de las tradiciones legales estrechamente unida al derecho consuetudinario, muy extendido y entrelazado con los derechos especiales surgidos del muy extendido ámbito de privilegios, tampoco especificados en ninguna colección de leyes, causaba ya en aquella época muchas controversias¹⁴⁸

Esto nos habla de un constante enfrentamiento entre los deseos de la modernización y la manera tradicional de la organización virreinal existente. La finalidad del sistema de intendencias fue estandarizar el funcionamiento de todos los gobiernos provinciales. El ideal del nuevo gobierno hispano pretendía que todas las intendencias se administraran de igual manera para que se controlaran fácilmente desde la metrópoli. Pero el intento por homologar la autosuficiencia de los gobiernos de los intendentes presentó diversas dificultades en la Nueva España, debido a que los centros urbanos a los que se asignaron las obligaciones fiscales y civiles de diversas localidades después de la reforma administrativa, no siempre correspondieron con aquellas ciudades que tradicionalmente se habían hecho cargo de estos asuntos.

¹⁴⁸ Pietschmann, *Las Reformas...*, p. 169.

También fue muy común que las actividades económicas de un partido (que eran las subdivisiones internas de las intendencias –generalmente equiparadas a las alcaldías y corregimientos) estuvieran supeditadas a ciudades que se encontraban en provincias vecinas. Esta situación hacía que los gobiernos de las intendencias difícilmente pudieran mantener un control pleno sobre las actividades que se desarrollaban al interior de sus territorios.

La jurisdicción en territorios delimitados, en donde se puede ubicar cartográficamente un interior y un exterior (de la manera en que hoy en día es muy común para nuestras representaciones políticas espaciales), no operó siempre así en la Nueva España. De hecho, encontramos que las alianzas entre pueblos en el centro del país no concebían, desde tiempos prehispánicos, una distinción de territorios conjuntos, sino el reconocimiento de la pertenencia a una cabecera sin que estos poblados se localizaran contiguamente¹⁴⁹. Esto en cuanto a la tradición americana se refiere, y por consiguiente el desconocimiento de esta realidad en la planeación de las reformas de los borbones contribuyó enormemente a la inaplicabilidad de la autonomía entre intendencias.

Además, en la división territorial existieron dos casos donde las provincias internas, que se convirtieron en intendencias, tenían jurisdicción sobre dos territorios separados. En los mapas que se pueden apreciar en la Ordenanza de 1786, Zacatecas y Veracruz aparecen en un solo bloque de tierra, sin embargo, ambos estaban divididos en dos por franjas territoriales que pertenecían a la intendencia de Guadalajara, en el primer caso, y a la de Puebla en el segundo¹⁵⁰ (Véanse los Mapas 2 y 3 en el Anexo del presente trabajo¹⁵¹).

Esta situación nos sugiere dos cuestiones a considerar. En principio, una vez más queda demostrado el desconocimiento de la vida social del virreinato por parte de los funcionarios metropolitanos. Porque las figuraciones territoriales de

¹⁴⁹ Un ejemplo de esto son los pueblos que permanecieron sujetos a Tenochtitlán y Tlatelolco. El Mapa 4 en el Anexo de este trabajo muestra cómo, en lugar de que las poblaciones se ubicaran de manera uniforme dentro de un territorio delimitado, existía una constelación de poblados que compartían una zona, pero que se reconocían sujetos a distintas cabeceras.

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 122-123.

¹⁵¹ El Mapa 2 corresponde a un trazo más cercano a como se pensó la división territorial en la metrópoli. El Mapa 3 muestra la separación en dos de las provincias de Veracruz y Zacatecas.

quienes vertieron la información cartográfica no contaban con datos precisos. Ahora bien, en segundo lugar esto contrapone lo local a lo provincial, y al mapeo virreinal; porque fue hasta después del establecimiento de intendencias cuando se cayó en cuenta que existían poblados intermedios que estaban bajo la jurisdicción de las provincias que dividían a las otras en dos. Esto, bajo la perspectiva territorial moderna no tendría mucho sentido, tan es así que actualmente esos territorios están integrados en uno sólo, es decir, se pueden dibujar en los mapas con un solo trazo.

Asimismo se presentaron diversos traslapes entre los territorios designados a intendencias con respecto a sus obligaciones jurídicas, fiscales y de carácter eclesiástico que tradicionalmente habían reportado sus actividades a los gobernadores de otras provincias. Por ejemplo, la intendencia de San Luis Potosí nunca estuvo en condiciones de obtener la autonomía pretendida por las ordenanzas. Primeramente porque parte de su territorio correspondía a la Audiencia de México, y por otra parte a la Audiencia de Guadalajara. Pero además, lo que resultó en un forcejeo constante de parte de los religiosos potosinos, las parroquias de este territorio estaban supeditadas al arzobispado de Valladolid. Todo esto apunta a la consideración de Irisarri acerca de que con

la fundación de la Intendencia se trató de cohesionar una serie de territorios que hasta entonces habían pertenecido a jurisdicciones distintas con el fin de vertebrar el espacio interior y lograr una administración más eficaz, sin tener en cuenta las características geográficas o culturales de los territorios afectados¹⁵²

Otro ejemplo claro de esto es que después del decreto del estanco del tabaco, el cual aseguraba el monopolio de la producción de cigarrillos a la Corona, los partidos de San Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende) y San Luis de la Paz Guanajuato, debían presentar su cosecha tabacalera a la factoría de Valladolid (Michoacán)¹⁵³.

¹⁵² Irisarri, *op. cit.*, p. 22.

¹⁵³ Pietschmann, *Las reformas...*, p. 127.

Estos casos en donde hubo traslapes entre los territorios por el funcionamiento de los monopolios y las alcabalas que éstos causaban fueron muy comunes. Así lo evidencia que el partido de Jalapa debía reportar a la factoría de tabaco de Puebla. Y, en la situación contraria, las administraciones de los monopolios de *naypes* y pólvora de Tehuacán, poblado localizado al interior de la intendencia de Puebla, estaba subordinado a Veracruz. Así también ocurrió que

el administrador del mismo impuesto del partido de Huachinango (Puebla) dependía de la factoría de México, así como el del partido de Huayacocotla (Puebla) para cuestiones de la alcabala dependía de la Renta de Correos y de los monopolios de tabaco, pólvora y *naypes* de la intendencia de México, mientras que el administrador de la alcabala y del tabaco del partido de Ygualpan (Puebla) estaba subordinado a la intendencia de Oaxaca¹⁵⁴

Existen muchos casos que muestran esta situación (los cuales menciona el mismo Pietschmann¹⁵⁵), por lo que a partir de ellos nos percatamos que la organización territorial de las intendencias era incompatible con la manera en que la Corona había dispuesto sus propios monopolios. Así, las dificultades no sólo se presentaron por las actividades tradicionales de los pueblos de indios, del comercio, y de las instituciones eclesiásticas, sino también por las disposiciones mismas de las reformas que la Corona había llevado a cabo unos años antes.

Esto resulta significativo si consideramos que la implementación del estanco del tabaco fue un mandato contemporáneo al proyecto de las intendencias. Cosa que nos habla de que la reforma política de la segunda mitad del siglo XVIII fue ambiciosa pero altamente ineficiente. Por tanto, todas estas causas dificultaron excesivamente la uniformidad administrativa que el sistema de intendencias quería instaurar. Contrario a la eficiencia de la administración que buscaban lograr los asesores ilustrados de Carlos III, persistían los vicios de la tradición legislativa hispana, en donde se acostumbraba a generar una multiplicidad de leyes inaplicables.

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 128-129.

¹⁵⁵ Cfr. *Ídem*.

Por último, habría que aclarar, que la situación geográfica no se limita simplemente a la división política territorial, sino que el aspecto geográfico conlleva la manera en que las sociedades se organizan a partir del terreno que habitan y de los recursos que de él obtienen, es decir, cómo las condiciones del territorio limitan y posibilitan a sus habitantes. A partir de esta consideración podemos apreciar que quienes implementaron la delimitación espacial de las intendencias americanas desde la metrópoli mostraron una incompreensión general de la vida social de la Nueva España.

3.7 El Estado precursor del liberalismo

El proyecto político de los Borbones ha sido catalogado de insuficiente y superficial, en relación a sus objetivos fundamentales. Sobre todo si consideramos que en la metrópoli existía un gran desconocimiento de la dinámica social novohispana y de su tradición corporativa. Resalta el choque entre la concepción de la eficiencia burocrática y el alto desconocimiento del virreinato de la Nueva España. Por lo que se trató de imponer un modelo a la realidad, en lugar de que fuera ésta la que mostrase las posibilidades de aplicar una reforma de este tipo. En este sentido, el proyecto fue impulsado *desde arriba*, por quienes se encontraban en la cima de la jerarquía gubernamental, y desde fuera, en relación a las instituciones del propio virreinato.

El sistema de intendencias tuvo un esquema que muchos de los defensores del liberalismo político lo reconocerían en él, debido a que consistía en homogeneizar la legislación a partir de una organización que funcionara de igual manera al interior de cada provincia. Por lo que la uniformidad que se quería implementar, tanto a nivel provincial como en todo el virreinato, resulta un precedente directo de la estructura misma de los Estados constitucionales, especialmente aquellos cuya estructura política se basa, aunque sea sólo nominalmente, en el federalismo.

No obstante, esto debe ser interpretado en su justa dimensión. No es posible afirmar tajantemente que en esta época existiera un afán por homologar absolutamente todo. Muestra de ello es que se mantuvieron intactas las

diferencias entre estamentos. Y de hecho es posible reconocer el interés por aplicar efectivamente las leyes (de la *Recopilación*) que habían tomado forma mucho antes que la *Ordenanza de Intendentes*. Por supuesto con ciertas modificaciones, pero haciendo patente la necesidad de retomar sus contenidos. Razón por la cuál se quiso establecer un sistema que lograra vigilar su cabal cumplimiento; empero, con todo y el reconocimiento de las normas diferenciadas entre estamentos, el proyecto pretendía igualar las mismas disposiciones en las distintas regiones del reino, cosa que, como hemos observado, fue imposible.

Asimismo, el deseo por incorporar a los bajos estamentos a la lógica productiva y comercial (también para el beneficio de lo fiscal) nos muestra, por un lado, el triunfo definitivo de esta convicción en el programa de gobierno hispano, porque si bien observamos que las ideas entorno a la activación de la economía y la preocupación por las consecuencias de la presencia excesiva de metálico corriente preceden por más de un siglo al proyecto Borbón, para esta época se establece una política se buscaba desaparecer las regulaciones monopólicas para favorecer la inclusión de nuevos actores a la producción y al comercio; esto es, como ya lo he indicado, la socialización del interés mercantilista dentro de las funciones del gobierno. Lo cual se puntualiza con la misma apreciación de Weber, quien nos dice que el "mercantilismo implica, por consiguiente, potencias formadas a la moderna: directamente mediante el incremento del erario público; indirectamente mediante el aumento de la capacidad tributaria de la población"¹⁵⁶. Promoviendo un programa que tenía como finalidad que se garantizara el compromiso de los individuos con la labor del Estado.

Por otro lado, esta situación también nos muestra una tendencia hacia la divulgación de lo que posteriormente se definiría como una ciudadanía útil. Lo cual se acercó paulatinamente a la exigencia de las mismas obligaciones, que en principio serían fiscales, para un cuerpo de individuos económicamente activos. Así, la emergencia de la noción de igualdad entre individuos, los cuales deberían llevar a cabo actividades similares, provocaría también consideraciones en torno a la igualdad jurídica de los mismos.

¹⁵⁶ Weber, Max. *Historia Económica General*, p. 292.

En este sentido, no podemos hablar de un rotundo fracaso de las ideas políticas que impulsaron el proyecto político de los Borbones. Aunque el intento de instaurar el sistema de intendencias se encontró con múltiples oposiciones que lo llevaron a limitar de manera importante su alcance, el conjunto de ideas economicistas que dio forma al programa del gobierno hispano se mantuvieron después del relativo fracaso del sistema de intendencias, y todavía más.

Capítulo 4. Precedentes de la ciudadanía moderna en la Nueva España

La noción de *ciudadanía* a finales del siglo XVIII no se concebía con todas las características que resultan familiares a quienes ahora la estudian. Si bien hacia los años mencionados, como lo observaremos en el presente capítulo, se popularizó el uso de la palabra *Ciudadanos*, ésta generalmente aludía a aquellos vecinos de la ciudad que hacían uso de las maneras del llamado *urbanismo*. El concepto aún no tenía una referencia explícita a lo jurídico y a la participación en gobierno como podríamos suponer. No obstante, durante esta época emergieron debates importantes sobre las dimensiones que posteriormente serían vinculadas a la ciudadanía. Por tanto, el objetivo principal de este capítulo es destacar las nuevas valoraciones en torno a lo político y a la impartición de justicia que después serían asumidas por una condición de los ciudadanos en plenitud de derechos.

El interés principal aquí, por tanto, es vislumbrar las prácticas que caracterizaron a la *protociudadanía* en la Nueva España. Con este concepto refiero al ejercicio del tipo de actividades propias de la ciudadanía moderna, pero que preceden a su identificación bajo el uso del término *ciudadano*. El punto de partida se sitúa en la identificación de estas prácticas dentro de las disposiciones de la Ordenanza de 1786 y en las consideraciones del virrey Segundo Conde de Revillagigedo en la *Instrucción Reservada* que dejó a su sucesor. Estos documentos nos servirán como reflejo de lo deseado para la política de la Nueva España. En ellos busco rastrear los temas que resultaron elementales para la definición de la ciudadanía, adelantándome a su trazo con respecto en las épocas posteriores a la que se ocupa este trabajo. Un examen que incluye la participación en los asuntos de gobierno, la conformación de algunas instituciones encargadas de la administración de justicia, la inclusión de civiles en política y el principio de elección, nos arrojará un panorama lo suficientemente amplio para identificar estos elementos dentro de la definición del perfil ideal del ciudadano moderno. No obstante, esto sólo nos aproxima a los deseos de la Corona y de sus altos

funcionarios. Si bien hasta este punto podremos distinguir lo que se concibió como deseable para la administración de sus instituciones y las características ideales de quienes fuesen designados para los cargos dentro de ellas, así como a una noción del súbdito útil y capaz, aún no habríamos dado cuenta del ejercicio propio de las prácticas *protociudadanas*.

Por tanto, posteriormente abundaré sobre ciertos cambios que se produjeron en el proceso del gobierno novohispano de la segunda mitad del XVIII, evidenciando las circunstancias políticas que eran influidas por el pensamiento social de aquél siglo. Estos cambios aluden, principalmente, a transformaciones en las prácticas de los habitantes de la Nueva España. Por lo que a partir de ellos rastrearé las tensiones en torno a los temas que atañen a la ciudadanía; además de que esto me permitirá situar las circunstancias que favorecieron la peculiar delimitación de los derechos y obligaciones de quienes serían potencialmente reconocidos dentro del perfil de ciudadano mexicano hacia la primera mitad del siguiente siglo.

4.1 Características de los nuevos ciudadanos en Nueva España

Hacia finales del siglo XVIII la palabra *Ciudadano* o *Ciudadanos* comenzó a utilizarse cada vez más. Por supuesto, esta expresión tuvo su antecedente en aquella otra de *Vecino*, no obstante, el cambio en el uso de la palabra supone también un cambio en el concepto, lo cual es indispensable tomar en cuenta para atender aquellas características que pudieron haberse transformado¹⁵⁷. Así, para poder adentrarme en las ideas y prácticas sociales que surgieron o permanecieron durante esta época y que están vinculadas con lo que ahora reconocemos como ciudadanía, me concentraré en la revisión de algunos documentos de la época que reflejan claramente el sentir ilustrado. Por un lado se encuentra la *Ordenanza de Intendentes de 1786*, en especial las proclamas generales sobre el establecimiento de intendencias, lo cual corresponde a la primera parte del documento, y la sección preparada para la "Causa de Justicia". Por otro lado,

¹⁵⁷ Al respecto véase el apartado *De vecinos a ciudadanos*, en el segundo capítulo del presente trabajo.

revisaré la Instrucción Reservada de Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, Segundo Conde de Revillagigedo, escrita en 1794, la cual dejó a su sucesor Marqués de Branciforte.

El objetivo de la revisión de estos escritos es contrastar el perfil del ciudadano moderno en los discursos y valores de la época. Sin embargo, no quisiera dejar esto como un asunto sobreentendido, por lo que para distinguir los elementos que constituyeron el ideal de la ciudadanía republicana hacia fines de aquel siglo debemos de establecer que éstos corresponden a dos dimensiones. En primer lugar, la idea de ciudadano moderno alude a sus facultades políticas, es decir, la capacidad de pertenencia a un gobierno y a la participación dentro del mismo. Por un lado esta dimensión brinda prerrogativas, como el derecho al voto y a asumir cargos públicos (sean o no de elección popular); y obligaciones, como la colaboración irrestricta, la cual se materializa más claramente en la prestación de servicios a la milicia y, en un sentido no coercitivo –debido a que también tiene condición de derecho, el voto.

En segundo lugar se encuentra la dimensión jurídica. Esta supone que existe un sistema de justicia en donde todos los ciudadanos son sujetos de derecho que, en un régimen constitucional, se encuentran en iguales circunstancias ante la ley. Si bien esta dimensión apunta al acceso de una correcta impartición de justicia, lo que da forma a ello es el establecimiento de un marco legislativo que sirve como una base procedimental; es decir, en términos ideales, la legislación debe contener y garantizar los valores y necesidades sociales que se buscan defender. Con esto entendemos que sólo a través una legislación que se perciba como legítima y justa es posible proveer justicia. No obstante, el hecho de que dicha legislación tenga un arreglo adecuado con respecto a los intereses de la población a la que va dirigida, no garantiza, *per se*, la correcta impartición de justicia, debido a que el sistema jurídico puede ser ineficiente o corrupto. Asimismo, debemos atender que las obligaciones que el Estado dispone para su población a través de las leyes son parte también de esta dimensión. Por tanto, los asuntos del orden cívico y los del aparato fiscal forman parte también de estos aspectos jurídicos.

Aquí no busco, por supuesto, hacer una revisión exhaustiva de las dimensiones del concepto de *ciudadanía*, cosa que he hecho en otro lado¹⁵⁸, sin embargo, es necesario establecer de manera general cuáles son los elementos en los que he puesto interés dentro de los documentos revisados, en vías de hallar de qué manera se fue entendiendo el perfil de ciudadano moderno durante esta época.

Debo dar paso a este análisis advirtiéndole que muchos de los atributos de quienes a finales del siglo XVIII se vinculaban con la participación en gobierno no surgieron durante este tiempo. Por ejemplo, una de las cuestiones más valoradas en estos años para quienes ocuparon cargos públicos, como lo veremos, fueron sus capacidades y sus méritos. Esto es importante destacarlo ya que la noción de la participación política de los ciudadanos en los Estados que se opusieron posteriormente al *Antiguo Régimen* también heredaron la convicción de que los sujetos políticos debían ser valorados de acuerdo a sus méritos, y no por sus títulos o ventajas familiares. Empero, estas valoraciones, si bien se popularizaron durante la época del despotismo ilustrado, se encontraban ya en las disposiciones de la *Recopilación de Leyes de Indias*:

el rey pedía al consejo que le propusieran candidatos para las prelacías, dignidades, prebendas y otros beneficios eclesiásticos, así como presidencias, plazas de asiento y demás oficios de justicia y hacienda, y que fueran 'personas de calidades, letras, virtud, entendimiento suficiencia, experiencia y aprobación'. Estas cualidades eran precisamente las que los graduados trataban de reflejar en sus relaciones de méritos¹⁵⁹

La valoración de los méritos fue una constante desde el siglo XVII. La cuestión entonces es atender qué tipo de capacidades eran más apreciadas en los años que corresponden a la aparición del término *ciudadanía*. El mérito no correspondía siempre a las habilidades de un súbdito. Esto resulta evidente con la frase pronunciada por Revillagigedo: "largo mérito pero de corta aptitud", cuando se

¹⁵⁸ Cfr. Chimal, *op. cit.*, pp. 20-58. Para una breve perspectiva histórica sobre la construcción de la ciudadanía moderna véase también: Aláez, Benito. "Nacionalidad y Ciudadanía: Una aproximación histórico funcional" en *Revista Electrónica de Historia Constitucional*, Número 6, Septiembre de 2005, AS-2115-99 ISSN: 1576-4729, <http://hc.rediris.es/06/articulos/html/Numero06.html>

¹⁵⁹ Aguirre Salvador, *op. cit.*, p. 34.

refirió a aquellos funcionarios que habían prestado un largo servicio a la Corona, pero, a consideración de este virrey, no demostraban tener las habilidades que sus cargos demandaban. Al oponer mérito y aptitud podemos intuir que el primero apuntaba principalmente a la carrera de servicio, lo cual garantizaba la lealtad y la disposición al Estado. Por otra parte, la aptitud abarcaba lo que en la época se denominaba suficiencia, es decir, las capacidades que tenía un sujeto para desempeñarse adecuadamente en las funciones que había asumido.

Estos atributos fueron los que, al menos en el papel, se buscaron en los nuevos representantes de la Corona, en especial en aquellos cargos de nueva creación. Y son éstos los que nos pueden dar una pista para entender el tipo de participación de los funcionarios en la pretendida (y, como hemos visto, fallida) reforma en el gobierno.

4.1.1 El ciudadano dispuesto por la Ordenanza de Intendentes

El papel de las nuevas autoridades de las localidades es el que particularmente interesa aquí debido a que éstas contaron con un perfil que sugiere el inicio de una participación civil en el gobierno de intendentes. La colaboración de los civiles, en tanto individuos que no forman parte formalmente de la administración gubernamental ni son activos del ejército, en los asuntos públicos advierte la aparición de un elemento común de la ciudadanía moderna. Sobre esta cuestión Ralph Dahrendorf considera que el "momentum del principio de la ciudadanía comienza con la creación de unidades políticas en donde los derechos y la participación de los civiles se tornan elementos necesarios de la Constitución"¹⁶⁰. Sin embargo, Dahrendorf atribuye esto al proceso legislativo de los Estados nacionales. Contra lo que podemos argumentar que, en el caso novohispano, la inclusión de civiles, si bien fue parte de un proceso que desembocó en la formación del Estado constitucional, no estuvo condicionada a la presencia de éste. A pesar de ello, esto nos lleva a reconocer el papel preponderante en la participación civil dentro del nuevo Estado con rasgos racionales.

¹⁶⁰ Dahrendorf, *op. cit.*, p. 31.

Este punto central en los cambios que buscaba la *Ordenanza de Intendentes* se puede ubicar claramente en los nuevos lineamientos para las administraciones locales. De acuerdo a lo dictado por el rey, los anteriores corregidores y alcaldes mayores ya no contarían con la autonomía gubernamental que hasta entonces habían gozado. En cambio, los nuevos funcionarios estarían, de acuerdo a las disposiciones de *la Ordenanza*, subordinados directamente a las disposiciones de los intendentes, en correspondencia a un modelo único que quería brindar un mayor control a la metrópoli. Así, el rey dictó en el artículo 9 del nuevo documento legislativo que

Los Corregimientos y Alcaldías Mayores de toda la comprensión de las enunciadas doce Intendencias... se han de extinguir conforme vayan vacando, ó cumpliendo su tiempo los provistos por Mí en unas y otros; y entretanto estarán inmediatamente sujetos y subordinados á los respectivos Intendentes de su distrito, y éstos les subdelegarán sus encargados para que así se uniforme desde luego el gobierno de todas las Provincias, y se evite la confusión que siémpre causa la diversidad de jurisdicciones y Ministros¹⁶¹

Estas líneas muestran claramente el espíritu homogeneizador de la administración monárquica. En efecto, en el mismo artículo se hace omisión para algunas capitales de intendencia y para "los Estados del Valle y de Atlixco", que mantenían una organización feudal, y sobre las que aún se dudaba su transformación. Sin embargo, aquellos pueblos en donde se habían mantenido gobiernos que se regían por sus condiciones específicas, con la Ordenanza se les exigirían a sus autoridades cumplir con los lineamientos que se habían dispuesto en 1786.

Asimismo, la "confusión que siempre causa la diversidad de jurisdicciones" es una clave para entender cómo se asumía al Estado absolutista en contraste con un régimen imperial con base fiscal y jurídica. Esto es, el interés del buen gobierno en el corte imperial tradicional apunta a obtener beneficios tributarios de las

¹⁶¹ *Real ordenanza para el establecimiento e instruccion de intendentes de ejército y provincia en el reino de la nueva España 1786*, Edición facsímil, UNAM, México, 1984, pp. 13-14.

localidades y a que éstas mantengan el respeto a una legislación con puntos bastante generales; como lo es que un pueblo reconozca al monarca o emperador como el máximo representante y patrono, la pertenencia a su régimen de gobierno, a que renuncien a tener un ejército propio y que esté dispuesto a servir a la causa de guerra imperial, además, en algunos casos, como lo fue en los reinos hispanos americanos, también se le exigió que se pronuncie como adepto de la única religión considerada como verdadera.

En contraste, el Estado absolutista, precursor del Estado constitucional moderno, interviene de manera más específica en la vida social de los pueblos. Y si bien no podemos ignorar que antes de la ordenanza existió la *Recopilación de Leyes*, que dictaminó una multiplicidad de mandatos reales, el esquema mismo del aparato jerárquico de las autoridades locales había permanecido bastante más independiente hasta antes de las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII.

Tanto los alcaldes ordinarios como los subdelegados cumplían, en el papel, con una función de gobierno clave para la concepción de la nueva administración, ya que serían quienes aplicarían las nuevas disposiciones en los pueblos, y mantendrían informados a los intendentes de todos los pormenores.

Además, en relación al punto central de este trabajo: el surgimiento de las prácticas vinculadas a la primera ciudadanía mexicana; el rol de los subdelegados nos brinda algunos elementos más para reflexionar ello. En principio, es preciso aclarar que algunos autores han señalado la dificultad para clarificar la función de estos cargos. No sólo en cuanto a las actividades que llevaron a cabo durante el corto tiempo que se mantuvo vigente el tratado legislativo de 1786, sino que, principalmente, lo dispuesto en el documento resulta bastante ambiguo. Por esto es evidente que la falta de nitidez fue una razón más por la que no se logró aplicar cabalmente la ordenanza.

Como sea, hemos de acercarnos a las características ordenadas de los nuevos funcionarios. En el artículo 11 se dispuso que

ha de recaer la Jurisdicción Real que ejercen en los Intendentes respectivos como Justicias Mayores de sus Provincias, sin perjuicio de la que corresponde á los Alcaldes

Ordinarios que debe haber en las Ciudades, Villas y Lugares de Españoles con restricción á sus distritos ó jurisdicciones, pues en los Pueblos que hasta ahora no los tuvieron, siendo de competente vecindario... se han de elegir del mismo modo también dos el primer año en que verifique esta providencia¹⁶²

Y la diferencia sustancial con respecto a los subdelegados se encuentra en que servirían en las poblaciones del estamento de indios:

En cada Pueblo de Indios que sea Cabecera de Partido, y en que hubiese habido Teniente de Gobernador, Corregidor o Alcalde Mayor, se ha de poner un Subdelegado, que lo ha de ser en las quatro causas, y precisamente Español, para que, precediendo las fianzas... administre justicia en los Pueblos que correspondan al Partido, y mantenga á los Naturales de él en buen orden, obediencia y civilidad¹⁶³

Los alcaldes ordinarios, por tanto, serían nombrados por cada villa de españoles. En el caso de los subdelegados, lo sería para cada cabecera de Indios. Y para ambos cargos sería designada una autoridad que de antemano perteneciera al estamento de españoles. Quien además debía ser de "competente vecindario", es decir, que debía contar con las habilidades que le demandaban estos cargos en gobierno. En donde, de antemano, se excluía a los indios de esta condición.

En términos estrictos el indio era un ser portador de un alma resguardada por Dios, pero que a diferencia de los hispanos era incapaz de hacerse cargo de sí mismo. Esta situación había quedado mostrada, según la Junta de Valladolid celebrada entre 1550 y 1551, por la propensión que supuestamente tenían hacia la idolatría. Era menester de la Iglesia resguardar a estos seres que permanecían como niños. Y es a partir de esta condición de menores de edad que desde antaño se dispuso que los párrocos del claro regular cuidasen de ellos. Sin embargo, en este nuevo tratado observamos que la vigilancia de los indios se encargaba a una autoridad civil, quien debía prestar atención al "buen orden, obediencia y civilidad", al temer que los indios eran incapaces de regular su

¹⁶² *Ibíd.*, art. 11, p. 16.

¹⁶³ *Ibíd.*, art. 12, pp. 18-19.

conducta. Y llama especialmente la atención que se da por sentado aquello a lo que apunta la civilidad, la cual se asume que está ausente de los estamentos ajenos al español.

Muestra de esto y del afán exacerbado por el control, también se mandó que las juntas que llevasen a cabo los pueblos de Indios debía asistir forzosamente un juez:

Y á fin de evitar los disturbios, pleitos y alborotos que frecuentemente se originan entre aquellos Naturales con motivo de sus elecciones de oficios, mando que siémpre asista y presida en sus Juntas el Juez Español, ó el que éste, hallándose ausente ó legítimamente impedido, nombrare para ello, *con tal que también sea Español*; y que de otro modo no puedan celebrarlas, ni tener validación lo que acordaren en ellas¹⁶⁴

Por lo que el "competente vecindario", es decir, aquellos vecinos capaces de resguardar los deseos del monarca, ya que tenían la capacidad de concebir las acciones necesarias para garantizar el buen orden y la civilidad, eran exclusivamente los pertenecientes al estamento de españoles. Sin embargo, éstos también eran propensos, de acuerdo a lo percibido por el monarca, a otro tipo de perversiones que también afectaban a su gobierno.

La vigilancia dispuesta en la ordenanza, si bien daba prerrogativas en las cuatro causas para algunas localidades, dio instrucciones precisas sobre la única función administrativa de estas autoridades, las cuales las limitaba en la participación dentro de la vida económica para evitar que sacaran provecho de su posición. Esta práctica había sido el negocio de las autoridades locales desde hacía mucho, pero la Corona se propuso firmemente acabar con el sistema de repartimientos para impulsar la economía mercantil que, en teoría, era lo mejor para sus finanzas. Y que, además evitaría el amasamiento de grandes fortunas inmóviles (como de hecho había ocurrido) y favorecería, bajo este supuesto, el consumo de otros productos entre los otros estamentos. Se advirtió que

¹⁶⁴ *Ibíd.*, art. 13, pp. 21-22.

ni los Subdelegados, ni los Alcaldes Ordinarios, ni los Gobernadores que quedan existentes, ni otra persona alguna sin excepción, han de poder repartir á los Indios, Españoles, Mestizos y demás castas, efectos, frutos ni ganados algunos, baxo la pena irremisible de perder su valor en beneficio de los Naturales perjudicados, y de pagar otro tanto... y en casos de reincidencia... se aumentará el castigo hasta la confiscación de bienes y el destierro perpetuo de los delinquentes¹⁶⁵

Y más adelante expone su real deseo: "entendiéndose que los Indios y demás Vasallos mios de aquellos Dominios quedan, por consecuencia, en libertad de comerciar donde y con quien les acomode para *surtirse de todo lo que necesiten*". Y en otro artículo se dispuso que

á fin de que no quede ceñido al solo medio que va ordenado el importantísimo objeto de estimular á los Naturales á que se dediquen á la Agricultura é Industria, y á hablar el Castellano, protegerán en todo los Intendentes sus Subdelegados y Alcaldes Ordinarios á los que mas sobresalgan en el uno ó en el otro

Con esto se demuestra la afirmación de que el sistema de intendencias buscaba, en lo general, incorporar a toda la población de los reinos hispanos en la dinámica del mercantilismo. Esto indica, pues, que "[m]ejorar la situación financiera de las ciudades y comunidades, era una de las principales metas de la política reformista del absolutismo ilustrado español"¹⁶⁶, por lo que el ciudadano ideal para la Corona debía de perseguir estos fines en sus propias actividades y, si desempeñaba de hecho algún cargo, debía promoverlas entre aquellos vasallos que estaban a su resguardo, para "mejorar" la vida productiva y comercial del reino.

Sin embargo, siendo cierto que en mayor o menor grado los pueblos que no tenían al comercio como actividad principal participaban en la venta de mercancías, es posible que el término "mejorar" para la situación financiera no se ajuste para el caso de todas las comunidades¹⁶⁷. La mayoría de dichos pueblos

¹⁶⁵ *Ibid.*, art. 12, pp. 19-20.

¹⁶⁶ Pietschmann. *Las reformas...*, p. 185.

¹⁶⁷ Es, por supuesto, el deseo que el monarca vertió en la *Ordenanza*, pero no es del todo afortunado que nosotros lo tomemos de esta manera, ya que si el aspecto financiero resultaba una cuestión familiar en el

estuvieron sometidos al sistema de repartimientos y, por tanto, fueron consumidores de mercancías que se les obligaba a adquirir. En este sentido la actividad financiera era realizada por las autoridades locales como negocio privado basado en la explotación, es decir, los pueblos sometidos al repartimiento no tenían en mente una administración financiera. Por esta razón sería más acertado hablar de un deseo por incorporar a toda la población en las actividades de una sociedad neomercantilista, lo que apuntaría a crear en todos ellos una conciencia productiva, favoreciendo el comercio de excedentes¹⁶⁸.

En este sentido, lo que debemos tener presente para nuestro tema es que la utilidad de ese tipo de conciencia es la que el Estado hispano buscaba sembrar en todos sus súbditos. Quien fuese inconsciente de esa dimensión era un súbdito que no contaba con las capacidades para tomar responsabilidad alguna en el aparato del gobierno monárquico.

Con esto resulta claro que de la prosperidad financiera, de acuerdo a la convicción de la época, deviene el "*bienestar común*". Y aunque los beneficios de éste se vislumbraron para todos, sólo algunos tendrían las facultades, por sus capacidades y los méritos que los avalan, de tomar parte en el reordenamiento productivo y financiero propuesto por el ímpetu del despotismo ilustrado.

Ahora bien, una de las características de los nuevos cargos del nivel local fue que éstos no estaban contemplados formalmente como funcionarios de la Corona, porque si bien eran parte del aparato de gobierno, no pertenecían a la burocracia pagada. En este sentido la *Ordenanza* dictó que:

ha de confiarse á personas particulares de la mejor nota y necesarias circunstancias, previo informe de sugetos que puedan darle con debido conocimiento... que las facultades de los dichos Subdelegados... en lo que toque á las enunciadas dos causas

pensamiento de la corte hispana, lo que definitivamente no le era familiar a ésta era la vida social de muchos sectores novohispanos.

¹⁶⁸ Una conciencia que, de acuerdo con Weber, comienza con el mercantilismo. Nos dice: "En el orden teórico este sistema se apoyó en la teoría de la balanza comercial, la cual enseñaba que sobreviene el empobrecimiento de un país tan pronto como el valor de la importación supera al de la exportación; esta teoría se desarrolló en Inglaterra desde el siglo XVI". Weber, *Historia Económica...*, p. 293.

[Hacienda y Guerra]... se les pasen en sumaria... hasta ponerlas en estado de sentencia, pues en él han de remitirlas al intendente¹⁶⁹

Ya se ha dicho que la decisión de reclutar a particulares para que tomaran parte en la cosa pública se pudo deber a la determinación de la Corona por reducir los gastos relativos a la administración gubernamental. No obstante que ésta haya sido la principal razón, se promovió un acercamiento de la población española a la participación en lo político. Pietschmann ha señalado que en algunas medidas tomadas por la Corona pareciera que hacían "que los notables se sintieran interesados en el gobierno de la ciudad, en cuyas manos estaba la administración del nivel local, con el fin de responsabilizar cada vez más a los particulares"¹⁷⁰. De su participación dependía, en relación al discurso de la Corona, la eficiencia del reordenamiento y, por tanto, de la revitalización de las finanzas. Así pues, este autor sostiene que "en muchos escritos de la época... se detecta... la afirmación tan repetida de que todo ciudadano digno debía participar en la 'causa pública', es decir en los intereses de la comunidad"¹⁷¹.

Estas apreciaciones pueden hacernos pensar que entonces los particulares estarían totalmente dispuestos a participar en las cuestiones de gobierno, que un sentido del honor los llamaba y los llevaba a buscar la prosperidad de la administración estatal y el bienestar común. El entregar las funciones del Estado a civiles significó de antemano que existía una confianza en el juicio de estos personajes, no obstante, de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza, debemos atender algunos de los intereses que pudieron motivar a ciertos particulares a intervenir en la vida pública.

Existía una creencia de que todo aquel súbdito con capacidades debía desempeñar actividades para colaborar con su gobierno en el nivel local. Pero contrario a la aspiración de la Corona por que los privados desempeñaran funciones de subdelegación, existió muy poca disposición de la población. Por un lado, porque existían pocos que contaban con el perfil requerido, pero también

¹⁶⁹ *Real ordenanza...*, art. 77, pp. 89-90.

¹⁷⁰ Pietschmann. *Las reformas...*, p. 186.

¹⁷¹ *Ibíd.*, p. 187.

porque aquellos que lo cumplían no podían dejar sus actividades o negocios debido a que el cargo no tenía retribución económica alguna. Y, desde la visión de un buen oportunista, el coste penal de continuar un negocio operando repartimientos era demasiado elevado. Aunque, a pesar de ello, existieron algunos que siguieron arriesgándose a realizar negocios que ya entonces eran ilícitos, definitivamente el riesgo de ser confiscado en sus bienes y desterrado sólo le venía bien a quienes no tenían mucho que perder –al menos en los momentos en que se creía la posibilidad real de aplicar esta pena.

Esta dificultad por hallar a civiles dispuestos a realizar tareas administrativas sin retribución económica enfatizaba que los únicos que desempeñaban esas actividades sin preocuparse por los bajos salarios y sólo por "sentimientos de honor" que el servicio provocaba eran los políticos de carrera. Sin embargo, a diferencia del sentido de pertenencia, del deber y de la lealtad a la Corona hispana, el viro economicista fiscal comenzó a devaluar la figura monárquica frente a los súbditos que resultaron afectados por las nuevas disposiciones políticas y hacendarias. Así, la imagen de la Corona como figura de respeto y autoridad, la cual había sido mantenida eficientemente por los eclesiásticos en tiempos anteriores, comenzaba a quebrarse.

Otro aspecto que reducía la disposición de los civiles a participar en labores de gobierno fue la excesiva carga de trabajo que se vertía en los subdelegados. Si debían procurar alguna actividad que les redituara ganancias se hacía imposible además dedicarse a las labores de la subdelegación. Obligaciones que también se veían incrementadas por el pago de una fianza (al igual que los intendentes) y un juicio de residencia al final de su administración. Por tanto, los cargos de alcalde ordinario y de subdelegado, en lugar de ser un privilegio, resultaban ser una carga para aquellos que los aceptaban, por lo que era de esperarse que no existieran suficientes voluntarios para ejercer estos cargos. Sin embargo, al disponer que se encontraran súbditos dispuestos a hacerse cargo de estas responsabilidades, la Corona pensó que todos aquellos pertenecientes a un "competente vecindario", a los cuales se les hiciera una petición explícita, aceptarían motivados por su voluntad de servicio a la monarquía. Por tanto, "la Corona presuponía que en

todos los partidos, por una parte existían ciudadanos con características apropiadas, que se pudieran elegir y por otra que estarían dispuestos a hacerse cargo gratuitamente de las labores y tareas"¹⁷². Con lo que nos percatamos nuevamente de que las reformas no obedecían al conocimiento fáctico del reino, sino que la legislación tomó forma de acuerdo a lo deseable para los defensores de la ilustración. Asumir que en todos los partidos habría súbditos que compartían el parecer del nuevo espíritu administrativo era dar por hecho que sería posible aplicar la misma normatividad para los gobiernos locales en todos los territorios novohispanos. Cuando el derecho consuetudinario, no obstante, había sido un espacio bastante adaptable a la situación particular de cada región, ya que, nos dice Pietschmann, "con frecuencia era muy distinto de un lugar a otro, además de que las relaciones legales casi no se podían determinar, por su excesiva complejidad"¹⁷³. Bajo esta situación queda claro el carácter aspiracional del gobierno metropolitano al decretar la nueva instrucción de intendentes.

Debemos tener en cuenta que cuando se aprobó la instauración del sistema de intendencias se había confiado en las declaraciones de José de Gálvez, quien había asegurado que se encontrarían fácilmente personas capaces y respetables que pudieran responsabilizarse del cargo. Esto en correspondencia con el afán de este personaje por realizar la reforma que tanto anhelaba.

Un ejemplo de lo que venimos diciendo es que en 1790 el intendente de Durango Díaz de Ortega tuvo que nombrar a algunos mulatos como subdelegados en algunos partidos. Y le había sido tan complicado encontrar quien se hiciera cargo que incluso muchos de los designados no sabían leer. Pero esta dificultad no se limitaba al norte del país, ya que también en zonas muy pobladas existieron dificultades. Incluso en la intendencia de México se tuvo que nombrar a "personas incapaces de cumplir con las responsabilidades del cargo"¹⁷⁴. Esto llevó a que al no encontrar a quiénes se ocuparan de las subdelegaciones, los intendentes debieron nombrar a muchos subdelegados que no pertenecían "al nivel social

¹⁷² *Ibíd.*, p. 196.

¹⁷³ *Ibíd.*, p. 198.

¹⁷⁴ *Ibíd.*, p. 290.

superior" debido a que encontraron demasiadas dificultades para hallar quienquiera estuviera dispuesto a pagar la fianza.

Los deseos del monarca fueron que lo dispuesto por él debía ser cumplido celosamente, especialmente por aquellos que estaban encomendados a seleccionar a los representantes de la monarquía en el nuevo esquema de gobierno. Ya que de esto dependería el éxito de la reforma. Sólo entonces se tendía un gobierno eficiente y libre de ociosos:

Con todo cuidado y esmero que corresponden á mi confianza deben solicitar por sí mismos, y por medio de los jueces subalternos, saber las inclinaciones, vida y costumbres de los Vecinos y Moradores sugetos á su gobierno, para corregir y castigar á los ociosos y malentretenidos que, léjos de servir al buen órden y policía de los Pueblos, causaran inquietudes y escándalos desfigurando con sus vicios y ociosidad el buen semblante de las Repúblicas, y pervirtiendo a los bienintencionados de ellas: sin que se entienda que baxo este pretexto se haya de hacer caso de delaciones infundadas, ni entrometerse á exâminar la vida, genio y costumbres domésticas, ó privadas, que no pueden influir en la tranquilidad buen exemplo y gobierno público, y que no ceden en perjuicio de los demás Ciudadanos, pues han de hermanarse en este particular la vigilancia y cuidado que debe tener el que manda, con la prudencia que también ha de serle indispensable¹⁷⁵

En este artículo se hace una clara distinción entre los ciudadanos que pueden llegar a ser ofendidos e incluso perjudicados por la conducta que presentan aquellos que dedican sus vidas al ocio y a los vicios. Existió, entonces, una pérdida de derechos de quienes así se manejasen, por ser éstos un lastre para el común, porque, en efecto, se percibía su presencia como un estorbo debido a su aporte nulo a la vida útil. Si bien esta condición de los "malentretenidos" no resulta algo exclusivo de este tiempo, lo que resalta es el combate abierto a la existencia de este tipo de sujetos. Sin embargo, esta inquietud no surgió precisamente con la Ordenanza, ya que desde tiempos de la visita de José de Gálvez se extendió la idea sobre el perjuicio que presentaba el vagabundeo. La cuestión aquí fue que se

¹⁷⁵ *Real ordenanza...*, art. 59, pp. 68-69.

convirtió en un tópico central de la política reformista, tomando parte en la nueva política economicista estatal.

Por otro lado, el artículo también nos muestra que para esta época el monarca concibió la necesidad de distinguir enérgicamente entre lo público y lo privado. En donde, tal como seguiría considerándose hasta tiempos recientes, lo doméstico se incluía dentro de la figuración del espacio privado. Ya para este tiempo el Estado defendía un lugar delimitado en donde los ciudadanos obtenían total autonomía. En efecto, es el espacio en donde predomina la autoridad del padre, esposo o amo. Y que sólo en situaciones muy particulares, en las que la mujer provenía de una familia notable y adinerada, era posible que se iniciara alguna disputa contra el varón.

Así, el reconocimiento de la propiedad y el espacio privados resulta una condición necesaria de la política del Estado económico hispano. Por lo que la vigilancia de las actividades virtuosas o prohibidas se tendrían que remitir a los lugares que se asumían evidentemente públicos. Asimismo no podemos entender esta noción de espacios privados sin el crecimiento de la burguesía, que era reconocida como aquella clase dedicada a las labores productivas. Ya que, en contraste, la llamada gente pública (cuestión que precisaremos más adelante¹⁷⁶) provenía de un ámbito en el cual se tenía por obligación exhibirse por medio de sus labores en el gobierno para ser reconocido como tal. Además, este aspecto espacial también se distingue del caso de los estamentos de indios y de castas, debido a que el tipo de vivienda que éstos habitaban en las urbes motivaba la convivencia en los patios, relegando las oscuras y frecuentemente húmedas piezas exclusivamente para el descanso.

Por tanto, estamos frente a una cuestión que aparece como el reclamo de los derechos del individuo burgués, o más bien, de la extendida influencia de sus costumbres en la vida social de esa época. A partir de la distinción entre el tiempo en donde dominó la "gente pública" y este otro, en el que existió un reclamo a la procedencia de quienes aspiraban a cargos en el gobierno, podemos vislumbrar la paulatina asimilación de los espacios pertenecientes a la propiedad individual. Y

¹⁷⁶ Estas ideas se abordarán en el apartado 4.2.e con más detenimiento.

en donde aún no se contemplaba la posibilidad de ofensas (al estado o a los ciudadanos) que podían ser fraguadas dentro de sus murallas. Incluso (como lo apuntaremos más adelante) una muestra más de este creciente respeto, también está presente en el decremento de rigurosidad en la inspección de las bibliotecas privadas.

En otro sentido, con esto sabemos que los españoles americanos no eran ajenos a las ideas ilustradas de la época. Por el contrario, la ideología de lo ilustrado se filtró como parte del deseo del estamento español en su conjunto (aunque no se puede concluir que la totalidad de súbditos españoles compartieran esta convicción). Por lo que es posible observar que todavía después del freno impuesto por el gobierno de la monarquía hispana al impulso ilustrado, tras la ejecución de los monarcas franceses (cuestión que recordaremos en la segunda parte del presente capítulo), la inercia de la convicción sobre las ventajas del pensamiento racional no pudo detenerse.

Ahora bien, como hemos revisado en el capítulo anterior, esto no supone que la totalidad del estamento español estuviera de acuerdo con todos los cambios promovidos por la metrópoli. Debemos recordar que las resistencias a la nueva legislación se presentaron en diversos frentes. Pero lo que aquí podemos resaltar es que si bien no existía una aprobación a muchas de las medidas de la monarquía, lo que sí existía era el deseo de instaurar un gobierno racional.

No podemos dar por entendido lo que implica un Estado racional. Por supuesto, en un primer acercamiento, lo racional podía empatarse con aquello que era tomado por *verdadero* para el pensamiento europeo, porque su lógica había cuajado a través de muchas generaciones. Sin embargo, para precisar esta cuestión podemos aludir a lo dicho por Weber, quien indica que el "Estado, en el sentido de *Estado racional*, sólo se da en Occidente" (o más bien, podríamos argüir ahora, se gestó en occidente). Asimismo, "es el Estado racional, [el] único terreno sobre el cual puede prosperar el capitalismo moderno. Dicho Estado se apoya en la burocracia especializada y en un derecho racional".¹⁷⁷ Así, debemos entender que la pretendida uniformidad legislativa y el intento de establecer una

¹⁷⁷ Weber. *Historia Económica...*, p. 285.

burocracia eficiente fueron parte de la construcción de un Estado de corte racional moderno. En este sentido, estos elementos sirvieron, a su vez, a reforzar los elementos precursores de la *ciudadanía*; debido a que se enfatizó la figura de los individuos ante una ley homogénea para todos los pertenecientes a un mismo estamento (ya que aún no para todos los individuos por igual), y a su acceso a la participación en los asuntos públicos, avalado por sus propias capacidades.

En suma, podemos indicar que a pesar de los fracasos en el nuevo esquema de gobierno, dentro de los ideales de la época fue tomando forma el perfil de *ciudadano* al que se le confió la participación en el gobierno, donde, de hecho, la misma *Ordenanza* concibió la inclusión de civiles para esta tarea. Las características mínimas que el vecino con capacidades debía tener, como lo fueron el ser alfabetizado, teniendo al Castellano por lengua, y contar con propiedad comprobable en la localidad, así como un medio lícito para satisfacer sus necesidades materiales (lo cual buscaba que no se pretendiera el enriquecimiento a partir del cargo), obedecen a la afirmación del carácter racional utilitario defendido tan enfáticamente por el despotismo ilustrado.

En contraste, con esto también se vislumbra quiénes fueron los habitantes novohispanos que a la postre serían excluidos durante los años constitucionalistas. Los otros estamentos americanos, distintos al español, se habían mantenido relativamente alejados del afán homogeneizador y eficientista que hacia el final del siglo se vertía también en ellos por medio de esta nueva legislación. En este sentido, paradójicamente, la determinación de las características de los ciudadanos no fueron deducidas de la actividad reflexiva de sus propios vecinos, sino que se suscribieron, análogamente a lo dispuesto por la *Ordenanza*, a los caprichos de quienes determinaron unilateralmente qué era racional y, por tanto, útil. Justificándolo a través de su posición como ilustrados.

4.1.2 Valoración de los súbditos útiles hacia fines del siglo XVIII

Para finales de aquel siglo el ideal de la burocracia especializada y eficiente, cuestión primordial de la participación civil en los asuntos de gobierno y, en este sentido, para la *ciudadanía*, insistía sobre dos aspectos muy generales: el *mérito*,

en tanto trayectoria de un súbdito respetable, y la capacidad, que aludía a las habilidades y a la inteligencia. Estas características suponían un distanciamiento con la procedencia de los individuos. Se pensaba que el acceso a un puesto de honor podía darse de acuerdo a la actitud y determinación de cualquiera. Por tanto, en teoría, un súbdito español, el cual perteneciera a una condición material modesta, por este sólo hecho, ya no estaría impedido para desempeñar una función útil al gobierno. No obstante, tampoco se extendió esta confianza a otros estamentos diferentes al español. La condición del *competente vecindario* se iría definiendo en dos aspectos: la asimilación de la moral utilitaria, sobre todo, y la presunción de ser un individuo letrado, comprometido con las metas del Estado.

Asimismo, la valoración de *capacidades* para quienes participaran en asuntos públicos apuntaron a estimar sus aptitudes, lo que llevaría a garantizar dichas metas. Para entonces ya no se utilizó el término *esforzado*, el cual indicaba primordialmente la disposición, el ímpetu y el valor, sino que las nuevas categorías buscaban asegurar los objetivos concretos de la política estatal –debido a su carácter utilitario y eficientista. Esto porque el ciudadano ideal, aquél capaz de rendir un servicio útil a la Corona, debía asumir una posición de responsabilidad para dar solución a los conflictos que aquejaban al virreinato hispano.

Hasta aquí hemos descrito las disposiciones que, en este sentido, hizo el gobierno de la monarquía a través de la *Ordenanza de Intendentes de 1786*. A partir de ésta nos percatamos del perfil ideal que la Corona buscaba en quienes tendrían facultades para intervenir en las actividades del gobierno. No obstante, los puntos que consideramos con el documento legislativo sólo nos han mostrado lo que idealmente se esperaba del sistema de intendencias, es decir, las metas que se perseguían con la nueva administración.

Queda pendiente aún observar cómo estos objetivos fueron valorados por quienes compartieron la visión de la reforma administrativa, pero también observaron la realidad novohispana de cerca. Debemos aproximarnos a aquellos asuntos que los gobernantes del virreinato consideraron urgentes de resolución.

La visión del gobierno racional se mantuvo fortalecida después de los relativos fracasos de la instauración de intendencias en la Nueva España. Esto lo podemos

observar claramente a partir de las consideraciones que dejó el Segundo Conde de Revillagigedo a su sucesor Marqués de Branciforte en el año de 1794. El análisis de algunos puntos de este documento me permitirá examinar aspectos que, a poco más de un lustro de que decretaran las disposiciones de la *Ordenanza* en la Nueva España, este virrey recomendó para retomar los objetivos primordiales del despotismo ilustrado, una vez que presencié la situación social novohispana. Con esto busco establecer, por un lado, la visión general de ciertas características deseables para un ciudadano español vertidas por Revillagigedo, y por otro, un panorama de las cuestiones de gobierno que este personaje percibió como problemáticas, es decir, que se presentaban en detrimento del Estado racional. Así, los aspectos que resaltaré, a pesar de que se mantienen (una vez más) dentro del plano ideal, están también atravesados por la experiencia administrativa de este personaje.

La razón por la que resulta relevante atender a lo dicho por este virrey, es porque fue el principal defensor de la permanencia del sistema de intendencias en la Nueva España. Mantuvo vigentes, dentro de sus posibilidades, los cargos definidos por la Ordenanza. A pesar de la poca información disponible y a la apatía de la burocracia a su llegada, logró realizar un extenso informe de gobierno que se le había solicitado en el momento de su designación unos pocos meses después de llegar a América. Lo cual nos habla, por un lado, de su labor de servicio y, por otro, su compromiso y visión como profesional ilustrado, ya que logró recaudar sistemáticamente muchos datos, con los que el gobierno virreinal no contaba hasta entonces, gracias al apoyo de diversos expertos¹⁷⁸.

Esta situación lo colocó en posibilidades de realizar una serie de recomendaciones basándose en las condiciones reales del virreinato y valorando los mandatos contenidos en la ordenanza. Sin embargo, aunque siempre defendió el sistema de intendencias, también sugirió varias modificaciones. Por ejemplo, una de las disposiciones originales con las que Revillagigedo no estuvo de acuerdo fue el decremento de las facultades del virrey, por lo que en el documento

¹⁷⁸ En la primera etapa del gobierno de Revillagigedo, José Antonio de Alzate, uno de los más ilustres científicos novohispanos, colaboró extensamente con su gobierno. Hasta antes de las riñas que se suscitaron entre estos dos personajes.

que había preparado hacia 1791 propuso que se incrementaran de nuevo sus facultades, ya que "era necesario reforzar [su] autoridad y dignidad". Y para favorecer esto, consideraba transferir la administración de propios y arbitrios a la autoridad central. Ya que haciéndose nuevamente de los recursos fiscales de todas las localidades se estaría en condiciones de controlar mejor el gobierno en su conjunto. Y aunque el virrey logró restablecer algunos privilegios, sus deseos no fueron del todo cumplidos. Evidencia de esto es el malestar que expresó a su sucesor en el informe de 1794, en donde escribió:

La ordenanza de intendentes, por autorizar a estos útiles magistrados, y principalmente al superintendente, dio también un golpe sensible, aunque reparado ya en gran parte a la autoridad del virrey... Quedan, no obstante ciertas visibles distinciones... En mi concepto, el primer pie de autoridad sobre que se establecieron los virreyes... era mucho más ventajoso el servicio del rey y al beneficio y aumento de estos reinos. Mal se obedece a aquel de quien nada se espera: la dependencia es la medida del respeto: y así se necesitaría que el virrey tuviese más arbitrio en premiar y castigar, para que se hiciese obedecer y respetar como era conveniente¹⁷⁹

Por su parte, la figura de los nuevos cargos que generó la Ordenanza también fue atendida especialmente por Revillagigedo. Propuso convertir a los subdelegados en funcionarios profesionales con sueldos fijos. Modificación que aparentemente contradice la incorporación de funcionarios civiles en el gobierno (que era un elemento evidentemente nuevo), pero como veremos, su propuesta en sí daba mayor peso a la participación activa de éstos.

Pasemos, pues, a detallar el sistema propuesto por Revillagigedo, y lo que esperaba obtener a partir de él. Por supuesto, en correspondencia con el fortalecimiento de un Estado racional.

¹⁷⁹ Segundo Conde de Revillagigedo, *op. cit.*, números 15-17, pp. 1035-1036. También en los números 84-86 se observan serias críticas al retiro de las facultades jurídicas al virrey.

4.1.2.1 Los funcionarios eficientes y responsables

El virrey puso especial atención en los nuevos cargos que mandó la ordenanza de 1786 –los cuales hemos descrito antes. Dio cuenta de que los servicios que habían sido seleccionados no habían cumplido con las tareas que se les había encargado, y atribuyó esta situación a una mala planeación en lo financiero. El no contar con un sueldo los habría llevado a "valerse de medios no permitidos para subsistir"¹⁸⁰. El virrey consideraba que los funcionarios que ocupaban los nuevos cargos de subdelegados y alcaldes ordinarios no tendrían oportunidad de desempeñar su puesto correctamente al no contar con los medios que alguna vez tuvieron sus antecesores como alcaldes mayores y corregidores. El virrey afirmó que

Antiguamente, los alcaldes mayores solían ser sujetos de mérito en el real servicio, de nacimiento y de recomendables circunstancias, porque sus destinos eran unas colocaciones apreciables, por las utilidades que adquirían en poco tiempo, por medio de los repartimientos permitidos¹⁸¹

Y al ser prohibido el sistema de repartimientos por la ordenanza, estos funcionarios locales perdieron la posibilidad de enriquecerse a costa de los habitantes. Para hacer frente a la ausencia de este ingreso se había determinado que quienes se hicieran cargo de las cuatro causas en los llamados pueblos tributarios, podrían cobrar el 5 por ciento del tributo reportado. No obstante, muchas de estas regiones no tenían una recolección estimable, por lo que los funcionarios difícilmente podrían dedicarse a las labores administrativas exclusivamente:

La recaudación de tributos, apenas dejará a los subdelegados unos con otros la cantidad de 300 pesos, y es muy desigual, porque en algunas subdelegaciones no tienen tributos que recaudar, y en donde los hay, es preciso deducir los gastos que

¹⁸⁰ *Ibíd.*, p. 1179.

¹⁸¹ *Ibíd.*, número 849, p. 1179.

cuesta la recaudación, y así están casi en precisión los subdelegados, de valerse de medios no permitidos para subsistir¹⁸²

Siguiendo lo explicado por Revillagigedo, esto ocasionó que algunos de los nuevos funcionarios recurrieran a la ayuda monetaria de los privados: "El gravamen de las fianzas, es uno de los mayores que sufren los subdelegados, y que los obliga a comprometerse a la voluntad de sus fiadores, privándoles la libertad de obrar en muchos casos sin respeto alguno, como es necesario, para la administración de justicia"¹⁸³. Lo cual era un riesgo que afectaba la imparcialidad que tanto defendió este virrey, ya que:

Por lo regular, los fiadores de todos los subdelegados, son o vecinos de los mismos distritos de sus subdelegaciones o sujetos de las capitales; pero que tienen relación de comercio y otras con aquellos; pues nadie fía sin esperanza de proporcionarse alguna ventaja, por el riesgo que corre en la fianza¹⁸⁴

Esto llevaría, según Revillagigedo, a que se atendieran primordialmente los intereses privados en detrimento del interés público y estatal. Porque, a pesar de los aspectos que comienzan a intervenir en defensa de la propiedad individual, paralelamente se reconoce la necesidad, en tanto característica *protoliberal*, de aplicar eficientemente la legislación, evitando la posibilidad de burlar las normas del Estado.

Por otro lado, el virrey consideró que se podría maximizar el rendimiento de estos funcionarios, no sólo atendiendo sus facultades, sino también a un perfil específico de sujeto:

Más pronto que dotar con mejores asignaciones a los subdelegados, considero que debía tratarse de mejorar la constitución de estos empleos y así lo hice presente a S.M... expuse la necesidad de que estos jueces fuesen letrados, para la recta

¹⁸² *Ibíd.*, número 852, p. 1179.

¹⁸³ *Ibíd.*, número 862, p. 1181.

¹⁸⁴ *Ibíd.*, número 863, p. 1181.

administración de justicia; y proporcionar salida a los que han gastado su tiempo y patrimonio en seguir la carrera de las letras, dedicándose al estudio de las leyes¹⁸⁵

Además, propuso que se crearan tres clases distintas de alcaldías mayores, las cuales deberían recibir diferentes sueldos según su estatus. Con lo que buscaba establecer un sistema capaz de promover a los funcionarios que se hubieran desempeñado correctamente en sus actividades. En correspondencia con esta idea afirmó que él mismo así había promovido a quienes tuvieron mayores capacidades y méritos:

Como los subdelegados propuestos por mí, debían ser letrados, y el mérito de éstos, propuse que las provisiones de estos empleos se hiciesen por los virreyes, a consulta de las audiencias de los respectivos distritos, y sin que por esto se le quitase la facultad de nombrar otros sujetos beneméritos, teniendo para ello justas causas, y dando siempre cuenta a S.M. para su real aprobación¹⁸⁶

Y si bien aparentemente las consideraciones del virrey parecían un primer momento en contra de la incorporación de civiles a la administración, esto no era así, ya que en realidad propuso que para facilitar la labor de los funcionarios locales se nombraran a algunos asistentes extraídos del orden civil. Por lo que

Estos jueces pedáneos¹⁸⁷, podrían conocer de cuanto ocurriese en su territorio, actuando con testigos de asistencia, a falta de un escribano, hasta poner las causas criminales en estado de confesión, y las civiles el de recibirse a prueba, o despachar el mandamiento de ejecución, remitiéndolas así a los jueces letrados, para que, conforme a la naturaleza, circunstancias y entidad del asunto controvertido, las siguiesen y feneciesen o las devolviesen a los pedáneos para que ellos lo hiciesen.¹⁸⁸

¹⁸⁵ *Ibíd.*, número 856, p. 1180.

¹⁸⁶ *Ibíd.*, número 861, p. 1181.

¹⁸⁷ La palabra *pedáneo* alude a aquel funcionario dedicado a asuntos considerados como de poca importancia.

¹⁸⁸ *Ibíd.*, número 869, p. 1182.

El virrey, consciente de que uno de los objetivos de nombrar funcionarios sin pago se debía a que la Corona buscaba ahorrarse parte de los gastos de la burocracia pagada, justificó que estas propuestas no serían una carga, sino una inversión para una posterior recompensa fiscal; aseguró que:

Aunque por lo pronto quedase gravada la real hacienda con los sueldos de los nuevos justicias, después sería alivio, con el aumento que debería esperar, y con una buena administración de justicia, con la exacta recaudación de todos los ramos que componen el ingreso del real erario; especialmente los de tributos y demás que fuesen a cargo de los subdelegados¹⁸⁹

Esta propuesta concibe una organización que añade un renglón más al escalafón del sistema de intendencias, en donde los subdelegados y los alcaldes ordinarios deberían ser asumidos nuevamente dentro de la estructura del gobierno con derecho a sueldo. Pero además se mantiene la idea de la participación de los civiles de algunos pobladores de las localidades, los cuales, por supuesto, deberían mantener el perfil deseado de acuerdo a su convicción ilustrada. Es en este punto en el que más insistió el segundo conde de Revillagigedo, ya que él mismo favoreció siempre la idea de establecer un gobierno basado en ideas racionales integrado por hombres de altas capacidades y méritos. Para garantizar el buen funcionamiento de este esquema propuesto por el virrey consideraba que habría que:

Para estos destinos... echar mano de los vecinos más honrados y bien establecidos en los pueblos, que los sirviesen por honor y decoro, y no para aprovechar de sacar alguna utilidad indebidamente de ellos; pues de otro modo serían muy perjudiciales estas elecciones a la recta administración de justicia¹⁹⁰

Esto muestra que Revillagigedo quería mantener el sistema de intendencias, pero estaba convencido de que éste no había sido bien planificado y que si se quería

¹⁸⁹ *Ibíd.*, número 871, p. 1182.

¹⁹⁰ *Ibíd.*, número 870, p. 1182.

tener un buen gobierno se debía de cambiar definitivamente la manera en que se había establecido su organización y la selección de los funcionarios. Argumentaba que:

...los intendentes, que además de las ventajas referidas proporcionan a los pueblos un recurso más inmediato y pronto, y mucho menos costoso que el de acudir a la capital, desatendiendo sus particulares intereses y ocupaciones; pero no obstante, es muy cierto que un establecimiento que a primera vista, parece que debía haber sido tan útil, ha producido proporcionalmente muy pocas de las ventajas que se debía esperar de él¹⁹¹

Porque además, según el virrey, quienes habían servido a la instauración del sistema no habían tenido la capacidad de llevarlo a un buen funcionamiento, por lo que aseguró que quienes habían estado a cargo mostraron siempre ser incompetentes. Opinaba que para mejorar la situación se debería ser más cuidadoso con aquellos aspirantes a ocupar los cargos, porque, señalaba:

Para semejantes empleos [los intendentes] deberían haberse elegido a las personas de mayor instrucción y conocimiento de estos reinos, con conocimiento de carácter de sus habitantes y aun si hubiera podido ser de alguna práctica en el mando y manejo de los negocios de dichos reinos¹⁹²

A pesar de esta declaración, uno de los principales objetivos de la Ordenanza de 1786 había sido incorporar a los súbditos mejor facultados a la administración del virreinato. Observando estas declaraciones nos percatamos de que esta meta estuvo lejos de cumplirse. Una de las razones, según las percepciones de Revillagigedo, fue que se continuó reclutando funcionarios por medio de viejos procedimientos. Opinaba que:

¹⁹¹ *Ibíd.*, número 830, p. 1176.

¹⁹² *Ibíd.*, número 834, p. 1176.

Lejos de ser vendibles los oficios y demás... sería mejor... se escogiesen entre las personas de todas clases beneméritas, y de que hay listas en la secretaría del virreinato, las de mayor inteligencia y probidad para tales empleos [ya que, por ejemplo] Los regidores de que se componen los ayuntamientos son personas que compraron sus oficios, y así sólo por rara casualidad tienen aquella particular inteligencia y celo por el bien común, que debería basarse en los que se eligiesen para tales empleos¹⁹³

La venta de empleos comenzó a percibirse en esta época, por parte de los letrados, como un gran problema. Contrario al sentimiento de que un funcionario debía ser nombrado con base en su "mérito y suficiencia", la ocupación de un puesto de autoridad a partir de su compra daba la impresión de que se tenía la facultad de obtener beneficios por medio de éste. Es decir, su adquisición hacía suponer que se podía hacer lo que se quisiese con las facultades que confería el cargo. Esto apuntaba a que el servicio prestado al reino no llevaría al bien de la comunidad, sino que beneficiaría forzosamente a los intereses de quienes habían realizado la compra. Erradicar la venta de los cargos y realizar la selección estricta de quienes desempeñaban los cargos, no sólo garantizaba el buen funcionamiento y la imparcialidad del gobierno, como lo deseaba el virrey, sino que también establecía las bases para distinguir claramente la esfera de lo privado y lo público, condición imperativa del Estado racional moderno y, dentro de esas mismas esferas, la delimitación de las prácticas de sus sujetos políticos. Falta entonces asomarnos a la otra faceta de la noción de *ciudadanía*, esto es, en tanto sujetos jurídicos, cosa que realizaremos a partir de las consideraciones sobre la aplicación efectiva de la legislación.

4.1.2.2 La imparcialidad y el principio de elección

Como hemos observado, el virrey consideró que la compra de cargos resultaba casi siempre en una venta de favores y en el tráfico de influencias. Pero a su

¹⁹³ *Ibíd.*, números 124 y 155, pp. 1053 y 1057.

juicio, esta situación resultaba todavía más perjudicial cuando los cargos tenían dentro de sus obligaciones la impartición de justicia.

El ser el oficio del escribano del tribunal, vendible y renunciable, ha sido un grave inconveniente para quitar los derechos que percibe, por la contrata que celebró con el rey, para la compra de su empleo, y con la cual se cree autorizado para exigir derechos a cuantos deban rendir sus cuentas en aquel tribunal¹⁹⁴

La posibilidad de desahogar testimonio aceptable en un proceso judicial tenía como condición adquirir los servicios de quienes estaban facultados para redactar los documentos necesarios. Si bien esta habría sido una práctica habitual de la justicia novohispana, en esta época se manifestó una desaprobación por que se siguiera realizando de esta manera.

De acuerdo a lo expresado por Revillagigedo podemos entender que uno de sus principales deseos se concentraba en la formación de un sistema de justicia eficiente. Su crítica en este punto se orientó a que no todos los ciudadanos podían acceder a un juicio justo ante los tribunales debido a su condición financiera. En este sentido declaró que

En la secretaría no se cobran derechos, pero cuando los asuntos corren por los oficios de gobierno ya los tienen que pagar los interesados [por lo que] El que busca la justicia, la debe lograr a distintos precios, si se acude a un alcalde ordinario o si se presenta a uno de la corte, pues estos últimos, ni llevan derechos de asesoría, ni necesitan asesor, con lo cual se ahorran a las partes las demoras y los costos de asesorías¹⁹⁵

Esta situación desembocaba necesariamente en juicios parciales debido a que existían asesorías diferenciadas. La posibilidad de contar con un escribano que describiera favorablemente un testimonio dependía del pago que se le daba por sus servicios, lo cual resultaba en que un hombre rico que había cometido un

¹⁹⁴ *Ibíd.*, número 787, p. 1168.

¹⁹⁵ *Ibíd.*, números 126 y 127., p. 1053.

delito no tuviera que purgar sentencia, mientras que uno pobre generalmente estaba obligado a hacerlo, incluso cuando éste hubiera sido inocente de lo que se le acusaba. Y esta misma diferenciación era determinante al interior de las cárceles:

La escasez de la dotación de los alcaides de las cárceles, ha dado motivo a que se les permita hacer negociación de su oficio, y que según la paga, así les den el destino o alojamiento. De aquí proviene que el pobre honrado y decente, preso por un delito leve, sufra una prisión más incómoda que el rico de bajo nacimiento, aunque sea más feo el delito que lo condujo a la prisión

Es por esto que en las sugerencias del virrey encontramos el principio de imparcialidad para dar resolución a los juicios. Cuestión que nos habla de un interés por abandonar la justicia de los jueces a establecer una justicia de las leyes, es decir, la transición del modelo consuetudinario al de la aplicación imparcial de la legislación¹⁹⁶. En el sentido dictado por la tradición liberal moderna. En apoyo a estas ideas, Revillagigedo opinó que el caso del tribunal de minería era un modelo que debía seguirse. Se pronunció a favor de la manera que tenía de nombrar sus cargos, y opinó que así debía hacerse con todos los tribunales. En principio, el virrey señaló, de acuerdo a la imparcialidad en la que insistía, que era un acierto el que los "justicias territoriales" fueran externos al lugar al que eran designados:

Es... muy conveniente, el que se asocien las justicias territoriales con los diputados, porque en aquellos concurre, por lo regular, mayor conocimiento sobre el modo de instruir y formar los pleitos, y están libres de las conexiones y respetos que tienen los diputados, como que son los vecinos del pueblo, y por lo regular de los más

¹⁹⁶ Al respecto, Agueda Venegas explica que esta "idea es parte de los debates historiográficos sobre la administración de justicia en el antiguo régimen, donde se plantea que la justicia era de jueces y no de leyes, porque permaneció garantizada en la persona del juez, ya que a la hora de administrarla actuó 'como persona pública y de acuerdo a la *communis opinio* para adaptar el proceso y el derecho a las circunstancias del caso controvertido' ". Venegas de la Torre, Agueda. *Nuevos Tiempos: ¿Nueva Justicia? La Administración de Justicia en Zacatecas, 1812-1835*. Tesis de Doctorado, Instituto Mora, México, 2010, p. 97.

acaudalados y visibles; cuando por el contrario, el justicia viene de fuera de él y no tiene arraigo ninguno¹⁹⁷

Además, la estima que Revillagigedo tenía al tribunal de minería nos brinda un ejemplo muy relevante para la formación de la idea sobre la participación de la ciudadanía, ya que señala lo afortunado de incorporar las opiniones de los interesados y de nombrar a los jueces de su diputación a través de una elección:

En lo que toca a la administración de justicia, no hay duda que después de estar completo como ya lo está el tribunal con todo el número de diputados y administrador; es un juzgado más a propósito para las apelaciones, que todos los que había antes en las intendencias, pues ahora se forma de personas más inteligentes y elegidas por todos los mineros¹⁹⁸

Esto nos habla de un reconocimiento de legitimidad, a partir del consenso entre los interesados, para designar a una autoridad en la resolución de conflictos. La administración de justicia, en este caso, se consideró más confiable, al menos en el parecer del virrey, si los involucrados acordaban quién debía ejercer esa tarea. Así, la designación de los funcionarios desde los altos mandos del gobierno parecía que era menos adecuada en relación a esta afirmación.

La legitimidad que se percibía a partir de la idea del principio de elección implicó una transformación en la designación de un funcionario público. No obstante, la propuesta de crear el Tribunal de Minería (el cual fue aprobado bajo un código de 1783) con su propia jurisdicción y conformado por medio de una elección entre los interesados causó malestares en diversas autoridades. Por ejemplo, "Domingo Valcárcel, anciano oidor y superintendente del monopolio del mercurio", temía que estos cambios llevaran a "que la justicia que proporcionaría estaría deformada por la influencia de las relaciones de familia y de negocios". Sospecha que de hecho se confirmó¹⁹⁹. Sin embargo, Revillagigedo no creía que

¹⁹⁷ *Ibíd.*, número 478, p. 1115.

¹⁹⁸ *Ibíd.*, número 477, p. 1115.

¹⁹⁹ Cfr. Brading. *Mineros...*, p. 435.

esto se debiera a la elección pública, sino a la parcialidad de quienes tomaban parte en el juicio, por lo que continuó recomendando que los diputados de las localidades no actuaran solos, sino que siempre lo hicieran en conjunto, para dar contrapeso con la participación de quienes habían sido electos por otros.

A partir de estas consideraciones del virrey podemos apreciar que con la insistencia sobre la necesidad de transitar a una *Causa de Justicia*, que se sostuviera sobre la imparcialidad de los jueces y sobre la aplicación de las leyes, de manera uniforme y sin interpretaciones extraordinarias, se insistió en un punto que resulta medular para la construcción de la ciudadanía moderna; en tanto apunta a la aplicación de justicia individual y homogénea ante las leyes. No obstante, como veremos más adelante, el nuevo ideal de la impartición de justicia, ya en las prácticas, develará a qué tipo de súbditos favorecieron y, por tanto, como intervino esto en la construcción del ciudadano ideal.

Ahora bien, una vez atendidos los trazos generales de la ciudadanía ideal en esta primera sección, tanto en la faceta política como en la jurídica, es necesario avanzar sobre ciertas prácticas que dieron sustento a estas mismas ideas.

4.2 La protociudadanía frente al espíritu ilustrado

El resto del presente capítulo está dedicado a enunciar algunas de las transformaciones que hacia la segunda mitad del siglo XVIII se presentaron dentro de la vida social novohispana. Los cambios sociales referidos están vinculados a las prácticas que ahora podemos reconocer dentro de las características de la ciudadanía moderna, por lo que su selección no ha sido arbitraria. De tal manera que éstos nos auxiliarán para ubicar cuál fue el perfil de los potenciales ciudadanos durante los últimos años de aquel siglo.

Asimismo es indispensable enunciar un contexto general del despotismo ilustrado de la época. Si bien en el pasado capítulo hemos revisado el proceso histórico novohispano en torno a las nuevas disposiciones de la Corona, hemos de advertir, en principio, algunas modificaciones que se presentaron en la recepción de las ideas ilustradas.

Para dar cuenta de esto debemos atender a percepciones sobre lo político, la educación y la utilidad que estuvieron presentes en las autoridades virreinales, en los llamados *sabios*, y en algunos funcionarios de las localidades durante esta época. De esta manera podremos figurarnos por qué el espíritu de la ilustración tuvo un cierto eco entre las autoridades hacia mediados de aquel siglo, y un tono diferente hacia finales del mismo.

Una primera aproximación a este problema la encontramos atendiendo las confrontaciones en la vida política (o mejor dicho en las actividades del orden público) en torno a la *razón* y la mejor manera de llevar el *real servicio*. Al revisar estos enfrentamientos también nos percataremos de los cambios ocurridos en algunas relaciones de poder dentro de la sociedad novohispana, y por tanto la mayor o menor estima a las ideas e instituciones de la época.

Un buen ejemplo para atender esto es que a pesar de que en la metrópoli difícilmente reconocía el valor de los *hombres de ciencia* que habían consagrado su vida a esta actividad en los reinos americanos, diversos visitantes extranjeros se encontraron con que los estudiosos novohispanos eran mucho más dedicados y elocuentes de lo que habían supuesto. La "presencia de destacables sabios mexicanos contradecía la ignorancia que el orgullo europeo echaba en cara a los criollos y demostraba que no era el clima el culpable de la supuesta apatía o la falta de energía moral, sino el aislamiento y la falta de instituciones sociales"²⁰⁰. Esta situación provocó frecuentemente que los funcionarios comisionados en la metrópoli arribaran a la Ciudad de México despreciando de inicio las capacidades de los nacidos en el virreinato. No obstante, algunos de los peninsulares tuvieron que ceder ante su ignorancia sobre diversas cuestiones locales, lo que los llevó a pedir ayuda a quienes las habían estudiado por más tiempo.

Esta fue la situación con la que se enfrentó uno de los científicos novohispanos más productivos de la época, y sin duda uno de los más controversiales en aquellos años: José Antonio de Alzate y Ramírez. A finales de la década de los sesenta del siglo XVIII encontramos a un joven Alzate convencido del respeto a la

²⁰⁰ Puig-Samplé, Miguel Ángel y Sandra Rebok. "Alejandro de Humboldt, las expediciones científicas españolas y la formación de las élites criollas" en Karl Kohut y Sonia V. Rose, *op. cit.*, p. 173.

autoridad y a la ley. Lo cual se comprobó cuando el virrey Croix prohibió su publicación llamada *Diario literario de México*, colección que solamente contó con siete números hasta entonces, siendo el octavo prohibido por decreto virreinal. Alzate, con escasos veintiún años de edad no realizó protesta alguna por la decisión del virrey de origen francés, y se limitó "a escuchar y obedecer, pues para eso, según Croix, se había nacido"²⁰¹.

Esta etapa del párroco ilustrado corresponde a una faceta que el historiador Roberto Moreno, quien estudió extensamente a este personaje, ha distinguido como de "aprendizaje", razón por la cual prevalecía una actitud de acato ante los altos funcionarios de gobierno. Asimismo es evidente que el joven Alzate no estaba en posición de confrontar a quienes de antemano lo superaban en edad y jerarquía. No obstante, a pesar de que este *sabio* se encontraba en una situación que debía total obediencia, también podemos referir que durante esos años existió un mayor recelo para resguardar la autoridad de la Corona. A este respecto, José Enrique Covarrubias ha resaltado que los años en que gobernó el marqués de Croix (1766–1771) se caracterizaron por un esfuerzo que buscaba "reforzar la autoridad monárquica", y con ello garantizar "la profesión de una obediencia irrestricta a la superioridad como uno de los rasgos fundamentales del discurso utilitario en Nueva España"²⁰². Esta determinación por mostrar incuestionable la autoridad de la jerarquía monárquica había quedado clara con las acciones emprendidas por José de Gálvez en América –las cuales referimos en el capítulo anterior. El acato de Alzate, aunque influido profundamente por su edad y posición, es muestra del espíritu de esos años.

Moreno nos ofrece también una lista de los aprendizajes de Alzate durante los gobiernos de Croix y de Bucareli y Ursúa. Asegura, con un tanto de ironía, que el joven aprendió:

Pocas cosas, a la verdad, pero esenciales. Primero, que las autoridades acostumbraban ser totalmente indiferentes a las propuestas de la mejoría que no salgan de ellas mismas. Segundo, que los intelectuales pueden servir para dar lustre al

²⁰¹ Moreno, Roberto, Introducción a Alzate, José Antonio de, Memorias y Ensayos, UNAM, México, 1985.

²⁰² Covarrubias, *op. cit.*, p. 396.

Estado y aun que se les contrata cuando sus conocimientos son de utilidad. Tercero, que en los golpes que da de vez en vez el Estado suele no haber animosidad. Cuarto, que mientras se está en gracia hay que pedir lo que se quiere. Pero, quinto, y más importante, que si se pretende guardar sana la pelleja, hay que manejarse con extraordinaria prudencia²⁰³

Dentro de estos puntos se observa claramente el carácter del despotismo ilustrado que hemos revisado brevemente para la experiencia novohispana. Aquí sobresale una reforma política *desde arriba* en donde los altos funcionarios debían acatar los decretos provenientes de la metrópoli, aún si contravenían su apreciación y sus intenciones. Y si bien no siempre se lograban cumplir los deseos de la Corona, al menos el virrey debía justificar ante el rey las acciones esforzadas de su gobierno.

Resalta también que los ilustrados de las cortes castellanas tenían un lugar muy distinto al de los doctos novohispanos. La organización del gobierno acercó a algunos pensadores filósofos al rey, mientras sus pares americanos, debido a la verticalidad entre la península y los reinos, generalmente estuvieron en exclusiva al servicio de los proyectos que hacían lucir a la administración virreinal ante el monarca, es decir, en el llamado Nuevo Mundo los intelectuales o científicos no fueron parte sustancial del aparato de gobierno, por lo que sólo tomaron parte en asuntos exclusivamente técnicos del interés utilitario –productivo y comercial. Por lo que dejar a oídos del público la crítica, la inconformidad, o alguna otra cosa que se interpretara como éstas, podía ser motivo de censura inmediata, en el mejor de los casos, o de un proceso penal derivado del recelo autoritario de la época.

Este panorama muestra el carácter despótico que primó en los estados absolutistas. Se pensó que para resguardar efectivamente la legislación, la cual había sido aplicada a medias y muchas veces ignorada²⁰⁴ hacia el siglo XVIII y especialmente a mediados de éste, se debía adquirir un carácter más estricto en todas las instituciones de gobierno. Así, para lograr hacer valer la ley, al menos en las zonas urbanas, fue necesaria la presencia de cuerpos burocráticos designados

²⁰³ Cfr. Moreno, *op. cit.*, p. 13.

²⁰⁴ En este punto hay que recordar la Recopilación de leyes de Indias en donde no todas se cumplían en los hechos.

para tareas correspondientes a las causas de *Policía*, las cual, por estos años y gracias a la apreciación utilitaria, comenzaría a orientarse hacia la noción moderna de *policía* que ahora nos es familiar.

Sin embargo, si bien las acciones de gobierno buscaban proveer firmeza a la figura de la Corona, la cual se auxilió de una estructura administrativa más controlada, existieron algunos rubros en donde se presentó un claro relajamiento de la legislación tradicional a favor de la primacía de las leyes hacia finales del mismo siglo XVIII. Además de que las mismas disposiciones de la *Ordenanza de Intendentes*, como hemos revisado, había limitado las facultades de los virreyes. Por lo que también esto se percibió, como lo hemos visto a través de las consideraciones de Revillagigedo, en detrimento de la autoridad del gobierno americano hacia finales del siglo.

Comencemos pues a valorar cuáles fueron los aspectos que perdieron rigidez en la política estatal hispana y cuáles otros ocuparon un lugar primordial dentro de sus preocupaciones. Además de las prácticas desprendidas de las nuevas prioridades, muchas de las cuales nos aproximan a la conformación de la ciudadanía moderna.

4.2.1 Nuevas disposiciones para los estamentos excluidos

Los indios y las castas estuvieron relegados de la condición de *vecindad*. Y, de acuerdo a lo dicho por la *Ordenanza*, estaban aún más lejos de reconocérseles como parte del "competente vecindario". No obstante, como lo indicamos en el segundo capítulo, las mismas actividades de vecindad poco a poco fueron brindadas, al menos en las prácticas, a los primeros. Situación que los incluía como parte de los reinos hispanos. A pesar de esto, su situación jurídica y fiscal diferenciada terminó siendo en punto de partida para su posterior exclusión de la *ciudadanía*.

En los Estados constitucionales generalmente se considera que la colaboración con la hacienda pública es un aspecto que justifica la inclusión de sus habitantes dentro de la comunidad política. Cuestión que no fue considerada para los

estamentos de indios y de castas para ser considerados dentro de ese "competente vecindario". Si bien ambos estamentos estuvieron en esta condición, es preciso atender las líneas generales que distinguen a uno del otro.

Resulta indispensable aclarar que la diferenciación de los estamentos, en general, obedeció más a una situación fiscal y, en segundo lugar, étnica, que a una distinción por medio de sus rasgos físicos. Así, mientras los indios estaban obligados al pago de tributos, los castizos además de esta obligación debían cumplir con el pago de impuestos en el comercio de las mercancías, fueran o no producidas por ellos. Otra característica que los distinguía fue que los indios estuvieron exentos de los procesos de la inquisición desde 1538. De lo cual los castizos no escaparon, siendo ellos los principales acusados por el tribunal.

A pesar de la insistencia por definir las obligaciones de los estamentos, y por tanto la integración de los mismos, los llegados del exterior, tanto visitantes como funcionarios, no reconocían claramente las diferencias. Porque si bien los estamentos se constituyeron en un principio por elementos raciales evidentes, para el siglo XVIII no era posible imputar la pertenencia a algún grupo simplemente por una apreciación de razas. Ya que para esta época se había presentado un mestizaje que arrojó una gama racial bastante diversa. Lo cual no permitía caracterizar a la población solamente a partir de su fisionomía. Además esto se tornó más complicado debido al rompimiento de la barrera del color, la cual consistía en la posibilidad de algunos vasallos por contarse dentro de otro estamento que no era en el que habían nacido, cambiando sus hábitos de vestimenta y sus actividades económicas y fiscales.

Esta variedad de condiciones provocaba que las diferencias estamentales fueran evidentes sólo para quienes conocían ampliamente la vida social de la Nueva España. Así como lo indicó José Antonio Alzate, quien afirmó que:

Algunos, aunque residentes por algún tiempo en México o en Lima u otras grandes poblaciones, registran a la gente del vulgo que impropriamente nombran indios, observan sus vicios y de aquí resulta una descripción muy falsa del verdadero indio.

Para tratar de sus caracteres verdaderos es necesario haberlos comunicado y observado en las haciendas en que sirven... en los pueblos distantes de poblaciones de los blancos y mulatos, allí en donde se reconoce lo que es un indio del país²⁰⁵

La intención de Alzate en estas líneas escritas en 1791 era desligar la figura de los indios de los esencialismos peyorativos con los que eran vinculados durante aquellos años por algunos vecinos pertenecientes al estamento español. Las características generalizadas que, según Alzate, desvirtuaban a los indios eran las de ser ladrón, ocioso, desaseado, ignorante y vicioso. Sin embargo, el párroco se dio a la tarea de ejemplificar lo equivocado de estas nociones a su parecer. Pero en el camino desestimó a los castizos, especialmente a los mulatos, a quienes acusó de diversos defectos, similares a aquellos que fueron imputados a los indios por parte del estamento español.

La postura esencialista que aparece en las descripciones de los indios, es decir, la convicción de que estos defectos se deben a la naturaleza del indio, es rechazada por Alzate. En este sentido, su faceta de hombre de ciencia se deja entrever a partir de la negación de una naturaleza determinante *a priori* del comportamiento de las etnias. Por lo que insiste en que los lugares en que los indios se corrompen son aquellos en donde han tenido contacto con otros estamentos, los cuales son los responsables, según el párroco, de su perversión; ya sea porque los asentamientos se encuentran próximos, o porque "los indios de los pueblos establecidos en los caminos reales se hallan contaminados de los vicios que les comunican muchos de los pasajeros"²⁰⁶.

El cobro de tributo a los indios se llevaba a cabo de manera indirecta. Los gobernadores de las repúblicas de indios o los alcaldes de las comunidades eran los encargados de recaudar los tributos para después entregar la suma total a los corregidores del distrito correspondiente. La cantidad a pagar debía ser calculada con base en el número de habitantes indios –debido a que el pago era una obligación personal.

²⁰⁵ Alzate, José Antonio de. "Un indio de la Nueva España ¿Qué especie de hombre es, cuáles sus caracteres morales y físicos? (1791)" en *Memorias y Ensayos*, UNAM, México, 1985, p. 155.

²⁰⁶ *Ibid.*, p. 156.

Al ser el gobernador indio el encargado de recolectar (o en su caso de abonar) los tributos de la comunidad en conjunto, se recurrió constantemente a falsear los datos. Esto con el fin de reducir considerablemente el monto total de lo tributado. Además, en muchas ocasiones, según las denuncias de José de Gálvez (durante su cargo como visitador general) los alcaldes mayores y los corregidores no recibían estos pagos. Y si bien los funcionarios locales tuvieron dificultades para hacer los cobros correspondientes, la determinación de la cuota individual (que era un monto *per cápita*) calculada de acuerdo a la situación económica particular de cada población, también ofreció severas dificultades para ser determinada²⁰⁷.

Bajo estas condiciones resultaba muy complicada la recaudación de los tributos. La facilidad con que podía hacerse fraude al fisco resultaba abrumadora. Asimismo, los recaudadores estatales tenían poca experiencia en estas actividades, ya que debemos recordar que la tarea de cobros se había concesionado a los particulares ligados al monopolio comercial.

De estas dificultades surge la necesidad de regular la recaudación, por lo que en la Ordenanza de 1786 se dispuso que ya no sería la contaduría general la que se responsabilizaría de la recolección de tributos, sino que cada intendente de provincia tendría que organizarse, con los mismos recursos asignados, para su cobro. Así, los intendentes debieron coordinar a los funcionarios que tenían a su mando. Después de la ordenanza, los alcaldes ordinarios (según fuese el caso) debían responsabilizarse de calcular y cobrar los tributos de manera conjunta con los alcaldes o gobernadores de indios. Esto, por supuesto, con el fin de determinar el monto correcto de acuerdo a las características de las comunidades. Para el caso de los subdelegados, éstos debían de designar a ciudadanos para que realizaran estas tareas fiscales. Y para estimular el cobro de los tributos en general se ofreció el 5% de lo recaudado entre los indios y las castas a los alcaldes ordinarios y los subdelegados, además del 1% de lo recaudado en su comunidad a los gobernadores de indios²⁰⁸.

²⁰⁷ Cfr. Pietschmann. *Las Reformas...*, p. 213.

²⁰⁸ Cfr. *Ibíd.*, p. 215.

Para solucionar el problema del cálculo del monto de los tributos, la Ordenanza también buscó unificar el cobro de un tributo individual sin tomar en cuenta la condición económica de las comunidades. Para lo cual se determinó que "todo indio varón a partir de 18 años y hasta haber cumplido los 50, debía pagar un tributo anual de 17 reales... Todos los varones negros y mulatos entre 18 y 50 años deberían pagar 24 reales de cuota unitaria como tributo"²⁰⁹. Cuotas que representaban un aumento con respecto a las dispuestas antes.

Dentro de los cambios sobresale que anteriormente, la cuota del tributo era reducida a la mitad en el caso de que los indios fuesen solteros. Sin embargo, la Corona sospechaba que algunos indios se mantenían solteros por esta razón. Existía pues la suposición de que esta excepción se derogara no sólo para que no se concediera la rebaja, sino también para fomentar el aumento de la población, y con ello asegurar la elevación de súbditos económicamente activos; concretando así dos beneficios evidentes para los intereses del crecimiento económico y la mayor recaudación fiscal: el incremento de las actividades productivas y el aumento de los súbditos obligados al pago.

Esta situación puede ser vinculada a la idea de que el desarrollo del capitalismo, aquí en una faceta neomercantilista, va de la mano con un aumento en la población económicamente activa. A pesar de que Weber nos brinda contraejemplos que niegan esta relación por sí misma, es seguro que los letrados hispanos eran conscientes de la necesidad de incrementar la población económicamente activa para aumentar la recaudación fiscal. Al respecto, Weber indica que el "incremento de la población en Europa colaboró en términos generales al desarrollo del capitalismo, ya que con un número menor de habitantes éste no hubiera encontrado la mano de obra que necesitaba; pero el aumento, como tal, no provocó las concentraciones obreras"²¹⁰. Sin embargo, lo que podemos concluir al respecto es que, de hecho, en estos años existió, dentro del pensamiento económico, una convicción de que el *desarrollo* comercial dependía de este aumento poblacional.

²⁰⁹ *Ibíd.*, pp. 215-216.

²¹⁰ Weber. *Historia Económica...*, p. 296.

Así, la necesidad de tener mayores ingresos en la recaudación llevó a tomar medidas en cuestiones poblacionales, pero también fueron reforzadas con aumentos directos en las obligaciones de los estamentos excluidos.

Por otra parte, un aspecto que nos habla de la exclusión general de estos estamentos, lo cual es más evidente para el caso de indios, son las limitaciones del lenguaje. Como ya hemos observado, en la Ordenanza se mandó que quienes podían ocupar cargos dentro de los gobiernos de las localidades debían tener el castellano como lengua. Sin embargo, la imposición del idioma no paró ahí. Hacia el siglo XVIII el gobierno Borbón, por su convicción ilustrada, concedió "un papel preponderante en el fomento de las escuelas gratuitas de enseñanza básica"²¹¹, lo que además representó una ruptura con el monopolio educativo que hasta entonces habían tenido los religiosos. No obstante, lo sobresaliente del asunto es que al introducir esta educación *ilustrada*, se realizó sobre la convicción de que *la razón* se portaba en el *Viejo Mundo*, por lo que se dispuso que todos los cursos en las escuelas de primeras letras también debían darse en castellano²¹², situación que apuntaba a establecer esta lengua en todos los pueblos de indios, en perjuicio de sus propios idiomas. Lo cual nos anuncia un nuevo esquema de exclusión.

El gobierno de la Corona, por un lado, realizó esfuerzos por incluir a los bajos estamentos, en especial a los indios a la vida productiva y comercial. Mas para el afán utilitario no sólo era necesario que ellos adoptaran el interés productivo, sino también el conocimiento del idioma castellano y su expresión escrita. Empero, aunque esto buscaba asemejar a estos vasallos a las prácticas que eran bien valoradas por los españoles, la adopción de las mismas no buscaba incluirlos dentro del denominado "competente vecindario", por lo que su exclusión estaría destinada a perpetuarse. Las nuevas disposiciones, educativas y fiscales, por tanto se establecieron para el beneficio del gobierno de la Corona, sin que se contemplara un beneficio real para los bajos estamentos, más que para instruirles en las nuevas maneras de la *civilidad*, cosa que, por supuesto, a la gran mayoría de los pueblos lejanos a las urbes les tenía sin cuidado.

²¹¹ Tanck de Estrada, Dorothy. "El gobierno municipal y las escuelas de primeras letras en el siglo XVIII mexicano" en *Revista de Investigación Educativa*, vol. 7, núm. 15, mayo-agosto, 2002, p. 258.

²¹² Cfr. *Ibíd.*, p. 265.

Así, encontramos que la perpetuación de la exclusión fue tan efectiva que durante los años independientes, los letrados mexicanos entendieron que las prerrogativas fiscales que los indios habían gozado les había hecho inútiles y perezosos. Y que, sin haber tomado en cuenta la obligación de pago de tributo durante el gobierno monárquico, se les adjudicó una falta de responsabilidad fiscal. Por tanto, estas ideas fueron un factor más, aunado al analfabetismo, a la condición de menores de edad (para el caso de indios) y de seres sin alma (para aquellos mulatos de ascendencia negra), que también intervino en su posterior exclusión de la comunidad política de ciudadanos.

4.2.2 Políticas de intervención del Estado en la institución eclesiástica

Ahora atenderemos la cuestión de la secularización, a saber, que ha aparecido como un proceso que ha acompañado a la formación de diversos Estados constitucionalistas. La separación entre Iglesia y Estado²¹³, o al menos las restricciones de la primera en la participación con las facultades ejecutivas del gobierno, ha sido una condición en la que el liberalismo insistió desde el siglo XVII. Las acciones de intervención del Estado monárquico en la administración de lo público que aún detentaba el clero en el siglo XVIII pueden ser vistas como parte del proceso *protoliberal* novohispano. En este sentido, es prioritario enunciar en qué aspectos se redujeron las facultades eclesiásticas, favoreciendo las instituciones seculares y aventajando el espacio de lo civil, dentro de un escenario que favoreció la aparición del pretendido laicismo liberal posteriormente²¹⁴.

Es bien sabido que la religión estuvo omnipresente en la vida del *Antiguo Régimen*. No obstante, durante las reformas de los Borbones la institución eclesiástica fue blanco de diversas políticas que terminaron por debilitarla. Esto se debió a que la preferencia de los intereses monárquicos por los asuntos fiscales,

²¹³ Cfr. Salazar Carrión, Luis. *Para pensar la política*. Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa, México, 2004, p. 180-187. Una historia detallada sobre el proceso de secularización del liberalismo europeo se puede revisar en: Laski, Harold J. *El liberalismo europeo*. Breviarios, Fondo de Cultura Económica, México, 1979.

²¹⁴ Cfr. Chimal, *op. cit.*, p. 98-112.

productivos y comerciales, llevaron a socavar la autoridad de los asuntos eclesiásticos. Las políticas de intervención provocaron diversas críticas a las nuevas disposiciones, dentro de las que podemos destacar la expresada hacia 1794 por el segundo Conde de Revillagigedo, quien destacó que:

Entre las jurisdicciones privilegiadas, la más principal es la eclesiástica, que en estos reinos estuvo en el más alto punto; pero sucesivamente se han ido estrechando sus límites y últimamente quedó más reducida con la declaración de que se conozca en los juzgados seculares de los principales rendidos de las capellanías y obras pías²¹⁵

Esta opinión resulta relevante si consideramos que este virrey se reconoció como un defensor del reformismo, así como por su convicción ilustrada. Sin embargo, él mismo consideró que las nuevas normas impuestas a la Iglesia resultaban excesivas. Por ejemplo, Rodolfo Aguirre Salvador ha señalado que:

se limitaron los privilegios y especialmente la fuerza del clero regular, proceso que culminó con la expulsión jesuítica. La corona también degradó a la inmunidad eclesiástica y pudo verse a sacerdotes encerrados en cárceles civiles por delitos graves. Finalmente la riqueza de la Iglesia fue en buena medida sustraída con la consolidación de vales reales de 1804²¹⁶

Estos cambios fueron dándose en diferentes ámbitos. Y si bien los ataques a la Iglesia finalizaron en una medida extrema en 1804 con los vales reales, sus privilegios fueron frecuentemente minados hacia finales del siglo XVIII. Desde la *Ordenanza* se determinó que las propiedades eclesiásticas, ya fueran comunidades religiosas, fideicomisos u obispados; debían pagar la misma cantidad de impuestos que aquellas posesiones particulares. Además se les exigió el pago de alcabalas, de las que habían estado siempre exentos.

²¹⁵ *Instrucción reservada del Segundo Conde de Revillagigedo a su sucesor Marqués de Branciforte* en De la Torre Villar, Ernesto. *Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos*, Tomo II, Editorial Porrúa, México, 1991, número 94, p. 1048.

²¹⁶ Aguirre Salvador, Rodolfo. *El mérito y la estrategia. Clérigos, juristas y médicos en Nueva España*, Centro de Estudios sobre la Universidad-UNAM, Plaza y Valdés, México, 2003, p. 39.

El principal objetivo que perseguía la Corona con esta derogación de privilegios fue el fomento de producción de las tierras, debido a que la mayor parte de las grandes propiedades de la Iglesia estaban en "manos muertas" (con lo que tenemos constancia de un embate a la propiedad corporativa setenta años antes de aquella ley propuesta por Sebastián Lerdo de Tejada). Pero además, este no fue el primer intento legislativo para combatir la concentración de tierras inactivas, ya que en las *Recopilación de leyes* se había prohibido la venta o transferencia de propiedades nuevas a instituciones eclesiásticas.

Sin embargo, la presencia de este artículo evidencia el fracaso de aquella primera ley hasta la entrada en vigor del sistema de intendencias. A partir de ese momento cualquier adquisición de propiedades por parte de la Iglesia debería "contar con la autorización del intendente o de alguno de los subdelegados"²¹⁷.

Por otra parte, en la Junta de Diezmos los representantes religiosos serían minoría con respecto al número de funcionarios laicos, y sería el intendente quien la debería presidir. Además la Junta en su conjunto debía determinar el porcentaje que se entregaría a la Iglesia de acuerdo a un cálculo que justificara cuánto necesitaba ésta para subsistir. Así, esta "reglamentación demuestra el empeño de la Corona por poner bajo su control las finanzas eclesiásticas, esfuerzos a los que la Iglesia y el clero se opondrían por todos los medios"²¹⁸.

Asimismo fueron los intendentes quienes tuvieron las responsabilidades del vicepatronato en las provincias²¹⁹ después de establecidas las intendencias, en donde observamos también una mayor vigilancia de las actividades religiosas, porque cuando el virrey fue el encargado de estas funciones en épocas anteriores no contaba con un aparato burocrático para realizar esta labor de manera minuciosa. Situación que permitió al clero, especialmente al regular, actuar con bastante autonomía. En cambio, los intendentes, al menos en el papel, se posicionaban como vigilantes de los asuntos religiosos en las capitales²²⁰.

²¹⁷ Pietschmann. *Las reformas...*, p. 218.

²¹⁸ *Ibíd.*, p. 221.

²¹⁹ Cfr. *Ibíd.*, p. 168.

²²⁰ A esto precede una Real Cédula de 23 de mayo de 1769, en donde se decretó que la administración de los diezmos debía contar con la participación de autoridades laicas.

Así observamos que la implementación del sistema de intendencias buscaba una mayor intromisión del Estado en los asuntos de la Iglesia. Si bien no se quería obtener una participación total en la manera en cómo ésta se administraba, es evidente que surgió un claro interés por controlar más la manera en que los eclesiásticos actuaban.

Una de las justificaciones del gobierno monárquico para intervenir fue la denuncia de que las cuotas que el clero secular cobraba por realizar cualquier tipo de ceremonias específicas o expedir algún certificado sacramental, usualmente resultaban ser elevadas. Y considerando que los montos deberían fijarse de acuerdo a la situación económica de los pueblos, era común que aprovechando la necesidad de los feligreses por obtener estos servicios, muchos incrementaran sus honorarios de acuerdo a la capacidad de pago de los solicitantes. Pero haya sido esto un pretexto o una motivación real para la reforma financiera, la *Ordenanza* determinó que los intendentes deberían evitar los excesos en este renglón; y aunado al combate contra los abusos, la reforma no perdió oportunidad para obtener un beneficio de ello.

En contraste, un aspecto que nos hace sospechar sobre estas medidas de la Corona, como parte de un interés financiero en donde se buscaron mayores dividendos para su recaudación, lo podemos ubicar en que , contrario al resguardo de la fe católica, hacia la última parte del siglo se presentó una menor vigilancia de los asuntos inquisitoriales. El conocido y ya clásico trabajo de Monelisa Pérez–Marchand, *Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México*²²¹, nos muestra claramente cómo a principios de siglo existía una mayor vigilancia de los textos que circulaban en los dominios hispanos. Y aunque la labor inquisitorial nunca fue tan exacerbada como en Europa había, a través de los controles aduaneros, una fuerte restricción a las obras que arribaban principalmente vía Sevilla. Por el contrario, en la segunda mitad del XVIII las preocupaciones inquisitoriales pasaron a un plano secundario para la Corona.

²²¹ Pérez-Marchand, Monelisa. *Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición*, El Colegio de México, México.

En realidad hasta antes de 1789, pero todavía hasta 1793, año de ejecución de los reyes de Versalles, el despotismo ilustrado tuvo buenos ojos para muchas de las ideas vertidas por los nuevos letrados. Por tanto, las consideraciones sobre qué libros eran francamente heréticos fueron flexibilizándose con el paso del siglo. Además, esto fue acompañado por un importante detrimento del ímpetu por impedir su circulación y su tráfico en las aduanas.

De esta manera tenemos que muchas de las ideas seculares se debatieron en círculos exclusivos de la sociedad novohispana, y tuvieron un mayor eco entre los letrados y los migrantes de la época. Empero, no sería hasta después de dicho año 93 cuando se aplicaría un repentino freno a las ideas del espíritu ilustrado en los reinos hispanos; mas no para recobrar la ortodoxia católica, sino para evitar a toda costa que se presentara un movimiento social desprendido del clamor revolucionario francés. A partir de entonces se incrementaron los ataques a algunas ideas que había dejado aquel siglo en Europa. Los cuales se presentaron con un elevado contenido de fatalismo que ubicaba ese presente como desastroso causado por el atrevimiento herético de algunos revolucionarios abanderados con ideas pretendidamente ilustradas. Así, abundaron juicios temerosos de parte del Santo Oficio que consideraban que era una "época funesta en que los destemplados ecos de la libertad han llegado hasta las provincias unidas"²²².

A través de los papeles inquisitoriales Pérez–Marchand advirtió la paranoia generalizada de estos años, señalando que la preocupación "aparece una y otra vez, a manera de tema sinfónico, en estos 'Infelices tiempos en que, lo que no se atrevía a proferir el Impío sino alla en el Secreto, en lo más profundo de su corazón, lo gritan lo publican, y lo dan a leer a todo el mundo los que se precian de Filósofos'"²²³. La impresión de las autoridades no es que existieran solamente algunos sectores que habían dudado sobre el camino de Dios y el catolicismo, sino que aún lo cuestionaban y lo negaban; pero además pregonaban sus deducciones mundanas y las divulgaban, conformando una corriente que contravenía las ideas de la religión.

²²² *Ibid.*, p. 166.

²²³ *Ídem*.

Existe evidencia de que los libros de filósofos, especialmente los del mundo católico, circulaban libremente por la Nueva España durante la segunda mitad del XVIII, aún cuando muchos de ellos estaban catalogado como prohibidos. Esto se puede constatar en diversos documentos, por ejemplo, en una denuncia hecha por el presbítero de Puebla Joseph Suárez de Torquemada en 1792, podemos ubicar que la falta de resguardo de los libros prohibidos resultaba muy común en la época:

Según he observado en el tiempo que llevo en esta Ciudad tengo por cierto lo que delató este sacerdote [Athanasio Joseph de Ureña], porque veo las librerías que refiere con un libre uso de todos; y me rezelo que lo propio acontezca con las que haia en los Conventos de Regulares de esta misma Ciudad; pues el P.P. Francisco Zarco, Notario de este Sto. Of. me insinúa... haver notado que en ninguna de ellas hai separación de libros prohibidos²²⁴

Por otra parte, en la documentación utilizada por Pérez–Marchand hay registros que muestran las críticas a algunos que sin los estudios necesarios hacían gala de su lectura de escritos ilustrados. Esto resulta especialmente relevante para suponer el nivel de divulgación de los textos. Un ejemplo de esto es que el

Comisarios de Oaxaca, advierte que su provincia "abunda en Alcaldes Mayores, que van y vienen, tienense por hombres de gusto, y creen no lo serían si no trajesen consigo libros de moda y a la francesa... y como quiera que este perverso prurito a Libros nuevos se ha extendido con demasía, trasciende el daño a otros, pues veo en manos de Mercaderes idiotas libros que seguramente no entienden, en fin, ya todos son letrados y controversistas²²⁵

Son dos los elementos que resaltan en esta declaración. En principio que los textos ilustrados se hayan convertido en un símbolo de buen gusto hacia los años ochenta de aquél siglo. Y por lo que podemos distinguir no sólo de las bibliotecas

²²⁴ Extracto de la denuncia acerca de que en las bibliotecas públicas y privadas no se guardan los libros prohibidos separados de los corrientes, Puebla, 1792 en Pérez-Marchand, *op. cit.*, pp. 241-242.

²²⁵ *Ibíd.*, p. 168.

privadas de algunos lectores doctos o estudiados, sino que también entre quienes prestaban servicios a la Corona como funcionarios públicos en las localidades y, revelando una dinámica más amplia del comercio de libros, entre quienes llevaban a cabo actividades mercantiles.

En segundo lugar podemos percatarnos de la incapacidad de la institución inquisitorial por evitar que estos tratados filosófico–políticos circularan en el virreinato. Por un lado, es razonable que al existir demanda en el mercado de libros hayan existido también maneras ilícitas de introducirlos para ofertarlos en estas latitudes. Pero por otro lado, las tareas inquisitoriales fueron debilitándose ante el nuevo espíritu neomercantilista de la época. El hecho de que la administración del gobierno de la Corona, tanto el metropolitano como el de los virreinos, se haya secularizado en vías de lograr una mayor eficiencia, terminó por disminuir las facultades de las instituciones eclesiásticas tradicionales en favor de la prioridad de las actividades productivas y fiscales del Estado borbónico. Aspecto que además favoreció, en la medida en que se buscaba activar la producción de las tierras y de sus habitantes, a la propiedad individual sobre la corporativa y la comunal.

4.2.3 Limitaciones jurídicas al poder omnímodo

Una de las principales características que distinguen a los ciudadanos modernos es su condición particular como sujetos de derecho, en donde lo jurídico y lo legislativo actúan de manera igualitaria para todos. Lo cual, además, es la base de la tradición liberal. Esta cuestión, no se presentó así en el siglo XVIII novohispano, debido a que existieron legislaciones diferenciadas para los estamentos. Por tanto, no se puede hablar de la consolidación de un liberalismo en esta época. No obstante, es posible distinguir el proceso que se dirigía hacia la concepción de un aparato jurídico igualitario.

En este sentido, lo que queremos distinguir es el comienzo del abandono de la impartición de justicia *de jueces*, es decir, con base en la interpretación discrecional de la legislación, y del contexto en que se juzgaba, de parte de

quienes estaban encargados de emitir veredictos. Este fue un tipo de derecho consuetudinario que se encargaba a una autoridad para discernir la *communis opinio*. Por otro lado, en esta época se gestan las primeras ideas de la justicia con base en leyes. Lo que supone la aplicación igualitaria y sin interpretaciones de la legislación. Por tanto, estas debían ser redactadas de manera clara para evitar ambivalencias. Además de la posibilidad de presentar una defensa que ya no se basara solamente en las testificaciones, como lo fue en el caso anterior.

Hacia finales del siglo XVIII se presentaron algunos casos que nos hacen suponer el inicio de esta segunda clase de impartición de justicia. La cual, por supuesto, está ligada a la noción de ciudadanía moderna por ser parte de las prerrogativas que los Estados constitucionalistas brindaron a sus sujetos de derecho. Para ejemplificar este cambio en lo jurídico resulta bastante útil atender a algunos datos sobre el temor generalizado desprendido del parricidio real francés acontecido en 1793.

La paranoia desatada por la revolución francesa fue un fenómeno generalizado en el mundo occidental. No sólo en los reinos católicos (aunque principalmente), sino en todas las naciones que temían ante el tipo de gobierno que habían impuesto los jacobinos en Francia. No obstante, en este apartado trataré de ejemplificar cómo las nuevas disposiciones jurídicas de la nueva política hispana lograron aminorar el impacto de algunas reacciones excesivas a esta situación.

En la Nueva España este temor exacerbado llegó a su máxima expresión durante la llegada del virrey Marqués de Branciforte, quien todavía hacia 1797 indicó en su breve instrucción a su sucesor el peligro que le significaba la presencia de extranjeros en el virreinato:

Dí cuenta por el de estado de las sospechas y recelos que tuve y fundé desde el día de mi arribo a Veracruz, sobre la facilidad con que se habían introducido en este reino varios extranjeros y de la libertad con que vivían en México y otras partes... Recibido el mando, empecé a instruirme con seria atención de este grave asunto, y cuando ya había adquirido los conocimientos necesarios, amaneció fijado en uno de los parajes

públicos de aquella capital, un papel anónimo de cortas cláusulas, pero tan seductoras, que pudieron perturbar la quietud pública de estos dominios²²⁶

El papel al cual hizo referencia el Marqués apareció en la mañana del 24 de agosto de 1794, a mes y medio de su toma de posesión, en la esquina "de la calle de la Providencia"²²⁷. En este se expresaba un reconocimiento de las ideas de los franceses. A la letra, el escrito decía:

*Los mas sabios
son los Franceses
El seguirlos en sus
dictámenes, no es absurdo.
Por mucho que hagan las Leyes
nunca podrán sofocar los gritos
que inspira naturaleza.*²²⁸

Esta declaración llevó al nuevo virrey a prestar especial atención sobre las posibles ideas revolucionarias que se podrían estar gestando en la capital del reino. Y si bien no es factible, hasta ahora, reconocer si el autor de este escrito tenía un interés de este tipo, lo que sí fue un hecho es que provocó una movilización sin precedentes para investigar alguna posible conspiración. Además, no resulta extraño que Branciforte se haya volcado a esta tarea si consideramos que él vivió más de cerca los sucesos de principios de 1793, por lo que veía en este sólo hecho una verdadera amenaza.

Asimismo, la alerta se había extendido debido a la guerra sostenida entre España y Francia desde junio del 93, desbordando aún más la paranoia. Así, "la Corona llegó a temer seriamente que la prolongación de la guerra pudiese generar sentimientos francófilos u opositores al gobierno, sobre todo entre los franceses

²²⁶ Instrucción reservada del Marqués de Branciforte a su sucesor Don Miguel José de Azanza en De la Torre Villar, Ernesto. *Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos*, Tomo II, Editorial Porrúa, México, 1991, números 11-12, p. 1279.

²²⁷ Pérez-Marchand, *op. cit.*, p. 173.

²²⁸ Citado en *Ibíd.*, p. 174.

residentes en los reinos de la monarquía"²²⁹. Por lo cual Branciforte precipitó las acciones para que, de existir tal conspiración, se contuviera lo antes posible. En relación a la sospecha, el virrey declaró que actuó manteniendo el orden y la quietud:

Tuve la dicha de conservarla, tomando desde luego, sin ruidos ni escándalos, las providencias más activas y eficaces que cortaron felizmente en tiempo muy oportuno el cáncer de una perturbación que hubiera cundido con rapidez a todas las partes, si dejando obrar a la casualidad me hubiese yo entregado en los brazos de la confianza indiscreta, aplicando remedios paliativos que suelen empeorar los males²³⁰

En esta declaración podemos entender que hasta su partida del virreinato el virrey estaba convencido de que existía un atentado, al menos intelectual, en contra de la Corona.

Aquí hago alusión al trabajo de Gabriel Torres Puga, *Centinela mexicano contra francmasones*, quien ha abundado en los hechos desprendidos de esta situación. A partir del cual se puede concluir que no existe evidencia alguna de que hubiera tal conspiración a la que supuestamente el Marqués puso freno. Pero además, la afirmación de que actuó "sin ruidos ni escándalos" resulta una negación de lo ocurrido.

Torres Puga cita una carta anónima en donde se describía algunas de las medidas:

De estas resultas mandaron a las guardas y patrullas cargar con bala; no dejaban por el día ni por la noche arrimar a ninguno a los vivaques y cuerpos de guardia, de modo que lo pintaban con unos colores tan vivos que pusieron en consternación a la mayor parte del pueblo, pero los que sabíamos la eficacia y vigilancia del señor Conde [de Revillagigedo] estábamos dudando de lo que veíamos, porque nos parecía imposible que se hubiera ocultado a su perspicacia semejante arrojito o mayormente habiendo

²²⁹ Torres Puga, Gabriel. "Centinela mexicano contra francmasones. Un enredo detectivesco del licenciado Borunda en las causas judiciales contra franceses de 1794" en *Estudios de Historia Novohispana* no. 33, julio-diciembre 2005, UNAM, México, p. 62.

²³⁰ Branciforte, *op. cit.*, número 13, p. 1279.

tomado razón individual de todos los franceses extranjeros que había en el reino por disposición de la Corte, hallando solamente trescientos setenta y dos, en todos, la mayor parte peluqueros y cocineros²³¹

Bajo la descripción de estas circunstancias podemos apreciar que las nuevas medidas del virrey no correspondían al carácter discreto del que se jactó posteriormente en el informe a su sucesor.

Por su parte, las averiguaciones desprendidas de la alerta provocada por el papel encontrado en la calle de la Providencia llevó a la aprensión de diversos sujetos de origen francés. El entonces regidor, alcalde ordinario y alguacil mayor de la Ciudad de México, Joaquín Romero de Caamaño inició procesos "contra 17 franceses y otros individuos, entre septiembre y octubre de 1794"²³². En los cuales se presentaron múltiples irregularidades dentro de los juicios. El caso principal del artículo de Torres Puga nos muestra uno de ellos. Este se centra en la defensa del acusado Mr. Vincent L'hullier, peluquero y peinador que daba servicio a importantes familias de la aristocracia novohispana, quien fue hecho preso acusado de ser un francmasón comisionado como espía por el gobierno revolucionario francés.

En el artículo se nos muestra cómo después de varios meses de prisión, y sólo por la decisión de Pedro Valenzuela, ministro comisionado a la Real Sala del Crimen, quien ordenó que se ampliara la investigación, la defensa pudo armar apropiadamente el alegato del caso. Las acusaciones se habían basado en interpretaciones atestadas de una gran imaginación del fiscal Borunda, que llevaron a conclusiones por demás extravagantes. Además, quienes intercedían por el peluquero no entendían cuál había sido la base para la acusación, es decir, no se tenía fe de las pruebas del delito que se perseguía. Porque si bien se le acusaba de ser espía, no existía un indicio de que estuviera realizando alguna actividad que lo pudiera incriminar.

²³¹ Carta anónima sobre lo ocurrido entre octubre de 1794 y mayo de 1795, citada en Torres Puga, *op. cit.*, pp. 63-63.

²³² *Ibid.*, p. 64.

Por supuesto, nosotros podemos apresurarnos a indicar que su delito fue ser un francés residente en un reino español durante estos años; ya que a todos ellos se les había tildado de sospechosos en los reinos americanos. Debido a la acusación de que existían informantes jacobinos en España, la "Corona... había advertido a sus autoridades americanas desde 1792 y el virrey Branciforte, que había llegado al reino con noticias renovadas de estas intenciones, había transmitido este temor a sus subalternos"²³³. Por esta razón, en un primer momento, la convicción del virrey tuvo mayor peso en el juicio de L'hullier que los testimonios vertidos por los vecinos que hasta entonces se mantuvieron cercanos a él. Por lo que las autoridades judiciales, con excepción del ministro de la Real Sala del Crimen, compartían totalmente la convicción de la culpabilidad.

Un hecho que evidencia la prepotencia y el autoritarismo de quienes estaban a cargo de la administración de justicia, es que cuando la defensa solicitó al alcalde Caamaño el reconocimiento formal de los papeles que servían como pruebas para el caso, se negara a presentarlos para una cuidadosa revisión. A lo cual Torres Puga nos dice que "el ocultamiento de estas averiguaciones bien pudo deberse al cúmulo de errores y omisiones que contenían"²³⁴. Por lo que la defensa se debió preparar sólo con los expedientes anexos de las averiguaciones. Sin embargo, la labor de su abogado defensor, Juan Joseph Barberi, logró exponer todas las irregularidades del juicio. Señaló una por una las malas interpretaciones de quien había llevado a cabo la investigación, y probó todas sus fallas. Así:

Los fuertes argumentos esgrimidos por la defensa liberaron a Lulié del delito de Estado que le achacaban las especulaciones... pero todavía se dividieron los pareceres acerca de si había hablado a favor de la revolución de su país y en contra de sus reyes. El fiscal del crimen pidió que se le condenase, por sus excesos verbales, a cuatro años de presidio y pérdida de todos sus bienes, pero los ministros se inclinaron a favor del reo, tanto en la Real Sala como en el Real Acuerdo²³⁵

²³³ *Ibíd.*, p. 77.

²³⁴ *Ibíd.*, p. 80.

²³⁵ *Ibíd.*, p. 85.

De esta manera, el acusado quedó absuelto de los cargos. La "mayoría del Real Acuerdo consideró también que los probables excesos de Lulié debían darse por compurgados con las prisiones que había padecido y que el reo debía quedar sujeto a las leyes generales"²³⁶. No obstante, como hemos observado en su *Instrucción Reservada*, el virrey no quedó conforme con la decisión de las autoridades judiciales. Es importante recordar que una de las más importantes limitaciones que la *Ordenanza* de 1786 hizo a los virreyes fue precisamente sobre sus facultades jurídicas, las cuales pasarían por completo al Real Acuerdo. Por lo cual el hecho de que en este caso en particular se haya logrado presentar una defensa adecuada se debió a que el virrey ya no tenía facultades omnímodas en la Causa de Justicia.

Además, durante el tiempo que finalizaba este proceso penal, se presentó un hecho que llevó a contener un tanto la paranoia generalizada. En diciembre de 1795 se dio a conocer en la Ciudad de México que España había llegado a un acuerdo de paz con Francia. Lo que llevaría "a partir de entonces, a medir con vara muy distinta los juicios contra franceses y a expedir, en última instancia, sólo sentencias consultivas"²³⁷.

Como puede observarse con estos hechos, durante aquellos años se desprendió una conciencia de parte de un sector de la población sobre la necesidad de contar con una adecuada administración de justicia o, mejor dicho, con una que no estuviera basada en las facultades discrecionales de los jueces. Esto, por supuesto, es una condición propia de una ciudadanía moderna que ya no se asumía como simple depositaria de las decisiones legislativas del Estado, sino también como sujetos jurídicos capaces de defender y demandar sus derechos dentro de un sistema legislativo.

Sin embargo, no debemos olvidar que la posibilidad de acceder a una buena defensa no era para todos los súbditos novohispanos por igual. Es posible distinguir que los franceses acusados, y en especial el caso que expone ampliamente Torres Puga, pertenecían a un sector que fue privilegiado por ser

²³⁶ *Ibid.*, p. 86.

²³⁷ *Ibid.*, p. 86.

cercano a las familias más influyentes de la capital. Éstos fueron los personajes que, a su vez, sentaron las bases de un sistema jurídico, que si bien era corrupto e ineficiente, insistía en la necesidad de que esto cambiara, para lograr llevar a cabo procesos judiciales que garantizaran el apego a las leyes. Una convicción que se basó en la máxima de: "proteger al individuo de los abusos del poder; y por lo mismo, como integrantes de un grupo influyente en la política del virreinato que sirvió de contrapeso a la política represiva diseñada por la Corona"²³⁸. A lo cual se puede precisar que, expresado de manera más adecuada, se presentaba un equilibrio de poder entre la élite novohispana de la burguesía ascendente y los funcionarios peninsulares. Resulta claro que el ejercicio del poder de parte de los máximos expositores del despotismo ilustrado en tiempos anteriores habría impedido un juicio en las condiciones que se han descrito. Por el contrario, ya en estos años, se presentaban nuevos mecanismos en materia jurídica sostenidos por una fuerte convicción (como lo revisamos antes en las valoraciones del virrey Revillagigedo) por que existiera un ordenamiento de las instancias que administraban la justicia para los individuos.

4.2.4 Las obligaciones militares

La fundación de los gobiernos constitucionalistas han tenido como condición previa la consolidación de sus ejércitos nacionales, por lo que el particular apoyo a la instauración de tropas en los territorios hispanos americanos en el siglo XVIII resultó fundamental para los Estados americanos modernos. Asimismo, encontramos que el servicio militar que prestan los ciudadanos casi siempre se concibió como obligatorio. Razón por la cual se entiende que el ciudadano moderno estaría a disposición de su nación en cuanto ésta le requiriera para ello. Así, ésta es una característica principal dentro de las obligaciones de los ciudadanos; afirmando, por este medio, el monopolio de la violencia estatal.

Las obligaciones militares han sido una cuestión compleja en la historia de diversas sociedades, debido a que en algunas de ellas el uso de las armas se ha

²³⁸ *Ibíd.*, p. 90.

restringido a ciertas clases en específico, lo cual nos habla de un derecho más que de una obligación²³⁹. Misma situación que puede ser ubicada en los años tempranos de la Nueva España para los indios y algunos castizos. En donde los primeros también tenían impedido montar a caballo. Sin embargo, para el periodo que nos ocupa encontramos que una buena parte de los reclutas que conformaron las milicias locales y las tropas del ejército provinieron de estos bajos estamentos. Cuestión que indica la imposibilidad que se tuvo de integrar un ejército exclusivamente con los pertenecientes al estamento de españoles.

Esto nos lleva a precisar que el proceso específico que interesa en este apartado es observar cómo durante los últimos años del siglo XVIII el reclutamiento de los integrantes del ejército, en tanto condición indispensable de la creación (mas no del mantenimiento) de los Estados modernos, se aproximó al sistema de leva, al cual se recurriría continuamente durante los años de mayor desorden posteriormente en la nación mexicana.

Llama la atención que en la América hispana la *Causa de Guerra* haya aparecido de manera tardía. De hecho, Carmagnani apunta que si "se observa la contabilidad del Estado colonial novohispano se nota que los primeros gastos militares, definidos de 'guerra', aparecen solamente a partir del segundo semestre de 1612", los cuales, además, no estaban destinados a utilizarse en un ejército al interior de las provincias continentales.

En contraste, desde la *Instrucción Reservada* escrita por el virrey marqués de Croix, en adelante todos sus homólogos dedicaron la mayor parte de sus *Instrucciones* a los asuntos del ejército. A este respecto sabemos que las tropas militares, hasta antes del gobierno de este virrey, habían estado relegadas a los situados de las Antillas, a las capitanías generales y a los puertos continentales durante largo tiempo. El ejército tuvo presencia en el territorio de la Nueva España para cumplir con la única tarea de resguardar los puertos comerciales, lo cual se

²³⁹ Esta situación la podemos encontrar claramente en muchas sociedades esclavistas y feudales, como en Grecia, Roma o Tenochtitlán, por ejemplo. Así también, después de la toma de la Bastilla en 1789, la clase propietaria se empeñó en obtener para sí el recurso de las armas, canjeándolas a los pobres por otros bienes. Para el primer caso véase Galaz, Mariteresa. "Historia del concepto de ciudadanía en la Atenas clásica" en Arredondo Ramírez (coord.). *Ciudadanía en Movimiento*, Universidad Iberoamericana-IAP, México, 2000, pp. 58-59. Para el segundo caso véase Chimal, *op. cit.*, pp. 38-41.

debió al incremento de los asaltos marítimos por parte de piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros y demás. Los fuertes de Acapulco, Veracruz y San Blas, por tanto, contenían a las tropas acantonadas que resguardaban la seguridad de las actividades mercantiles en tierra, por lo que la mayoría de los ataques de aquellos grupos se limitaron a las embarcaciones que salían al mar.

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII se incrementó la presencia de tropas militares a lo largo y ancho del territorio continental del virreinato. Sus funciones para entonces fueron relacionadas con la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado hispano. Percepción que aumentó repentinamente después de la llamada Guerra de los Siete Años (de 1756 a 1763), la cual dejó de manifiesto el poderío de los ejércitos británicos y su interés por tener presencia en otros continentes. Lo que llevó a España a reorganizar militarmente a sus tropas. A partir de dicha guerra el gobierno de Carlos III se concentró en formar un ejército con perfil moderno en la península, basado exclusivamente en normas castrenses, lo que provocó que las tropas, al interior, ya no se distinguieran por su origen estamental. A pesar de esto, en la Nueva España las fuerzas militares fueron una buena representación de su realidad social, ya que “continuaron siendo de antiguo régimen, es decir, creadas sobre una sociedad que basaba su razón de ser en corporaciones y estamentos sociales con privilegios diferenciados”²⁴⁰. Lo cual ejemplifica la necesidad que el gobierno novohispano tenía para gobernar pactando con las corporaciones.

La reforma militar se llevó a cabo en 1767, con lo que se emprendió, por un lado, el proyecto de extender milicias locales para mantener un control permanente y resguardar el orden interior y, por otro, se reforzaron las tropas del ejército para repeler cualquier intento de ocupación extranjera. Así, se desplegaron milicias provinciales y urbanas encargadas de la vigilancia de sus jurisdicciones. No obstante, estas protecciones resultaban excesivas y casi inútiles en la mayoría de las provincias internas de la Nueva España, ya que difícilmente se presentaban disturbios que ameritasen un gran despliegue de fuerzas militares

²⁴⁰ Ortíz Escamilla, Juan. “Identidad y Privilegio: Fuerzas armadas y transición política en México, 1750-1825” en Erika Pani y Alicia Salmerón (coord.). *Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra historiador. Homenaje*, Instituto Mora, México, 2004, p. 326.

para controlarlos. La manutención del nuevo proyecto militar, provocado principalmente por el temor a una usurpación externa, hacía mayor el costo que el beneficio obtenido. Además los recursos demandados para el sostenimiento de las tropas excedía las capacidades del gobierno, por lo que fue necesario recurrir a las élites locales para solventar la manutención de las tropas, lo que devino en una carencia de autoridad del Estado frente al ejército, favoreciendo la obediencia de éste a quienes le pagaban, y provocando así que esta nueva institución adoptara rápidamente las prácticas corporativas propias del virreinato.

Asimismo, las dificultades en los reclutamientos, por los escasos recursos que se tenían para profesionalizar a las tropas, llevaron al gobierno a brindar diversas concesiones. Por lo que para 1781

la exención del tributo ya se había extendido a los regimientos provinciales de infantería... y a los batallones pardos y morenos... Aun cuando las autoridades se resistían a conceder privilegios a los demás cuerpos militares organizados en el virreinato porque supuestamente quedaban en la categoría de “urbanos” y, por consiguiente, debían pagar tributo, no tuvieron más remedio que ceder ante las presiones de los milicianos.²⁴¹

Los mecanismos de presión con los que contaron los milicianos se incrementaron. De hecho existe evidencia de que hasta 1789, cuando el virrey Segundo Conde de Revillagigedo tomó posesión en la Nueva España, el relajamiento de las tropas era evidente. Y era de esperarse que ante un clima de absoluta paz al interior, los milicianos no hayan tenido la necesidad de implementar actividades más estrictas. En este sentido, según el informe de Revillagigedo, los ejércitos del virreinato no eran los deseables –de acuerdo a lo que él había observado en la reforma militar de otros reinos. Escribió:

A mi llegada a estos reinos había un gran número de tropa de milicias, así provincial como urbana; pero en realidad era imaginaria su existencia y aún mucho más su fuerza. Hacía mucho tiempo que se descuidaba el alistamiento; se hallaba sin proveer

²⁴¹ *Ibíd.*

muchas plazas de oficiales: no se les había pasado a la mayor parte de estas tropas revista de inspección; carecían de todos los conocimientos necesarios y en una palabra, sólo servían para privar al rey el tributo que debían satisfacer los milicianos y estorbar la buena administración de justicia, con el fuero que reclamaban²⁴²

Lo que indica que el orden militar, de acuerdo a Revillagigedo, se manejaba con normas bastante endebles. Condición que atraía a los castizos a trabajar en las tropas. La disciplina militar no era tan estricta, el riesgo era bastante bajo, principalmente en las compañías que no cuidaban fronteras marítimas y continentales (como lo fue la difícil situación del norte del virreinato), tenían un salario decente, y estaban eximidos del pago de tributos al que se les obligaba por pertenecer a dicho estamento. Sin contar además las extorsiones que les permitieron llevar a cabo las reformas urbanas. Lo cual, para el entender de los mestizos, especialmente los que provenían de una mezcla de las razas africanas, pertenecer al ejército resultaba en un buen negocio.

No obstante, la amenaza externa siguió reforzando la idea de que se debía mantener al ejército fortalecido. El virrey describió que a partir de las "disenciones con los ingleses", se debió apoyar a los cuerpos del Caribe, por lo que

Las mismas circunstancias obligaron a que se embarcasen para La Habana, primero el regimiento de N.E. y después el de México, por lo que tuve por indispensable, el proceder a la formación del batallón fijo de la plaza de Veracruz, compuesto por pardos libres, voluntarios, con jefes y oficiales y primeros sargentos españoles veteranos²⁴³

La situación que describe Revillagigedo llevó a que se reorganizara el ejército. Se mandó informar sobre cuántos hombres entre 16 y 40 años existían. La respuesta arrojó, según el informe, que éstos constaban: "de casta limpia... para el alistamiento 91,419, y el de pardos 31,890, siendo el total 123,309; de modo que si se hace el sorteo de 15 uno, saldrían 8,221 hombres, y si se verifica de 10, 12,230, cuyo número aún así parece bien reducido para la vasta extensión de este

²⁴² Revillagigedo, *Instrucción Reservada...*, número 574, p. 1131.

²⁴³ Revillagigedo, *op. cit.*, número 561, pp. 1128-1129.

reino"²⁴⁴. En efecto el total de soldados desprendido de este cálculo es bastante escaso considerando que se buscaba una presencia permanente de las tropas en todo el territorio. Además, se buscaba un nuevo modo de reclutamiento, que podía basarse en una selección por sorteo o por una búsqueda de aquellos que fuesen más aptos. Lo que abrió la posibilidad, ya en este tiempo, de que los reclutas fueran obligados a enlistarse, lo que resalta como un precedente del sistema de leva.

Por otro lado, el virrey indicó que en los alistamientos de cuerpos provinciales batallones y compañías, debían ser reordenados:

Para este fin deberían ser sólo comprendidos en los alistamientos, los individuos blancos o de casta limpia, bien que esta regla no puede seguirse en las jurisdicciones de la costa y en las fronteras, en donde es indispensable incluir las castas tributarias, relevándolas de este derecho, para poder contar con competente número de milicia

Aquí vemos que en la prestación de servicios en los regimientos militares, se contempló el abandono de la restricción por estamentos. Todo tipo de habitante en el reino era un considerado potencialmente soldado, e incluso los *ociosos* o *malvivientes* podían ser de gran utilidad si servían al menos para esta causa. Pero hacia estos años, con la reorganización propuesta, el trabajo en la milicia, y con los recortes presupuestales que se tenían planificados para el ahorro de los costos, ya no parecía una actividad tan atractiva como lo era antes.

Además, otra cuestión fue que sólo los blancos podrían hacerse cargo de puestos de mandos, mientras en la infantería, si bien participaba cualquiera, se conformaba principalmente por los bajos estamentos. Y condicionados a permanecer en ese rango para toda su estancia en el ejército. Esto porque, como ya se ha señalado, se creía que no tenían la posibilidad de desempeñar alguna función que implicara responsabilidades.

Por otro lado tenemos que en la Ordenanza de Intendentes había aparecido ya una disposición que ayudaría a engrosar las filas del ejército. Basada

²⁴⁴ *Ibid.*, número 580, p. 1132.

principalmente en la erradicación de los vagabundos. El nuevo esquema borbónico, al buscar la eficiencia y producción de la población, insistió en canalizar a todos los habitantes ociosos a realizar actividades que significaran algún beneficio para el Estado monárquico, por lo que aquellos que dedicaban sus vidas a la *holgazanería* debían ser captados para el servicio de las armas, o a alguna otra actividad considerada como productiva. En este sentido, el monarca había ordenado que:

en los Pueblos de sus Provincias no se consientan Vagabundos, ni gente alguna sin destino y aplicación al trabajo, haciendo que los de esta clase, si fueren hábiles y de edad competente... se apliquen a los Regimientos fixos de aquel Reino, y, en su defecto, á las obras públicas o Reales por el tiempo que arbitraren conforme á las circunstancias de los casos; y si fueren inútiles para estos destinos, ó Mendigos de profesión, los harán recoger en Hospicios *perpetuos o provisionales*, donde se ocupen segun sus fuerzas. Pero justificándose ser sugetos inquietos, poco seguros y de mal vivir impondrán las penas establecidas, aplicando al trabajo de las minas, ó al de los Presidios en calidad de forzados²⁴⁵

Aquí, la diferencia entre "perpetuos o provisionales" consistía en la disposición de estos súbditos a prestar sus servicios. De esta manera la Corona buscaba garantizar que todos los habitantes brindaran algún beneficio al Estado.

La prioridad que había cobrado la cuestión del ejército se había reflejado enfáticamente desde las disposiciones de la *Ordenanza* de 1786; en donde encontramos que los intendentes fueron nombrados como la máxima autoridad militar para las tropas acantonadas en el territorio de su jurisdicción. Así, en todas las provincias se contemplaba la posibilidad de hacer uso del ejército. Esto nos indica que las milicias fueron consideradas como un nuevo recurso para los gobiernos, con el que antes no se contaba en el virreinato.

Lo que resulta de especial relevancia debido a que "la reforma del ámbito militar creó el necesario instrumento de poder: condiciones previas a la fundación

²⁴⁵ *Ibíd.*, art. 61, pp. 69-70.

de un Estado independiente y soberano"²⁴⁶. La organización y el reclutamiento de las tropas fueron heredados a los gobiernos del siguiente siglo. Cuestión que además interviene directamente con la noción de *ciudadanía moderna*, en tanto ésta tiene, como una de sus condiciones pilares, el prestar servicio obligatorio a la nación.

Tenemos que en esta época se definieron algunas líneas generales en torno al servicio militar. En principio, para la contratación voluntaria con el ejército, fue necesario que se comprobara la condición de ser individuo libre. Es decir, para que alguien se pudiera contratar en el ejército era necesario que no tuviera compromisos laborales por endeudamiento, o que no fuese parte de las corporaciones feudales de Atlixco y Del Valle. Solamente de esta manera se podía trabajar para la milicia, lo cual brindaba las prerrogativas antes descritas. Sin embargo, paradójicamente, durante esta época también se sentaron las bases del servicio forzoso, a partir de la ideación del sorteo descrito por Revillagigedo; lo que anuncia el sistema por el que posteriormente se haría efectivo el sistema de leva. Justificándolo a través de los deberes ciudadanos.

4.2.5 El orden y la uniformidad como herramientas de una modernidad excluyente

La emergencia de la noción de *ciudadanía* está estrechamente vinculada a las prácticas de los habitantes urbanos en el mundo occidental. Por supuesto, no las de todos ellos en general, sino las de aquellos que se vincularon a la civilidad y al urbanismo, es decir, las que llevan a cabo las capas sociales para posicionarse como *más elevadas* con respecto a las demás²⁴⁷. Asimismo, es común que éstas busquen distinguirse siempre para mantener su prestigio social. Con respecto a lo cual podemos vincular la situación del *competente vecindario* en nuestro caso particular.

²⁴⁶ *Ídem*.

²⁴⁷ Cfr. Elias, Norbert, *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 130-133.

Resulta evidente que en la sociedad estamental novohispana existió una necesidad por establecer claramente las diferencias entre la población. No sólo entre estamentos, sino, principalmente, al interior del estamento de españoles. El vocablo de "Ciudadanos" (que, como ya he indicado, su uso se popularizó en la segunda mitad del siglo XVIII) refería a aquellos individuos integrantes del estamento español que contaban con un prestigio social dado por su formación académica, su residencia y propiedad en las ciudades españolas. Con lo que podían ser reconocidos como parte de la vida social de las ciudades y como parte de la *gente de posición*. Ahora bien, es indispensable clarificar qué significaba esto durante el periodo que nos compete. Por tanto, intentaremos dar cuenta de cuáles eran las características que se esperaban de los vecinos más prestigiados y que, en este sentido, se asumieron como modelo para el resto de los habitantes citadinos.

Una de las principales virtudes que durante esta época se relacionó explícitamente a la noción de *civilización* fue la búsqueda de la uniformidad dentro de todos los ámbitos de la organización social. Cuestión que ya hemos revisado para la reestructuración del ámbito legislativo y de la jerarquía de cargos públicos en general, sin embargo, esto no se limitó a las instituciones del gobierno. Dentro de las diversas transformaciones que los Borbones querían llevar a cabo existió una convicción por lograr una homologación de todos los aspectos de la vida social, lo cual se vio reflejado recurrentemente en la planificación de lo urbano.

En el último cuarto del siglo XVIII apareció una insistencia sobre la necesidad de ordenar las ciudades para que la vigilancia de las leyes resultara más sencilla. Por lo que se emprendieron obras que buscaban reacomodar el espacio. No obstante, Pedro Viqueira señala que "sería un grave error pensar que el orden que imperaba en el centro de la ciudad de México, a fines del periodo colonial, correspondía a los ideales de la Ilustración. En realidad era otro orden, mucho más despótico y arbitrario, el que lo hacía en su lugar"²⁴⁸. Este punto debe ser

²⁴⁸ Viqueira, Pedro. *¿Relajados o Reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces*, Fondo de Cultura Económica, México, p. 241.

clarificado más, cosa que no aparece en el importante análisis que Viqueira realiza con respecto a los cambios ocurridos en esta época.

Existen importantes trabajos que señalan las razones por las cuales se modificó la vida social de las ciudades novohispanas, y de la Ciudad de México en particular²⁴⁹, y éstos mencionan, incluyendo a Viqueira, que las reformas se justificaron por medio del uso de la razón en la planeación. De acuerdo a la evidencia utilizada en estos trabajos, como veremos más adelante, los cambios no tuvieron un sentido liberalizador de la población de la intendencia de México en su conjunto. Por el contrario, los nuevos proyectos obedecieron a las necesidades de un sector particular de la población; y aunque podemos decir que éste fue casi una calca del estamento español, algunos de los pertenecientes a él resultaron también excluidos.

Todo indica que la afirmación de Viqueira, en relación a que estas nuevas disposiciones para la ciudad no correspondían al ideal ilustrado, se debe a que existía un proyecto coercitivo para las clases bajas. A lo cual habría que apuntar brevemente que con la aparición de este perfil autoritario podríamos negar el carácter de pensamiento ilustrado a otros muchos proyectos reformadores modernos, e incluso revolucionarios. Ya que la mayoría de ellos resultaron también (veladamente) un claro proyecto de clase²⁵⁰. Empero, los ideales que en principio portaron muchos de los movimientos revolucionarios en occidente, incluida la revolución de independencia de México, se justificaron a través de ideales ilustrados que fueron pregonados por un sector específico de la sociedad. Por tanto, el juicio sobre si las disposiciones de la época acerca del ordenamiento urbano obedece o no a las ideas ilustradas debe realizarse bajo una previa aclaración de qué se entiende como ilustrado. No obstante, éste no es un tema que deba atender puntualmente aquí, ya que no resulta fundamental para este

²⁴⁹ Además del extraordinario trabajo de Viqueira véase Aguirre Anaya, Carlos. "La resignificación de lo público a finales del siglo XVIII" en Anaya, Carlos; Marcela Dávalos y María Amparo Ros. *Los espacios públicos de la ciudad, siglos XVIII y XIX*, Casa Juan Pablos, Instituto de cultura de la Ciudad de México, México, 2002, pp. 37-54. Además de Cruz Rodríguez, Ma. Soledad. "Plenitud y crepúsculo de una ciudad colonial. La Cd. de México en el siglo XVIII", en *Visiones y Creencias, IV Anuario Conmemorativo del V Centenario de la Llegada de España a América*, UAM Azcapotzalco, México, p. 1992, pp. 185-217.

²⁵⁰ He destacado esto mismo en mi trabajo anterior: Cfr. Chimal, *op. cit.*, pp. 34-58.

trabajo. Baste con decir que aquellos que llevaron a cabo la empresa reformista de las ciudades novohispanas (siendo ésta parte de la reforma administrativa del virreinato que hemos venido revisando) frecuentemente se presentaron como portadores de *la razón*.

Es posible distinguir una transformación en aquellos aspectos que representaban el orgullo de los letrados ciudadanos de finales del siglo XVIII. La diferencia sustancial es que hasta antes de las reformas de fin de siglo, el incremento del comercio en las plazas, la capacidad del parían y los *tiánguez* para albergar a un gran número de transeúntes (aunque fuesen del tipo ociosos) eran símbolos de la grandeza citadina. En cambio, para la última parte del XVIII observamos que el ideal urbano no observó de buena manera a las grandes concentraciones de masas en las ciudades. Para los ilustrados hispanos la ciudad debía mantener el orden y las formas. Éstos más bien apreciaban las calles amplias, libres y limpias. Las grandes congregaciones eran vistas como incómodas y problemáticas. Además de que con el abandono del barroco se comenzaron a apreciar los rasgos sencillos, los espacios no recargados y muchas veces vacíos.

A partir de la Ordenanza de 1786, cualquier construcción en las ciudades debía ser supervisada por un arquitecto para garantizar que se mantuviera el mismo estilo de edificio. Esta decisión tenía como propósito reflejar el ideal del orden, tan apreciado en el emergente pensamiento del mundo moderno. Lo que llevó a la Corona a disponer que se respetaran enérgicamente las divisiones entre las zonas de españoles y los barrios de indios. Si bien el gobierno virreinal siempre había tenido una clara asignación de las áreas que debían habitar cada uno de los estamentos (por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México el primer cuadro que era jurisdicción del Ayuntamiento era reservado para españoles y, por otro lado, las parcialidades de San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco eran el espacio de los indios) el respeto de las divisiones se habían esfumado con el paso del tiempo.

Los gremios ciudadanos y la necesidad de los españoles para contar con algunos servicios y con servidumbre propia en sus casas provocaron que un gran número

de indios habitaran dentro de los límites de la ciudad española. Con la necesidad expresada por la Corona para hacer respetar las leyes, dando orden a la vida en los reinos hispanos, se determinó que los estamentos debían de ser regresados a los lugares que habían sido estipulados anteriormente para ellos.

Estas medidas fueron muy aplaudidas por las clases adineradas de las diferentes ciudades novohispanas. Ya que existían múltiples malestares y quejas de la élite citadina por las desavenencias que *la plebe* provocaba cuando se concentraba en las calles. Lo que iba desde los embotellamientos que provocaban (no dejando pasar los coches de los adinerados), los crímenes de los cuales los *léperos eran capaces*, hasta la *inmoral desnudez* que presentaban en la vía pública.

Las nuevas reformas de finales del siglo XVIII lograron hacer decrecer la cantidad de indios que habitaban la urbe. Esto fue posible, en parte, por la disolución de las organizaciones gremiales y por diversas disposiciones que exigieron a los pertenecientes a otros estamentos que no fuesen el español abandonar la ciudad. Sin embargo, esto no habría sido posible sin combatir enérgicamente las actividades que alguna vez habrían sido orgullo de la ciudad, las del comercio ambulante. Porque si bien otra medida que ayudó a despejar las ciudades fue que en la *Ordenanza* se pidiera enfáticamente a los intendentes combatir el vagabundeo, esto podía hacerse de manera más focalizada al no tener que localizar a los *holgazanes* entre una multitud de personas yendo y viniendo, de un lado a otro.

Así, se llevaron a cabo diversas acciones para desterrar a los ambulantes de las grandes ciudades novohispanas. Por ejemplo, en Puebla, el intendente Manuel de Flón mandó hacer un edificio para albergar a los comerciantes ambulantes en él. Este mercado permitía evitar el desorden en el espacio público y concentrar ahí todos los negocios que antes llenaban las calles²⁵¹. Otro ejemplo al respecto es que en San Luis Potosí, el teniente letrado Bernabeu prohibió estrictamente en 1790 que se instalaran puestos de comida y vendedores ambulantes en las

²⁵¹ Cfr. *Ibíd.*, p. 294.

inmediaciones de la Plaza Mayor de aquella ciudad española. Sus palabras, sacadas del archivo por la historiadora Ana Irisarri, nos dan una idea clara de esto:

Habiendo notado en diversas ocasiones el desorden, desarreglo, suciedad y confusión de su plaza mayor pues se hallaban... toda clase de cosas vendibles que no sólo la afeaban sino que producían grandes basureros, impedían el tránsito a coches, carruajes y recuas de suerte que el tiempo que intentaban cruzar era necesario que los vendedores se retirasen con sus efectos causando más confusión a los demás a quienes se acercaban y mucho daño y perjuicio a las gentes que transitaban especialmente de noche los hoyos o agujeros que formaban los puesteros... me resolví... a dar aseo, limpieza y hermosura a la citada plaza mayor dejándola limpia y desembarazada a mis expensas y dispuse que las cocinas, y puestos y toda clase de vendimias se trasladasen...²⁵²

Sin embargo, ni en Puebla ni en San Luis Potosí se llevaron a cabo acciones para expulsar de manera determinante a los indios de la ciudad. Aunque las nuevas políticas urbanas de todas las ciudades españolas tenían como propósito la limpieza de la ciudad, la vigilancia y la remodelación, sólo en la Ciudad de México se tenía como propósito fundamental expulsar tajantemente a los indios del territorio del Ayuntamiento. No obstante que esta empresa no logró sacar completamente a los pobladores indeseados de la ciudad, ya que ésta necesitaba también de trabajadores y comercio de productos de la tierra, sí logró mantener un número menor de ellos en las calles citadinas.

En consonancia con la asignación (o reasignación) de las zonas en que debían permanecer los estamentos, la Corona mostraba especial preocupación por la atenuación de los límites entre éstos. Este hecho había salido de control con la diversificación de actividades comerciales y el crecimiento de las ciudades. En las localidades provinciales la mezcla de habitantes de distinta procedencia estamental no era común debido a que las repúblicas de indios habían mantenido un ritmo de vida propio al interior, el cual difícilmente los hispanos podían adoptar.

²⁵² Vicente Bernabeu, marzo de 1790, citado en Irisarri Aguirre, Ana, *op. cit.*, pp. 100-101.

Así, los casos que preocupaban a la metrópoli sobre la convivencia entre estamentos resaltan en las capitales de provincia.

Si bien la complejidad de la población urbana se debió al comercio de "mercancías agrícolas o artesanales que se producían en la periferia"²⁵³, esto se extendió a otras actividades en la dinámica de la ciudad. Mientras en épocas anteriores existió una división de iglesias para la feligresía española y otra para la de los indios, a mediados del siglo XVIII estas asignaciones exclusivas se habían disuelto. Las parroquias de Santa Catarina Mártir (de españoles) y la de Santo Domingo (de indios) ya recibían a cualquiera para estas fechas. Situación que no hallamos, salvo excepciones (como lo fue San Andrés Tetepilco), en las iglesias que se ubicaban más lejos de la traza de la ciudad española.

Los pueblos circundantes que contaron con la presencia de varios estamentos también estuvieron ligados estrechamente a la ciudad, por lo que sus parroquias no podían darse el lujo de rechazar a aquellos que no les correspondía asistir ahí. Esto debido a que sabían que alguna otra los captaría y terminaría recibiendo los favores diezmales en su lugar.

Hasta los años en que gobernó Bucareli y Ursúa, las actividades que realizaban los indios estaban asimiladas como parte de la vida cotidiana de la ciudad. Así lo muestra Ma. Soledad Cruz en el análisis que hace del escrito de Juan de Viera de 1777–78, en donde la

crónica logra reflejar las relaciones entre el centro y los pueblos de los alrededores, se puede observar cómo tanto los indios como sus actividades artesanales y lacustres... son elementos de la urbe. Esto se puede leer en la parte donde describe los montes frutales y de hortalizas que rodeaban la ciudad²⁵⁴.

Por tanto, la imagen de la ciudad fue percibida de manera integral junto con sus alrededores, es decir, con las parcialidades de indios. Así, hasta estos años, estas zonas fueron también vistas como parte de su grandeza.

²⁵³ Cruz Rodríguez, *op. cit.*, p. 189.

²⁵⁴ *Ibíd.*, p. 198.

Asimismo, una zona muy apreciada dentro de este mismo sentir fue la que conectaba el sureste de la ciudad con los pueblos de Iztacalco, Xochimilco y Mexicaltzingo por medio de la Acequia Real (lo que a la postre se llamaría canal de la Viga). De donde provenía una gran cantidad de verduras y comestibles que luego se ofrecían en la Plaza Mayor .

Sin embargo, hacia la década de los ochenta de aquél siglo las visiones sobre aquello que era bien valorado de la imagen de una ciudad se transformó. El nuevo objetivo se centró en limpiar la ciudad. Que si bien esto significaba la limpieza de la basura en las calles y en los canales, también apuntaba al exilio de los indios de la traza urbana.

Se quería acabar con la presencia de sujetos que se embriagaban con pulque, ya que eran señalados como perturbadores del orden público; también se deseaba liberar el paso por la Plaza Mayor, reubicando a los comerciantes ambulantes que frecuentemente provocaban la acumulación de basura; y se atacó el crimen con el establecimiento de ocho cuarteles mayores (subdividido en cuatro menores).

Hasta antes de la disolución de los gremios los oficios de los indios y de los castizos proveían de mercancías a toda la población urbana. Y si bien algunas organizaciones gremiales comenzaron a percibirse incómodas por la élite, con estas medidas se observa que las actividades del comercio en los espacios públicos fueron las que más resaltaban como desordenadas y como generadoras de *inmundicias*.

Según nos relata Viqueira, se tenía un ideal de ciudad que se quería seguir. Mientras se atacaban las actividades de *la plebe* se apoyaban los paseos ilustrados a donde los españoles gustaban ir –como lo fue el de la Alameda y el de Bucareli. Éstos se caracterizaban por tener un diseño simétrico y recto, con vías amplias y con una vegetación ordenada. A partir de la forma en que éstos se dispusieron, este autor ha referido una metáfora que resulta reveladora para describir esa nueva concepción de orden:

La sociedad entera debía transformarse en un jardín, a la francesa, en el cual todos ocuparían sus lugares, sin salirse de ellos, ni tan sólo esconderse de las miradas, bajo

amenaza de ser inmediatamente podados. El sitio que cada uno ocuparía quedaría determinado por el plan general elaborado por el diseñador, el déspota, de acuerdo a las reglas de la razón. En este proyecto la educación de los niños del pueblo desempeñaba un papel esencial, ya que, como todo mundo sabe, árbol que crece torcido nunca endereza. En cambio, "a los árboles y principalmente a sus ramas, puede darse, cuando tiernas, la dirección o figura que se quiera"²⁵⁵

Esta analogía nos muestra claramente la insistencia sobre la separación de los estamentos. El hecho de que éstos hayan permanecido en actividades comunes alarmaba a la Corona, porque se consideró una amenaza al orden, debido a que si existía confusión entre los integrantes de cada estamento se complicaría mucho más la recaudación de sus obligaciones fiscales. La salida (o disminución) de los indios del cuadro español facilitaría las actividades hacendarias, ya que los estamentos no se diferenciaban propiamente como grupos étnicos, sino, sobre todo, por su condición fiscal.

Por este mismo motivo también se buscaba apartar a los estamentos que conformaban a *la plebe*. La cuestión era que no sólo existía peligro en la filtración hacia el grupo de españoles (conocido como "cruce de la barrera de color"²⁵⁶) sino también era imperante evitar que los mestizos, indios y mulatos convivieran en las mismas actividades.

Esta fue la razón por la cual se mandó vigilar de manera más estricta las actividades de las fiestas del carnaval que tenía lugar los días anteriores a la cuaresma. Durante esta celebración se generaba, de acuerdo a la percepción de las autoridades, un desorden provocado por la "desaparición de las barreras entre personas de 'distintas cualidades, sexos y condiciones'... la mezcla... era bastante relativa, todos los que subían a las canoas eran 'gentes plebeyas', es decir, que ahí se agrupaban a los mestizos y otras castas con los indios"²⁵⁷. Esta muestra de interpenetración estamental fue observada por el guardián de la compuerta del canal de la Viga en 1797, quien describió

²⁵⁵ Viqueira, *op. cit.*, p. 231. La cita es del *Discurso sobre la policía de México*.

²⁵⁶ Cfr. Castillo, Norma. *Cholula, sociedad mestiza en ciudad india*, UAM Iztapalapa, Plaza y Valdés, México, 2001, pp. 138-150.

²⁵⁷ Viqueira, *op. cit.*, p. 151.

que en el camino andan algunas canoas trajineras y [que] sus remeros, a voces altas, convidan al paseo ofreciendo lugar a medio [real] con música, porque los acompañan algunos instrumentos de que resulta que acomodan mucha gente plebeya de distintas calidades, sexos y condiciones, de cuya mezcla, los cantares y palabras disolutas se originan muchas ofensas a Dios, y escándalo público²⁵⁸

Si bien ésta era una celebración que entonces ya era longeva, hacia finales del siglo se percibió como una falta bastante más grave. Por lo que se realizaron diversas prohibiciones para contener las ofensas morales que el carnaval presentaba. Sin embargo, en este caso particular no era solamente el relajamiento del pudor lo que preocupaba a las autoridades, sino la cuestión de que *la plebe* se había hecho una.

Otra cuestión que era considerada contraria a las buenas maneras era que muchos indios acostumbraran cubrirse solamente de la cintura para abajo, apareciendo parcialmente desnudos. Para lo cual también se tomaron medidas. Una de ellas fue que para los días de asueto se designaron guardias que no permitían el acceso a los paseos y a otros lugares públicos a aquellos que se presentaran sólo con calzón de manta y desaseados. Estas disposiciones se volvieron más autoritarias a partir de 1789 bajo el mandato del virrey segundo conde de Revillagigedo, quien mandó que en la Alameda los guardas impidieran el paso a "toda clase de gente de mantas o frazadas, mendigos, descalzos, desnudos o indecentes"²⁵⁹. El malestar que generaba esta vestimenta la podemos constatar también para los lugares de trabajo, para lo cual el mismo Revillagigedo, declaró: "libré orden para que fijasen en la puerta de la fabrica carteles, en cada una de las oficinas de los hombres, haciéndoles saber que pasado el término, no serían admitidos a trabajar como no fuesen vestidos"²⁶⁰. Sin embargo, el gobierno citadino quería incidir más sobre este asunto en otros espacios; porque su

²⁵⁸ *Ibid.*, pp. 150-151.

²⁵⁹ Citado en *Ídem*.

²⁶⁰ Revillagigedo, *op. cit.*, art. 250, p. 1073.

intención era inducir en los indios el mismo sentimiento de pudor que ya aquejaba a los hispanos. Las órdenes se extendieron a diversos lugares:

para empezar se prohibió a los trabajadores de la fábrica de cigarros y a los demás asalariados del Estado que fueran a su trabajo "desnudos" (es decir portando tan sólo calzoncillos y envueltos con una manta); se ordenó a los indios asistir a las funciones públicas vestidos de casaca o con capa, aseados y decentes; y se prohibió la entrada a la Plaza de Gallos así como también a la Alameda a gente que no estuviera correctamente vestida²⁶¹

Todos los casos anteriores nos muestran que el tipo de prácticas y costumbres de los bajos estamentos eran, cada vez más, tildadas de bárbaras. Los juicios que reprobaban esos comportamientos son reflejo de un proceso de *urbanización* que, contrario a lo realizado por aquellos estamentos, relacionaban lo civilizado con comportamientos recatados y moderados. Debiéndose ocultar el desenfreno de las pasiones, pero además la desnudez y la suciedad del cuerpo.

En consonancia con el sentimiento pudoroso del proceso civilizatorio, la élite citadina comenzó a quejarse más de la presencia de los léperos de la calle. Desaprobaban que éstos tuvieran un aspecto tan despreciable en las plazas públicas. Además de quejarse por "la fetidez de los puestos de comida que ahí se instalaban"²⁶². En respuesta, las protestas sobre la presencia de *léperos* en el espacio público fueron atendidas por las autoridades del Ayuntamiento. Dejando claro la capacidad de reclamo de "las personas decentes"²⁶³, que pertenecían al estamento de españoles.

Aquí se va clarificando poco a poco cuál es el perfil de aquellos habitantes de la ciudad apreciados, es decir, las características de los ciudadanos, en tanto pertenecientes a la urbe, que podían acceder a todos los espacios públicos sin restricciones durante los últimos años del siglo XVIII. Porque, por supuesto, el atuendo mismo de la gente "correctamente vestida" implicaba dos aspectos

²⁶¹ *Ibid.*, p. 238.

²⁶² Viqueira, *op. cit.*, p. 230.

²⁶³ *Ídem.*

estructurales fundamentales para excluir a quienes no eran españoles: el desconocimiento del tipo de ropa utilizado por éstos y los recursos necesarios para adquirirla. Por tanto, la élite citadina construyó en estos espacios una especie de oasis que los aislaba de *la plebe*, de la cual se quejaban vehementemente.

Además, los sectores altos de la sociedad novohispana deseaban que estas medidas que favorecían el ideal de lo civilizado se extendieran a toda la vida pública en las ciudades españolas. En este sentido, Viqueira señala que

Los gobiernos virreinales soñaban con transformar a la ciudad de México en un amplio paseo, en el cual la élite pudiera salir a lucir sus vestidos y carruajes, sin temor a ser importunada por los léperos y demás gentuza de la plebe. En una ciudad así reformada, en la cual las fuerzas sociales al igual que las de la naturaleza habrían sido sometidas a la voluntad del monarca absoluto y a los principios de la razón, los hombres –los hombres ilustrados, claro está– podrían, sin problemas materiales y sin miedo a las rebeliones del pueblo, rendir a Dios la debida adoración

En este periodo observamos un proceso de cambios en la percepción de lo civilizado. Existió pues, como lo nombra Carlos Aguirre Anaya, una "resignificación de lo público"²⁶⁴. Aquello que alguna vez fue apreciado para la ciudad, como reflejo del lugar privilegiado como cabeza de la América hispana, para finales del siglo XVIII fue apreciado como un desorden excepcional.

Llama la atención que en sólo una década las apreciaciones sobre la ciudad de México por los visitantes europeos se hayan transformado de manera tan radical. Podemos estar seguros que las prácticas citadinas permanecieron, por lo que el cambio más bien lo encontramos en la divulgación de las ideas de las buenas maneras y la civilización vinculadas a la noción del urbanismo que, por aquellos años, bajaron de las cortes occidentales al sector burgués en los países europeos²⁶⁵. Asimismo encontramos una mayor difusión de estos ideales en la

²⁶⁴ Cfr. Aguirre Anaya, *op. cit.*

²⁶⁵ Cfr. Elias, Norbert. *op. cit.*, pp. 313-318.

Nueva España debido al incremento de la migración en estos años, principalmente de la península, pero también de franceses e italianos²⁶⁶.

El cambio de apreciación de lo citadino también conllevó una transformación de la concepción del bienestar público. Esto nos remite directamente al término *Policía*, el cual era utilizado también en Francia e Inglaterra (*policie, policy*), que *grosso modo* consistía en la regulación de lo público para lograr el bienestar de toda la población. Por esta razón la *Causa de Policía* era considerada parte fundamental de la administración de lo público en el Estado hispano. Y a partir de esto podemos percatarnos de un cambio en torno a cómo se asumía ese bienestar público, el cual implicaba la modificación de las reglas que lo determinaban. Es por esta razón que si el bienestar de la ciudad se relacionó con la limpieza y la uniformidad, consecuentemente la legislación para la *Causa de Policía* buscaría extinguir el supuesto desorden provocado por *la plebe* en los espacios públicos.

Esto además fue relacionado con un proceso de saneamiento de la ciudad, la cual había sido diagnosticada como enferma; en este sentido, el autor anónimo del ensayo llamado *Discurso sobre la policía de México*²⁶⁷, afirmaba:

para que cualquier medicina que se crea eficaz, surta favorable efecto se concibe indispensable que aunque la estudie y recete un solo médico hábil especulador del mal, ha de distribuirse o subdividirse en muchas dosis o tomas separadas, asistiendo con aquel magistrado diferentes practicantes para observar y cuidar al enfermo y que no se frustre el remedio por contrariedad de los humores o vicios que se desean corregir²⁶⁸

²⁶⁶ Se estima que durante el x. XVIII migraron cincuenta y tres mil españoles desde la península a América Latina. Esta cantidad está por encima de las migraciones hispanas de los siglos pasados, pero además la precedencia de los migrantes fue distinta, porque muchos de los recién llegados fueron más instruidos que sus predecesores. Además que el despotismo ilustrado había los favoreció para ocupar posiciones de privilegio en las burocracias "civil, militar y eclesiástica" Sánchez Albornoz, Nicolás. "The population of colonial Spanish America" en Bethell, Leslie. *The Cambridge History of Latin America*, Vol. 2. Colonial Latin America, Cambridge University Press, 1997, p. 31.

²⁶⁷ "Discurso sobre la policía de México. Reflexiones y apuntes sobre varios objetos que interesan la salud pública y la policía particular de esta ciudad de México, si se adaptasen las provincias o remedios correspondientes" en Lombardo, Sonia. *Antología de textos sobre la ciudad de México en el periodo de la Ilustración (1788-1792)*, INAH, México, 1982. Este escrito ha sido trabajado por Juan Pedro Viqueira y Carlos Aguirre Anaya en los trabajos que he referido.

²⁶⁸ Aguirre Anaya, *op. cit.*, p. 47.

Esta forma de tratar a la ciudad como un organismo, tan propio de la ilustración y, posteriormente, del evolucionismo social, contemplaba un remedio a los males que la aquejaban. Es un planteamiento en donde las autoridades y la *gente de bien* estaban en condiciones de *curar* la enfermedad de la que era víctima la urbe provocada por las prácticas inaceptables de *la plebe*.

Las prácticas sociales desviadas o patológicas, según el juicio de los llamados *decentes* de la época, pudieron emerger porque se habían desdibujado las "distinciones necesarias entre sus habitantes"²⁶⁹. Es decir, la mezcla étnica en la ciudad había provocado la supuesta *contaminación* de la misma. Pero esto, según el autor del *Discurso* había llevado a múltiples males debido a que algunos individuos tenían una condición social que los dejaba "imposibilitados para ejercer correctamente la responsabilidad encomendada"²⁷⁰. Con lo que denuncia la ocupación de cargos y títulos que han sido otorgados sin merecimientos.

Aguirre Anaya expone que el derecho para ocupar un cargo remitía

a uno de los sentidos fuertes de lo público en la época, que lejos de que lo interpretemos como refiriéndose al conjunto de la población, alude a un sistema de jerarquías en donde las decisiones públicas son competencia de los Estados, considerados como los únicos capaces de tal ejercicio²⁷¹

Por tanto, la posibilidad de participación en la administración de lo público tradicionalmente estaba reservada para la llamada *gente pública*. En otras palabras, para aquellos que eran reconocidos por todos los vecinos como individuos pertenecientes a la estructura jerárquica del Estado. Ya fuera porque provenían de familias con una trayectoria respetable, o que hayan arribado desde la metrópoli con suficientes referencias.

La idea de preservar a la *gente pública* dentro del gobierno resulta bastante conservadora. Ya que la participación quedaría reservada exclusivamente para los

²⁶⁹ *Ibíd.*, p. 51.

²⁷⁰ *Ídem*.

²⁷¹ *Ibíd.*, 52.

pertenecientes a un sector muy restringido. Sin embargo, esta resultaba una noción fundamental para el tipo de gobierno monárquico. Razón por la cual Aguirre Anaya señala que los autores de las dos etapas que hemos descrito a grandes rasgos (quienes ven a la ciudad majestuosa y quienes sólo observan desorden) coinciden en que el orden político y social se basaba en "estados graduados con atributos de poder sustanciales a cada rango y a la vista de todos"²⁷². Así, los títulos y los cuerpos de gobierno eran públicos, o sea, conocidos, observados y vigilados por la población. Por esto, la manera en que se explicaron, desde una postura conservadora, fue a través de las dificultades que había atravesado el gobierno de la ciudad debido a la usurpación de títulos. Aquellos funcionario que no habían sido visibles antes y aún así habían tomado un cargo *que no era suyo* fueron señalados como los responsables de la corrupción del ejercicio del gobierno de la Corona.

Además podemos percatarnos de un hecho que revela una tendencia en los cambios de la concepción de la ciudadanía en los años posteriores. Tenemos una clara distinción entre quienes debían tomar parte en el gobierno y quienes no:

Los grandes y las gentes de distinción integran los rangos más altos, y se les selecciona porque todos tienen "reputación y calidades" que aseguran el buen desempeño de sus encargos y, por lo mismo, "no les asistiese alguna repugnante circunstancia en la opinión común", como es el caso de "los que profesan oficios absolutamente mecánicos... en que intervengan pesos, medidas o manipulaciones, en que con más frecuencia se versan fraudes"²⁷³

Los personajes considerados usurpadores eran aquellos pertenecientes al sector dedicado a "oficios mecánicos o tratados o ejercicios groseros", es decir, el sector que alguna vez Aristóteles menospreció por ser aquél que se dedicaba a *proveer los bienes necesarios para la vida*²⁷⁴. Bajo esta coincidencia observamos una restricción impuesta por el aprecio a los funcionarios profesionales y el desprecio a

²⁷² *Ibíd.*, p. 53.

²⁷³ *Ibíd.*, p. 50.

²⁷⁴ Cfr. Chimal, *op. cit.*, pp. 27-28.

la burguesía que arribaba a la estructura gubernamental. Pero no es que ésta haya estado ausente antes, baste con recordar los privilegios obtenidos por las redes de comerciantes desde el siglo XVII; por lo que podemos intuir que la molestia más bien se exacerbó cuando se buscó reacomodar a la sociedad citadina, regresando todo a su orden original, de acuerdo a los preceptos que habían funcionado desde antaño.

Sin embargo, este grupo de personajes no públicos o "invisibles" llegaron para mantenerse en la administración gubernamental. Con lo cual lo único que quedó claro, después de la exclusión de *la plebe*, fue que se afirmó "lo público como esfera de poder exclusiva de un solo estamento". Empero, al interior habría también esta disputa entre la vieja élite política y aquellos súbditos del estamento español y extranjeros, ambos grupos integrantes de una clase media en crecimiento, que disputarían su derecho para formar parte de un Estado que comenzaba a borrar la exclusividad de la *gente pública*. Por lo que este otro grupo que pertenecía había adoptado un papel protagónico que se consolidaría en los años siguientes. En este sentido, la concepción de ciudadanía moderna que se conformaría posteriormente no puede entenderse sin la integración de la burguesía, pero reafirmando a su vez la exclusión de los bajos estamentos. Así, en el proceso de la definición de la ciudadanía constitucional permanecería la lógica estamental a pesar de los discursos políticos liberales de la época independiente.

Conclusiones

En este trabajo hemos revisado algunos aspectos que reflejan el carácter moderno del Estado monárquico hispano, y especialmente su influencia en la Nueva España. Dentro de las características que comúnmente se cuentan como modernas hemos observado la presencia de una reforma fiscal y burocrática, la incorporación de un tipo de división territorial y espacial uniforme, la liberalización de las actividades de comercio al interior del virreinato, así como la búsqueda por homogeneizar (a pesar de los fracasos) la legislación en todas las regiones del reino. Esto nos lleva a pensar que existió un proceso de modernización en las instituciones novohispanas que estuvo vinculado al panorama político que se había gestado en los países occidentales europeos desde finales del siglo XVII.

Sin embargo, no debemos dejarnos guiar por una lectura que resulta en extremo simplista, y que alude a una modernidad desarrollada en los países centrales europeos, en la cual se les imputa a los países de la América hispana un papel de meros receptores. En este sentido es necesario reconocer que, en efecto, es posible identificar rasgos políticos modernos en la Nueva España a partir de los cambios impulsados por el gobierno de los Borbones. Pero, como hemos visto, la mayoría de los esfuerzos reformistas se encontraron con fuertes resistencias. Una vez que se decretaban las disposiciones de la Corona, aquellos funcionarios encargados de salvaguardar los deseos del rey se encontraron con la imposibilidad de llevarlos a buen término. Y si bien existieron acciones de parte de algunas autoridades que se empeñaron por lograr lo decretado desde la península en un tiempo breve (como lo fue la expulsión de los jesuitas, el estanco del tabaco o la apertura comercial del Consulado de México), la mayor parte de los cambios proyectados por la Corona debieron aguardar a un proceso de lenta asimilación, cuando no de un total rechazo.

Ahora bien, dicha asimilación no supuso una incorporación pasiva de las ideas provenientes de la metrópoli. Por el contrario, éstas motivaron un examen de las ventajas o desventajas que las reformas significaban en relación con la vida social que imperaba en los lugares en donde se aplicaban. Con esto no podemos

apresurarnos a señalar que quienes opinaban enfáticamente sobre la conveniencia de aplicar inmediatamente todos los decretos Reales sin miramientos fuesen sólo los oriundos de la península ibérica; pero sí podemos afirmar que muchos de éstos, y en especial quienes insistían en implementar las reformas de manera unívoca, eran inconscientes de la complejidad de la vida social novohispana. Por lo que podemos entrever que los altos funcionarios que tenían en buena estima los cambios impulsados, también estaban convencidos de que el gobierno monárquico se encontraba imbuido en el pensamiento ilustrado y, por tanto, también estaban seguros que sus acciones correspondían a un razonamiento que prometía mayores ventajas para la monarquía compuesta en su conjunto.

En correspondencia a la tensión entre cambio y permanencia podemos visualizar dos posiciones que, si bien no fueron antagónicas en todas sus facetas, nos muestran un panorama de constante conflicto. Por un lado, tenemos la persistencia de un espíritu que buscaba impulsar el control burocrático, así como la producción y el comercio, como elementos prioritarios de la política monárquica hispana en el siglo XVIII. Este ideal, como hemos revisado, se comenzó a gestar en la península a través de las dificultades productivas causadas por la sobremonetarización en los límites del siglo XVI y XVII, y poco a poco se fue popularizando, hasta llegar a ser el objeto principal de la política borbónica. Por otro lado, encontramos fuerzas –no siempre conscientes– que favorecían la permanencia de las viejas instituciones novohispanas. Dentro de éstas podemos enunciar brevemente y a manera de recordatorio, para el caso de los españoles americanos, el rechazo a las restricciones de su ingreso a la Real Audiencia, y a otras oficinas de gobierno, además de la oposición a la reorganización burocrática dispuesta por la *Ordenanza* (lo cual revisamos en el apartado de *Conflictos entre competencias*, en el Capítulo 2). Hemos visto que frecuentemente los españoles americanos se mantuvieron escépticos a diversos cambios, debido a que consideraron que estaban destinados al fracaso por la falta de recursos humanos para llevarlos a cabo. Asimismo podemos ejemplificar la resistencia en otros estamentos, como lo fueron los indios, quienes mantuvieron una constante

oposición a la insistencia por quererlos incorporar a "la vida productiva" en el sentido que se entendía en la metrópoli, así como a la dependencia geopolítica ante las intendencias. Y si bien en este caso no es posible generalizar la negativa de todos los pertenecientes a dicho estamento por incorporarse al mercantilismo, dentro de la gran diversidad de pueblos de indios encontramos que no existía una prioridad específica para generar excedentes y comerciar –como era el deseo de la Corona.

A partir de esto afirmamos que la asimilación de los cambios políticos no presentó un carácter pasivo, sino que, más bien, se incorporaron paulatinamente algunos elementos del nuevo proyecto en la vida social. Y en este sentido se evidencia la permanencia de algunas estructuras previas a los cambios buscados en el siglo XVIII.

Por tanto, las instituciones que operaron hasta entonces no fueron sustituidas con el éxito que esperaba la Corona. En lugar de ello se vieron involucradas en un proceso adaptativo que las puso en juego con las nuevas incorporaciones del Estado. Empero, esto no es un referente para asegurar que esta fue una etapa prematura o interrumpida en el proceso de construcción de un Estado moderno. Si bien, bajo el juicio de los liberales mexicanos en los primeros años independientes esta apreciación resultaría la más popular, debemos insistir en que hoy en día perduran características de un Estado pluricultural con necesidades diferenciadas, por lo que sería un grave error afirmar que en este tema radica la mayor o menor modernidad de nuestro país. En este sentido es indispensable afirmar que la América hispana, y concretamente el virreinato de la Nueva España, fue, no el preámbulo, sino un tipo de Estado moderno con características propias y específicas. Distinto a otras sociedades modernas, en tanto estaba conformado por su propia multiplicidad de pueblos y por tener un rol político económico particular dentro de las prioridades neomercantilistas del mundo hispano.

Considerando así el proceso histórico novohispano logramos alejarnos de una perspectiva desarrollista lineal. No obstante, también resulta indeseable enunciar las particularidades como una condición *sui generis* que no sostenía relación con los procesos de otras sociedades modernas. Por el contrario, hemos observado

que a pesar de las resistencias contra los cambios políticos existió una actitud mucho más bondadosa en la recepción de diversas ideas ilustradas y para con la noción de ciudad ilustrada de parte de los ciudadanos. Por esto es indispensable también fijar la atención en aquellos aspectos que sí motivaron un cambio a partir de la política del despotismo ilustrado. No sólo en el periodo que abarca este trabajo, sino en relación a los años posteriores a éste. Cuestión que nos aproxima al aspecto principal que ha sido abordado en esta investigación: la emergencia de prácticas sociales vinculadas a la ciudadanía moderna durante el Antiguo Régimen.

La noción de *ciudadanía*, como hemos revisado, no se presentó con el reconocimiento de todas las características que tuvo de antemano en el Estado constitucional. Aunque en el último tercio del siglo se incrementó el uso del término "Ciudadanos", no existía una guía única sobre las particularidades que este concepto conllevaba. No obstante, a pesar de que resulta difícil asir las actividades concretas a las que se vinculó el concepto de *ciudadano*, tenemos que éstas pueden ser rastreadas a manera de precedente directo de aquellas que se definieron en el Estado mexicano.

En los primeros años independientes del México constitucional, el ciudadano fue aquél varón mayor de edad que estaba obligado a cumplir con un servicio militar obligatorio, para cubrir las necesidades de su nación en caso de que ésta lo requiriera y para asegurarle el monopolio de la violencia. Asimismo debía saber leer y escribir, y contar con propiedad comprobable, al mismo tiempo que demostrara un modo honesto de vivir. Por otro lado, una de sus prerrogativas fue la capacidad de reclamar un trato jurídico justo, es decir, que se salvaguardasen sus derechos a la propiedad y a la seguridad por parte del Estado. Lo que exigía la realización de juicios justos, garantizando la impartición adecuada de justicia. Otra de sus prerrogativas fue la posibilidad de participar activamente en los asuntos de gobierno y en la administración de lo público. No obstante, este derecho debía estar acompañado del conocimiento profundo de aquellas actividades necesarias para realizar eficazmente las tareas desempeñadas por los funcionarios. Conscientes de estas obligaciones y prerrogativas trazamos algunos ejemplos que

resultan ilustrativos para figurarnos qué tipo de actores sociales se vincularon a la noción de la ciudadanía moderna en la Nueva España hacia finales del siglo XVIII.

Cuando se comenzó a utilizar la palabra "Ciudadanos", éstos eran considerados como aquellos vecinos urbanizados que se distinguían del resto por sus capacidades y méritos, lo que los presentaba como gente de prestigio y, por tanto, como figuras de autoridad. Por lo que sus atributos se percibían como ejemplo para el resto de los súbditos. Debemos recordar además las implicaciones de la transición de la figura de los *vecinos* a la de los *ciudadanos*, en donde los primeros obtenían su título a partir de la asimilación de la vida de comunidad, y los segundos detentaban una relación directamente con el Estado. Por lo que esto nos habla del reconocimiento de individuos, independientes entre ellos, que cumplen sus obligaciones y reclaman sus prerrogativas sólo ante la legislación estatal. Esta precisión nos ha servido como marco general para la noción moderna de ciudadanía, mas falta apuntar cómo se reflejó ésta en la vida social.

Nos hemos ocupado de enunciar qué prácticas fueron asimiladas dentro del ejercicio de la ciudadanía y cuáles fueron las facetas precursoras de la inclusión y exclusión de la condición de *ciudadano*.

De antemano los indios, por ser considerados menores de edad, fueron excluidos de este particular perfil de ciudadanía. Y aún antes se excluyó a los castizos, especialmente a los negros, por su condición de seres sin alma. Por esta razón los potenciales ciudadanos fueron los pertenecientes al estamento español. Así, observamos que la posterior definición de ciudadanía constitucional se construiría, en definitiva, a semejanza de ellos.

En este sentido, las prácticas que se engarzaban a las prerrogativas ciudadanas fueron aquellas que los españoles (tanto peninsulares como americanos) estaban en posibilidad de llevar a cabo. Un reflejo claro de esto lo visualizamos en la participación activa dentro del gobierno, ya que en la Ordenanza de 1786 imperó la designación de cargos a aquellos que provenían de un "competente vecindario". Esto apunta a que sólo los españoles podían contar con la instrucción necesaria para llevar a cabo eficientemente las tareas de gobierno. Considerando que en las instituciones educativas, y concretamente en la

Real y Pontificia Universidad de México, los estudiantes pertenecían a este estamento en su totalidad, tenemos que esta convicción contaba con la justificación necesaria. Aunado esto a que en el mismo documento legislativo decretado por Carlos III se hizo mención explícita de que los funcionarios debían tener el castellano como lengua. Por tanto, la visión estatal era la de sus ciudadanos más distinguidos, y éstos lo eran en correspondencia con el proyecto político eficientista de la monarquía, lo cual supone un esquema tautológico.

Por otro lado, hemos visto que la impartición de justicia presentó un giro hacia finales del siglo XVIII. El tipo de juicios individuales que incorporaban un proceso imparcial fue ampliamente defendido por el virrey segundo Conde de Revillagigedo. De su puño y letra captamos la tendencia liberal de que la legislación no debía aplicarse de manera diferenciada y por medio de la interpretación personal de las autoridades, ni llevar a la excepción por así convenir a los intereses de los jueces. El triunfo de esta nueva perspectiva en el mundo hispano (al menos nominalmente) quedó de manifiesto en algunos juicios realizados a franceses por el delito de conspiración, en donde existieron múltiples irregularidades en los procesos; pero que lograron ser expuestas para realizar defensas adecuadas (y nos diría Weber, *racionales*) de los procesados. Lo que mostró un cambio significativo para la Causa de Justicia, ya que el caso que revisamos llegó a un desenlace que no habría sido posible en épocas anteriores. Así, constatamos la emergencia de herramientas jurídicas que posicionaron a los ciudadanos como sujetos capaces de defenderse ante los abusos de los funcionarios. Situación que nuevamente nos lleva a reflexionar acerca de la autoridad de la ciudadanía para hacer valer sus derechos jurídicos. Sin embargo, a pesar de ese particular caso, es indispensable enfatizar que aquellos individuos que durante estos años estaban en condiciones de demandar un proceso judicial justo pertenecían a una pequeñísima élite de la sociedad virreinal. Dentro de la cual podemos contar a la clase burguesa como la principal interesada en que se respetaran sus derechos, ya que el emprendimiento de este tipo de juicios a funcionarios –quienes eran los otros pertenecientes a la élite– eran prácticamente

inexistentes, debido a que las acusaciones de éstos más bien se presentaron como juicios de residencia (que valoraban su desempeño como funcionarios).

Esta última distinción la encontramos también con respecto a los conflictos sobre la precedencia de clase de quienes debían ser considerados para ocupar cargos. Encontramos una tensión entre la "gente pública" y aquellos que producían los bienes necesarios para la vida. Los primeros con una tradición, familiar o personal, dentro del gobierno monárquico, es decir, una especie de políticos de carrera del *Antiguo Régimen*, y los segundos como aquellos burgueses que comenzaban a tener participación activa como funcionarios. Por tanto, este es otro aspecto en donde podemos ubicar una transformación del derecho a tomar parte en la administración de lo público y, por ende, afectando la noción de ciudadanía moderna. Sin embargo, contrario a lo que se pudiera pensar, esto no se desprendió exclusivamente de una lucha de la clase burguesa, de hecho, en la *Ordenanza* se ordenó la incorporación de civiles para coadyuvar en el nuevo esquema de intendencias dispuesto por la Corona.

La creación de figuras como la de subdelegados y de alcaldes ordinarios fue pensada para contribuir con los gobiernos de las localidades y para auxiliar a los intendentes a estar al tanto de lo que ocurría al interior de la provincia. Asimismo se pensó que estos personajes ayudarían a salvaguardar las finanzas, ya que no recibirían pago alguno y sólo aquellos que se hicieran cargo de las cuatro causas podrían disponer del cinco por ciento de los tributos recaudados. Las nuevas autoridades locales tendrían que contar con capacidades, como lo fue saber leer y escribir y demostrar propiedad en la localidad. Encontramos en estas disposiciones una convocatoria abierta para que los civiles tomaran parte en los gobiernos, cosa que nos aproxima a una noción de *ciudadanía* que tiene la responsabilidad de vigilar los asuntos públicos para garantizar los más altos objetivos del Estado. Y además los encargados deberían ser aquellos que tuvieran resueltas sus necesidades materiales y contaran con una educación optima. Y si bien, como revisamos, estas disposiciones resultaron un fracaso —ya que no fue encontrar suficientes individuos de este extracto—, la propuesta misma nos habla del perfil de autoridad que la Corona se empeñaba en conseguir para sus

provincias. Una vez más, las características dispuestas apuntan a los españoles propietarios, los cuales además corresponden nuevamente al perfil burgués, ya que las características descritas sólo podían ser cubiertas, en teoría, por quienes se dedicaban a labores productivas y comerciales.

También abordamos la necesidad de conformar un ejército como una de las características previas a la construcción de los Estados nacionales –al menos en una primera etapa. Pero principalmente nos interesó observar cómo, en una primera etapa de la conformación de las fuerzas militares, las corporaciones lograron ejercer presión sobre la institución militar para convenir sus intereses. Dinámica que además favoreció la concesión de derechos a las milicias. Sin embargo, posteriormente, se presentaron fuertes críticas a la organización que se había llevado hasta entonces, lo que provocó que se restringieran los privilegios y que se transformasen los mecanismos de reclutamientos. Esto hizo que el enlistamiento perdiera su atractivo, y que se implementaran maneras más autoritarias de seleccionar a los reclutas. Como ya he indicado, estos cambios resultaron ser un preludio del sistema de leva que se aplicaría durante buena parte del siguiente siglo.

A partir de todos estos ejemplos nos hemos acercado a las prácticas sociales que formaron parte de la noción moderna de ciudadanía. Si bien éstas no estuvieron plenamente identificadas durante los años que abordamos a lo largo de este trabajo, podemos asegurar que la buena estima sobre cada una de ellas no sólo permaneció, sino que se intensificó en los años del México constitucionalista. Lo cual nos habla del ascenso político de una clase vinculada a las dinámicas económicas del mundo mercantilista y, por tanto, a priorizar la figura de los individuos propietarios, aquellos que contaban con las facilidades educativas y con la visión utilitaria del conocimiento, para tomar parte activa en la construcción del Estado constitucional.

Dentro de la noción liberal e igualitaria del Estado constitucional moderno, el cual tiene como máxima la garantía de los derechos individuales a partir de una ley que se aplica de la misma manera a todos, fue la clase burguesa quien logró demandar más eficientemente sus prerrogativas. Principalmente porque, como

aparece insistentemente en nuestras ejemplificaciones, muchas de las prácticas definitorias de la ciudadanía estuvieron comúnmente inmersas dentro de una ética efficientista y utilitaria que favoreció los aspectos productivo y financiero.

Incluso en el plano jurídico, a partir de lo dicho por Revillagigedo, tenemos evidencia que a pesar de la insistencia en la imparcialidad de los jueces, la manera de acceder a un juicio justo estuvo atravesada por pagos necesarios para garantizar un proceso adecuado. Asimismo el caso que hemos utilizado para dar cuenta de un cambio en la impartición de justicia también muestra que la posibilidad de contar con una buena defensa también fue cosa exclusiva de las élites. En este sentido, el principal delito de los procesados consiste en su pobreza, la cual los imposibilitaba a defenderse ante alguna acusación. Y esta misma cuestión se mantendría como un derecho particular de los propietarios, no sólo en la época siguiente a la aquí atendida, sino dentro de una permanencia de larga duración que ha llegado hasta nuestros días.

Así, resulta imperativo reflexionar sobre las implicaciones del concepto de ciudadanía. En donde las definiciones unívocas y altamente consensadas conllevan una necesaria exclusión de amplios grupos. Por lo que sólo a partir de su redefinición constante podremos acercarnos a una adecuada valoración que beneficie a cada uno de ellos por medio de la justa reclamación de sus derechos. Mas no los que de manera externa se les imputan, sino a partir de la distinción de ellos desde la profundidad de su propia dinámica social.

Así también, la concepción de la ciudadanía como el pronunciamiento de todos los individuos que componen el Estado, y el compromiso único con éste, resulta, desde la visión sociológica de *praxis*, una entelequia heredada del *iusnaturalismo*; debido a que las prácticas sociales concretas y el significado que tienen en la consciencia de los actores sociales no pueden ser pronunciadas de una manera generalizada que valga para toda sociedad. Es por tanto necesaria la intermediación del medio local para contrarrestar esta falsa idea del Estado en abstracto. Por lo que en definitiva sólo una noción de ciudadanía que aspire a afinar sus contenidos en vías de una total inclusión puede valer para designar a la comunidad política estatal. Lo cual supone, por supuesto, el acceso a

herramientas pertinentes que posibiliten a los actores sociales para el ejercicio de la plenitud de derechos políticos y jurídicos, y a la transformación de las mismas de ser necesario.

EPÍLOGO

La escasez de la dotación de los alcaides de las cárceles, ha dado motivo a que se les permita hacer negociación de su oficio, y que según la paga, así les den el destino o alojamiento. De aquí proviene que el pobre honrado y decente, preso por un delito leve, sufra una prisión más incómoda que el rico de bajo nacimiento, aunque sea más feo el delito que lo condujo a la prisión...

muchas veces los jueces destinan los reos a los presidios con el dolor de que en aquella escuela van a acabar de instruirse en la maldad y vicios que apenas empezaban a conocer...

Instrucción Reservada del Segundo Conde de Revillagigedo, México, 30 de junio de 1794.

El pasado 14 de septiembre de 2011, el Secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, hizo una particular petición a la Cámara de Senadores para aprobar lo antes posible las modificaciones a la ley de seguridad dictaminada en 2005. En ellas se contempla otorgar mayores facultades al ejecutivo y a las fuerzas militares para combatir al crimen organizado. En su discurso, Galván Galván aseguró que estas acciones no están encaminadas a que los militares asuman un rol policiaco, sino que se les faculte para intervenir de manera discrecional bajo el mando de una autoridad militar. Sin embargo, estamos ante un panorama de flexibilización de las capacidades conferidas a los mandos militares que, a pesar de la afirmación del secretario de defensa, puede utilizarse como base para que futuros gobiernos establezcan una militarización de las policías.

Esta cuestión está en consonancia con la política del actual jefe de Estado Felipe Calderón, quien busca que se legisle, y por tanto se institucionalice, su estrategia fallida en contra de los cuerpos delictivos del país. Mientras resulta claro que los caminos trazados en *su lucha*, por supuesto, se han delineado de acuerdo a la exigencia del sector de la población más representativo del partido político al que Calderón pertenece. Por lo que podemos observar una negativa rotunda del ejecutivo, en correspondencia con la idea de que la solución se logrará mediante el autoritarismo, para plantearse un cambio en la táctica con la que enfrenta a una faceta específica de la delincuencia organizada: el narcotráfico. Y atendiendo a este tema en particular, nos percatamos que es común que quienes comulgan con las convicciones de este gobierno jamás estarán dispuestos a abrir un debate que permita concebir regulaciones públicas, desde la legalidad, a los actuales negocios ilícitos. En este sentido, no cabe duda que el gobierno federal en turno representa fielmente a sus más leales adeptos. No obstante, cabe preguntarnos: ¿estamos en condiciones de solventar el sostenimiento de principios morales ideologizados a cambio de sufrir un promedio de más de 180 muertes diarias a causa del gran negocio de la prohibición?

Por su parte, actualmente podemos observar que este problema prende focos rojos en relación a un posible Estado de excepción. Ya que ante el clima de violencia generalizado en México durante los presentes gobiernos, la suspensión de *Garantías Individuales* comienza a extenderse bajo el pretexto de la Seguridad Nacional. Por ejemplo, podemos aludir a la aplicación del operativo *Conago-1* (Consejo Nacional de Gobernadores) aprobado para el periodo del lunes 13 de junio hasta el domingo 19 de junio de 2011. En donde se contempló el despliegue de 310 mil elementos policiacos en todo el país. A los cuales se les dio órdenes de detener a todo individuo o vehículo "sospechoso", con el fin de revisarlos para descartar algún vínculo con el crimen organizado. Es evidente que las acciones del operativo suponen una *suspensión de Garantías* y, por tanto, el pronunciamiento de un Estado de excepción; debido a que se interrumpió la aplicación del artículo 16 constitucional, que a la letra dice

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito que haga probable la responsabilidad del indiciado... En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público... En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluir un acta circunstanciada

Tenemos, pues, que las capacidades discrecionales atribuidas por el operativo a los elementos policiacos para catear a los ciudadanos y sus pertenencias, claramente contravienen lo dispuesto constitucionalmente en este artículo. Y si bien el poder ejecutivo, ya sea el federal o el de los Estados, debe tener facultades para pronunciar el Estado de excepción, éste se contempla bajo un periodo específico, porque supone la resolución de un problema de seguridad de carácter temporal. En contraste, en la reunión de la Comisión de Seguridad Pública, que tuvo lugar el 20 de junio de 2011, se dispuso que el operativo *Conago-1* sería permanente.

Por supuesto, el regreso al Estado de derecho exige el combate contra los delitos más graves que se llevan a cabo en el país, ya que de esto depende la seguridad de los ciudadanos. A saber " homicidios dolosos, extorsiones, robo de vehículo en vía pública, y a casa habitación con violencia, así como secuestro y trata de personas". Sin embargo, es poco probable que a partir de operativos que tienen como principio el cateo discrecional de los ciudadanos en vía pública se logre dar solución a este tipo de crímenes que se realizan con base en la delincuencia organizada. Lejos de ello, con esto se abre una nueva posibilidad para el incremento de los delitos y de la corrupción.

Afirmo que existe nuevamente una mala estrategia en esto, porque las aprehensiones de las que han presumido los gobernadores, y entre ellos el jefe de gobierno del Distrito Federal, no son significativas para la desarticulación de las organizaciones delictivas. Esto porque se confiscan bienes mínimos y, a lo más, se encarcela a quienes conforman la llamada *carne de cañón*. Asimismo, las facultades discrecionales aportan un nuevo margen a la corrupción y la extorsión de parte de los elementos de las policías. Es bien sabido que la implicación de mandos policiacos con las asociaciones delincuenciales es lo que ha hecho posible el crecimiento exponencial del crimen organizado. Además, sabemos que quienes son elegidos por la policía para ser cateados generalmente son aquellos estigmatizados como desviados. Gente de las clases bajas, jóvenes desalineados, o consumidores de estupefacientes. Mientras que, en las imágenes que nos venden los medios de comunicación, los jefes de las organizaciones delictivas (al menos los mandos medios que se nos muestran) aparecen con una vestimenta y un estilo de vida que son accesibles solamente para las clases altas.

Bajo este panorama, nos enfrentamos a la recurrente criminalización de las juventudes, y a un sistema jurídico abrumadoramente ineficiente que utiliza las debilidades de los sectores vulnerables para pregonar su trabajo. Cuestión que ha sido evidenciada a todas luces. Es suficiente recordar esa afamada película que, a pesar de sus terribles diálogos (los actuados) y su forzada narrativa, logró mostrar las irregularidades del sistema judicial mexicano. Me refiero a *Presunto Culpable*, un filme que, aun que probablemente haya tenido un trasfondo en el que se buscaba los favores desprendidos de la aprobación del auditorio, logró divulgar un tema bien conocido en las academias de las universidades, pero que no había tenido un alcance suficiente entre la población mexicana en general.

Por otro lado, llama fuertemente la atención que en últimos días los peritos que laboran en la PGJ DF hayan ventilado sus condiciones de trabajo. En principio un sueldo miserable y un equipo obsoleto para las investigaciones que realizan. A esto debemos aunar la negativa de los elementos policiacos, tanto auxiliares como judiciales (sea por incapacidad, corrupción, miedo o cualquier otra), para indagar sobre actos ilícitos. Y baste decir que a pesar de las múltiples denuncias a las

llamadas *Casas de Seguridad* a lo largo y ancho del país, éstas generalmente han seguido trabajando en sus mismas ubicaciones.

Las actividades principales de esas Casas son la venta de armas y estupefacientes, el secuestro y la trata de personas. En donde esta última representa el tercer ingreso más alto para la delincuencia organizada a nivel nacional. Este dato es especialmente relevante debido a que desde la aprobación de la vigente Ley de Trata del 27 de noviembre de 2007, se han dictado dos sentencias condenatorias. Para un delito que genera cerca de 32,000,000,000 de dólares anuales a nivel mundial²⁷⁵. Por tanto, dimensionemos que mientras se despliegan costosísimos operativos para evitar la producción y el comercio de drogas en México, cientos de miles de vidas han sido, y son, reducidas a la más paupérrima de las esclavitudes. Es evidente que este delito no tendrá solución a partir de los operativos del Conago-1. Por lo que actualmente el grito de auxilio de esas víctimas solamente es escuchado por algunas organizaciones de la sociedad civil.

En suma, las acciones emergentes de los actuales gobiernos mexicanos nos hacen suponer que no existe una estrategia de mediana duración. En un país con más de cincuenta millones de pobres, de los cuales aproximadamente el veinticinco por ciento tienen entre quince y veinticuatro años de edad, muchos de los cuales seguirán dispuestos a matar o morir. Bajo este panorama encontramos una absoluta ineficiencia en la planeación jurídica y en la investigación profesional que, al ser mal pagadas y mal organizadas, son un caldo de cultivo para la reproducción de la corrupción y de los delitos graves. Y por consecuencia, se favorece una situación que justifica aparentemente la interrupción de las *Garantías Individuales* de la ciudadanía mexicana; en detrimento de su condición de sujetos jurídicos, lo cual actúa, por otra parte, en detrimento de su faceta de sujetos políticos. Así, resulta evidente que, si bien existen fuertes vacíos en la legislación, es todavía más grave el abismo en materia jurídica.

²⁷⁵ http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/HUMAN_TRAFFICKING_-_THE_FACTS_-_final.pdf

Esta situación nos muestra que no es suficiente atender solamente el cuerpo normativo para otorgar seguridad a los ciudadanos (aspecto que, por cierto, es obligación del Estado constitucional garantizar, salvaguardando además las *Garantías* de su ciudadanía). Y es en este sentido que este trabajo busca llamar la atención, en tanto, las disposiciones administrativas que conciben un ideal particular no son garantía de que, por un lado, se respete la legislación y, por otro, ese ideal corresponda al beneficio de toda la población.

Ahora presento esta investigación insistiendo en que todas estas pésimas decisiones gubernamentales de las que somos víctimas hoy en día son claramente tomadas con una grave falta de reflexividad, en general, pero principalmente histórica. Son evidentemente anacrónicas debido a que los administradores de lo público en nuestro país se postran incapaces de pensar en una estrategia profunda que contemple una mediana duración, debido a que están cegados por la imposición de sus propias agendas.

Para terminar estas consideraciones, dejo una cita del imprescindible trabajo de Juan Pedro Viqueira *¿Relajados o Reprimidos?*, la cual describe la situación desprendida de las reformas urbanas llevadas a cabo en la Ciudad de México hacia finales del siglo XVIII:

Un elemento fundamental de la reforma de la capital había sido... la creación de los cargos de alcaldes de barrio, para que éstos asumieran las tareas de vigilancia y de control de la población. Pero, rápidamente -para no decir instantáneamente-, estos puestos cayeron en manos de turbios individuos que sólo pensaban en enriquecerse con ellos. Apenas unos seis años después de la división de la ciudad en cuarteles... los alcaldes de barrio en vez de "refrenar o celar los abusos" se habían convertido en "conductos libres para propagarlos e incurrir en tropelías e irregularidades".

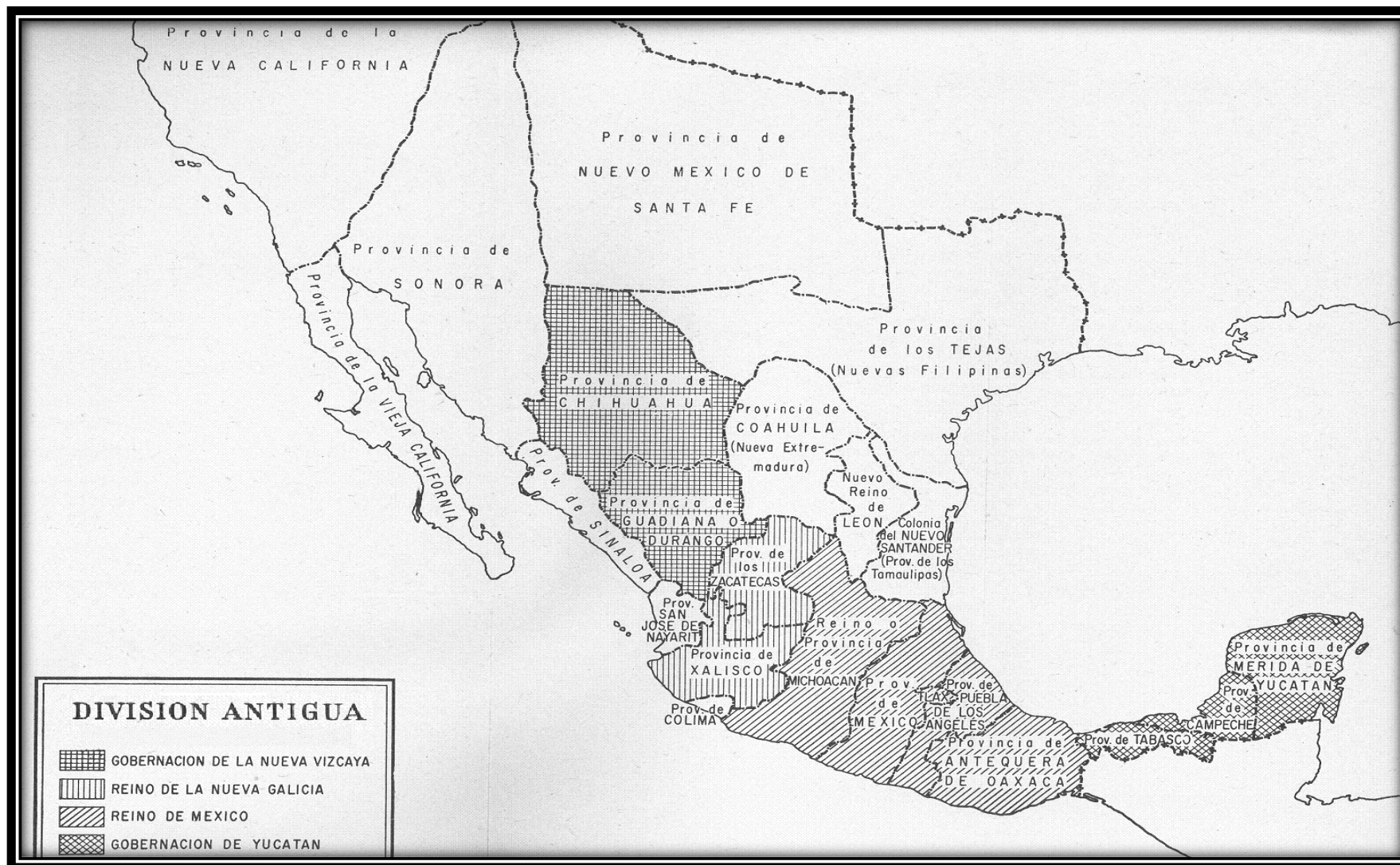
Los comisarios de barrio resultaron ser igual o más corruptos que los anteriores encargados del orden público, pero con el agravante de que sus poderes eran mucho más extensos. Los proyectos ilustrados del Estado fueron así llevados a la práctica por verdaderos maleantes. Los reglamentos y ordenanzas no sirvieron, en los hechos, tanto para poner fin a abusos y desórdenes, como para enriquecer a los alcaldes de barrio que los usaron como armas "legales" para extorsionar a la población. El poder

exorbitante de una policía corrupta, que haría reinar el terror entre los habitantes de la ciudad de México, empezaba ya, a perfilarse.

Finalmente, y teniendo en consideración la presencia de estructuras de larga duración, solicito al lector una reflexión en relación a las condiciones de nuestra actual ciudadanía.

ANEXO

MAPA 1. DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA NUEVA ESPAÑA antes del establecimiento de Intendencias



Fuente: O'Gorman, Edmundo. Historia de las divisiones territoriales de México, Porrúa, México, 1979.

MAPA 2. LAS INTENDENCIAS DE LA NUEVA ESPAÑA
(sin divisiones de Veracruz y Zacatecas)
y los Gobiernos de las dos Californias, el Nuevo México y Tlaxcala



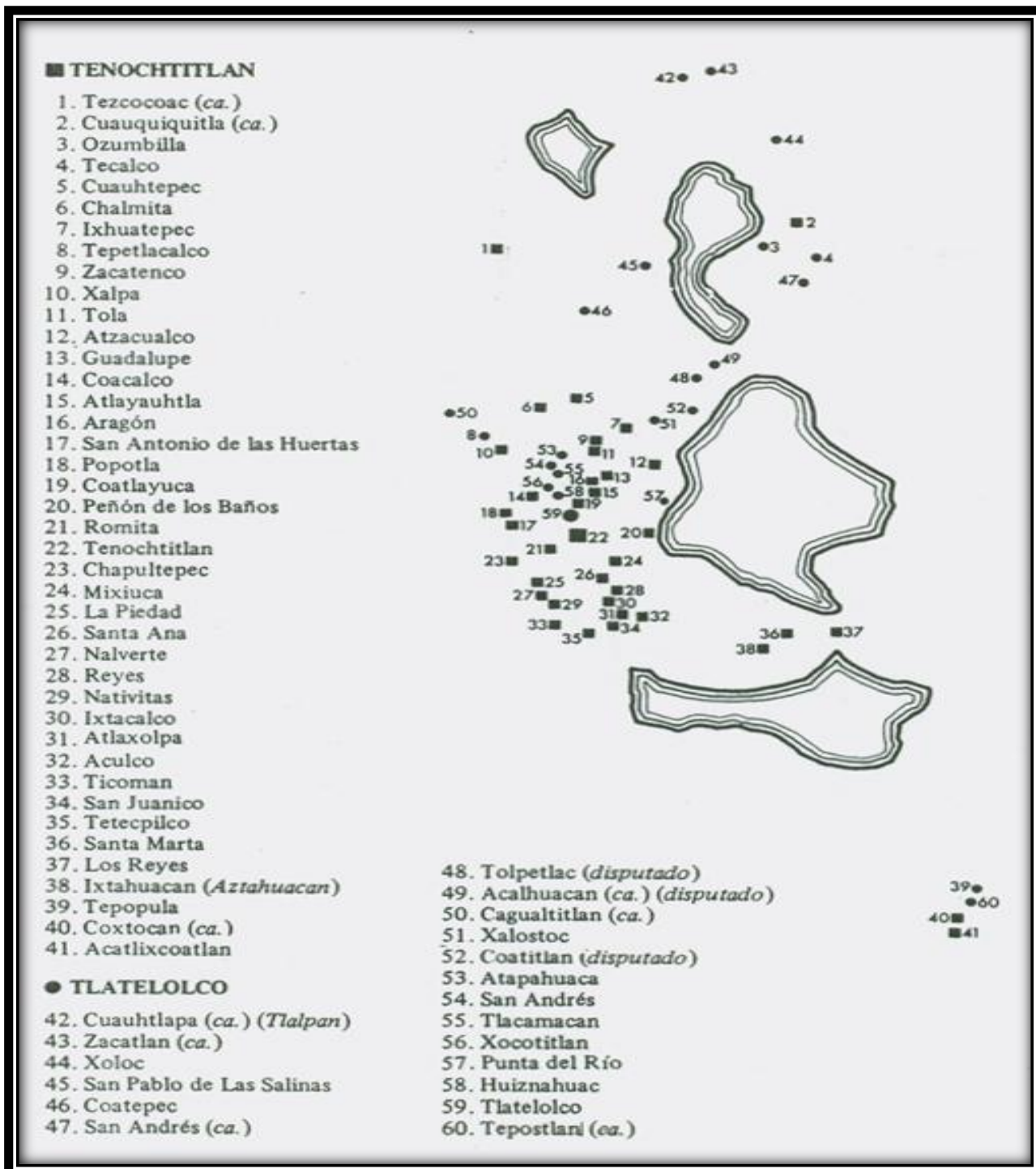
Fuente: O'Gorman, Edmundo. Historia de las divisiones territoriales de México, Porrúa, México, 1979.

MAPA 3. LAS INTENDENCIAS DEL VIRREINATO
(con divisiones de Veracruz y Zacatecas)



Fuente: Florescano, Enrique e Isabel Gil. "La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808" en Historia General de México, El Colegio de México, México, 1976.

MAPA 4. POBLADOS INDIOS SUJETOS A TENOCHTITLÁN Y TLATELOLCO



Fuente: Lira, Andrés. *Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México. Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919*. El Colegio de Michoacán, Zamora, 1983.

Bibliografía

Textos de análisis sociológico y político

Bendix, Reinhard. *Force, Fate and Freedom*, University of California Press, Berkeley, 1984.

_____. *La razón fortificada*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude; y Passeron, Jean-Claude. *El oficio de sociólogo*, Siglo XXI, México, 2002.

Braudel, Ferdinand. *La historia y las ciencias sociales*, Alianza, México, 1994.

Dahrendorf, Ralf. *The Modern Social Conflict. An essay on the politics of Liberty*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1990.

Durkheim, Émile. *Las reglas del método sociológico*, Ed. Altaya, Barcelona, 1995.

Chimal, E. Abraham. *El concepto de ciudadano definido por el liberalismo mexicano de 1812 a 1872*, Tesis de Licenciatura, UNAM, México, 2009.

Elias, Norbert. *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, Fondo de Cultura Económica, México, 2009.

Escalante Gonzálbo, Fernando. *Ciudadanos Imaginarios*, El Colegio de México, México, 2001.

Giddens, Anthony. *Las nuevas reglas del método sociológico*, Amorrortu, Buenos Aires, 2001.

Hall, Stuart. "Introduction" a Hall Stuart and Brian Geben, *Formations of modernity*, Polity Press/Open University, Cambridge, 1992.

Hartz, Louis, *La tradición liberal en los Estados Unidos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

Holmes, Stephen. *Passions & Constraints. On the theory of liberal democracy*, The University of Chicago Press, Chicago, 1995.

- Juliá, Santos. *Historia Social: Sociología histórica*, Siglo XXI, Madrid, 1989.
- Mills, Wright. *La imaginación sociológica*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
- Nisbet, Robert. *Cambio social e historia*, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1976.
- _____. *Conservadurismo*, Alianza, Madrid, 1995.
- _____. *La formación del pensamiento sociológico*, Tomos I y II, Amorrortu, Buenos Aires, 2001.
- Salazar Carrión, Luis. *Para pensar la política*. Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa, México, 2004.
- Skocpol, Theda. "Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical Sociology" en Theda Skocpol (ed.). *Vision and Method in Historical Sociology*, Cambridge University Press, New York, 1984.
- Szokolczai, Arpad. *Reflexive Historical Sociology*, Routledge, New York, 2009.
- Taylor, Charles. *Imaginarios sociales modernos*, Paidós, Barcelona, 2006.
- _____. "El atomismo" (1979) en *La libertad de los modernos*, Amorrortu, Buenos Aires, 2005.
- Taylor, Charles y Lee, Benjamin. Multiple Modernities Project. *Modernity and Difference, Center of Transcultural Studies*.
<http://www.sas.upenn.edu/transcult/promad.html>
- Tilly, Charles. *Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990*, Alianza Universidad, Madrid, 1990.
- Weber, Max. *Economía y Sociedad*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
- _____. *Historia Económica General*, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.

Fuentes históricas secundarias

Aláez, Benito. "Nacionalidad y Ciudadanía: Una aproximación histórico funcional" en *Revista Electrónica de Historia Constitucional*, Número 6, Septiembre de 2005, AS-2115-99 ISSN: 1576-4729, <http://hc.rediris.es/06/articulos/html/Numero06.html>

Alberro, Solange. *Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo*, jornadas 122, El Colegio de México, México, 2006.

Aguirre Anaya, Carlos. "La resignificación de lo público a finales del siglo XVIII" en Anaya, Carlos; Marcela Dávalos y María Amparo Ros. *Los espacios públicos de la ciudad, siglos XVIII y XIX*, Casa Juan Pablos, Instituto de cultura de la Ciudad de México, México, 2002.

Aguirre Salvador, Rodolfo. *El mérito y la estrategia. Clérigos, juristas y médicos en Nueva España*, Centro de Estudios sobre la Universidad-UNAM, Plaza y Valdés, México, 2003.

Antonio Annino. "Nuevas Perspectivas para una vieja pregunta" en Josefina Zoraida Vázquez y Antonio Annino. *El primer liberalismo mexicano*, Museo Nacional de Historia - Editorial Porrúa, México, 1995.

Arnold, Linda. *Burocracia y burócratas en México, 1742-1835*, Grijalbo-CONACULTA, México, 1991.

Brading, David. *Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810)*, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.

_____. *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*. Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

Carmagnani, Marcello. "Territorios, Provincias y Estados: Las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850" en Vázquez, Josefina Zoraida. *La fundación del Estado mexicano*, Nueva Imagen, México, 2004.

Castillo, Norma. *Cholula, sociedad mestiza en ciudad india*, UAM Iztapalapa, Plaza y Valdés, México, 2001.

Cruz Rodríguez, Ma. Soledad. "Plenitud y crepúsculo de una ciudad colonial. La Cd. de México en el siglo XVIII", en *Visiones y Creencias, IV Anuario*

Conmemorativo del V Centenario de la Llegada de España a América, UAM Azcapotzalco, México, 1992.

Covarrubias, José Enrique. *En busca del hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo neomercantilista en México y Europa, 1748-1833*, UNAM, México.

Florescano, Enrique e Isabel Gil. "La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808" en *Historia General de México*, El Colegio de México, México, 1976.

Fowler, William y Humberto Morales. *El conservadurismo mexicano en el siglo XIX*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 1999.

Galaz, Mariteresa. "Historia del concepto de ciudadanía en la Atenas clásica" en Arredondo Ramírez (coord.). *Ciudadanía en Movimiento*, Universidad Iberoamericana-IAP, México, 2000.

García González, Francisco. "Vida cotidiana y cultura material en Zacatecas Colonial" en Gonzalbo Aizpuru, Pilar. *Historia de la vida cotidiana en México III. El siglo XVIII: entre tradición y cambio*, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México, 2005.

Hansen, João. "Ilustração católica, pastoral árcade & civilização" en *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006.

Herzog, Tamar. *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, New Haven & London, 2003.

Herzog, Tamar. "Early Modern Spanish Citizenship: Inclusion and Exclusion in the Old and the New World," in John Smolenski and Thomas J. Humphrey eds., *New World Orders. Violence, Sanction, and Authority in the Colonial Americas*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2005.

Huerta, María Teresa. "Redes mercantiles en torno a la plata en el norte minero novohispano. Segunda mitad del siglo XVII" en Ibarra, Antonio y Guillermina del Valle Pavón (coord.) *Redes sociales e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a XIX*, Facultad de Economía UNAM, Instituto Mora, México, 2007.

Irisarri Aguirre, Ana. *Reformismo Borbónico en la provincia de San Luis Potosí durante la Intendencia*, Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Miguel Ángel Porrúa, México, 2008.

Laski, Harold J. *El liberalismo europeo*. Breviarios, Fondo de Cultura Económica, México, 1979.

Lira, Andrés. *Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México. Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919*. El Colegio de Michoacán, Zamora, 1983.

Lozano Armendares, Teresa. "Tablajeros, coimes y tahúres en la Nueva España Ilustrada" en *Estudios de Historia Novohispana*, Volumen 15, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1995.

Moreno, Roberto, Introducción a Alzate, José Antonio de, *Memorias y Ensayos*, UNAM, México, 1985.

Noriega, Alfonso. *El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano*, UNAM, México, 1993.

O'Gorman, Edmundo. *Historia de las divisiones territoriales de México*, Porrúa, México, 1979.

Ortíz Escamilla, Juan. "Identidad y Privilegio: Fuerzas armadas y transición política en México, 1750-1825" en Erika Pani y Alicia Salmerón (coord.). *Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra historiador. Homenaje*, Instituto Mora, México, 2004.

Pérez-Marchand, Monelisa. *Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición*, El Colegio de México, México, 2005.

Pietschmann, Horst. *Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo*. Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

"Consideraciones en torno al protoliberalismo, Reformas Borbónicas y Revolución. La Nueva España en el último tercio del siglo XVIII" en *Revista Historia Mexicana*, El Colegio de México, México, Vol.41, No. 2, octubre-diciembre 1991.

_____. "Discursos y reformas dieciochescas en el mundo ibérico" en Karl Kohut y Sonia V. Rose. *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006.

_____. "Justicia, discurso político y reformismo borbónico en la Nueva España" en Bellingeri, Marco. *Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX*, Otto editore, Turín, 2000.

_____. "Nación e individuo en los debates políticos de la época preindependiente en el imperio español" en Dobado González, Rafael; Álvarez Cuartero, Izaskun; Sánchez Gómez, Julio (coord.). *Visiones y revisiones de la independencia americana*, III Coloquio Internacional de Historia de América "La Independencia de América", Salamanca, noviembre 2001, Salamanca 2003.

Puig-Sampler, Miguel Ángel y Sandra Rebok. "Alejandro de Humboldt, las expediciones científicas españolas y la formación de las élites criollas" en Karl Kohut y Sonia V. Rose. *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006.

Rees Jones, Ricardo. *El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España*, UNAM, México, 1979.

Semo, Enrique. "México: de la ilustración al liberalismo" en *La responsabilidad del historiador. Homenaje a Moisés González Navarro*, Universidad Iberoamericana, México, 1992.

Schmidt Peer. "Contra la 'falsa filosofía': La Contra-Ilustración y la crítica al reformismo borbónico en la Nueva España" en Karl Kohut y Sonia V. Rose. *La formación de la cultura virreinal*, Tomo III. El Siglo XVIII, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt, 2006.

Sugawara, Masae. "Reformas Borbónicas y luchas sociales (1763-1810)" en Semo, Enrique (coord.) *México, Un pueblo en la historia 2. Campesinos y hacendados, generales y letrados (1770-1875)*, Alianza Editorial, México, 2003.

Tanck de Estrada, Dorothy. "El gobierno municipal y las escuelas de primeras letras en el siglo XVIII mexicano" en *Revista de Investigación Educativa*, vol. 7, núm. 15, mayo-agosto, 2002.

Torres Puga, Gabriel. "Centinela mexicano contra francmasones. Un enredo detectivesco del licenciado Borunda en las causas judiciales contra franceses de 1794" en *Estudios de Historia Novohispana* no. 33, julio-diciembre 2005, UNAM, México.

Venegas de la Torre, Agueda. *Nuevos Tiempos: ¿Nueva Justicia? La Administración de Justicia en Zacatecas, 1812-1835*. Tesis de Doctorado, Instituto Mora, México, 2010.

Viqueira Albán, Juan Pedro. *¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.

Yuste, Carmen. *Introducción a Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII*, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, 1991.

Fuentes históricas primarias

Alzate, José Antonio de. "Un indio de la Nueva España ¿Qué especie de hombre es, cuáles sus caracteres morales y físicos? (1791)" en *Memorias y Ensayos*, UNAM, México, 1985, pp. 154-165.

Extracto de la denuncia acerca de que en las bibliotecas públicas y privadas no se guardan los libros prohibidos separados de los corrientes, Puebla, 1972 en Pérez-Marchand, Monelisa. *Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición*, El Colegio de México, México, 2005.

Humboldt, Alejandro de. *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España (1803)*, Editorial Porrúa, México, 1973.

Instrucción reservada del Segundo Conde de Revillagigedo a su sucesor Marqués de Branciforte en De la Torre Villar, Ernesto. *Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos*, Tomo II, Editorial Porrúa, México, 1991.

Instrucción reservada del Marqués de Branciforte a su sucesor Don Miguel José de Azanza en De la Torre Villar, Ernesto. *Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos*, Tomo II, Editorial Porrúa, México, 1991.

Montesquieu. *Del Espíritu de las leyes*, Porrúa, México, 2000.

Real ordenanza para el establecimiento e instruccion de intendentes de ejército y provincia en el reino de la nueva España 1786, Edición facsímil, UNAM, México, 1984.

Representación del Consulado de México al Rey en respuesta al ordenamiento de celebrar las ferias de las flotas en Orizaba, solicitando que a los flotistas no se les permita la salida del recinto de la feria y que se restituyan a España en la misma flota que llegaron. 15 de Mayo de 1725. Documento en Yuste, Carmen. *Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII*, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, 1991.

Sigüenza y Góngora, Carlos de. "Alboroto y motín de los indios de México" en *Teatro de virtudes políticas*, UNAM, Editorial Porrúa, México, 1986.